

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

El Tribunal de los Estados Unidos de Puerto Rico, 1898-1952

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Carmelo Delgado Cintrón

DIRECTOR:

Alfonso García-Gallo

Madrid, 2015

Rd. 54.365

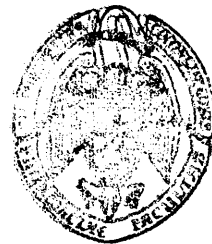
TE
181

EL TRIBUNAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN PUERTO RICO, 1898 - 1952

Carmelo Delgado Cintrón

Tesis presentada para obtener el
grado de Doctor en Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid.
Dirigida por el Excmo. Sr. D. --
Alfonso García-Gallo, Catedrático
de Historia del Derecho Español.

Madrid - 1974



BIBLIOTECA
DE DERECHO

137820916

S U M A R I O
=====

Sumario.-

Prefacio.-

Planteamiento del Tema.

Fuentes y centros utilizados.

Introducción.-

I.- La situación institucional y jurídica durante la guerra.

II.- El Gobierno Militar de los Estados Unidos en Puerto Rico.

Introducción.

Gobierno del General John R. Brooke, 18 de octubre a 9 de diciembre de 1898.

El problema de las alzadas.

Los abogados españoles impedidos de ejercer su profesión

Gobierno del General Guy V. Henry, 6 de diciembre de 1898 a 9 de mayo de 1899.

Las Comisiones Militares

La Admisión de los Abogados norteamericanos

La crisis político-institucional de febrero de 1899

Establecimiento del Tribunal Provisional de Estados Unidos. Primera fase.

Ataques a los Tribunales puertorriqueños.

La Insular Commission.

El Informe de Reforma Díaz Navarro

Posición de la Suprema Corte de Justicia de Puerto Rico.

Las recomendaciones de la Insular Commission

Gobierno del General George W. Davis, 9 de mayo de 1899
a 1 de mayo de 1900.

Establecimiento de la United States Provisional Court

Establecimiento de la United States Provisional Court

La opinión de los puertorriqueños.

La política oficial sobre el Derecho puertorriqueño

La norteamericanización de los Tribunales puertorriqueños.

Conflictos de jurisdicción entre los Tribunales de -
Puerto Rico y el Tribunal Federal.

La supresión de la profesión de Procurador.

La transición al Gobierno Civil norteamericano.

La aprobación de la Ley Orgánica de 1900

III.- El Régimen Civil de la Ley Orgánica de 1900.

La inauguración del Gobierno.

Organización del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Las Comisiones Codificadoras.

La primera Comisión, 1900.

La segunda Comisión, 1901.

Opinión de los juristas puertorriqueños.

IV.- El Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico.

Jurisdicción y competencia.

La Crisis de 1909

El Proyecto de Ley Olmsted.

Desde el Bill Olmsted a la Ley Orgánica de 1917.

La Ley Orgánica de 1917 (Jones)

Desde la Ley Jones de 1917 hasta la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1952

Prefacio

Planteamiento del Tema.-

El presente estudio tiene como propósito examinar lo más minuciosamente posible la historia jurídica del Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico, desde su implantación en 1898 hasta el año de 1952. He creído indispensable, no lo hubiera intentado de otra forma, estudiar todo el momento histórico-jurídico en que se crea y desenvuelve dicha institución finisecular. Puedo afirmar que es la primera vez que se intenta el examen crítico de la historia del Derecho durante el Gobierno Militar de los Estados Unidos en Puerto Rico. Hasta ahora el conocimiento fragmentario que se tenía no permitía su conocimiento ni hacer su evaluación. Por supuesto en este bienio (1898-1900) no solamente me he preocupado de la institución federal objeto de esta tesis doctoral, sino que con el mismo interés me he dedicado a examinar todos los complejos y delicados problemas legales e históricos que surgen como consecuencia del cambio de régimen político a raíz de la llamada Guerra Hispano-americana.

Después de 1900 vemos la sustitución de la mayoría de los principales Códigos hispano-puertorriqueños por cuerpos de Derecho traídos de Estados norteamericanos. La evolución de la 'District Court of the United States for Porto Rico' y el comienzo de los intentos de las diversas instituciones puertorriqueñas -Cámara de Delegados, Colegio de Abogados, Partidos Políticos- -

entre otras- porque se suprima, cambiar o transferir dicho Tribunal federal. Luego se examinan los cambios constitucionales de Puerto Rico y la permanencia de aquel foro judicial que lesiona y resta jurisdicción a los Tribunales puertorriqueños, ejemplo, - su exclusividad en todos los asuntos de quiebras, leyes marítimas, leyes penales y su amplia jurisdicción civil entre otras. Hasta - aquí este brevísimos resumen del tema.

Fuentes y centros utilizados.-

El armazón fáctico y teórico de esta monografía han sido las fuentes documentales de todas clases conservadas principalmente en los National Archives of the United States of America de Washington, por razón de ser la institución estudiada una agencia del Gobierno federal en Puerto Rico. Asimismo, por ser el período indicado, - 1898-1952, uno donde la ingerencia del Gobierno de los Estados Unidos en las instituciones puertorriqueñas fue muy grande, la gran mayoría de los documentos se enviaban a los Departamentos o ministerios de Washington pasando luego al archivo antes mencionado. - Otros fueron enviados al Federal Archive and Record Center de la ciudad de Nueva York. Allí se custodian diversas series documentales de la época estudiada, incluyendo todos los Libros Registros de la United States Provisional Court. Asimismo, he visitado en - la capital federal el Washington National Records Center donde - también se guardan otros documentos que me interesaba compulsar. Otro centro muy importante, tanto por sus colecciones documenta-

les como su hemeroteca e impresionantes fondos bibliográficos, especialmente útiles para mi propósito ha sido la Library of Congress. Allí además de libros y periódicos raros he obtenido documentos complementarios y he investigado los documentos y papeles personales y oficiales de los hombres públicos J.B. Foraker, W. McKinley, T. Roosevelt y E. Root, todos en las colecciones de la Division of Manuscripts de esta última biblioteca. También he usado los fondos de la Biblioteca del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En Puerto Rico he utilizado los fondos bibliográficos, periodísticos y documentales de la llamada Colección Puertorriqueña - (Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña) hasta agotarlos. Este centro es sin lugar a dudas el más importante sobre la isla. También he compulsado las Bibliotecas del Tribunal Supremo, del Colegio de Abogados, del Departamento de Justicia y la antigua del Ateneo Puertorriqueño donde asimismo se custodian sus Actas desde 1876, - indispensables para la historia de las ideas y cultural de la nación puertorriqueña. De especial ayuda ha sido la muy completa - Biblioteca Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En menor escala por las razones expuestas al comienzo de esta nota he efectuado investigaciones en el Archivo General de Puerto Rico y en los de los Departamentos de Estado (antigua Secretaría Ejecutiva), y del Departamento de Justicia.

Además de las fuentes documentales de toda clase, he examinado noticias periodísticas para compulsar y entender el estado de

la opinión pública puertorriqueña muy importante en esta época; Actas manuscritas de la Cámara de Delegados, no publicadas; Actas de las reuniones de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico, también manuscritas y los Libros Registros - del Tribunal Supremo de Puerto Rico en igual condición. Así como libros, estudios, memorias, artículos y monografías jurídicas e - históricas y culturales, tanto de la época como contemporáneas. Por supuesto, todos están fichados en las notas al calce o en la bibliografía.

Introducción

En esta breve introducción el autor pretende ofrecer lo más sucinto posible y en términos generales -por no ser tema principal- cuales eran los principales rasgos históricos, jurídicos y judiciales de Puerto Rico a fines del siglo XIX, cuando llegan a la isla los ejércitos de Estados Unidos.

Puerto Rico era una comunidad o provincia autónoma de España, con casi un millón de habitantes, ocupando un territorio claramente definido, con una cultura hispana cuatro veces centenaria y hablando uno de los grandes idiomas universales. Teníamos una literatura propia, una larga tradición política, habíamos luchado por nuestros derechos civiles y teníamos una nacionalidad definida: - la puertorriqueña. (1)

El régimen Constitucional-autonómico.

La Constitución Autonómica de Puerto Rico (2) fué otorgada - por el Gobierno-Sagasta, el 25 de noviembre de 1897. El nuevo status o condición constitucional de Puerto Rico es creación de la - interacción de todas y cada una de las fórmulas políticas que durante el siglo XIX estuvieron presentes en la conciencia y la acción política de los puertorriqueños. Unas directas y otras por el reflejo indirecto de su presencia moral. Si bien es cierto que la fundación y propaganda del Partido Autonomista Puertorriqueño tuvo

gran importancia en el logro del nuevo status constitucional dentro de la legalidad, no lo es menos la actitud armada y propagandística del movimiento revolucionario independentista cubano y puertorriqueño también. Tampoco puede soslayarse la situación internacional de fin de siglo, específicamente las tensas relaciones entre España y Estados Unidos.

Veamos someramente algunas opiniones de los contemporáneos - sobre el status constitucional autonómico de Puerto Rico: Don Luis Muñoz Rivera consideraba que Puerto Rico se constituye "en un pueblo soberano, dueño absoluto de su suerte y capaz de dictar sus leyes civiles sin la intervención de España". También opinaba que: "La Autonomía era en el presente libertad completa, dominio exclusivo, en el porvenir era otra cosa: la independencia". Don Nicolás Salmerón Alonso, declaraba que la autonomía "organizaba en las Antillas una vida propia independiente y libre". Don Francisco Silvela sostenía que, "constituía una concesión tan amplia que rayaba en la independencia". Don Francisco Bergamín manifestaba, "que había mermado en gran parte la soberanía española y que facilitaba el medio de que se perdiese una gran parte de nuestro territorio".

Examinemos brevemente algunos aspectos de este estatuto constitucional puertorriqueño. Se establecía un régimen parlamentario con un Gobernador General, un Parlamento, un Consejo de Secretarios presidido por un Primer Ministro y Municipios autónomos. El Gobernador General ejercía doble función, como representante del Estado español y como agente moderador de la entidad autónoma. Sin embar-

go, quien realmente detentaba el poder político, administrativo y constitucional era el Primer Ministro o Presidente del Consejo de Secretarios. Este determinaba las pautas de política pública y era quien tomaba o recomendaba las decisiones fundamentales, según el uso y el método parlamentario.

El Parlamento Autonómico poseía poderes ilimitados salvo en aquello que se refiere a negocios extranjeros, que no sean de asuntos comerciales; Guerra, Marina y algunos aspectos de la Judicatura. El Parlamento tiene derecho a proponer al Gobierno Central modificaciones a la Constitución y a reclamar nuevos proyectos de Ley o medidas ejecutivas en interés de Puerto Rico. Aparte de sus atribuciones locales, es competente para, 1) dirigir la formación del censo electoral; 2) para organizar tribunales con jueces puertorriqueños; 3) formar el Presupuesto, sin limitación alguna; 4) iniciar o tomar parte en las negociaciones que el Gobierno lleve a cabo a fin de concluir tratados comerciales que puedan afectar a Puerto Rico; 5) aceptar o rechazar los tratados comerciales internacionales que el Gobierno español haya concluido sin participación del Gobierno de Puerto Rico; 6) redactar el Arancel y la designación de los derechos que hayan de pagar las mercancías, tanto a su importación en el territorio insular como a la exportación del mismo.

Podían asimismo ambos cuerpos del Parlamento Autonómico, Cámara de Representantes y Consejo de Administración, estatuir sobre cuantos asuntos y materias incumben a los Ministerios españoles de Gracia y Justicia, Gobernación, Hacienda y Fomento (Obras Pú-

blicas, Instrucción Pública y Agricultura). También intervenía el Parlamento en la organización administrativa, división territorial, provincial, municipal o judicial, sanidad marítima y terrestre, crédito público, Bancos y sistema monetario. En el ámbito municipal se le otorgaba a los pueblos la más amplia autonomía y se disponía que las minorías políticas tenían que tener representación legítima. Se establece el referéndum, es decir, la sanción por el pueblo en los asuntos municipales de deuda y crédito.

Desde la publicación de la Constitución Autonómica en la Gaceta de Puerto Rico en diciembre de 1897, comienza un período de intensos cambios constitucionales e institucionales. Se reorganiza la administración pública puertorriqueña y se crean las Secretarías o ministerios de Gracia, Justicia y Gobernación; Hacienda; Instrucción Pública, Obras Públicas y Comunicaciones y Agricultura; Industria y Comercio y la plantilla de un Secretario sin cartera, el Presidente del Consejo. Se suprimen en febrero de 1898 la Intendencia de Hacienda, el Consejo de Administración, la Sección de Administración Local, las Delegaciones de San Juan y Ponce y las Inspecciones Técnicas de Obras Públicas, Comunicaciones y Sanidad.

El 10 de febrero de 1898 se designan los Secretarios del Despacho, con carácter provisional, Don Francisco Mariano Quiñones, Presidente; Don Luis Muñoz Rivera, Gracia, Justicia y Gobernación; Don Manuel Fernández Juncos, Hacienda; Don José Severo Quiñones, Agricultura y Don Juan Hernández López, Obras Públicas. Las Subse

cretarías las ocupan, D. José de Diego, D. Luis Sánchez Morales, D. José Celso Barbosa y D. Cayetano Coll y Toste.

El régimen constitucional autonómico comienza a funcionar - el viernes 11 de febrero de 1898. En marzo se emite el Decreto - para celebrar las elecciones parlamentarias, verificadas éstas, - los resultados se conocen el 12 de abril de 1898. El Partido Liberal Autonomista cuyo jefe es Don Luis Muñoz Rivera obtiene la - mayoría de votos. El Parlamento Autonómico inaugura sus funciones el 17 de julio de 1898. La mayoría de los parlamentaristas están presentes y juran sus cargos. Al día siguiente comienzan los trabajos legislativos, eligiéndose Presidente del Consejo de Administración, o cámara alta a Don Francisco de Paula Acuña y Paniagua y Presidente de la Cámara de Representantes a Don Herminio Díaz Navarro.

Constituido el Parlamento Autonómico cesa el Gabinete provisional y el Gobernador, fiel cumplidor de los usos parlamentarios designa Presidente del Consejo de Secretarios a Don Luis Muñoz Rivera. Los demás miembros del gabinete serán los señores D. Juan Hernández López, Secretario de Gracia y Justicia; Don Julián Blanco Sosa, Secretario de Hacienda; Don Salvador Carbonell, Secretario de Fomento (3). Las Secretarías habían sido reorganizadas por un Estatuto aprobado por el Parlamento el 20 de julio de 1898. - Todas las condiciones se presentaban óptimas para que el pueblo - de Puerto Rico comenzara el camino del auto-gobierno que le llevaría a futuras reivindicaciones, cuando el 25 de julio de 1898 es

traída la Guerra hispano-norteamericana a Puerto Rico (4).

Como bien dice el ensayista puertorriqueño Dr. Tomás Blanco:

"en el mismo momento en que se disponía a emprender una nueva etapa de madurez, en armonía con su pasado, sufrió la - violencia de un cambio desquiciador, en virtud de una guerra a cuya declaración fuimos ajenos, por el rigor de una derrota a la que no contribuimos, por disposición de un Tratado de Paz en cuyas negociaciones no tuvimos voz ni voto. Fué entonces que ante la fuerza de las armas y las exigencias exageradas del vencedor, se subyugó nuestra personalidad de pueblo -de provincia autónoma- y pasamos como botín de guerra a ser colonia de una extraña y poderosa nación - con la que no teníamos deuda pendiente alguna" (5).

El Sistema jurídico y judicial.

A fines del siglo XIX, el antiguo sistema judicial puertorriqueño, producto de casi cuatrocientos años de práctica y organización, había sido modernizado y consolidado entre otros, por los Reales Decretos de 26 de octubre de 1888 (6) y el muy importante de 5 de enero de 1891 (7). Teniendo en cuenta la época y las circunstancias, la administración de justicia en Puerto Rico era una organización madura, moderna y bastante justa.

En San Juan funcionaba la Audiencia Territorial desde su instalación el 23 de julio de 1832 (8). Tribunal que en lo civil servía de segunda instancia de todas las apelaciones contra las sen-

tencias y autos que los jueces de primera instancia dictasen. Y en lo criminal era uno de los tres tribunales juzgadores de los delitos cometidos en el territorio insular. Es decir, la jurisdicción criminal era compartida por las dos Audiencias Criminales, - una en Ponce (9) y otra en Mayagüez (10), así como por una Sala criminal de la Audiencia Territorial de Puerto Rico, teniendo cada una su particular Distrito. Estos tribunales conocían de las causas y juicios criminales en juicio oral y público y con arreglo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (11) de 19 de octubre de 1888. Dicho código contenía las siguientes modificaciones, 1. la instancia única en vez de los dos grados de la jurisdicción; 2. el juicio oral y público en vez del procedimiento escrito y secreto; - 3. separación de lo civil y lo criminal en cuanto al tribunal sentenciador, 4. intervención del procesado en todas las diligencias del sumario.

Seguían en el sistema once Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (12) con asiento en las ciudades de Ponce, Mayagüez, San Germán, Humacao, Vega Baja, Arecibo, Guayama, Aguadilla, Utuado y dos en San Juan. Cada juzgado era presidido por un Juez con jurisdicción para conocer de todos los pleitos civiles cuya cuantía excediese de doscientos pesos, mediante juicio y procedimiento escrito. También tenían jurisdicción para resolver como tribunal de segunda instancia, todas las apelaciones contra las sentencias definitivas de los Juzgados Municipales. Además debiendo dicho Juez en su carácter de magistrado instructor, instruir el sumario

o primeras diligencias de averiguación en los casos de delitos y decretar la detención y prisión de los presuntos culpables cuando procediese con arreglo a la ley. En San Juan, de acuerdo a la ley, funcionaban dos Juzgados cada uno ejercitando una de las jurisdicciones, esto es, uno de Primera Instancia y el otro de Instrucción.

Terminaba la organización municipal puertorriqueña una Juzgado Municipal en cada uno de los pueblos y ciudades de la isla y - dos en San Juan. Estos Tribunales conocían en juicio verbal de las demandas civiles cuya cuantía no excedía de doscientos pesos y de las faltas definidas y penadas en el Libro III del Código Penal, o sea de las faltas contra el orden público, contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, contra las personas y la propiedad.

Completaba dicho sistema el Tribunal Supremo de España, ante el cual se interponían los recursos de casación en lo civil contra las sentencias de la Audiencia Territorial de Puerto Rico, y en lo criminal contra las sentencias de las Audiencias de lo Criminal de Ponce, Mayagüez y la que se constituía por los magistrados de la Audiencia Territorial en San Juan.

La mayoría de los Códigos españoles habían sido trasladados a Puerto Rico luego de los correspondientes ajustes efectuados en el Ministerio español encargados de los asuntos de ultramar y luego del establecimiento del Ministerio de Ultramar en su negociado correspondiente. Mencionaré únicamente los más importantes y últimos que nos llegaron: Código Penal (1879) (13), Ley de Enjuiciamiento

Criminal (1888) (14), Ley de Enjuiciamiento Civil (1888) (15), - Código Civil de Puerto Rico (1889) (16), Ley Hipotecaria (1878 y 1893) (17), y Código de Comercio (1886) (18), Ley del Registro - Civil (1884) (19), y la Ley Notarial (1873) (20), anén de muchos más que no menciono.

Desde 1840 participa en la vida jurídica puertorriqueña el - Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. También el Colegio de Procuradores establecido en 1873 y el Colegio Notarial creado en - 1891. Todos reglamentan las tres profesiones que en esta época integran la comunidad jurídica de la isla. Los estudiantes que aspiran a cursar la carrera de abogado marchan la mayoría de ellos a las Universidades españolas y una minoría a la de La Habana. Desde 1888 el Ateneo Puertorriqueño inaugura la Facultad de Derecho de la Institución de Enseñanza Superior, la primera Universidad del país. Catedráticos de La Habana examinan a los estudiantes de Derecho - de la escuela ateneística, cuyos Profesores eran los mejores abogados de Puerto Rico.

Existían pues, en Puerto Rico, todas las condiciones de la civilización moderna de su tiempo, así como una nacionalidad y una - cultura definida y pujante, cuando en Guánica desembarcan las tropas del General Miles.

El Juez James Mc Leary nos dice en el caso de Ex Parte Mauleón: "Cuando empezó la invasión, el día 25 de julio de 1898, este pueblo se encontraba viviendo bajo un Código de Leyes que era el resultado final del progreso durante edades, y estaba profundamente

arraigado en un sistema de jurisprudencia que le había sido concedido durante una docena de generaciones, desde el descubrimiento de América, y a sus antecesores en España por unos mil años con anterioridad a ese descubrimiento; un sistema que se derivaba del Derecho romano y que ha estado en práctica en la península por siglos, y es desde allí a esta colonia por los primeros pobladores" (21). Esto lo manifiesta en 1903 un Magistrado norteamericano del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

I

La situación institucional y jurídica durante la Guerra.

La Guerra fue declarada entre Estados Unidos de América y el - Reino de España el 21 de abril de 1898. Las hostilidades fueron traí- das a Puerto Rico contra todo derecho por cuanto era una provincia o comunidad autónoma desde el año anterior. Las tropas del Ejército de Estados Unidos desembarcan en el puerto de Guánica el 25 de julio de 1898. El dominio y ocupación militar de Puerto Rico se extendió desde la fecha del desembarco hasta el 1 de mayo de 1900 en que se inaugura un gobierno civil norteamericano. En su Informe Anual el úl- timo Gobernador Militar de Puerto Rico, General George W. Davis, di- vide la intervención militar en tres períodos distintos (1). el pri- mero se extiende desde el 25 de julio de 1898 al 14 de agosto de ese mismo año (Protocolo preliminar de paz). Esta fué la etapa de beli- gerancia y hostilidades activas, durante la cual el General Nelson - A. Miles, Comandante en Jefe del ejército invasor obedecía al Presi- dente de los Estados Unidos y las leyes marciales. En el segundo pe- ríodo, del 14 de agosto de 1898 hasta el 11 de abril de 1899 (Ratifi- cación del Tratado de París), coincidieron legalmente un estado de - guerra y la soberanía española. En 18 de octubre habían sido evacua- das las últimas tropas del ejército español. En el tercer período que dura desde el 11 de abril de 1899 hasta el 1 de mayo de 1900, cesó la soberanía española y sin embargo, el Congreso de Estados Unidos, no había legislado aún para el Gobierno de Puerto Rico.

Las únicas instrucciones que recibieron los Generales norteamericanos, luego Gobernadores Militares, en cuanto a la administración civil y política general fue la General Order No. 101, July 18, 1898 (2). En esta disposición del Departamento de la Guerra se recoge la política pública establecida por el Presidente William McKinley meses antes con relación repito al trato que recibirían los asuntos civiles de Cuba. Luego veremos cómo se extiende a Puerto Rico. La referida disposición informa lo siguiente:

".....

El primer efecto de la ocupación militar del territorio del enemigo es la ruptura de las anteriores relaciones políticas de los habitantes y el establecimiento de un nuevo poder político. Bajo esta nueva situación, los habitantes, mientras lleven a cabo sus deberes tienen derecho a la seguridad de sus personas y propiedades y en todos sus derechos y relaciones privadas.

.....

A pesar de que los poderes de los ocupantes militares son absolutos y supremos e inmediatamente tienen efectos sobre las condiciones políticas de los habitantes, las leyes municipales del territorio conquistado, como las que afectan los derechos privados de las personas y la propiedad y las que provienen para el castigo del crimen, se consideran como en vigor, mientras sean compatibles con el nuevo orden de cosas, hasta que sean suspendidas o reemplazadas por el beligerante, y en la práctica usualmente no son abrogadas sino que se mantienen en vigor y se administran por los tribunales ordinarios sustancialmente como an-

tes de la ocupación"

Más adelante este importante Decreto militar se refiere a los magistrados y jueces:

"Los jueces y otros oficiales relacionados con la administración de justicia pueden, si aceptan la supremacía de los Estados Unidos, continuar administrando la ley ordinaria del país, bajo - la supervisión del Comandante en Jefe norteamericano"

.....

Cuatro días después de la invasión, el 28 de julio de 1898, el - General Miles publicó una Proclama "a los habitantes de Puerto Rico" (3). Al final de la misma manifiesta: "No es nuestro propósito el de interferir ninguna de las leyes y costumbres presentes que sean sanas y beneficiosas para vuestro pueblo, mientras estén de acuerdo con las normas de la administración militar, del orden y de la justicia". Al día siguiente el mismo oficial emite una Circular (4) reservada a sus oficiales. Nos interesa lo relativo al Derecho puertorriqueño y organización judicial: "Las leyes locales, en cuanto afecten los derechos privados de las personas y de la propiedad y provean al castigo del - crimen, deberán continuar en vigor, en cuanto sean compatibles con el nuevo orden de cosas, y no deberán ser suspendidas a no ser que ello sea absolutamente necesario para cumplir los objetivos de la presente ocupación militar. Estas leyes deberán ser aplicadas por Tribunales - ordinarios, sustancialmente en la misma forma en que lo fueron antes de la ocupación". También la Circular dispone que los tribunales puertorriqueños no ejercerán jurisdicción sobre los delitos cometidos por

militares y servidores ni sobre civiles que delincan contra aquellos. En esta situación la jurisdicción exclusiva le corresponde como es usual al Consejo de Guerra en casos excepcionales y a la Comisión Militar en los demás. La jurisdicción de la mencionada Comisión fue fijada en un apéndice de la referida circular: la misma comprende los delitos de asesinato, homicidio, acometimiento y agresión grave, robo y todos los delitos, ofensas o violaciones de la ley de la guerra que le sean referidos por el Comandante General. De esta forma se establece en la zona de influencia del ejército norteamericano un foro especial y militar para juzgar civiles puertorriqueños si caen bajo su jurisdicción. El "Judge Advocate General of the Army" más define la Comisión Militar como un tribunal marcial al cual se acude por razón de que la jurisdicción de los Consejos de Guerra está fijada por los estatutos y no puede extenderse para incluir cierta clase de delitos y ofensas que de otra forma quedarían impunes en ausencia de un foro provisional. Más adelante examinaremos el status jurídico de las Comisiones Militares (5).

Las hostilidades entre el Reino de España y los Estados Unidos cesaron el 12 de agosto de 1898 al firmarse un Protocolo de Paz, preliminar, en Washington D.C. entre el Embajador francés M. Jules Cambon, representando los intereses de España y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mr Clay (6).

Transcurrieron dos meses y seis días antes de que se inaugurara el Gobierno Militar de los Estados Unidos en Puerto Rico. Durante ese tiempo, la isla estuvo dividida en dos zonas soberanas, en el norte, la de España y el Gobierno Autónomo y en el sur la del ejército de la

potencia invasora. En ambas zonas se administraba justicia por los -
tribunales ordinarios con la adición de los juicios de los Consejos -
de Guerra, Comisiones Militares y otros foros del ejército.

II

El Gobierno Militar de los Estados Unidos en Puerto RicoIntroducción.-

Las únicas instrucciones que se emitieron por el Presidente con relación a la administración civil por los Gobernadores Militares fue la Orden General Número 101 de 18 de julio de 1898. Con referencia a este conjunto de reglas, debemos estar conscientes de que fueron preparadas teniendo en cuenta el efecto que tendrían entre la opinión pública cubana. Por ello muchas de las instrucciones son atemperadas a este fin político. El origen de las instrucciones de Mr. McKinley son las reglas preparadas por el alemán al servicio de Estados Unidos Mr. Liebers que desde 1863 regulaba estos asuntos en aquella nación. La obra se titula "Lieber's Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field" (1). No teniendo otras instrucciones no dudo que los Gobernadores Militares cometieron arbitrariedades (2).

El esquema jurídico del Gobierno Militar no será sometido por el asesor legal del Bureau of Insula Affairs (3), del Departamento de la Guerra hasta el 19 de octubre de 1899, un año después de la inauguración del régimen militar para asuntos civiles. Hasta ese momento no se tuvo por los Gobernadores otra directriz general fuera de las enunciadas anteriormente. Esto no quiere decir que no se tuviera experiencia y documentos en el Departamento de la Guerra, pues no era la primera experiencia militar de Estados Unidos, ni la primera administración civil por el Ejército, ni siquiera la primera experiencia con pueblos his

panos, pero todo este caudal no estaba ni estudiado ni integrado. Por algo tuvo Mr. Magoon que hacerlo en estos momentos. El referido esquema jurídico, largo y muy bien razonado, lleva por título "The powers, functions, and duties of the military governments maintained by the United States in the islands lately ceded and relinquished by the Government of Spain" (4).

Veamos como en el referido informe se configura el Gobierno Militar de Estados Unidos en Puerto Rico: "Luego de la ratificación del - tratado de París y demás ceremonias para su vigor, la soberanía y jurisdicción de los Estados Unidos quedó permanentemente vinculada y unida a Puerto Rico. La isla vino a ser un territorio perteneciente a Estados Unidos. Esta nación está en posesión indisputada de la isla, y por lo tanto el Gobierno Militar de Puerto Rico ha cesado de ocupar - el lugar de la suspendida y expulsada soberanía de España y se ha convertido en un instrumento de la nueva soberanía. Se ha convertido en el representante de la soberanía en vez del sustituto. Como las hostilidades han cesado en Puerto Rico, el Gobierno Militar no está autorizado a adoptar medidas que redunden en la promoción y el éxito de las operaciones militares ni justificar sus acciones en ese sentido. Con relación a Puerto Rico la guerra ha terminado y los propósitos de las operaciones militares se han conseguido y se ha asegurado la paz. Por lo tanto en esa isla los Estados Unidos no son un beligerante, consecuencia de ello es que allí el gobierno no ejerce sus poderes por virtud de un derecho de beligerancia" (5). Luego añade Magoon: "Habiéndose fir- mado un tratado de Paz, los peligros de la guerra cesan, como también cesan los derechos de los militares de ejercitar los poderes indefini-

bles e ilimitados de la guerra. Las leyes de la paz operan otra vez; y los derechos de los individuos y las comunidades tienen que ser reconocidos y protegidos". Varias páginas más adelante el ponente se pregunta: "¿Cuales son los propósitos del actual Gobierno Militar de Puerto Rico?. Como ya ha cesado de ser un instrumento de guerra, sus objetivos son: 1.- Promover las condiciones que justificarán el traslado de la Administración militar de asuntos civiles a un gobierno civil. 2.- Preservar en la isla el orden y la paz".

En otra parte del informe Mr. Magoon sostiene que: "Un Gobierno Militar instalado por los Estados Unidos en territorio cedido y tenido como conquista está obligado en tiempos de paz, de ejecutar las leyes en vigor en el territorio sujeto a su jurisdicción. Surge entonces, - cuales leyes están en vigor en Puerto Rico. 1. Los habitantes de un territorio sujeto a la ocupación militar se gobiernan en sus relaciones internas por las leyes municipales del territorio que estén en vigor al momento de la cesión o conquista. Esas leyes, a pesar de que - no son suspendidas o abrogadas por el hecho de la ocupación militar, pueden ser suspendidas o alteradas por el ocupante durante el período de la guerra cuando ejerce el poder de supremo legislador que como beligerante tiene. 2. Todas las leyes del anterior soberano que sean in compatibles con las instituciones del nuevo Gobierno quedan sin efectos jurídicos. 3. Mientras las leyes municipales del nuevo territorio que no estén en conflicto con la nueva soberanía continúan en vigor sin necesidad de acto afirmativo alguno, las leyes políticas no gozan de esa situación. No obstante, aquellos estatutos políticos de la anterior soberanía que no estén en conflicto con la constitución o insti-

tuciones de la nueva soberanía pueden continuar en vigor, si el ocupante así lo declara por acto afirmativo del Comandante en jefe durante la Guerra o el Congreso durante la paz. 4. Leyes de Estados Unidos que expropio vigore se extienden al nuevo territorio. 5. Las cláusulas del tratado de Paz de París y cesión y las obligaciones del Derecho internacional obligan al Gobierno Militar, no solamente en el ámbito nacional sino en el personal también. 6. (Sobre el cargo de Gobernador). 7. El Gobierno Militar de Estados Unidos en Puerto Rico puede ejercitar el poder de política pública de un estado". Otra parte - del Informe se dedica a la judicatura en el nuevo régimen. En su momento la examinaremos. Vuelvo a recalcar que este Informe fue preparado un año después de estar en funciones el régimen del Gobierno Militar de que se trata.

Gobierno del General John R. Brooke, 18 de octubre a 9 de diciembre de 1898.

El régimen Militar fué establecido jurídicamente el 1 de octubre de 1898 mediante Proclama del Presidente McKinley (6), sin embargo no será inaugurado oficialmente hasta el 18 de octubre de 1898. El mismo 1 de octubre se publica en la Gaceta de Puerto Rico (7), un Decreto - del Gobernador D. Manuel Macias Casado emitido el 29 de septiembre del año en curso donde se decidía la situación de los empleados públicos ante la nueva situación. Comienza entonces un período de transición - en la administración pública. Las Secretarías del Despacho, autonómicas comienzan a dejar cesantes la mayoría de sus empleados, mantenien

do un mínimo para atender los servicios esenciales en cada Ministerio (8). La última Gaceta de Puerto Rico con el escudo de la Monarquía española apareció el domingo 16 de octubre de 1898. Dos días después - el martes 18 de octubre- cesaba oficialmente la soberanía de España en Puerto Rico. Se inaugura en ese mismo día el régimen de los Estados Unidos, siendo administrados asuntos civiles por un Gobierno Militar - presidido por el General John R. Brooke.

El primer decreto (9) del General Brooke, la Orden General núm. 1 de 18 de octubre de 1898 (10) confirma la Circular del General Nelson A. Miles de 29 de julio sobre la vigencia de los tribunales civiles y sobre el Derecho puertorriqueño. Vuelve asimismo a advertir que los delitos cometidos por soldados o contra ellos pueden ser juzgados no en los tribunales del país, sino que la jurisdicción exclusiva le corresponde al fuero militar. El idioma inglés aparece por primera vez - en la Gaceta de Puerto Rico el 26 de octubre y en esa misma fecha se cambió arbitrariamente el nombre de la isla, de Puerto Rico, al exótico de "Porto Rico". Asimismo el Gen. Brooke decidió gobernar con la - ayuda del Consejo de Secretarios. Como consecuencia de esta decisión designó a D. Luis Muñoz Rivera, Presidente del Consejo y Secretario de Gobernación (11); al Lcdo. Juan Hernández López, Secretario de Justicia; a D. Julián Blanco Sosa, Secretario de Hacienda y al Dr. Salvador Carbonell, Secretario de Fomento. Obsérvese que el título de la Secretaría de Gracia y Justicia fue cambiado a Secretaría de Justicia. Al extender estos nombramientos el Gobernador Militar dio efectividad jurídica al régimen autonómico en su fase o aspecto ejecutivo. Los asuntos continuarían despachándose en Consejo siendo este cuerpo dirigido

por un Presidente y la supervisión del Gobernador Militar. Es necesario tener en cuenta que además de las funciones ordinarias de las Secretarías, el Consejo entendía en asuntos de política pública y mientras tuvo existencia de cierta manera atemperó las facultades "absolutas" del Gobernador Militar. No debemos tampoco olvidar que los miembros del Consejo fueron electos al Parlamento Autonómico y que de esta forma representaban al país. Asimismo este Gabinete era el que ejercía el poder público cuando ocurrió la invasión y demás acontecimientos.

El 23 de octubre de 1898 el Consejo de Secretarías emite la siguiente declaración pública: (12)

"Alocución del Consejo de Secretarías al Pueblo de Puerto Rico.

San Juan, octubre 23, 1898

Al extinguirse la Soberanía Española e iniciarse la Soberanía Americana, estableciéndose el poder militar, absoluto y supremo por el muy honorable Presidente de los Estados Unidos, ocupabamos nosotros el Gobierno Insular. Estimando que la resignación de nuestros cargos se imponía de un modo absoluto, la hicimos ante el general Brooke resuelta y formalmente. El general Brooke estima que debemos seguir prestándole nuestro concurso en el despacho de los asuntos del Gobierno de la isla y ocupar las Secretarías que subsistieran mientras no legislen para el país las Cámaras de Washington. Y, como queremos corresponder a tan honrada prueba de confianza, permaneceremos en nuestros puestos, aceptando durante este período transitorio, las responsabilidades que nos crea.

El régimen militar reduce la órbita de nuestra acción a límites estrechos. No obstante, informaremos en cada caso al General Brooke en el leal y noble propósito de que sus actos se inspiren siempre en la justicia y en la ley"

Como consecuencia de su decisión de continuar gobernando con el Consejo de Secretarías, el General Brooke promulga la Orden General núm. 8 de 4 de noviembre de 1898. En esta disposición se estatuye la continuidad institucional:

"Como las leyes que existieron vigentes en Puerto Rico e islas adyacentes, han de continuar en vigor en todo cuanto sean compatibles con el Gobierno Militar que administra - hoy los asuntos de las mismas, y subsistir las relaciones que existen en los centros locales inferiores de la administración con el Consejo de Secretarios; todos los centros inferiores deben enviar al Secretario respectivo los asuntos que a ellos conciernan y de que está hecho cargo, para que dichos Secretarios puedan someterlos al Departamento Militar para su resolución y aprobación".

La primera reforma del sistema de tribunales se llevó a cabo por la Orden General núm. 4 de 27 de octubre de 1898 (13). Esta medida contiene tres artículos y en cada uno de ellos se refiere a un aspecto diferente de la judicatura. En el primero se levanta la moratoria judicial que como consecuencia de la Guerra estableció el Real Decreto de 26 de julio de 1898; en el segundo artículo se suprime el uso del pa-

pel sellado y en el tercero se dispone lo siguiente: "El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo (14) queda abolido pasando sus deberes y funciones al Tribunal Supremo de Justicia". La razón que ofrece el Gobernador Militar para esta drástica medida es la siguiente: "Yo abolí el Contencioso-Administrativo que era una especie de Tribunal de apelaciones creado para estar entre el Capitán General y el Tribunal Supremo, más para ofrecer cargos a favoritos que para ningún propósito útil" (15). Por supuesto, la opinión del General Brooke es totalmente arbitraria e injusta. La causa subyacente es, que este foro no está acorde con las instituciones jurídicas norteamericanas del momento. Esta Orden General, es muy importante, aparte de lo referente al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, por cuanto se alude por primera vez al "Tribunal Supremo de Justicia". No existe disposición alguna que crea o establezca ese alto foro emitida por el Gobierno Militar (16). Si se aprueban medidas sobre su organización y nombramientos, - pero siempre dando por sentada su creación. Lo que ha sucedido es que a la Audiencia Territorial de Puerto Rico se le ha cambiado únicamente el nombre a "Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico" (17) permaneciendo inalterada en todo lo demás. Los miembros españoles de la Audiencia renunciaron y el 15 de octubre de 1898 embarcaron para España (18). Permanecieron en estrados los antillanos D. José Conrado Hernández y Santiago, único puertorriqueño que ocupaba un cargo de Magistrado en propiedad (19) y D. Rafael Nieto Abeille (20) cubano, quien se desempeñaba como Abogado Fiscal y D. Arístides Maragliano, Magistrado. Estos funcionarios juraron lealtad al nuevo régimen y fueron nuevamente designados el 19 de octubre (21). Inmediatamente el Gober-

nador Militar reorganizó el personal de la Audiencia y en 26vde octubre de 1898 la plantilla era la siguiente: D. José S. Quiñones y Caro, Presidente; D. José C. Hernández y Santiago, Presidente de Sala; D. - Aristides Maragliano, D. José de Diego, D. Herminio Díaz Navarro, D. Manuel F. Rosoy y D. Juan Ramón Ramos, Magistrados; D. Francisco de - Paula Acuña, Fiscal; D. Angel Acosta, Teniente Fiscal y D. Rafael Nieto Abeillé, Abogado Fiscal. Así estuvo constituida la nueva Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico por primera vez (22). Esa fue la primera plantilla de ese Tribunal, luego cambiaría por diferentes motivos. También se designa el personal de las vacantes de los demás tribunales. Una de las principales razones que tenía el Gobernador Militar para designar el personal de la judicatura, era poner coto al estado de subversión y anarquía por el que atravesaba el noroeste de la isla.

El problema de las alzas.

Al ocurrir la nueva situación política el sistema judicial de — Puerto Rico quedó roto e incompleto en cuanto al ámbito y expresión final del mismo: las alzas al Tribunal Supremo de España. Problema grave, dada la organización existente, era la desaparición de un tribunal de casación que resolviera los recursos interpuestos y los que en lo sucesivo se interpusieran contra las sentencias de la Audiencia Territorial en lo civil y contra las sentencias de las Audiencias de lo Criminal y sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, D. José Severo Quiñones testifica sobre este asunto ante el "Comisionado del Presidente McKinley", Dr. — Henry K. Carroll (23) el 8 de noviembre de 1898:

"Dr. Carroll: ¿Supongo que las apelaciones a Madrid están ahora

detenidas?

Sr. Quiñones: El derecho no existe ahora.

Dr. Carroll: ¿Al mismo tiempo las apelaciones no se permiten - al Tribunal Supremo en Washington?

Sr. Quiñones: No hay apelaciones a ese tribunal por esta razón: todos los casos en apelación están suspendidos y aguardan decisión del Sr. McKinley.

Dr. Carroll: ¿Entiende usted que las sentencias en apelación - pendientes en Madrid finiquitan por virtud del cambio de status de la isla?

Sr. Quiñones: Esta es una pregunta muy importante, y todos los abogados están pensando sobre la misma. Antes de firmarse el protocolo muchos casos habían sido apelados a Madrid, pero supongo que el tratado final de paz en París dispondrá del asunto. En otros casos en que el auto de casación se había otorgado por el Tribunal Supremo de España, las partes están pendientes de una decisión de Washington".

.....

Un mes después de haber hecho estas declaraciones, el Gobernador Militar emitió la Orden General núm. 19 de 2 de diciembre de 1898 (24), donde se intenta dar una solución a este grave problema. El artículo 1 dispone que: "La Suprema Corte de Justicia en Sala de siete Magistrados, incluyendo al Presidente, conocerá de todos los llamados recursos de casación así pendientes de resolución como los que se establezcan en la misma que autorizan las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, las cuales en el anterior régimen de España correspondían al Tribunal Supremo de Madrid, cuya jurisdicción respecto de esta isla - quedó restringida por concesión del Protocolo de Paz". (énfasis suplido). El artículo IV de la misma disposición ordena que: "Las apelaciones elevadas a y aún pendientes de decisión en el mencionado Tribunal Supremo de Madrid serán reclamadas por los medios diplomáticos y a su devolución serán transferidas a la Suprema Corte de Justicia". Si bien

esta medida resolvió el problema, creó sin embargo un estado anormal en el derecho de procedimientos: Jueces de un mismo tribunal ejercían al mismo tiempo una jurisdicción superior e inferior y de carácter jurídico opuesto. Ocho días después, 10 de diciembre, se firmó el Tratado de Paris. (25). Este instrumento resolvió la situación de las apelaciones en el artículo XII:

"Los procedimientos judiciales pendientes al canjearse las ratificaciones de este Tratado, en los territorios sobre los cuales España renuncia o cede su soberanía se determinarán con arreglo a las reglas siguientes: 1.- Las sentencias dictadas en causas civiles entre particulares o en materia criminal, antes de la fecha mencionada, y contra las cuales no haya apelación o casación con arreglo a las leyes españolas, se considerarán como firmes, y serán ejecutadas en debida forma por la autoridad competente en el territorio dentro del cual dichas sentencias deban cumplirse. 2.- Los pleitos civiles entre particulares que en la fecha mencionada no hayan sido juzgados, continuarán su tramitación ante el Tribunal en que se halle el proceso, o ante aquél que lo sustituya. 3.- Las acciones en materia criminal pendientes en la fecha mencionada ante el Tribunal Supremo de España contra ciudadanos del territorio que según este tratado deja de ser español, continuarán bajo su jurisdicción hasta que recaiga la sentencia definitiva; pero una vez dictada esa sentencia, su ejecución será encomendada a la autoridad competente del lugar en que la acción se suscitó".

Así en el artículo XII se estipula un procedimiento diferente al señalado por el artículo IV de la Orden General Núm. 19. Esta situación produjo una protesta formal del Gobierno de España por conducto del Embajador de Francia en Wáshington (26). En la parte esencial de la carta de 2 de marzo de 1899 dirigida al Secretario de Estado Mr. Hay se resume el asunto: "Como puede usted ver, el Gobierno de su Majestad entiende que hay una contradicción entre el párrafo cuarto de la antes mencionada Orden y ciertas estipulaciones del artículo doce del Tratado de París". Acompaña a la referida carta la nota del Gobierno español sosteniendo su posición al respecto. "A los ojos del Gobierno de su Majestad, esta Orden tiene ciertas provisiones en flagrante contradicción con las estipulaciones del Tratado de Paz firmado el 1º de diciembre último, entre España y Estados Unidos. A pesar de que el Gobierno de su Majestad atribuye esta contradicción entre ciertas previsiones de la mencionada Orden y las cláusulas del Tratado de París, al hecho de que la autoridad americana en Puerto Rico desconocía las cláusulas del Tratado, cree sin embargo, que es propio invitar la atención del Gabinete en Wáshington sobre este punto". Más adelante la nota termina de la siguiente forma: "Entonces, de lo ya dicho se desprende que de acuerdo a las provisiones del Tratado de París, las apelaciones en casación interpuestas o pendientes ante el Tribunal Supremo de España, sean civiles o criminales, tienen que ser sometidas a decisión de ese alto tribunal y las autoridades de Puerto Rico estarán encargadas con la ejecución de las sentencias pronunciadas por aquél. El Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico, recientemente creado, no puede por lo tanto, reclamar la devolución, por medio de los conductos diplomá-

ticos, de las apelaciones pendientes ante el Tribunal Supremo de España, y en lo concerniente a este punto la Orden proclamada por el General Brooke debe ser modificada". (27)

El Departamento de la Guerra, recibió el encargo de contestar carta y nota. Mr. Magoon asesor jurídico de la "Division of Insular Affairs" estudió el asunto y llegó a la siguiente opinión: (28)

"El propósito de la referida Orden General Núm. 19, contra uno de cuyos artículos se dirige el referido Memorando, es definir deberes y jurisdicción del Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico Se llama la atención al hecho de que esta Orden General fué emitida en 2 de diciembre de 1898, ocho días antes de completarse las negociaciones del Tratado de Paz en París, el 1º de diciembre de 1898. Al ser dicho Tratado de Paz firmado, ratificado y proclamado, todo lo que en dicha Orden es contrario o en violación del mismo carece de valor y es nulo.

.....

Debe observarse que el lenguaje usado en el párrafo IV no confiere jurisdicción al Tribunal de Puerto Rico sobre los casos pendientes de decisión en el Tribunal Supremo de Madrid. El lenguaje es declaratorio de una intención de solicitar, a través de los canales diplomáticos, la devolución de aquellas sentencias. Si la solicitud fuera exitosa y los casos devueltos, entonces, y en ese evento, la jurisdicción del Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico entraría en vigor y las apelaciones vistas.

No parece que el Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico - haya tratado de ejercitar su jurisdicción en ningún proceso judicial ahora pendiente de decisión en el Tribunal Supremo de Madrid en apelación de aquella isla. Este Departamento de la Guerra no puede presumir que el Tribunal Supremo de Puerto Rico trate de ejercitar una jurisdicción no autorizada. De ahora en adelante, durante la existencia del Gobierno Militar, si este Departamento de la Guerra supiera que cualquiera de los derechos garantizados por el Tratado de París fuesen violados por los Tribunales de Puerto Rico, hasta donde lo permitan sus poderes, insistiría que esos derechos sean sostenidos."

Importantes palabras, estas últimas como veremos luego. La opinión de Mr. Magoon fue aprobada por su superior Mr. George D. Meiklejohn - y enviadas al Embajador francés. Así termina este asunto. Las apelaciones pendientes fueron tramitadas según se estipulaba en el Tratado de París. A pesar de que se resuelve el asunto de las alzas en el ámbito internacional, quedó el serio problema que representaba en un sistema de casación que un mismo Tribunal ejerciera dos funciones de carácter jurídico no sólo diferentes sino opuestas.

En cuanto a las apelaciones sobre asuntos de lo contencioso-administrativo que estaban pendientes siguen el mismo destino que las demás. El artículo VI de la Orden General Núm. 19, antes mencionada, establece que la Corte Suprema de Justicia verá estos recursos de ahora en adelante. Dicha disposición ordena lo siguiente: "En la misma forma conocerá la Suprema Corte de las apelaciones que en el régimen anterior

correspondían en lo contencioso-administrativo al Tribunal Supremo - del ramo establecido en Madrid". Anteriormente observamos como la Orden General Núm. 4 le concedió jurisdicción primaria al referido alto tribunal en los asuntos de lo contencioso-administrativo locales, esto fue el 27 de octubre de 1898. Ahora, escasamente un mes después, se le otorga jurisdicción apelativa en los mismos asuntos. ¿Va a ser la — Corte Suprema de Puerto Rico, tribunal local juzgador y apelativo a la misma vez? Esto es índice de la situación confusa de la época. Más lógico hubiera sido preservar el Tribunal Local de lo Contencioso-Administrativo o asignar dichos asientos en primera vista al Juzgado de Primera Instancia de San Juan y reservar a la Corte Suprema de Justicia, la función apelativa. Siete meses después se le asignó al Tribunal de Distrito de San Juan la facultad de examinar los asuntos de los contencioso-administrativo en primera instancia.

Los abogados españoles impedidos de ejercer su profesión.

Como consecuencia de los sucesos políticos y militares de 1898 la abogacía puertorriqueña se dividió en tres clases por razón étnica y - cultural, abogados puertorriqueños, españoles y norteamericanos. La de nominación de abogados españoles, que siempre existió en Puerto Rico, - pero que antes de 1898 estaba integrada en la sociedad puertorriqueña, florece y surge socialmente en el nuevo orden de cosas. La razón inmediata para ello es la obligatoriedad de jurar renunciando lealtad al - Estado español y al Rey, acto que por si sólo puede acarrear la pérdida de la nacionalidad española. A esto se negaron los abogados españoles. Tal división entre abogados en Puerto Rico permanece luego muchos años,

hasta que mueren los letrados, continuando entonces como una dualidad. En 1898-1899, 1909, 1910, 1913, 1916, encontramos evidencia de la existencia de división.

El Lcdo. Juan Hernández López, Secretario de Justicia puertorriqueño determina que todos los abogados ya admitidos anteriormente al foro de la isla, juren nuevamente acorde con la nueva situación política del país. La Circular de la Secretaría de Justicia de 2 de noviembre de 1898 exige el siguiente juramento:

"Yo juro solemnemente renunciar para siempre lealtad y fidelidad a cualquier Príncipe, Potentado, Estado o Gobierno extranjero, y especialmente al Estado y Gobierno de España, etc." (29)

Todos los abogados puertorriqueños juraron, no así los abogados españoles, y les fué vedada la práctica de la abogacía con la consiguiente pérdida de clientes, cuentas y pérdida de prestigio entre la masa del pueblo. El 15 de noviembre de 1898, el Lcdo. Antonio Sarmiento (30) dirigió una Solicitud a la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico (31) para que resolviera lo siguiente:

- 1.- "Si los abogados extranjeros estamos exentos de el juramento que prescribe el artículo 477 de la Compilación Orgánica del Poder Judicial en la forma determinada por la Secretaría del Despacho de Justicia en Circular de 5 de los corrientes;
- 2.- Que en caso negativo, propusiera a V. que determine la forma de dicho juramento" (32).

Más adelante el Lcdo. Sarmiento ofrece los fundamentos de ambas -

peticiones:

"Fundaba la primera petición en la Circular citada que impone a los letrados que ejerzan o continúen ejerciendo la profesión en la Isla, el deber de cumplir el artículo 477, jurando fidelidad al Gobierno y Constitución de los Estados Unidos, sin cuyo requisito serán considerados como extranjeros para todos los efectos legales. De donde lógicamente deducía que la Circular se refiere sólo a los abogados nacionales.

Fundaba la segunda en el artículo 481 de la misma Compilación, que al no exigir a los abogados para ejercer, la condición de nacionalidad, es evidente que permite el ejercicio a los abogados extranjeros, si bien prestando juramento que prescribe el artículo 477 en forma compatible con la soberanía de los Estados Unidos de Norte América".

El fallo de la Corte Suprema de Justicia no se hace esperar:

"La Corte Suprema, sin embargo, ha resuelto que de la Circular de la Secretaría del Despacho de Justicia se deduce lógicamente que los abogados extranjeros NO PODEMOS ejercer nuestra profesión en la isla" (33)

Hasta aquí la Resolución resumida. En Petición que el Lcdo. Antonio Sarmiento dirige al General Henry (34) fechada el 3 de noviembre de 1898 (35) expone la situación en que se encuentran los abogados españoles y razona jurídicamente su caso. El letrado peticionario llega a las siguientes conclusiones sobre la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico:

1.- "Que la Corte Suprema reconoce que el artículo de la Compilación autoriza a los letrados extranjeros al ejercicio de su - profesión.

2.- Que la Corte Suprema no aplica dicho artículo porque lo estima derogado por la circular antes citada"

Procede luego el Lcdo. Sarmiento a argumentar ambas conclusiones:

Lo primero, Señor, es absolutamente indudable. Según aquel artículo pueden ejercer la abogacía los mayores de 21 años, Licenciados en Derecho que no estén procesados criminalmente y no hayan sido condenados a penas aflictivas o estén rehabilitados, y no les exigen la condición de nacionalidad. Ciertamente que el artículo 477 les impone la obligación de jurar, guardar la Constitución de la Monarquía, ser fieles al Rey, y cumplir bien y lealmente las obligaciones que las leyes y reglamentos les imponen pero - este juramento no hace perder su nacionalidad a los extranjeros, porque, según el artículo 2 del Código Civil aquella no se pierde más que por adquirir naturaleza en países extranjeros, por admitir empleo de otro Gobierno, por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera, sin licencia del Soberano; y jurar fidelidad a un Gobierno extranjero, no es ninguna de estas cosas".

En cambio, lo segundo es absolutamente equivocado:

1. Porque la Ley no se deroga sino por otra Ley (artículo 5 del Código Civil)

2. Porque el artículo 481 no es incompatible con la soberanía de los Estados Unidos.

3. Porque por no ser incompatible no ha sido derogado por el jefe del Departamento como en tales casos previene el artículo 8 de la Orden General Núm. 1 del 18 de octubre último.
4. Porque la Circular sólo se refiere al artículo 477 y no hay razón alguna que justifique que pueda referirse al artículo 481 pues si hubiera querido lo hubiera hecho, y
5. Porque vigente el artículo 481, éste impide que se pueda interpretar la Circular en el sentido que la Corte Suprema lo hace.

Este último extremo es tan evidente como los anteriores. - La Circular quiere que los abogados juren, sin cuyo requisito - serán considerados como extranjeros para todos los efectos legales. Los abogados extranjeros pueden ejercer según el artículo 481, esto es un efecto legal de ser extranjero el poder ejercer la abogacía. Luego la Circular o no se refiere a los abogados - extranjeros, o si se refirió a ellos no les sometió a la misma condición que los nacionales"

El Lcdo. Sarmiento expone su tesis:

"No deseo, sin embargo, que se nos haga de distinta condición - que los abogados nacionales. Queriendo ejercer mi profesión en esta isla, estoy interesado como el que más en su tranquilidad y como base de ésta, en respetar y que se respete al Gobierno que la rige y sin perjuicio de mi nacionalidad, no tengo inconveniente en afirmar que con completa sinceridad juraré fidelidad al actual Gobierno".

Se termina esta larga y razonada Petición con la siguiente recapitulación:

"Suplica a V. se sirva declarar:

1. Que está vigente el artículo 481 de la Compilación Orgánica.
2. Cual debe ser la fórmula del juramento compatible con la soberanía que V. representa y con nuestra extranjería"

El Lodo. Francisco Pelegrí Roger (36) residente en Mayagüez envía otra Instancia al Gobernador Militar Gen. Henry el 20 de diciembre de 1898 (37). En la parte pertinente manifiesta:

"Cuando el Alcalde de esta ciudad reunió los abogados para oírnos al objeto de reorganizar esta Audiencia manifesté que deseando conservar mi nacionalidad no podía aceptar cargo alguno del nuevo Gobierno. Jamás quise ningún empleo del Gobierno de Madrid por mi carácter independiente y mis ideas políticas siempre republicanas. Creí no obstante, que podría continuar ejerciendo aquí la abogacía previo juramento de fidelidad a la Ley sin abjurar de mi nacionalidad española como se permite en las demás repúblicas de América, ninguna más democrática que la de los Estados Unidos, donde ejercen libremente la abogacía tanto nacionales como extranjeros, con sujeción a las leyes y reglamentos".

.....

"No obstante, se me ha informado que el Secretario de Justicia de esta isla ha dictado una resolución impidiendo el ejercicio de la abogacía a los que, a la vez que con el juramento de fidelidad no abjuramos de nuestra nacionalidad; y cuando, después de dos meses de ausencia por haber ido a Europa a ver y abrazar

a mi querido padre, octogenario y enfermo, cuando me disponía a prestar el juramento de fidelidad, para continuar ejerciendo la abogacía, esta Corte de lo Criminal me exige que renuncie expresamente a mi nacionalidad española, no permitiéndome de otro modo el ejercicio de mi profesión, aunque continúo para ello - inscrito en el reparto o matrícula de industria y comercio. Son de mucha consideración los perjuicios materiales que se me irrogan con tal disposición.....

En virtud de lo expuesto y, atendiendo a que soy vecino de Mayagüez, como los que aquí han nacido, que tengo hijos puertorriqueños, que soy el abogado más antiguo de los que ejercen en esta ciudad y que a éstos sólo se les ha recibido juramento de fidelidad sin obligarles a renunciar nacionalidad alguna, por todas esas consideraciones he resuelto acudir a V. como primer representante que es del Gobierno de los Estados Unidos en esta isla".

Luego de escribir esta carta, el Lcdo. Pelegrí Roger vuelve a insistir en su derecho. Así envía otra instancia al General Henry de fecha 28 de enero de 1898 donde le informa los derechos que goza por el Tratado de París. Las dos instancias y las protestas de los abogados españoles Sres. Antonio Alvarez Nava; D. Salvador Amell y Massó; Quintero; D. Emilio García Cuervo; Lara; D. Wenceslao Bosh y Puig; D. Luciano Ortiz y Antón y el Lcdo. Torres, se enviaron por el Gobernador Militar Henry al Presidente del Consejo de Secretarios D. Luis Muñoz Rivera. Este lo dirigió al Secretario de Justicia D. Juan Hernández -

López el 4 de febrero de 1898. La crisis política que se declaró dos días después impidió que dicho funcionario examinara y emitiera una opinión jurídica sobre el asunto. El nuevo Secretario de Justicia, - Lcdo. Herminio Díaz Navarro, refrendó el siguiente Dictamen el 21 de febrero de 1899: (38)

Honorable Mayor General Comandante del Departamento:

Estas cuestiones que rezan en el Derecho Internacional deben re solverse aceptándose por equitativo el principio de reciprocidad. A los súbditos de una nación debe permitírseles hacer en - otra todo lo que puedan los súbditos de ésta hacer en aquella. En España, los artículos 873 y 870 de la Ley de 15 de septiembre de 1870 para ejercer la abogacía exigen..... (39)

Estas disposiciones no prohíben directamente al extranjero el ejercicio de la abogacía en España, pero sí se lo prohíben indirectamente al exigirle un juramento de fidelidad a su Rey que no puede prestarlo el súbdito de otro rey o el que pertenezca a una nación en que la república impere.

Si ello es así, Señor, entiendo que no habría una igualdad de - concesiones, si en los Estados Unidos no se exigiese también a los letrados españoles que prestasen juramento de fidelidad a la Constitución Americana y a las instituciones por ella establecidas en los Estados de la unión. Se arraiga más en mí ese parecer en lo que se refiere a Puerto Rico.

En este país rigen en esa materia los artículos 481 y 478 del - Real Decreto de 5 de enero de 1891 cuyos artículos exigen para

ejercer aquí la profesión de abogado los mismos requisitos que para ejercerla en España exigen los artículos 873 y 870 de la Ley de 15 de septiembre de 1870 que he citado.

El Real Decreto de 5 de enero de 1891 continúa rigiendo en esta isla pues aún no se ha derogado, pero como se ha sustituido a la soberanía de España la soberanía de los Estados Unidos hay que considerar ipso facto, también sustituida en nuestras leyes una soberanía por otra

Dada esa irrefutable premisa, debe afirmarse como lógica consecuencia que allí en donde los artículos 481 y 476 del Real Decreto de 15 de septiembre de 1870 exigen, para ejercer la abogacía en esta isla que se preste juramento de guardar la Constitución de la Monarquía y de ser fieles al Rey se ha de entender que debe jurarse la Constitución de los Estados Unidos y ser fieles a las instituciones por ella establecidas en la Nación Americana. Con ese criterio entiende el Secretario que suscribe que deben de resolverse las adjuntas peticiones de los letrados españoles señores Sarmiento y Pelegrí".

Termina su dictámen el Secretario de Justicia sugiriendo al Gobernador Militar "que por tratarse de un asunto en que hay que tener muy en cuenta las relaciones de los Estados Unidos con España se remitan a Washington las instancias de los señores Sarmiento y Pelegrí, con este dictamen..." La opinión del Lcdo. Díaz Navarro da la razón a los abogados españoles, por cuanto aquellos estaban dispuestos a jurar lealtad a las leyes y Constitución de Estados Unidos. A lo que no estaban dis-

puestos era a renunciar a su lealtad y fidelidad al Estado y Rey de España porque eso les acarreaba la pérdida de su nacionalidad. Lo que extraña es que un abogado y político tan agudo e inteligente como lo era el Lcdo. Díaz Navarro no entendiera el asunto, o es que lo quiso soslayar. ¿Por qué sugiere al Gobernador Militar Henry que consultase con Washington? ¿Trataba de buscar tiempo?. Documentalmente no puedo contestar esas preguntas. Más adelante veremos la razón de las mismas.

Proceden los abogados españoles a contestar el Dictámen del Secretario de Justicia. En Alegato fechado el 25 de febrero de 1899 manifiestan las siguientes argumentos entre otros: (40)

".....

De otra manera, de los artículos 481 y 487, que tratan de los requisitos exigidos a los abogados y procuradores, se excluye la condición de nacionalidad, y la razón para ello estriba en que la profesión de abogado, es una profesión liberal cuyo ejercicio no está de ninguna forma determinado por la nacionalidad española, tampoco exigiéndosele a los comerciantes, farmaceúticos o médicos.

Nuestro argumento, Señor, no es afectado por el artículo 477 que dispone que los abogados y procuradores para poder ejercer sus profesiones, deben jurar lealtad, porque ese juramento no tiene el carácter o la naturaleza que le atribuye el Secretario de Justicia, por el contrario, es de naturaleza interna, para prevenir conspiraciones políticas y para garantizar la honestidad y buena fe de abogados y procuradores en el ejercicio de sus profesiones. Este juramento, es evidente no implica un cambio de na

cionalidad.

La mejor prueba que podemos presentar es que, nosotros, deseosos de preservar nuestra nacionalidad española, no vemos inconveniente de jurar fidelidad a los Estados Unidos, como lo juramos a España"

.....

Más adelante y en el mismo Alegato, los abogados españoles entienden que si el Gobernador Militar declarara nulas las leyes que les cobijan, es de justicia que se les permitan cinco años de práctica. El 28 de febrero de 1899 se envía el expediente al Departamento de la Guerra (41). El "Acting Judge Advocate" de Puerto Rico (42), Mayor A. C. Sharpe, emite su opinión sobre este asunto el 4 de marzo de 1899. -- Resuelve el problema aplicando la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Bradwell vs. The State of Illinois. Debo llamar la atención que era la primera vez que se aplicaba una sentencia de ese Tribunal en Puerto Rico, cosa inaudita por la total diferencia de enfoques filosóficos y legales de ambos sistemas jurídicos. Luego manifiesta el Mayor Sharpe lo siguiente: "En vista de esta clara y precisa sentencia parece que estos caballeros no deben ser desaforados de su práctica en los Tribunales de la isla, con tal de que provean las garantías apropiadas de capacidad y fidelidad al Tribunal, a los clientes, a la administración de la justicia y la Constitución de la Justicia" (43). Obsérvese que el Mayor Sharpe no tuvo en cuenta para nada el Derecho puertorriqueño, a pesar de que estaba en San Juan y tenía acceso y conocimiento del mismo (44).

El 25 de marzo de 1899, escriben al Secretario de la Guerra los Leados. Antonio Alvarez Nava y Emilio García Cuervo. Le informan sobre unos documentos perdidos y solicitan que se retarde la decisión del asunto hasta que se nombre un embajador español en Wáshington (45). El Departamento de la Guerra toma una decisión el 5 de abril de 1899 (46). La misma se basa en el artículo IX del Tratado de París y la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ex Parte Garland. El referido artículo dispone:

"Artículo 9. Los súbditos españoles, naturales de la Península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o ce de por el presente Tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando, en uno u otro caso, todos sus derechos de propiedad o de sus productos; y además tendrán derecho a ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándo se a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros"

Más adelante la misma opinión expone lo siguiente: "No requiere argumentos establecer que la acción de los Tribunales a que nos hemos referido, está en contravención a la anterior disposición del Tratado. La práctica legal y el derecho al ejercicio de la misma son propiedad - Ex Parte Garland, 4 Wall 333. La abogacía es una profesión. Ambas - están protegidas y aseguradas para los habitantes españoles de Puerto Rico por los términos expresos del Tratado (47). Luego el Secretario de la Guerra, interino Mr. Mechlejhon cita la "Executive Order" del - Presidente McKinley de 13 de julio de 1898. Termina el ponente con esta conclusión. "De acuerdo al procedimiento adoptado por la Orden de

referencia, y adecuadamente descrito por el ejecutivo como "práctica ilustrada", estos derechos se le reservan a los abogados españoles en la ausencia de estipulaciones en ese sentido en el Tratado. Una Orden que requiera a los abogados españoles la renuncia de su nacionalidad como requisito previo al ejercicio de su modo usual de ganarse la vida es nula y sin efecto pues esta en violación de los términos del Tratado de Paz y los principios declarados de nuestro gobierno militar" (48).

La Opinión oficial del Departamento de la Guerra de fecha 5 de abril de 1899 y antes citada y comentada está contenida en una carta - dirigida por Mr. Mechlejhon al General Henry, Gobernador Militar de Puerto Rico. Idéntica comunicación dirige el referido funcionario a los Lados. D. Antonio Alvarez Nava y D. Emilio García Cuervo, (49), de fecha 8 de abril de aquel año (50). El 17 de abril recibe el Secretario de Justicia Díaz Navarro las instrucciones del Gobernador Militar. Al día siguiente, responde el Lado. Díaz Navarro, su informe tiene el siguiente tenor:

"Honorable General, Comandante en Jefe del Departamento:

Señor:

Usted me ha endosado la carta del honorable Subsecretario de Guerra, en la cual se dice que usted tiene que anular la Orden del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en la cual se requiere a los abogados españoles la renuncia de su nacionalidad para poder practicar en la isla.

Debo manifestarle que esa Orden no fue emitida por el actual Secretario de Justicia, sino por el honorable General Brook (sic) por conducto de su predecesor.

El actual Secretario de Justicia, en su informe a su oficina el 17 del pasado febrero, argumentó que a los abogados españoles - no se les debe permitir la práctica de su profesión aquí, porque se oponía el Tratado de Paz firmado en París, pues esos abogados no deben de practicar como tampoco a los de cualquier otra nación extranjera.

El artículo noveno de ese Tratado de París dice: "Los súbditos españoles, naturales de la península residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente Tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando, en uno u otro caso, todos sus derechos de propiedad o de sus productos, y además tendrán el derecho a ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros..."

Hoy en cumplimiento con lo que se indica en la carga que usted me endosó, de manera que yo abroge la Orden dictada por mi predecesor, y de acuerdo a lo que se estipula en dicho Tratado de Paz, tengo el honor de proponer a usted que apruebe lo siguiente:

Procede entonces el Secretario de Justicia a recomendar la aprobación de una Orden Judicial, cuyo modelo incluye, limitando la práctica de los abogados españoles a un año. Obsérvese que en su informe el Lcdo. Díaz Navarro soslaya el Derecho puertorriqueño y sólo cita en apoyo de su tesis el derecho internacional. No parece que lo hace - por cuanto la legislación de Puerto Rico no favorece su contención. Al

citar solamente ese artículo del Tratado de París, se quiere dar categoría de extranjeros a los abogados españoles. Pero al hacerlo se vé obligado a no citar el Derecho puertorriqueño, porque como hemos visto ese cuerpo jurídico permitía la práctica de la abogacía a los extranjeros. Tampoco menciona la reciprocidad porque en España se permitía al letrado extranjero ejercer su profesión en los tribunales españoles. El 20 de abril el Secretario de Justicia envía al Gobernador Militar - el antes mencionado informe con la siguiente nota: "Respetuosamente devuelto al Comandante General con la siguiente Orden de manera que los abogados españoles puedan practicar su profesión en esta isla" (51). Obsérvese que en la nota no se dice que la práctica es por un año. El General Henry aprueba el Informe y la Gaceta de Puerto Rico de sábado 22 de abril de 1899 publica la siguiente Orden Judicial (52), cuyo número es el 111:

"En virtud de lo ordenado por el Departamento de la Guerra en Washington y de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de París, el Honorable Comandante en Jefe del Departamento aprueba lo siguiente:

1. Durante el término de un año a contar desde la fecha en que esta orden se publique en la "Gaceta Oficial" y sin que tengan derecho a desempeñar destinos públicos, los abogados españoles residentes hoy en esta isla podrán ejercer aquí su profesión - sin que sea necesario para ello que renuncien previamente a su nacionalidad"

En la sección segunda de la Orden hay una serie de exigencias y condiciones, algunas de ellas innecesarias y mortificantes para aboga-

dos que en 1899 llevaban muchos años admitidos (53). Por ejemplo, se les exige la presentación de títulos al Departamento de Justicia, "para probar su derecho a la práctica y ante los Tribunales para poder - abrir oficinas" y el prestar "juramento... de que han de guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos, ser fieles a las - instituciones por ella establecida en la nación americana y a las leyes aquí promulgadas y que se promulguen, reconociendo su soberanía sobre Puerto Rico y comprometiéndose a no hacer ni intentar nada contra esa soberanía ni contra el Gobierno Militar, aquí establecido o el que en adelante se establezca".

El efecto de la Orden Judicial Núm. 111 entre los abogados españoles fue de desazón y disgustos. No solamente por la imposición del - término de un año para finiquitar sus asuntos, o por el tono arrogante y las exigencias innecesarias, sino principalmente porque desde el 8 de abril tenían en su poder una comunicación oficial del "Acting Secretary of War" con la solución del problema y anulación de la Orden - de desaforo. El representante legal de los abogados españoles desaforados Mr. John G. Meyers, esq., visitó el 24 de abril al Ldo. Herminio Díaz Navarro en su despacho oficial (54). Allí el Secretario de Justicia le informó a Mr. Meyers, según éste mismo expone, "que el Departamento (de la Guerra) ha concedido sólo un año a los abogados españoles para que practiquen su profesión. Cuando se le enseñó al Secretario de Justicia la comunicación del Departamento de la Guerra, éste prometió emitir un Decreto conforme con estas instrucciones de 8 de abril. Hasta ahora, treinta días después de esa entrevista y ningún Decreto se ha publicado en la Gaceta Oficial" (55).

Mr. Meyers, escribe al Secretario de la Guerra sobre lo acontecido. En un párrafo de esta carta de 23 de mayo de 1899 dice: "Que el - Secretario de Justicia, señor Herminio Díaz, cambió completamente las instrucciones u órdenes, contenidas en su comunicación de 8 de abril, y que hizo publicar el siguiente Decreto en la Gaceta Oficial de 22 de abril" (56). Luego procede a citar la Orden Judicial Núm. 111. Narra - su visita al Secretario de Justicia y lo sucedido. Más adelante, reitera que al cabo de 30 días no se ha publicado nada sobre este asunto y que el mismo ha sido sometido al nuevo Gobernador Militar Davis el 22 de mayo. Termina con estas palabras: "al mismo tiempo debe enfatizarse que por las actuaciones del Secretario se les ha irrogado serios daños a los abogados españoles" (57). Como consecuencia de esto, el General Davis emite la Orden General Núm. 69 de 24 de mayo de 1899 (58), cuyo texto dispone que:

"Habiéndose concedido autorización por el Departamento de la - Guerra a los abogados españoles residentes aquí, para ejercer su profesión en la isla, rescindase por la presente la limitación de un año impuesta por el párrafo 1 de la Orden Judicial - de 18 de abril próximo pasado, publicada en el núm. 95 de la - "Gaceta Oficial", quedando garantizado el derecho de dichos abogados a ejercer su carrera sin limitación de tiempo".

Obsérvese que quedaron vigentes los demás párrafos de la referida Orden Judicial. El 20 de junio escribe el Lcdo. Antonio Alvarez Nava a Washington D. C. Le manifiesta al Secretario de la Guerra Mr. Root que: "Me han encomendado los abogados españoles residentes en esta ise

la el placer de expresar sus más sinceras gracias por la justa acción a su favor... " (59). Luego graciosamente le avisa de una reclamación que preparan llevar contra el Gobierno Insular (60)

En carta de 11 de julio, Mr. Meyers acusa privadamente al Lcdo. Díaz Navarro de incumplir órdenes.

"A pesar de que la autoridad del Secretario de la Guerra en -
Puerto Rico es ley absoluta, bajo las condiciones presentes, -
el Secretario de Justicia audazmente cambio o mejor, falsificó
las instrucciones emitidas por el Departamento de la Guerra, -
Más aún, no solamente cambió esta orden final y perentoria, si-
no que indujo al Gobernador Henry a firmar una Orden Judicial
falsa, como es evidente del Decreto publicado el 22 de abril, -
en el número 95 de la Gaceta Oficial de Puerto Rico. Cuando el
que suscribe, actuando como el representante de los abogados -
españoles, le conminó a publicar la verdadera Orden del Departa
mento de la Guerra en la Gaceta Oficial, el Secretario de Jus-
ticia no cumplió con esa solicitud " (61)

Luego Mr. Mayers declara: "Cuando finalmente el asunto fue puesto en conocimiento del Gobernador Davis, el Comandante del Departamento de Puerto Rico tomó acción pronta y equitativa, como se desprende del Decreto Núm. 69, publicado el 25 de mayo en la Gaceta Oficial, donde la firma del Secretario de Justicia no aparece" (62). En el siguiente párrafo se expresa así: "El anterior procedimiento no es la excepción sino la regla con el Secretario de Justicia y con la mayoría de sus com

pañeros políticos. De otra manera también es un hecho que todo patriota puertorriqueño, todo hombre de negocios español, extranjero o americano, en la isla de Puerto Rico, piensa que una de las condiciones indispensables para el verdadero bienestar de la isla y sus habitantes es poner norteamericanos en todas las posiciones de responsabilidad - hasta que un nuevo partido político surja de la presente generación joven, que desde el próximo octubre, será criada y educada en las escuelas públicas supervisadas por educadores norteamericanos" (63).

En cuanto a si el Lcdo. Díaz Navarro se enteró de estas imputaciones y las contestó, lo desconozco. Aparentemente por ser una comunicación confidencial nunca se enteró. Consigno pues una sola versión. Sabemos que al Lcdo. Díaz Navarro lo relevan de su cargo y eliminan la Secretaría de Justicia el 15 de julio de 1899. También estamos conscientes de su participación muy activa en contra de la "United States Provisisonal Court for the Department of Porto Rico" y su defensa a ultranza de la judicatura nacional puertorriqueña, causaron su relevo.

El Departamento de la Guerra soslaya lo referente al Lcdo. Díaz Navarro en su contestación a Mr. Meyers de fecha 9 de septiembre de 1899. La reclamación de los abogados españoles se presenta el 4 de diciembre de 1899 (64). En carta de diez pliegos, Mr. Meyers presenta la misma al Honorable Elihu Root. Una de las causas para la misma es: - "Han transcurrido seis meses y los abogados españoles se han convencido por la experiencia, de que no sólo un gran número de sus antiguos clientes han confiado sus asuntos a los abogados puertorriqueños, sino de que hay muy poca esperanza de que ninguno vuelva a sus antiguos asesores legales" (65). Luego añade: "Muchos españoles y puertorriqueños

están convencidos de que los casos argumentados por los abogados españoles, después de ocho meses de no practicar, no tendrán éxito en los Tribunales". Procede Mr. Meyers abogado de los letrados españoles, a presentar una reclamación por los daños sufridos por sus clientes. La contestación del Departamento de la Guerra no se hace esperar. El 27 de diciembre de 1899 Mr. Meyers recibe su respuesta. Muy seca y al punto: "En contestación tengo que informarle que las reclamaciones son por daños no liquidados por razón de acción de las autoridades militares de los Estados Unidos y que las mismas están fuera de la jurisdicción de este Departamento de la Guerra y bajo nuestra forma de Gobierno, deben ir ante el Congreso" (66)

Gobierno del General Guy V. Henry, 6 de diciembre de 1898 a 9 de mayo de 1899.

El Gobierno del General Brooke tiene una duración de un mes y seis días. El Departamento de la Guerra designa al Brigadier General Guy V. Henry, como Comandante del Departamento y Gobernador Militar de Puerto Rico. Al momento de su designación el nuevo incumbente se desempeñaba como encargado del Departamento de Ponce. El General Henry toma posesión de su destino el 6 de diciembre de 1898 (67). D. José G. del Valle nos describe al nuevo Gobernador en su libro, A través de diez años 1897-1907 de la siguiente manera: "El General Henry era hombre excesivamente impresionable y muy débil de carácter, circunstancias ambas que debían necesariamente conducirlo a la realización de grandísimos desaciertos. Bajo la influencia sugestiva del grupo radical (republicano),

y cegado a la vez por el espíritu de una americanización rápida y ab soluta, se convirtió en porta-estandarte de aquellos, dispuestos a - sacrificarlo todo a cambio de ventajas personales" (68).

El "programa de gobierno" del General Henry lo expuso en una car ta dirigida al Presidente del Consejo de Secretarios, D. Luis Muñoz - Rivera y los demás miembros del mismo, fechada el 7 de diciembre de - 1898. Dicha carta se publicó diez días después en la Gaceta de Puerto Rico (69). En el artículo 4 del referido mensaje se dice: "Cuando los tribunales civiles se manifestaren remisos en proceder contra bandidos y asesinos, las causas se éstos serán juzgadas por comisiones militares que he organizado al efecto. Los Alcaldes avisarán cuando ocurran estos casos, y los jefes militares remitirán los expedientes a este - cuartel militar, para que lo resuelvan las comisiones militares". En esa misma carta, artículo 6 se ordena la censura de prensa: "No se per mitirá a los periódicos la publicación de artículos en que se critiquen los actos de los que ejercen autoridad. Los periódicos que den a la luz tales artículos serán suspendidos, y si esto no diese el resultado apetecido, se acudirá a medios más enérgicos". La represión es la tónica del nuevo Gobierno.

El 25 de noviembre de 1898, Mr. Philkp C. Wanna, Cónsul de los Es tados Unidos en San Juan, escribe al Sr. Moore, Assistant Secretary of State en Washington, una carta oficial donde le informa sus opiniones sobre la situación de Puerto Rico y ofrece sus sugerencias. Esta comu nicación es interesante porque nos ilustra el pensamiento de la colo nia norteamericana en San Juan y los orígenes de los deseos de la trans culturación jurídica.

"Señor:

Tengo el honor de manifestar que la gente inteligente de esta isla espera el momento cuando los Estados Unidos extirpen el estilo de gobierno español con su maquinaria complicada, costosa y deficiente, la cual ha probado ser para ellos una carga. Un caballero puertorriqueño muy inteligente, de ascendencia española me decía el otro día: Lo mejor para esta isla es que todo lo español sea totalmente cambiado; la forma de gobierno española, el Derecho español, los Tribunales españoles, los métodos españoles de tributación, las costumbres españolas, el sistema de educación español de ignorancia entre los pobres, las supersticiones españolas y yo espero que también el idioma español sea cosa del pasado en esta isla".

En otra carta el mismo Cónsul informa sobre el Derecho que le conviene a Puerto Rico: "Esta isla no solamente necesita oficiales norteamericanos que administren el derecho sino que necesita leyes americanas. El gran escollo para una buena administración es que nuestros oficiales tienen que administrar las leyes que hicieron a España un fracaso por cuatrocientos años. Aún cuando nuestro Gobierno crea necesario continuar el gobierno militar, se le debe a estos la ventaja de tener buenas leyes americanas que administrar, haciendo que los puertorriqueños conozcan los principios de las leyes y el gobierno norteamericano y lo lleguen a apreciar". Comienza con éstas declaraciones los intentos de americanización jurídica.

Las Comisiones Militares.

Al día siguiente, 8 de diciembre, se emitió la Orden General Núm. 27 (70) que establece las Comisiones Militares (Military Commissions).

"Siendo evidente que los juzgados civiles debido a sus procedimientos lentos y excesivos trabajos no actúan con la rapidez necesaria contra los bandidos que están todavía cometiendo crímenes de incendio y asesinato en la isla, y no habiendo recaído ningún caso (71), cuando es necesario un escarmiento inmediato, se nombran Comisiones Militares para juzgar cuantos casos se traigan debidamente ante ellas".

Debo aclarar que este tribunal marcial no debe ser confundido - con la Comisión Militar que autorizó establecer el General Miles el 29 de julio de 1899, mediante circular y de acuerdo a las disposiciones marciales. La Comisión Militar "Miles" era para juzgar militares, auxiliares para-militares y civiles que cometieran delitos contra estos durante la guerra declarada y en el teatro de la misma. La Comisión Militar que ordena establecer el General Henry es de otra naturaleza. Creo ahora pertinente examinar el concepto jurídico de la "Military Commission". La sección 168 del Digest of Opinions of the Judge Advocate General of the Army (72) en vigor en 1898 nos informa que las Comisiones Militares ejercen jurisdicción sobre dos clases de "ofensas", ya sean cometidas por civiles o por personal militar. Estas son (1) - violaciones de las leyes de la guerra y (2) delitos sancionados por las leyes civiles, los cuales por razón de estar cerrados los tribu-

nales no pueden juzgarse. Estas dos clases de ofensas deben ser cometidas en el territorio enemigo durante su ocupación por el ejército y mientras permanezca bajo el gobierno militar o en una localidad que - esté fuera del territorio enemigo, pero en el cual se ha declarado la ley marcial por autoridades competentes. La Comisión Militar autorizada por el General Miles es la que se contempla para juzgar militares, auxiliares y personas que cometan delitos contra éstos en el territorio enemigo durante su ocupación por el ejército.

¿Cuál es el status de las Comisiones Militares autorizadas por el General Henry? ¿Cual es la situación de Puerto Rico? ¿Se ha declarado la ley marcial en la isla? ¿Están cerrados y sin funcionar los Tribunales de Puerto Rico?. El Protocolo de Paz de 12 de agosto de 1898 en - cuanto a la isla de Puerto Rico se refiere, detiene total e inmediatamente las operaciones de guerra entre los ejércitos de España y Estados Unidos. Las mismas tuvieron una extensión de 19 días escasos. En ningún momento de ese breve tiempo el comandante militar norteamericano General Nelson A. Miles se vió obligado a cerrar los tribunales de justicia que se encontraban en los pueblos y ciudades de su zona de influencia. Estos continuaron administrando justicia normalmente. La mayoría de los magistrados españoles renuncian voluntariamente por no prestar juramento a los Estados Unidos y perder su nacionalidad. Inmediatamente el General Miles designa puertorriqueños para sustituirles, ejemplo de ello es el nombramiento del Lcdo. Rosendo Matienzo Cintrón como Presidente de la Audiencia Criminal de Ponce (73). La vida diaria e institucional se normaliza, con los cambios y accidentes de rigor, en los pueblos y ciudades de la zona de influencia del ejército norteamericano desde el

12 de agosto de 1898 hasta el 18 de octubre de ese mismo año. No se declara la Ley marcial.

Comparemos la situación puertorriqueña con la del Archipiélago de las Filipinas. Allí el General norteamericano Wesley Merritt emite una Proclama el 14 de agosto de 1899 (74) que descontinúa los Tribunales de Justicia como entonces existían y los sustituye por tribunales militares, oficiales del Ejército sustituirán a los magistrados civiles. A pesar de que en ese momento continuarán en vigor las leyes civiles y penales siempre y cuando sean compatibles con los propósitos del Gobierno militar. Ocho días después se publica la Orden General Núm. 8 de 22 de agosto de 1898 (Serie de las Filipinas). Este decreto militar dispone que los Tribunales que permanecieron funcionando y sustituyendo a los antiguos no ejercerán jurisdicción criminal sobre los civiles, los cuales serán juzgados por las Comisiones Militares, Cortes del Preboste y Consejos de Guerra. De esta forma la jurisdicción criminal estará totalmente en manos de los foros militares. En agosto, septiembre y octubre vuelven a emitirse nuevas Ordenes Militares ampliando los - poderes y jurisdicción de los tribunales militares. No será hasta junio de 1899 en que se le devolverá a algunos tribunales ordinarios su jurisdicción criminal. Esto no significa que las Comisiones y otros - tribunales del Ejército y la Marina no continuarán juzgando civiles en todo el Archipiélago. Se le otorgó a estos organismos de justicia militar la potestad de continuar interviniendo en los delitos que ellos - entendieran pertenecían a su fuero. La razón para esta situación de excepción es la guerra que sostiene el patriota D. Emilio Aguinaldo, Presidente de la República Filipina en armas contra los Estados Unidos.

Tampoco la realidad puertorriqueña puede compararse con la situación de Nuevo México en 1846 (75). Esta provincia de México fue tomada por el Ejército norteamericano cesando entonces todo régimen de gobierno local mexicano. El General Kearney, Comandante del ejército de ocupación se proclamó Gobernador, preparó Códigos de leyes civiles y criminales, estableció un sistema completo de tribunales de justicia y designó funcionarios. Esta situación duró cinco años, otorgándosele luego - a Nuevo México la categoría de territorio. Ninguna de estas dos situaciones se asemeja a la realidad puertorriqueña.

¿Cuál es el status de las Comisiones Civiles establecidas por el General Henry? La referida Military Commission es para celebrar juicios a civiles puertorriqueños. Este foro marcial no está autorizado - por las disposiciones legales de la Ley de la guerra, ni por las opiniones del "Judge Advocate General of the Army" (76). La sección 1680 del "Digest of Opinion", antes citada no contempla ni autoriza la Comisión Militar que Henry creó por Orden General. Para poder establecer jurídicamente este organismo tienen que darse las siguientes condiciones: "que los civiles cometan delitos sancionados por las leyes de su comunidad, los cuales por razón de estar cerrados los tribunales civiles - ordinarios del lugar o sus funciones suspendidas no puedan juzgarse". En Puerto Rico los tribunales permanecieron abiertos y se gozaba de - paz con excepción del noroeste de la isla donde operaban en las montañas partidas sediciosas y cuadrillas. Dos días después de aprobarse la Orden General Núm. 27, antes mencionada, se firma en París el Tratado - de Paz. Aparentemente el General Henry se valió de la confusión existen

te para decretar la creación de estos "tribunales" militares. No creo que actuase sin información, pues estaba al tanto de lo que ocurría, tenía una división legal a sus órdenes y usaba del cable militar. La sección 1691 de las citadas Opiniones del "Judge Advocate General of the Army" dispone: que la jurisdicción de la Comisión Militar autorizada por la ley militar puede ser ejercitada hasta la fecha de un acuerdo de paz entre las partes hostiles o por la declaración de la autoridad competente de que se terminó el status de guerra. El mismo Colonel Winthrop escribió un libro considerado un clásico, me refiero a Military Law and Precedent cuya segunda edición es de 1896. Allí nos dice el autor: "Un estatuto no puede ser interpretado de manera tal que un ciudadano civil pueda ser legalmente puesto a disposición o ser accesible a la jurisdicción militar en tiempo de paz". (77)

La razón principal que nos ofrece el General Henry para crear estos organismos militares de excepción es la necesidad de dar un escarmiento inmediato a los "bandidos" que cometen delitos de asesinato e incendio. Asimismo, nos informa que "los juzgados civiles debido a sus procedimientos lentos y excesivos trabajos no actúan con la rapidez necesaria". (énfasis suplido). Examinemos ambos argumentos. Nos encontramos frente a un problema histórico e historiográfico puertorriqueño: las llamadas Partidas sediciosas (78). Las Partidas sediciosas eran guerrillas armadas de independentistas que funcionaban en los montes y campos de Arecibo, Lares, San Sebastián, Las Marías y Mayagüez. Una de ellas, la más popular y conocida, la Partida de Aguila Blanca proclamó la independencia política de Puerto Rico (79) e hizo la guerra continua a las tropas y convoyes norteamericanos y a

las haciendas y comerciantes españoles. La zona donde operaba ésta y otras guerrillas tenía una larga tradición revolucionaria. Su actividad fué intensa pero en términos generales inefectiva.

Debemos también tener presente que junto a estas partidas patrióticas operaban también bandas de foragidos que se vengaban de los abusos que recibieron de los hacendados españoles. También participaban delincuentes de derecho común sin otro móvil que el lucro personal. Para completar la perspectiva debemos tener en cuenta algunos factores: el momento anárquico que se vive, la ausencia de fuerzas del orden público, el odio de clase de muchos campesinos y obreros hacia los comerciantes y agricultores españoles y puertorriqueños, la tradición revolucionaria que se fermentaba en Puerto Rico desde hacía mucho tiempo.

Todos los informes militares que he examinado afrontan el problema de la misma manera. El más antiguo de los informes es una carta del General Brooke al Adjutant General of the Army, fechada el 30 de noviembre de 1898. Allí se manifiesta lo siguiente:

"Cuando el Protocolo se firmó nuestras tropas ocupaban la jurisdicción de Mayagüez y Guayama, patrullando todos los pueblos y villas y los puntos que eran necesarios para la preservación del orden. Según el proceso de evacuación continuaba, cada sitio del cual las tropas españolas se retiraban era ocupado por nuestras tropas, tan pronto como era practicable, sin embargo, las lluvias y los ríos nos hicieron tardar. Bandidos se aprovecharon de este período de transición para cometer de

predaciones, atrocidades y algunos asesinatos en el nor-oeste de la isla, en la vecindad de Arecibo, Lares, San Sebastián - y Las Marías. Alrededor de sesenta edificios de todas clases fueron incendiados y cometidos dos o tres homicidios. La mayoría de estos actos estaba dirigida en contra de propietarios españoles, y no hay duda que tiene su origen en viejas rencillas surgidas bajo un sistema de peonaje y opresión que era - poco menos que la peor de las esclavitudes; en pocas ocasiones en el fondo del problema lo que había eran animosidades políticas.

En poco tiempo nuestras tropas arreglaron la situación, matando a algunos líderes de las diferentes bandas y arrestaron en total sesenta de los peores elementos. Estos ahora son juzgados y sentenciados por los tribunales civiles, pero ha habido algún retraso en muchas localidades y ha sido necesario nombrar nuevos jueces y otro personal civil. Desde el 1 de noviembre - han cesado los incendios y otros delitos en ese sector del país y no ha habido ninguno en el resto de la isla, fuera de los ordinarios en toda comunidad".

Luego vemos como cambia la visión que se tiene de la situación y los informes sobre la misma. El 24 de enero de 1899 testifica el Mayor Charles L. Cooper ante el Comisionado especial Dr. Carroll. Repite que se cometían muchos delitos contra propietarios, que los casos se acumulaban en los tribunales civiles quienes eran impotentes o indiferentes ante los mismos. Que ante la lentitud de los procesos

el General Henry constituyó una comisión militar y que impuso una sentencia de prisión en las cárceles de los Estados Unidos. Esto es estimuló a los tribunales civiles como era la intención del ejército. Luego el Mayor Cooper sostiene que las casos ante las Comisiones Mi litares se juzgaron según la ley internacional que fue declarada por Liebers en "1862 o 1863". Continúa este oficial declarando sobre - métodos de represión necesarios en la isla. En su informe final, el Gobernador Militar Davis recapitula este asunto y vuelve a repetir la teoría de la inutilidad de los Tribunales civiles de Puerto Rico para ver estos procesos. Justificando la acción de su predecesor - ahora sostiene que la evidencia revela "bandas bien organizadas de merodeadores" quienes tenían el campo aterrorizado con sus actos de vandalismo y atrocidades. Luego narra el General Davis que los acusados y amigos intentaron por todos los medios que sus casos se tras ladasen a los tribunales civiles y que estos esfuerzos tenían la sim patía y ayuda de altas autoridades civiles. Finaliza elogiando a las Comisiones Militares gracias a las cuales terminó el vandalismo. - Vuelvo a repetir que los Tribunales civiles de Puerto Rico estaban funcionando normalmente y que no fueron cerrados o inhabilitados en su jurisdicción criminal.

En cuanto a la lentitud de los procedimientos criminales de los Tribunales civiles, esta no es razón válida para sacar de ese foro a los supuestos violadores del orden público, quienes eran civiles puertorriqueños. Si estos hubieran atacado al Ejército de Estados - Unidos -cosa que no sabemos- la ley militar vigente disponía que les juzgasen las Comisiones Militares del General Miles creadas el 29 -

de julio de 1898 y convalidadas por el artículo VI de la Orden General Núm. 1 del General Brooke de 18 de octubre de 1898. La misma dispone que:

"VI. En ningún caso podrán los Tribunales de Puerto Rico ejercer jurisdicción sobre crímenes o delitos cometidos por oficiales o soldados pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos, o por personas que dependan o se hallen al servicio de dicho ejército; como tampoco sobre ningún crimen o delito cometido contra cualquiera de estos por vecinos o transeuntes del territorio. En tales casos, la jurisdicción compete a los consejos de guerra o comisiones militares"

Quizás el Gobernador Militar no desea admitir pública y jurídicamente que las tropas de ocupación eran objeto de continuo ataque por insurrectos, no lo sabemos. Los Tribunales civiles ordinarios tienen jurisdicción y la ejercían, al quitársela y someter a civiles puertorriqueños a las Military Commissions, el General Henry comete un acto arbitrario, violenta el Derecho Militar, el Derecho Internacional y los derechos, privilegios e inmunidades que tienen reconocidos los civiles puertorriqueños, aún en esta situación. Halleck en su obra tan citada por Mr. Magoon, International Law (80):

"There can be no doubt that when the war ceases the inhabitants of the ceded territory cease to be governed by the code of war. Although the government of military occupation may continue, the rules of its authority are essentially changed, it no longer administer the laws of war, but those of peace.

The governed are no longer subject to the severity of the - code military, but are remitted to their rights, privileges and immunities under the code civil".

Aún cuando el Gobierno militar de ocupación continúe, cambia esencialmente, no administra las leyes de la guerra, sino las de la paz. Los gobernados no están sujetos ya al severo código militar, si no que se les devuelven sus derechos, privilegios e inmunidades bajo las leyes civiles. Además de violar las disposiciones del Derecho Internacional de la época, según expuestas por Halleck, el General Henry y el Gobierno Militar violan lo decidido por la célebre sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos titulada Ex Parte Milligan (81) decidida en 1866, treinta y dos años antes, y que establece una doctrina antonces y ahora en vigor:

"Si en una invasión extranjera o guerra civil, los Tribunales están realmente cerrados, entonces, en el teatro de operaciones militares activas, donde la guerra de veras predomina, y donde no queda ningún poder sino el militar, se permite gobernar por la ley marcial hasta que las leyes tengan curso libre. La ley marcial nunca puede existir cuando los tribunales están abiertos, y en el ejercicio propio y no obstruido de su jurisdicción".

Esto es, que se establece la doctrina del "open court". Mr. — Milligan, un civil no podía ser enjuiciado por una Military Comission mientras los Tribunales permanecieran abiertos. La única forma en — que se puede juzgar un civil por tribunales militares es en el teatro

de la guerra donde los juzgados civiles no estén funcionando, declarando la Ley marcial porque se está en guerra activa e inmediata. - Debe tenerse en cuenta que la Orden General Núm. 27 que establece la Comisión Militar para juzgar civiles que cometan delitos penados por el Código Penal de Puerto Rico, en vigor, tiene fecha de 8 de diciembre de 1898. Dos días después, el 10 de diciembre se firmó en París el Tratado de Paz y que desde el 12 de agosto de ese año, cuatro meses antes, se había firmado el Protocolo de Paz.

Mr. William Dinwin dice en su obra, Puerto Rico, its conditions and possibilities (82) al tribunal militar "el peor ejemplo de poder despótico". El sacerdote jesuita Edward J. Berbusse compara estos tribunales con las cortes del "Star Chamber" por lo agresivas que le parecen.

La condición jurídica de las Comisiones Militares continúa preocupando a las autoridades gubernamentales. El 16 de febrero de 1899 el asesor jurídico militar del General Henry (83) escribe una carta sobre el asunto al Adjutant General of Porto Rico:

" En vista de la ratificación del Tratado de Paz entre los Estados Unidos y España, tengo el honor de llamar su atención al hecho de que actualmente hay pendientes ante las Comisiones Militares de este Departamento un gran número de casos - bajo acusaciones de asesinato, incendio, robo, hurto y otros delitos graves. Estas ofensas fueron cometidas (y siguen cometiéndose) por bandidos en varias partes de la isla. Actualmente hay tres Comisiones Militares juzgando estos casos, de

los cuales se dispone lo más rápido posible. Sin embargo, - quedará un número considerable de ellos después de la proclamación de la paz y como pueden surgir otros en el futuro y - será necesario recurrir a los tribunales militares, tengo que recomendar, que en ausencia de legislación por el Congreso, se solicite del Presidente que se proclame la Ley Marcial -- siempre que se estime necesario. La jurisdicción de las Comisiones creadas al amparo de la Ley de la Guerra (como son las nuestras) solamente puede ser ejercitada hasta el momento en que termine el status de guerra. Los casos pendientes se tienen que abandonar" (84)

La referida carta fue enviada al Departamento de la Guerra. Este ministerio no tomó acción ni contestó. Dos días antes de que el Presidente proclamara el Tratado de Paz -el 12 de abril- se envió un cablegrama al Judge Advocate General en Washington solicitando - instrucciones. A ésta y la anterior consulta respondió el Judge Advocate General en Washington:

"El asunto de la legalidad de la proclamación de la Ley marcial y el nombramiento de Comisiones Militares en Puerto Rico después de la declaración de paz es uno de gran importancia. La situación allí es una de ocupación hostil o gobierno militar, como ha sido llamada (opinión del Juez Presidente Chase en la sentencia de Milligan, 4 Wall, 142) y no hay duda de la autoridad para designar los referidos organismos en la actualidad. Pero con la declaración de paz surge una situación diferente... La regla de ocupación hostil no puede ser puesta

en vigor. El tratado de paz sostiene que los tribunales ordinarios de lo criminal continuarán existiendo, pero si no se puede descansar en ellos para penalizar los delitos, parece - que el Presidente tendría el poder de designar un Tribunal - provisional de jurisdicción competente.." (85).

La interpretación que ofrece el Judge Advocate General del War Department sobre el status del Gobierno Militar difiere totalmente de lo que el asesor jurídico del mismo ministerio Mr. Magoon expone en su extenso y razonado estudio: The power functions, and duties of the military government maintained by the United States in the islands lately ceded and relinquised by the government of Spain. Asimismo, - se cita la opinión concurrente minoritaria del Juez Presidente Mr. Chase en la sentencia de Ex Parte Milligan y no la opinión mayoritaria que estipula y establece todo lo contrario a lo que ahora sostiene el Judge Advocate General. Solo vuelvo a citar de la opinión mayoritaria que es la que pauta la posición del Tribunal. Allí se dijo por voz del Juez Davis: "La ley o reglas marcial nunca puede existir donde los tribunales están abiertos y en el ejercicio propio y no obstruido de su jurisdicción. Solamente se le confina a la localidad actual de la guerra" (86). Y en Puerto Rico, los tribunales - permanecen abiertos, no hay guerra ni se ha declarado la ley marcial.

Las Comisiones Militares funcionan durante seis meses y diez y seis días, desde el 8 de diciembre de 1899 hasta el 24 de mayo de 1899, cuando son descontinuadas por la Orden General Núm. 67 de aquella fecha. La misma dispone en su primer artículo que: "Los jueces

de instrucción y Cortes de Justicia de la isla conocerán en adelante de todas las causas criminales hoy pendientes de fallo ante las Comisiones Militares, que a su jurisdicción traspasase este Cuartel General por conducto de la Secretaría de Justicia".

La siguiente es la estadística de los juicios celebrados por - las Comisiones Militares (Military Commissions) (87).

| | |
|-----------------|----|
| "Casos Juzgados | 72 |
| Sentenciados | 36 |
| No culpable | 35 |
| Nolle Prosequi | 1 |

Recapitulación por sentencias

| | |
|--|---|
| 1. Ataque con intención de matar, robo y extorsión | 1 |
| 2. Incendio, amenazas de matar y crueldad de animales | 4 |
| 3. Incendio, amenazas de asesinato, incitar a otros a cometer delitos | 1 |
| 4. Asociación con bandas de malhechores y portación de armas ilegalmente | 1 |
| 5. Intento de ataque con intención de matar | 2 |
| 6. Acometimiento y agresión con intención de matar | 1 |
| 7. Hurto | 3 |
| 8. Conspirar para chantagear | 2 |
| 9. Solicitar dinero ilegalmente, cómplice de robo | 1 |
| 10. Ataque con intencion de cometer asesinato y robo | 2 |
| 11. Escalamiento | 3 |
| 12. Asesinato | 1 |

| | |
|--|-----|
| 13. Robo y asalto con intención de cometer daño físico | 4 |
| 14. Robo | 5 |
| 15. Ratería | 2 |
| 16. Transgresión en propiedad del gobierno | 1 " |

La Admisión de los abogados norteamericanos

Después del establecimiento del Gobierno Militar de los Estados Unidos en Puerto Rico el 18 de octubre de 1898, comenzó la inmigración a la isla de muchos ciudadanos norteamericanos. Unos venían a establecerse en el comercio de San Juan y otros pueblos. Ejemplo de ello son los innumerables anuncios en las páginas de los diarios del país. El favorito de los comerciantes estadounidenses era The San Juan News (88). En las columnas de este agresivo diario se leen anuncios tras anuncios en idioma inglés ofreciendo productos norteamericanos o del país. Todos les añaden la coletilla "american". Así, -- "American Barber shop"; "American Cigar Store"; "American store", -- para distinguirlos de los puertorriqueños y atraer al público, así -- comienza el mito de que si es americano es superior (89). Otros inmigrantes norteamericanos llegan para establecer oficinas de servicios. Tales las "American doctors"; "American dentist" y "American lawyers" que entonces florecieron. Sus anuncios abundan en la prensa:

"Horton y Cornwell

Abogados americanos

San Juan y Mayagüez

"Francis H. Dexter

Attorney at Law

Abogado americano

San Juan, Puerto Rico

A veces, un profesional norteamericano se asocia con uno puertorriqueño. Ejemplo de esto es el anuncio de "Landrón y Smith, Porto Rican and American Lawyers". Era la sociedad profesional del Ldo. Rafael López Landrón y Mr. Herbert E. Smith. Otras veces se destacaba en la prensa que el profesional había efectuado sus estudios en Estados Unidos. Al respecto The San Juan News publica una noticia donde se hace esta afirmación: "... dice que es el primer puertorriqueño que fué a Puerto Rico con un diploma de abogado de Universidad Americana... y que es el primer abogado americano en ser admitido a las Cortes españolas de Puerto Rico" (90).

También venían a la isla pastores religiosos o ministros de la iglesia protestante, desconocedores en este momento de la situación, costumbres y cultura de los puertorriqueños. Algunos obran sin tacto ni respeto a la forma de ser del pueblo de Puerto Rico, causando situaciones desagradables, irritantes y a veces ridículas. El caso de un reverendo de nombre Reverend Anderson y otro llamado Reverend Fernando. En doce de noviembre de 1898 este ministro comenzó a cantar y predicar en inglés en la plaza pública de San Juan. Pronto, innumerables curiosos se congregaron y al terminar el Rev. Anderson, D. Eduardo Neuman Gandía que estaba entre los presentes intervino y manifestó que los puertorriqueños eran un pueblo suficientemente civilizado, que esas manifestaciones eran ridículas y que cada uno de los presentes estaba capacitado para saber lo que le convenía. La muchedumbre aplaudió a Neuman Gandía y dos soldados le llevaron escoltado hasta un campamento militar. La muchedumbre se reunió al frente del mismo y protestó de esta acción saliendo poco después Neuman

gandía en libertad, siendo aplaudido por la multitud que luego se dispersó. Después de éste incidente el orador sagrado obtuvo un permiso de predicar pero no lo hizo más en las plazas públicas (91).

Muchos ciudadanos norteamericanos creían que Cuba y Puerto Rico eran lugares propicios para hacer una fortuna rápida y fácil. En términos generales las instrumentalidades militares y gubernativas desalentaban a esos "caza fortunas" (92). Entonces se editaban en Estados Unidos numerosas guías para personas interesadas en Puerto Rico y las mismas se vendían mucho: e.g., American Colonial Handbook: facts and figures about Porto Rico, Cuba and Hawaii (93); Our Island Empire, A Handbook of Cuba, Porto Rico, Hawaii and the Philippine Islands (94) Everything about Porto Rico (95), todas de 1899. Tan temprano como el 5 de diciembre de 1898 el diario La Democracia criticaba acremente en un editorial a los nuevos "carpet-baggers" que llegaban a San Juan y a otras ciudades de la isla. Calificaba a éstos "de una nube de aventureros quienes sin duda creen que Puerto Rico estaba abierto para la conquista". Días después, en agria polémica con el órgano periodístico de los intereses norteamericanos, The San Juan News, el diario puertorriqueño La Correspondencia de Puerto Rico manifestaba editorialmente "Nosotros los puertorriqueños respetuosos de la ley tenemos un mejor derecho a quedarnos en esta tierra que esos aventureros quienes vienen aquí sedientos de riquezas" (96).

Por esta época, se suscitan innumerables comunicaciones al Departamento de la Guerra y otros ministerios, solicitando informes sobre Puerto Rico con el propósito de embarcarse a la isla y comenzar una nueva vida. El referido departamento gubernamental usualmente contes-

taba desalentando las peticiones. Se les explicaba las condiciones - de la sociedad puertorriqueña y les informaba que contrario a la creencia popular de que era muy fácil hacer fortuna en Puerto Rico, había que trabajar muy duro para tener un decoroso medio de vida. Se llegó a exigir que los inmigrantes de cierta clase tuvieran el boleto de - barco de regreso para evitar los problemas que los iniciales inmigrantes tuvieron y que los gobernantes militares se vieron obligados a - resolver.

Poco tiempo después de inaugurado el Gobierno Militar de los Estados Unidos en San Juan comenzaron a llegar a la isla abogados norteamericanos deseosos de practicar su profesión. La totalidad de ellos desconocían el idioma español y el Derecho puertorriqueño. Al intentar practicar la abogacía el Lcdo. Juan Hernández López rehusó el permisó. Sobre este particular manifiesta Mr. Francis H. Dexter (97), - quien era un abogado norteamericano y representante y Agente de la - Cuban and Pan-American Express Company en Puerto Rico, el 10 de febrero de 1899: "Poco después de la ocupación de la capital de esta isla por las fuerzas norteamericanas un grupo de inteligentes abogados de buena reputación vinieron aquí con la idea de vivir aquí y de practicar su profesión. Hasta donde yo he podido saber ninguno de estos caballeros hablaba el idioma español ni conocía las leyes y los códigos de Puerto Rico" (98).

Uno de los abogados, Mr. John M. Keldy (99) inconforme con la - decisión del Secretario de Justicia puertorriqueño, presentó una Ins-tancia al Gobernador Gen. Guy V. Henry. El asunto pasó al Lcdo. Juan Hernández López para su opinión y dictamen. El Informe del referido

Secretario de Justicia reza así:

"Este asunto es de verdadera importancia. Nosotros tenemos un Código Civil que regula todas las relaciones de la vida privada; una Ley Hipotecaria, que se ocupa de las garantías que se constituyen sobre los bienes inmuebles; un Código de Comercio que trata de la vida mercantil; una Ley del Notariado por la que se rige esta carrera especial y en la que se indican las formas y solemnidades que deben guardarse en el otorgamiento de las escrituras; un Código Penal que reprime y castiga los delitos; una Ley de Enjuiciamiento Civil que señala el modo de tramitar las reclamaciones a pleitos civiles; una Ley de Enjuiciamiento Criminal que prescribe el modo de instruir los procesos y de fallarlos; una Ley sobre los aprovechamientos de aguas públicas; otra Ley sobre expropiación forzosa cuando se trata de hacer obras de utilidad pública; otra Ley sobre el registro de los actos de la vida civil, como nacimientos, casamientos y defunciones; una Ley de organización y funcionamiento de los Tribunales de Justicia y otras más de menos importancia. Todo ese conjunto de leyes que constituyen nuestra vida jurídica está escrito en idioma español que es el que habla la mayor parte de los habitantes del país. La profesión de abogado no es como la medicina que es universal en todas partes. Las leyes varían según el país en que rigen. Y un abogado necesita conocer las del territorio en que piensa ejercer su profesión y necesita conocer el idioma que en ese territorio se habla porque de otro modo podría comprometer los intereses que

le fuesen confiados y no le sería posible entenderse con los clientes ni hacerse entender de los tribunales. Por ello a mi juicio para permitírsele a un abogado americano el ejercer su profesión en Puerto Rico deberá exigírsele: 1º.- La presentación del título que le haya sido librado en los Estados Unidos 2º.- Que un exámen hecho ante la Corte Suprema de Justicia de muestre que conoce nuestras leyes y hablan nuestro idioma y - 3º.- Que aprobados que sean en ese examen se inscriban en el Colegio de Abogados" (100).

Este informe fue estudiado por Gobernador Militar y basándose - en el mismo el General Henry rehusó permitir que los abogados norteamericanos fueran admitidos a la práctica de la abogacía en Puerto Rico a menos que previamente aprobasen un examen de reválida (101). A pesar de esta decisión los abogados norteamericanos continuaban tratando de entrar al foro puertorriqueño ejerciendo toda la influencia que podían. El 12 de enero de 1899 el Gobernador Ge. Henry decide in formar de la situación al "Adjutant General of the Army en Washington D.C: (102).

Señor:

Tengo el honor de informar de que recibo constantemente solicitudes de abogados americanos para practicar ante los tri bunales de esta isla, pero a menos que aprueben el examen requerido por las leyes españolas en vigor hasta la ratificación del Tratado de paz, cuando se presume que el Congreso pasará las leyes necesarias, soy de opinión que aquellos deben impedírseles la práctica, excepto en sociedad con un abogado que

hable español. Aún cuando se les admita a la práctica no entiendo como pueden comparecer ante los tribunales, cuyos procedimientos se conducen por el presente necesariamente en lenguaje español. Hago este informe de manera que prepare la legislación necesaria sobre la materia"

Obsérvese que el Gobernador Militar continúa respaldando la opinión y política públicas recomendadas por el Secretario de justicia Hernández López. Sin embargo, el General Henry la matiza cuando manifiesta: ".... excepto en sociedad con un abogado que hable español.." Asimismo, comete un error de interpretación al manifestar que las leyes en vigor exigían un exámen de reválida, ésta no era la realidad como bien sabemos, sino la opinión del Secretario de Justicia con referencia a los extranjeros. La carta oficial del Gobernador Henry es recibida en la "Custom and Insular Division" del Departamento de la Guerra el 24 de enero de 1899 (103). El Judge Advocate General (104) Mr. Liebers contesta el 31 de enero lo siguiente:

"Respetuosamente devuelto al Secretario de la Guerra con la recomendación de que se le informe a Henry de que tiene autoridad (bajo las condiciones existentes) para hacer y ejecutar reglamentos con referencia a los abogados norteamericanos que practiquen en los Tribunales de Puerto Rico".

El 2 de febrero el "Assistant Secretary of War" autoriza al Gobernador Militar a adoptar los reglamentos que crea convenientes informando de ello al Departamento de la Guerra (105). Entonces el Gobernador General consulta y emite una directriz (106) con relación a

los abogados norteamericanos que desean ejercer la profesión de abogado en Puerto Rico.

"Como se ha demostrado, no considero que se admitan los abogados norteamericanos excepto en los términos explicados. Sólomente es una clase inferior la que está tratádo de ser admitida y yo no aprobaré eso. Esa gente hace más daño que bien a la isla"

Guy V. Henry

El 6 de febrero de 1899 renuncia el Secretario de Justicia Ldo. Hernández López por causa de una aguda crisis política. El nuevo ministro Ldo. Herminio Díaz Navarro, ratifica en su totalidad el Informe de su antecesor inmediato sobre la admisión de abogados norteamericanos. La prensa de Estados Unidos informa sobre el asunto. Entonces Puerto Rico era objeto de constantes reportajes periodísticos en la prensa norteamericana. Ejemplos de artículos en revista son: "Our new possessions and the interests they are exciting"; (107) "Tat offices going to incompetent Americans" (108); "ILL feeding towards Americans" (109).

Los abogados norteamericanos interesados escriben al Departamento de la Guerra inquiriendo sobre los requisitos para tomar el examen de reválida y solicitando copias de reglamentos. Carta típica es la siguiente: (110) "Señor: He leído en el Star de día 2 que los abogados que deseen practicar en los tribunales de Puerto Rico se les requiere aprobar un examen y cumplir los reglamentos establecidos por las leyes que reglamentan la práctica de la abogacía ante los tribunales, deseo cumplir esos requisitos de las leyes españolas en vigor en Puerto Rico, solicito que se me envíe copia de las mismas para mi

información". Firma la carta Mr. E. G. Farrell, abogado de Washington D.C. La referida comunicación y otras como esta fueron enviadas al General Henry el 4 de marzo de 1899. En la carta de trámite al Gobernador Militar Henry se dice:

"
Desde que aprobamos la recomendación del Comandante General - requiriendo el cumplimiento de las leyes españolas que reglamentan la práctica de la profesión de abogado, el Departamento de la Guerra está recibiendo constantemente comunicaciones solicitando información sobre el tenor de esos requisitos. Se solicita que se envíe un informe completo sobre este asunto a la brevedad posible" (111)

Inmediatamente que se recibió la carta antes mencionada, se refirió al Secretario de Justicia de Puerto Rico para informe. El 23 - de marzo de 1899 el Gobernador Militar Henry remitía al Secretario de la Guerra la consulta del Secretario de Justicia puertorriqueño (112). En la misma el Ldo. Herminio Díaz Navarro reproducía la opinión anterior del Ldo. Hernández López, y terminaba de esta manera: "Ese fué el informe de mi antecesor y estando yo conforme en un todo con el - mismo, tengo el honor de reproducirlo" (113). En el momento en que me refiero, primeros seis meses de 1899, no practicaban en la isla casi ningún abogado norteamericano. La razón para ello nos la ofrece Mr. Francis H. Dexter: (114)

"A mi juicio no existen condiciones que justifiquen las esperanzas de los abogados norteamericanos de practicar en los tri

bunales de Puerto Rico. De acuerdo con la Orden General Núm. 1, emitida por el General Brooke al ocupar San Juan las fuerzas norteamericanas, las leyes en vigor que no eran inconsistentes con las instituciones norteamericanas o que no fuesen abrogadas por órdenes del Gobierno Militar quedaron en vigor, hasta este momento, ninguna orden ha sido emitida cambiando las leyes de Puerto Rico acerca del procedimiento judicial o la reglamentación de la práctica de la abogacía ante los tribunales".

Los próximos seis meses del año 1899 traerán cambios en el panorama que hemos trazado. El General Henry ya no es Gobernador Militar habiendo sido relevado el 9 de mayo de 1899, sucediéndole el General George W. Davis. Escasamente 21 días después se inaugurará la "United States Provisional Court". Como sabemos su creación y vida institucional encontró la oposición de la prensa, con excepción del órgano del partido Republicano, El País y The San Juan News, portavoz de los intereses norteamericanos en Puerto Rico. Asimismo la contra de la gran mayoría de los abogados y de la sociedad puertorriqueña. La tónica de este foro privilegiado y de excepción lo ofrece el Mayor Sharpe al manifestar: "La instalación de la alta Corte Federal es el paso de mas trascendencia dado en el país en su camino de americanización". Alrededor de ese foro provisional en Puerto Rico cerrarán filas los abogados norteamericanos. Allí serán admitidos y practicarán todos los primeros y originales abogados estadounidenses que continúan llegando a la isla. Ahora no tienen que sufrir un exámen de -

reválida por la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico, pues eran admitidos por el novel tribunal. En ese foro judicial de los Estados Unidos practican los abogados Boerman, Cornwell, Abbott, Dexter, -- Smith, Mott, Paine, Meyers, Thompson, Leake, Anderson, Howe, Linhart, Brown y Robbins. Luego el Tribunal federal provisional servirá como puente para que algunos abogados admitidos allí practiquen en los Tribunales de Puerto Rico; también puertorriqueños se beneficiaron de - esta situación (115)

El 9 de agosto de 1899 la United States Insular Commission recomendaba en su informe provisional, único que se publica, lo siguiente:

"Abogados

Cualquier persona de buen carácter y moral que presente a cualquier tribunal de récord un certificado de admisión al foro, por un tribunal de los Estados Unidos o los tribunales de cualquier Estado de la Unión, o de las autoridades apropiadas de otros países, tendrá derecho a practicar la abogacía en los tribunales de Puerto Rico" (116)

El Informe de esta Comisión está influenciado por los abogados norteamericanos que entonces practicaban en San Juan. La recomendación de la Insular Commission difiere totalmente de la política pública o directriz establecida por el Gen. Henry en febrero. Sin embargo a las recomendaciones de esta comisión no se les prestará la menor atención, a pesar de la reiterada insistencia de sus miembros. Será la Junta Judicial la que dictará la pauta definitiva, durante este período y que estará vigente algunos años, sobre la reglamentación y admi-

si3n de abogados en Puerto Rico. Este organismo cuya mayoría de miembros responden a la ideología o teoría de que es necesario suprimir las instituciones hispano-puertorriqueñas y establecer las norteamericanas, es decir, americanizar a los puertorriqueños recomienda la Orden General Núm. 134 de 31 de agosto de 1899. La misma reglamenta la abogacía y suprime la profesión de Procurador. El título de abogado se tiene que obtener en alguna Universidad de los Estados Unidos prohibiéndose cursar la carrera de Derecho en España o Cuba. Sin embargo, la Junta Judicial hace una excepción: "Constituirá asimismo, título suficiente para ajeroer la profesión de abogado una certificación de haber sido admitido a postular ante la Corte Suprema de Estados Unidos". Excepción, por cuanto más adelante en la sección VII de la Orden General se dispone: "Los abogados que posean títulos expedidos por los tribunales de los diversos Estados o territorios de la Unión Americana podrán ejercer en esta isla de Puerto Rico, previo examen ante el Tribunal Supremo, que demuestre a satisfacción de este, que conocen suficientemente las leyes vigentes en el país". (Enfasis suplido". Quedó subsistente, con una excepción, la medida o directriz del General Henry con relación a la admisión de abogados al foro puertorriqueño. Obsérvese que no dice nada sobre el requisito de tener conocimiento del idioma español.

Algunos años después, la referida Orden General es usada por estudiantes inescrupulosos para tener fácil acceso a la abogacía. En su "Informe Anual del Attorney General de los Estados Unidos" (117) de 1 de noviembre de 1902, Mr. James S. Harlan, nos ilustra de lo que acontece al amparo de aquella medida.

"Según una orden general militar que tiene fuerza de ley hasta que sea modificada por la Asamblea Legislativa, la posesión de un diploma emitido por una escuela de derecho de los Estados era suficiente para dar derecho al poseedor del mismo a la admisión del ejercicio de la abogacía en los varios tribunales de la isla. La posesión de tal diploma emitido por una Universidad española con anterioridad al cambio de soberanía era también suficiente. Parece sin embargo existir una desigualdad manifiesta en el curso de los estudios requeridos en las escuelas de derecho españolas y por algunas de las escuelas de derecho americanas. Las anteriores, según se me ha informado, generalmente conceden un diploma sólo después de un curso de preparación que se extiende por un número de años; mientras que algunas escuelas de derecho americanas se dice que han concedido diplomas después de un curso de estudios por un período de menos de un año. Se me ha informado que varios jóvenes puertorriqueños, después de una visita a los Estados Unidos de menos de doce meses, han regresado a la isla con diplomas extendidos por escuelas de derecho americanas, no obstante que ellos no sabían hablar, leer ni escribir el idioma inglés. Algunos de esos diplomas fueron aceptados en cumplimiento de la orden militar a que me he referido antes de que este asunto llamase la atención general. Por legislación subsecuente se dió al Tribunal Supremo de la isla autoridad plena para regular la materia.....

La admisión de abogados puertorriqueños al foro de la United States Provisisonal Court se regula por la Orden General Núm. 88 de 1899. En la sección XIV se dispone que: "Los abogados de Puerto Rico serán admitidos a ejercer en la Corte Provisional, mediante la presentación de un certificado firmado por el Presidente de la Corte Suprema, en que consten la posición profesional que ocupan" (118) Con relación a los abogados norteamericanos esta detallada Orden General no menciona nada. Sin embargo, en la sección IV establece que: "Los jueces de la Corte Provisional ejercían las mismas atribuciones que las de las Cortes de Circuito o Distrito de los Estados Unidos". Y entre estas se encuentra la admisión al foro federal.

Una de las quejas de los abogados norteamericanos de Puerto Rico era que como no sabían el idioma español les era imposible conocer los textos jurídicos, legislación y Códigos puertorriqueños. Para el verano de 1899 el Departamento de la Guerra de Estados Unidos comienza a traducir y publicar los más importantes de dichos textos La razón para ello es la siguiente: "El propósito fue hacerlos asequibles a aquellos que únicamente entienden el idioma inglés".

No debe de perderse de vista que la presencia de estos abogados norteamericanos responde también a presiones y situaciones de orden económico y financiero. Las grandes empresas de Estados Unidos comienzan a tomar posiciones en los mercados isleños y a establecer sucursales y oficinas en Puerto Rico. Recuérdese que Puerto Rico y Cuba tenían intensas relaciones mercantiles con casas norteamericanas de comercio antes de 1898. Ahora con el problema político resuelto a su favor las grandes empresas vendrán a la isla y usualmente -

usarán abogados norteamericanos. También contratarán letrados puertorriqueños por razones que ahora no es del caso exponer. Asimismo, esas grandes corporaciones y sus abogados ejercerán su gran influencia en los centros de poder de Washington para la permanencia, desarrollo y ampliación jurisdiccional de la United States Provisisonal Court y luego su sucesora la United States District Court por the Department of Porto Rico. Su desconfianza en los tribunales puertorriqueños será tradicional y su influencia en las reformas legales y constitucionales será grande.

La crisis político-institucional de febrero de 1899.

El General Henry, Gobernador Militar, citó a la sede del Gobierno, La Fortaleza, una reunión o asamblea de delegados de los pueblos de la isla; sus ayudantes y el Consejo de Secretarios. Los propósitos de dicha Asamblea según su presidente, era conocer y discutir los deseos y necesidades de los pueblos y sus habitantes. El Gobernador Militar hizo claro que él conduciría los trabajos. En su discurso inaugural el 19 de diciembre de 1898, el General Henry manifestó: (119)

"Señores:

Aquí no hay autonomía, ni gobierno insular. La única autonomía es la suma de libertad de acción que tenga a bien conceder el Gobierno Militar. No existe, digo, Gobierno Insular; el único gobierno existente, hoy por hoy, es el militar, auxiliado por un Gabinete de funcionarios o ciudadanos que -

aquél tenga por conveniencia llamar a su lado. Estos podrían - ser sustituidos por oficiales del ejército, lo mismo que los - alcaldes, pero tal determinación no se considera de necesidad"

.....

Luego intervinieron los Secretarios. Cuando le tocó el turno al Ldo. Manuel F. Rossey (120) pidió la abolición del Consejo de Secretarías; la creación de tribunales norteamericanos y supresión de los "españoles". Le contestó el Gobernador Militar manifestando que consideraba impropio de la ocasión tales solicitudes. Las relaciones entre el Gobernador Militar y los Secretarios del Gabinete se iban a deteriorar en las semanas siguientes. La primera situación tirante entre ambos estamentos de que tengo noticia surgió como consecuencia de la aprobación del Presupuesto de 1899 (121). El rompimiento se conjuró por el momento, sin embargo, las relaciones entre ambas partes eran de mutua desconfianza. Hasta ahora las atribuciones ministeriales de los Secretarios no habían sido cambiadas o mermadas. Tampoco las reducciones en los presupuestos de las Secretarías preocupaba en demasía al Consejo, pues en el mismo cuerpo colegislador se había presentado otro proyecto que reducía los gastos ministeriales. Lo que preocupaba al Consejo de Secretarios era el método a emplearse. Sin embargo, esta situación iba a cambiar pronto. Una de las primeras medidas que merma las funciones de las Secretarías es la Orden General Núm. 37 de 28 de diciembre de 1898 (122). Esta disposición establece la primera de las juntas administrativas independientes: La Junta de Sanidad. La misma le restó la referida jurisdicción a la Secretaría de Gober-

nación que dirigía el Presidente del Consejo y Secretario de Gobernación D. Luis Muñoz Rivera. Se designó al Capitán L. P. Dawson del 5º Regimiento de Infantería de los Estados Unidos, Presidente de la Junta y Oficial ejecutivo e Inspector Sanitario de Puerto Rico. La creación de este organismo fue aprovechada por la prensa republicana para informar al país que se iba perdiendo la confianza en el Consejo de Secretarios. El establecimiento de esta Junta fué motivo de preocupación del Consejo de Secretarios que veía en esta medida merma de facultades jurisdiccionales y la intromisión de un soldado norteamericano en asuntos que hasta ese momento se consideraron de la exclusiva competencia de civiles puertorriqueños.

Otro elemento se iba a añadir a la situación. Los soldados y oficiales del ejército que ocupaban el interior de la isla intervienen en los asuntos municipales interrumpiendo los trabajos y causando indignación y sorpresa. Estos incidentes tomaron tal cariz que el periódico El Liberal publicó un vibrante editorial titulado "Alto", que habría de precipitar una situación delicada entre el General Henry y el Consejo de Secretarios (123). Protestó el Presidente del Consejo y el General Henry estuvo de acuerdo y emitió una carta a sus oficiales y soldados cuyo tenor complació a D. Luis Muñoz Rivera, evitándose la renuncia de los ministros (124)

El nuevo año de 1899 comienza con la aprobación de una disposición militar que deja a la Secretaría de Hacienda sin jurisdicción sobre los faros y boyas marítimas (125). Al día siguiente, 18 de enero, se aprueba la Orden General Núm. 5 que suprime a la Secretaría de Hacienda la ingerencia que tenía sobre las Aduanas (126). La Orden Ge-

neral Núm. 10 de 28 de enero de 1898 asigna al Comandante Albert S. Snow los deberes de Capitán de Puerto suprimiendo la supervisión que sobre este asunto tenía la Secretaría de Fomento (127). Estas medidas, que poco a poco, mermaban la participación de civiles puertorriqueños en los asuntos de Gobierno y se los entregaba a militares norteamericanos precipitó la ruptura definitiva. La misma vino poco después de la renuncia del Secretario de Fomento; ésta se debió en gran medida al solicitar este ministro los servicios del Dr. John Eaton, General del Ejército residente en Washington D.C. para encargarse de los asuntos de instrucción pública. Esta decisión no tuvo la aprobación del resto de los Secretarios del Consejo y a la misma se opuso terminantemente D. Luis Muñoz Rivera. El Gobernador Militar, en vez de designar un puertorriqueño para sustituir al Dr. Carbonell en Fomento, decidió dividir esa Secretaría en dos ministerios, Instrucción Pública y Obras Públicas (128). De la primera se encargaría el General Eaton y de la segunda el Mayor Pierce. Al enterarse de esta decisión, el Consejo de Secretarios se reunió y presentó su renuncia:

"Al Hon. Mayor General Henry
Comandante del Departamento

Señor:

El Consejo de Secretarios ha visto con profunda pena la supresión de la Secretaría de Fomento, que destruye la personalidad de Puerto Rico, ya mermada por actos anteriores del Gobernador.

Los naturales del país no pueden hoy intervenir:

En las Aduanas

En el Servicio de Correos

En el Telégrafo

En los asuntos de sanidad marítima y terrestre.

En Obras Públicas.

En la Enseñanza Pública, etc.

Queda pues el Consejo de Secretarios sin funciones, sin autoridad, sin medios, en una palabra, de contribuir a la buena - marcha de la isla, respondiendo, según respondió siempre, a la confianza del pueblo.

No considera pues útil ni decorosa su permanencia en el puesto que ocupa, ni cree que le es lícito continuar ofreciendo su - cooperación a la política absorbente que va desarrollándose a su alrededor, y que los puertorriqueños contemplan tristes y angustiados.

Para nosotros dentro de la nacionalidad hay algo sacratísimo: las libertades de nuestra tierra y su derecho a administrar por sí misma sus propios intereses.

No respondiendo a esos dos principios, no responde nuestra gestion, que resulta también muy difícil, pero también muy estéril. Por cuyas razones presenta el Consejo su renuncia al Mayor General, rogándole se sirva aceptarla desde luego.

4 de febrero de 1899,

Luis Muñoz Rivera, Juan Hernández López y Cayetano Coll y Loste" (130)

Ya para el día 6 de febrero de 1899 el Gobernador Militar Henry establece un nuevo sistema de Gobierno similar en lo externo al de -

los Estados Unidos eliminando el Consejo de Secretarios y estableciendo cuatro Departamentos independientes entre sí. Hasta el momento de su desaparición, el Consejo de Secretarios sirvió dentro de las circunstancias con su presencia moral y habilidad política de freno a los poderes ilimitados del Gobernador militar y garantía para la salvaguarda de la cultura Puertorriqueña. Así lo entendió D. Mariano Abril, editor de La Democracia al manifestar: "Qué le sucedería a la personalidad política y jurídica de Puerto Rico, si el Consejo desaparece y si la isla se dejase absolutamente en manos del Gobierno Militar, un Gobierno que no entiende nuestro modo de ser" (131). En carta pública Muñoz Rivera sintetiza el sentir del país al decir: - "En nuestra patria nada es nuestro". El 6 de febrero de 1899 se establece una forma de Gobierno parecida a la norteamericana en lo externo: (132)

"I.- Quedando plenamente demostrado, después de dos meses de concienzuda prueba, que la organización creada bajo el sistema español y continuada por los representantes de los Estados Unidos bajo la designación de Gabinete Insular, no es compatible con los métodos y progresos americanos, declárase disuelto dicho Gabinete Insular.

II.- Constitúyense por la presente cuatro departamentos, a saber:

Estado o Gobernación

Justicia

Hacienda

Interior

III.- Los Jefes de Departamentos u otros que se opongan a la

introducción de los métodos de administración y progresos - americanos o a la investigación de los asuntos, cuando se ordene en debida forma, serán relevados de sus cargos, o admitida su dimisión, si la presentaren.

IV.- " (133)

En la Orden General Núm. 15 de 9 de febrero de 1899 se designaban los Secretarios o Jefes de los Departamentos recién creados (134). En Estado, el Lcdo. Francisco de Paula Acuña y Paniagua, quien se desempeñaba entonces como Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia; en Justicia al Lcdo. Herminio Díaz Navarro, propuesto recientemente para Magistrado de aquél alto tribunal, ambos miembros del Partido Liberal, cuya jefatura tenía D. Luis Muñoz Rivera. Para la cartera de Hacienda se designó al Dr. Cayetano Coll y Toste, historiador y médico quien había pertenecido al Consejo de Secretarios como titular de la cartera de Fomento y el Lcdo. Federico Degetan y González, miembro del Partido llamado Radical, luego Republicano Puertorriqueño, quien fue nombrado Secretario de lo Interior. En esta misma disposición se designaron jefes del Negociado de Educación y Obras Públicas al General John Eaton y al Mayor Francis L. Hill, respectivamente. Asimismo, se creaba el Departamento de la Policía Insular el cual ya anteriormente había sido puesto bajo la dirección de Mr. Frank Techter.

Las funciones asignadas al Departamento de Justicia, que es motivo de especial interés en este trabajo, eran las siguientes: "Administración de Justicia, designación de jueces y notarios, establecimientos penales y recursos de alzada" (135). Al día siguiente, la

Orden General Núm. 16 amplía las áreas de interés de cada ministerio: (136)

"II. Departamento de Justicia. El Secretario de Justicia hará los nombramientos de notarios. Con el fin de introducir los procedimientos americanos simplificando la gestión de este Departamento y de abolir leyes innecesarias.... al Secretario de Justicia se asociará el Comandante A. C. Sharpe, Ejército de los Estados Unidos, Asesor de Guerra en ejercicio, en calidad de Subordinado. Este se consultará con el Secretario y le auxiliará con la preparación de leyes o sistemas, de acuerdo con los que rigen en los Estados Unidos, proponiéndole la abolición de aquellas leyes que se hallen en pugna con el progreso.

Obsérvese la intención del Gobernador Henry al cambiar la organización judicial: "no es compatible con los métodos y progresos americanos"; "Los Jefes de Departamento u otros que se opongan a la introducción de los métodos de administración y progresos americanos..." "Con el fin de introducir los procedimientos americanos simplificando la gestión de este Departamento y de abolir leyes innecesarias... al Secretario de Justicia se le asociará el Comandante A. C. Sharpe... Este... le auxiliará con la preparación de leyes o sistemas de acuerdo con los que rigen en Estados Unidos..." Así está desarrollado el plan del Gobernador Militar con referencia a las instituciones y el Derecho puertorriqueño: la transculturación y americanización del mismo. (137).

La organización gubernamental decretada por el General Henry en

febrero tiene una duración de alrededor de seis meses. El 12 de agosto de 1899 el Gobernador Militar Davis cambia sustancialmente dicho sistema. La Orden General Núm. 116 establece una serie de negociados dependientes del Gobernador y regula las Juntas independientes. Cinco Negociados: Estado y Asuntos Municipales; Rentas Internas; Agricultura; Instrucción; Obras Públicas y el cargo de Secretario Civil del Gobernador Militar, con facultades de coordinación y supervisión general. Continúan funcionando las siguientes instituciones independientes entre sí pero bajo la alta dirección del Gobernador: la Tesorería, la Contaduría, la Junta Judicial, la Junta de Gobierno de Cárceles, la Policía Insular, el Servicio Postal, los Telégrafos, Oficina de cuarentena de Puertos, la Junta Superior de Sanidad, la Inspección de faros y boyas y la "United States Proviisional Court". Además se designó por la Orden General Núm. 121 de 17 de agosto de 1899, una Junta Consultiva de política insular cuyas funciones eran: "consideración de asuntos referentes a la política insular", "discurrir medidas encaminadas al mejoramiento industrial y económico de Puerto Rico", para ayudar a las víctimas del huracán. Eran miembros de este organismo: D. Andres Crosas; D. V. R. Látimer; D. Francisco de Paula Acuña; D. Manuel Egozcue; D. Manuel Paniagua; D. Santiago R. Palmer; D. Rafael Polcios; D. Fidel Guillermet y D. Ramón Méndez Cardona.

La anterior organización gubernamental se mantuvo con algunas reformas o cambios hasta el 30 de abril de 1900 en que por Orden General Núm. 102 se establece un régimen modelo civil pre-Ley Orgánica de 1900, (Ley Foraker). La razón oficial para esto nos la da la misma disposición: "Con el fin de facilitar el traspaso de los cargos -

civiles al Gobierno Militar de Puerto Rico a las autoridades debidamente constituidas del Gobierno Civil, y a propuesta del Gobernador electo, establécense las Departamentos Ejecutivos relacionados a continuación". Luego se mencionan los nuevos ministerios con la denominación de Departamento como en los Estados Unidos: Estado, Justicia, Tesorería, Auditoría, Interior e Instrucción. Designándose para dichas carteras ejecutivas a los Señores N.B.K. Pettingill, Arthur F. Odlin, John H. Hollander, J.R. Garrison, Cayetano Coll y Toste y George G. Groff. Todos, con excepción de Coll y Toste, norteamericanos. Es mi opinión que este "gobierno" fantasma tiene su razón de ser para preparar el camino a los nombramientos de funcionarios norteamericanos, con exclusión de los puertorriqueños. Durante muchos, muchos años se consideró a los puertorriqueños ineptos para ocupar los altos cargos ejecutivos del Gobierno de Puerto Rico.

Establecimiento del Tribunal Provisional de Estados Unidos.

La primera fase.

El Presidente de Estados Unidos Mr. McKinley ratifica el Tratado de Paz el 6 de febrero de 1899. En Puerto Rico, las autoridades militares se ven obligadas a reevaluar la situación jurídica de las Comisiones Militares que funcionaban enjuiciando civiles. Pronto se ratificaría el Tratado de Paz y su teoría e interpretación del Derecho militar y constitucional quedaba en precario. El Mayor Alfred C. — Sharpe, "Judge Advocate" del Departamento de Puerto Rico preocupado por el asunto escribe el 16 de febrero a su superior en San Juan. Ex

plica lo que ha ocurrido; el funcionamiento de las Comisiones Militares y que en vista de la imposibilidad de continuar con las referidas Comisiones, se solicite autorización al Presidente para proclamar la ley marcial siempre que se crea necesario. El General Henry - aprueba la sugerencia del Mayor Sharpe y se envía al Departamento de la Guerra para su informe y autorización. Días antes de que se proclame el Tratado de Paz por el Presidente se vuelve a insistir sobre lo anterior. El 13 de abril el "Judge Advocate General" envía la siguiente comunicación al Secretario de la Guerra: (138)

"La legalidad de la proclamación de la ley marcial y la designación de las comisiones militares en Puerto Rico después de la declaración de paz, es un asunto de gran importancia. La - actual situación allí es una de ocupación hostil o de gobierno militar como ha sido designado (Opinión del Juez Presidente Chase en la sentencia de Milligan) y no hay duda sobre la autoridad para el nombramiento de las comisiones militares en esa isla. Pero con la declaración de paz surgirá una nueva situación. Puerto Rico entonces se convertirá en parte del territorio de los Estados Unidos, aún cuando no un territorio para el cual el Congreso ha legislado un gobierno. Ahora es un territorio bajo autoridad del Presidente por virtud de ocupación hostil ¿cuales son entonces los poderes del Presidente? No puede retirar la autoridad federal de la isla. Tiene entonces que mantener el control de la situación. Y al ejercitar tal control, tiene que mantener algún sistema de gobierno hasta que el Congreso legisle sobre ello. Pero después de la declaración

de paz no tendrá los mismos poderes que disfruta ahora. La norma de la ocupación hostil no puede ejercitarse. El Tratado de Paz sostiene que los tribunales ordinarios de lo criminal continuarán existiendo, pero si en estos no se puede confiar para la supresión de ciertos delitos, parece que el Presidente tendría el poder de designar un tribunal provisional con jurisdicción competente".

Entonces el Judge Advocate General se refiere al establecimiento, por autoridad ejecutiva, de tribunales provisionales en Louisiana durante y después de la Guerra civil y sugiere "que un tribunal de esta clase probablemente será efectivo en caso de que los tribunales criminales ordinarios no lo sean". El Presidente aprobó estas recomendaciones y el 14 de abril el Secretario de la Guerra las envió a San Juan, recibiendo las mismas en los cuarteles generales el 25 del mismo mes. El Mayor Sharpe procedió inmediatamente a preparar una Orden General para el establecimiento de un Tribunal Provisional de los Estados Unidos, sometiéndose dicho borrador al General Henry el día 26 de abril. Asimismo se sometió una carta de trámite con las explicaciones pertinentes al caso:

"Habiendo aprobado el Presidente las recomendaciones del "Judge Advocate General," los juicios por comisiones militares en esta isla están autorizadas, pero a menos que esa acción sea absolutamente necesaria, se recomienda como mucho más deseable recurrir a alguna otra medida, como los tribunales provisionales, que fueron establecidos durante e inmediatamente después

de la rebelión. Las condiciones existentes en los Estados su reños en 1865-66, fueron muy diferentes a las que prevalecen hoy en Puerto Rico. Las leyes, usos, costumbres y lenguaje de los conquistadores eran los mismos del país sojuzgado, y los tribunales provisionales se establecieron inmediatamente, había numerosos abogados en el ejército y civiles que estaban bien versados en la práctica y el procedimiento de los tribunales norteamericanos. Pero en esta isla, hay pocos abogados norteamericanos, si alguno que pueda servir para este propósito, y el designar abogados portorriqueños será meramente multi plicar cargos y perpetuar el sistema anti-norteamericano de De recho que prevalece aquí".

Luego el Mayor Sharpe procede a explicar cual es la competencia y jurisdicción del Tribunal provisional de los Estados Unidos que recomienda:

"La clase de casos que estarían bajo la jurisdicción de un Tri bunal provisional son los que hasta ahora han sido traídos ante las comisiones militares, tales como delitos cometidos por un civil, nativo o ciudadano de los Estados Unidos, o un extranjero contra los Estados Unidos, como son, robo, obstrucción del correo, o por un ciudadano de Estados Unidos o extranjero en contra de otro ciudadano o residente extranjero; también el número considerable de crímenes cometidos durante la guerra, tan tarde como febrero último por nativos en contra de españoles y por nativos contra oficiales y soldados de los Es-

tados Unidos, etc.

Si este plan tiene la aprobación del comandante del Departamento, yo recomendaré la constitución de ese tribunal provisio
nal en San Juan, Mayagüez y Ponce..."

Obsérvese la insistencia del Judge Advocate General de dar lega
lidad a la existencia de las "Military Commissions". Cita para ello
-vuelvo a repetirlo- la célebre sentencia de Ex Parte Milligan. Pero,
en vez de invocar la opinión del Tribunal, de la mayoría de los jue-
ces, invoca la opinión de Mr. Chase, que es la minoritaria y por ello
no constituye la regla jurisprudencial. Más aún, la opinión de la ma-
yoría es totalmente contraria a lo que sostiene el Judge Advocate -
General. Con referencia al establecimiento de tribunales provisiona-
les de los Estados Unidos como el que se estableció en Louisiana el
informe de Mr. C. Magoon es muy preciso. (139)

"Habiéndose concertado un tratado de paz, cesan los peligros
de la guerra, como también el derecho de los militares de ejer-
citar los poderes ilimitados e indefinidos de la guerra; las
leyes de la paz operan otra vez y los derechos de los indivi-
duos y las comunidades tienen que ser reconocidos y protegi-
dos".

Luego cita Mr. Magoon la sentencia The Grapeshot sobre el tribu-
nal provisional de Estados Unidos en Louisiana. Allí se sostuvo que:

"Cuando durante la pasada guerra civil, se ocuparon partes -
del territorio insurgente por los ejércitos nacionales, estaba
dentro de la autoridad constitucional del Presidente, como co-

mandante en jefe, el establecer allí tribunales provisionales para la vista y determinación de todas las causas que surjan bajo las leyes del Estado o de los Estados Unidos. Y el Tribunal provisional para el Estado de Louisiana, organizado por la proclama de 20 de octubre de 1862 fue autorizado legalmente para ejercer esa jurisdicción"

Luego la sentencia sostiene: "No tenemos dudas de que el Tribunal provisional de Louisiana fue establecido por el Presidente apropiadamente en el ejercicio de su autoridad constitucional durante la guerra" (énfasis suplido en el original). Mr. Magoon vuelve a citar la sentencia de Ex Parte Milligan, la parte de la misma que enfatiza que: no siendo el territorio teatro actual de guerra y estando abiertos y funcionando los tribunales civiles, el Tribunal Provisional que juzgo a Mr. Milligan carecía de jurisdicción y autoridad para ello y únicamente los tribunales de justicia civiles tenían competencia y poder para celebrar juicio. La situación en Puerto Rico era similar a la antes descrita, los juzgados y demás instituciones judiciales civiles puertorriqueñas continuaron funcionando aún cuando la isla estuvo dividida entre Estados Unidos y España. A partir del 14 de agosto de 1899 en que se firma el Protocolo de Paz cesa totalmente la guerra. El 18 de octubre comienza la administración civil por el Gobierno Militar; el 10 de diciembre de 1898 se firma en París el Tratado de Paz y el 11 de abril de 1899 se intercambian las ratificaciones. Durante todo ese período nuestras instituciones judiciales funcionan normalmente. Será el 14 de abril de 1899 en que Mr. McKinley autorizará por

endoso un tribunal provisional de los Estados Unidos en Puerto Rico, estableciéndose el mismo el 1 de julio de 1899, más de seis meses - desde la firma del Tratado de París. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos no favorece la decisión de establecer un - tribunal provisional de Estados Unidos en Puerto Rico, dadas las condiciones políticas, institucionales y militares de la isla.

El Proyecto del Mayor Sharpe fue sometido al General Henry y al Secretario de Justicia, Ldo. Herminio Díaz Navarro. El 2 de mayo lo devuelven sin aprobar al Secretario de la Guerra.

Ataques a los Tribunales puertorriqueños

Mientras esto ocurría en los cuarteles generales del Gobernador Militar se había desarrollado en la prensa una intensa polémica, por causa de la campaña de descrédito del sistema judicial y el Derecho puertorriqueño que mantenía el diario "The San Juan News". Para esta época, año de 1899, los diarios principales de Puerto Rico se habían dividido en dos grupos. De una parte la prensa que defendía los fueros, las instituciones, la cultura y el ser puertorriqueño y de la otra los diarios que propugnaban la americanización, la asimilación política a Estados Unidos y por ello desprestigiaban cuanto podían las instituciones hispano-puertorriqueñas. En el primer sector se encontraba, La Democracia, establecido en la ciudad sureña de Ponce en 1890 dirigido y orientado por Don Luis Muñoz Rivera, Jefe del Partido Autonomista y ex Presidente del Consejo de Secretarios; El Territorio, combativo diario de San Juan, inspirado por D. Luis Muñoz Rivera fundado en 1899; La Correspondencia de Puerto Rico, que aunque tenía por

lema "absolutamente imparcial" cuando peligraba la integridad de lo puertorriqueño tiraba su cuarto a espadas; El Combate, trisemanario ponceño, antes La Bomba, célebre por un artículo de su director D. Evaristo Izcoa Díaz sobre las tropas norteamericanas titulado "¿Bandidos o soldados?".

En el segundo sector se encontraban El País, órgano del Partido Republicano Puertorriqueño que deseaba la anexión política y cultural de Puerto Rico a los Estados Unidos, la tónica editorial de este periódico era el ataque solapado y el destaque de las ventajas de la gran nación. Vocero de los intereses norteamericanos de Puerto Rico, enemigo jurado de todo lo que representa la cultura puertorriqueña y propagandista sin descanso de los métodos, usos y formas norteamericanas en el diario The San Juan News. Se publicaba en inglés, con una sección en español. No fue el primero en ese idioma en Puerto Rico, pero sí el más persistente y de larga vida. Su primer número vio la calle a principios del mes de noviembre de 1898. Nos dice el Dr. Pedreira que "por sus rudos ataques a los puertorriqueños bajo la dirección de Mr. Racklin, numerosas firmas comerciales le retiraron sus anuncios" (140).

Comienza la polémica en torno al descrédito de los tribunales puertorriqueños con unas declaraciones del Juez Curtis miembro de la Insular Commission (141). Las mismas se publican en el diario El Territorio de 1 de abril de 1899 y dicen en su parte pertinente: "Bajo la bandera americana no puede haber otro derecho que el americano" (142). Días después, The San Juan News publica un editorial ofensivo

para los puertorriqueños: (143)

"Es tiempo ya de que los viejos tribunales españoles de esta isla sean abolidos. Nadie tiene respeto por ellos. (.....
.....)

Si hubiese algún peligro o razón para creer que los tribunales norteamericanos serían injustos con el pueblo de la isla, habría alguna excusa para continuar el viejo régimen. Todo el esquema de la justicia española es una gran farsa y no ha sido mejorado ni un punto bajo el nuevo orden de cosas. Es tan corrupto, tan técnico, tan servil y rastrero, como siempre, como se observa en la isla todos los días. Debe de solicitarse de la oficina del Secretario de Justicia que envíe a esta isla un número suficiente de abogados norteamericanos para ocupar los cargos de jueces, y sólo entonces todo hombre estará seguro de recibir justicia imparcial. Cuando se purifiquen los tribunales, será fácil reformar otros departamentos. Pero hasta que esto se ajequite, toda la estructura continuará corrupta a pesar de todo lo que se haga".

A este editorial contesta El Territorio con otro titulado Desvergonzado en su número de 8 de abril: (144) "El San Juan News.... No hace mucho tiempo atacó ... y en su número del jueves ataca, en suelto procaz a los prestigios de nuestro tribunales de Justicia, cuya su presión pide, así como la sustitución por abogados americanos para - que todos nos sintamos de justicia... Con la audacia del ignorante, la presunción del necio y la maldad del aventurero, llama a nuestros

tribunales, tribunales españoles, y habla de la farsa de la jurisprudencia española... y se permite hablar de la competencia y moralidad de dichos tribunales. Sepa ese periódico y sus ambiciosos instigadores, que los Tribunales de Puerto Rico los forman puertorriqueños, que tienen la dignidad, la vergüenza, competencia y moralidad que ya desearía para sí el San Juan News y sus instigadores...".

También el 8 de abril se reúne el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Puerto Rico compuesto por los Magistrados D. José Severo Quiñones, Presidente; D. José. C. Hernández, D. José María Figueras, D. Rafael Nieto Abeillé, D. Eduardo Acuña Aybor y D. Angel Acosta -- quintero. Luego de discutir los comentarios del San Juan News expiden la siguiente Resolución: (145)

"Honorable Mayor General Comandante en Jefe del Departamento:
Señor: el único periódico que se imprime en inglés en esta isla se ha permitido en su número del día 6, verter frases sumamente incorrectas contra los tribunales de esta isla, a los - que impropiaemente llama Tribunales españoles, cuando todos - son formados por puertorriqueños. Ese periódico desconoce en absoluto la materia de que trata y la opinión del país. Y el artículo que dedica a la Magistratura es una prueba de ello ...
La Corte Suprema, en nombre de los Tribunales del país y autorizada por el Sr. Secretario de Justicia, protesta ante V.H. de tan injustos ataques y sin perjuicio de la acción del Ministerio fiscal si estima procedente ejecutarla, os ruega hagais entender a ese periódico que es obra malvada, obra de demoli-

ción la suya al desprestigiar a los Tribunales del país, encargados de velar por la seguridad de los bienes y de las personas ..." Puerto Rico, 8 de abril de 1899"

El Gobernador Militar recibió la anterior resolución, autorizada por el Secretario de Justicia Ldo. Herminio Díaz Navarro pero no tomó acción alguna. Compárese la actitud del General Henry con The San Juan News y la que tomó contra La Bomba por publicar un artículo titulado "Soldados o bandidos" y su Orden General suspendiendo La Metra-lla y "encausando a su director por la inserción de un artículo en - desprestigio de un funcionario público". Culminó el asunto con la órden del Gobernador Militar disponiendo que cesara el proceso seguido contra The San Juan News por libelo en el Tribunal de Instrucción de Catedral.

Continúa la polémica y los ataques del San Juan News. El diario El Territorio publica la siguiente nota en primera plana de su edición del 15 de abril: (146) "Fin de semana. Los destemplados ataques dirigidos por The San Juan News a la magistratura puertorriqueña, la actitud pasiva del Fiscal de la Suprema Corte de Justicia y la Orden - del General Henry disponiendo que cesara el procedimiento seguido contra dicho periódico por el Juzgado de Instrucción de Catedral consti-tuyen la nota estupenda de la semana"

La Insular Commission.

El Informe de Reforma Díaz Navarro

El informe de la Insular Commission es entregado al Secretario de la Guerra el 27 de mayo de 1899. A pesar de esto, la mayoría del informe y sus recomendaciones se conocían en San Juan desde la segunda semana de abril. Además, los miembros de esa Comisión, el General Kennedy, Mr. Watkins y el Juez Curtis habían hecho sendas declaraciones a los diarios del país, especialmente a The San Juan News, tan afin a los comisionados. En las mismas habían hecho gala de la necesidad de americanizar y cambiar todo lo puertorriqueño. En el informe final los comisionados norteamericanos manifiestan: ".... a nuestro juicio el modo de americanizar a Porto Rico es dándole el beneficio completo de nuestro sistema jurídico total y no tratar de insertar reformas parciales al sistema jurídico español". Su principal recomendación con referencia al Derecho puertorriqueño es la siguiente:

"Nosotros por lo tanto recomendamos que todas las leyes españolas, los Códigos civil y penal, los Códigos de procedimiento civil y criminal y todos los reales decretos en materia de Derecho sean suprimidos y dejados de lado y entonces se adopte el Derecho anglo-sajón de los Estados Unidos según está regulado por los Tribunales de allí, excepto cuando se modifique por las leyes federales norteamericanas" (147).

Además de hacer sus recomendaciones -que examinaremos en deta-

lle más adelante- los miembros de la Insular Commission decidieron - preparar una serie de Códigos para sustituir el sistema de Derecho - puertorriqueño. Su plan era recomendar formalmente al Gobernador Militar dicha sustitución por Decreto Militar a manera de experimento (148). El General Henry solicita la opinión de la Suprema Corte de - Justicia y del Secretario de Justicia. El 12 de abril el Lcdo. Hermi- nio Díaz Navarro prepara un Informe sobre la legislación civil y cri- minal de Puerto Rico y sobre las reformas que han de hacerse en la - misma (149). Pedido por el General Henry también se ofrece como tes- timonio del Secretario de Justicia en las audiencias o vistas públi- cas celebradas por el Dr. Carroll en la isla.

"Honorable Señor:

Al tener el honor de emitir el Informe que se me ha pedido so- bre la legislación que aquí rige y sobre las reformas que a mi juicio deben hacerse en la misma, acompaño un resumen de to- das las leyes promulgadas en Puerto Rico, tanto en lo civil co- mo en lo criminal, para que de ese modo, teniéndose una idea de los principios en que esas leyes se basan, se pueda apreciar la razón o la sinrazón de mis afirmaciones en orden a su refor- ma.

Se verá por ese resumen que nuestra legislación, en su mayor parte codificada, no es una legislación caprichosa, y si un con- junto de leyes que, relacionándose unas con las otras y forman- do un sistema bastante completo, traducen y consignan en sus - preceptos las soluciones que a los distintos e intrincados pro

blemas de derecho que en la vida jurídica pueden presentarse, daban, en la época en que dichas leyes promulgáronse, las escuelas más adelantadas y más radicales y los mejores tratadistas de Europa.

Esas leyes no son tan defectuosas como lo afirman algunos, - tal vez porque no habiéndolas estudiado detenida y concienzudamente no las conocen a fondo.

.....

Esa reforma se impone no tan sólo porque esas leyes fueron dictadas teniendo por base la Constitución de España, cuyas instituciones políticas son diametralmente opuestas a las republicanas instituciones de los Estados Unidos, si que también por que precisa adaptarlas en algunos puntos a lo que exigen los adelantos hechos últimamente por la ciencia jurídica; modificar algunos de sus preceptos y derogar otros que han sido aquí contraproducentes.

Al hacerse esas modificaciones es mi opinión y también la de los Abogados mas distinguidos de nuestras Cortes de Justicia y de nuestro foro, que no debe hacerse caso omiso de todo nuestro Derecho y si retener lo que haya sido provechoso y útil en el desarrollo de la vida social de este país.

.....

Teniéndose ello muy en cuenta es absolutamente preciso, al emprender la reforma de nuestras leyes, aceptar el sistema de - codificación aquí implantado, perfeccionándolo de tal modo -

que, sin estar comprendida en esa codificación, no haya una sola disposición de las que aquí rigen y de las que en adelante se promulguen por virtud de la reforma.

.....
Admitido que es necesario el reformar nuestras leyes y determinada la extensión que debe dársele a la reforma, es importantísimo hacer observaciones sobre el procedimiento que debe adoptarse para realizar la obra.

Desde ahora y permítaseme que hable con absoluta franqueza, - porque así debo hablarle a mi Gobierno y porque así lo exigen las sagrados intereses de mi país, no vacilo en afirmar que si la modificación de nuestras leyes se hace en vista de lo que informen las Comisiones aquí enviadas para estudiar las necesidades del país, la reforma será contraproducente y lejos de producir un bien puede proporcionarnos serios males.

.....
Esas Comisiones han estado aquí muy pocos días. En tan corto tiempo no es humanamente posible que hayan podido estudiar y conocer a fondo este país. La mayor parte de los informes que a esas Comisiones se les han dado han sido informes egoistas de los que, por convenir a sus intereses particulares, desean que a la cosa pública se le imprima determinadas direcciones. Esas Comisiones no han podido juzgar nuestra manera de ser sino por los casos aislados que se les han presentado a su rápida observación. No han hecho un previo y concienzudo estudio en su fondo y en su forma de las leyes que hoy aquí rigen para

poder apreciar su verdadero valor o su ineficacia, sociológica o jurídicamente consideradas y por todo ello sus informes han de resultar erróneos, deficientes, muy distantes de la estricta (sic) realidad de las cosas.

Aún admitiéndose que esas Comisiones, al informar al Gobierno de Washington fotografiasen, con intuición maravillosa y absoluta fidelidad, la vida interna de la sociedad puertorriqueña en el conjunto y en los detalles, no ha de ocultarse a vos que sois hombre de Estado y de Gobierno que la obra legislativa - hecha en Washington para Puerto Rico por hombres que tienen los hábitos y costumbres de un país que en su modo de ser es distinto al nuestro, no encajaría como encajar debe en los distintos y múltiples engranajes de nuestra máquina social. (150)

.....

Hoy, habida cuenta de esas observaciones que yo creo mereceras de que se les tenga en consideración, me parece, que si no es posible en el momento actual satisfacer nuestros ardientes deseos de que Puerto Rico sea declarado territorio de la Unión, dejándoles a las CAMARAS que el país entonces eligiese la labor de modificar sus leyes en el sentido que estimase oportuno, bajo las bases de adaptarlas a los principios que informan la Constitución americana, sería de más provechoso resultado que el Honorable Mayor General Comandante del Departamento hiciese esas reformas a propuestas de la Secretaría de Justicia, cuidándose ésta al hacerse las proposiciones, de consultar a los letrados más eminentes del país y de tener muy presente lo

que la opinión reclame con voz unánime"

.....

Luego presenta el Ldo. Díaz Navarro las reformas y modificaciones que entiende deben de efectuarse en los Códigos y Leyes fundamentales de Puerto Rico. Como reproduzco la totalidad de este interesante y hasta ahora inédito documento en los apéndices de este estudio, me permito continuar con el análisis. La razón por la cual el - Secretario de Justicia manifiesta que: "nuestra legislación en su mayor parte codificada, no es una legislación caprichosa..." es por razón de la campaña de descrédito a que se sometían las instituciones jurídicas puertorriqueñas. En la misma participaban desde los Gobernadores militares hasta los abogados norteamericanos y otros estadounidenses recién llegados a la isla, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento del idioma español ni la cultura hispana. Veamos por ejemplo las opiniones de algunos de ellos: Gen. John F. Brooke, segundo Gobernador Militar, manifestaba a otro soldado que su propósito era "dejar tranquilas las condiciones existentes, creyendo que era - para los mejores intereses de la isla el que el antiguo sistema de - Derecho (permanezca) a pesar de ser injusto y opresivo en muchos aspectos... en vez de correr el riesgo de caos y desorden al instituir cambios con los cuales el pueblo no está familiarizado por su idioma ..." (151)(énfasis suplido). Mr. Phillip C. Hanna, último consul de los Estados Unidos en Puerto Rico, quien había permanecido en San Juan se manifestaba de la siguiente manera: "Esta isla, no solamente necesita oficiales norteamericanos que administren el derecho, pero peno

samente necesita que se le administre Derecho norteamericano. La gran barrera en el camino de una exitosa y suave administración ahora mismo es, que nuestros militares norteamericanos tienen que administrar un sistema de Derecho que ha hecho de España un fracaso por cuatrocientos años" (152).

Asimismo el Secretario de Justicia especifica que es un sistema codificado para contraponerlo al sistema jurídico de los Estados Unidos que es de factura "anglo-saxon common law". Luego vuelve a enfatizar el origen y abolengo civilista de nuestra legislación y hacer contraste con la norteamericana: "nuestra legislación ... es un conjunto de leyes formando un sistema bastante complejo, traducen y consignan en sus preceptos las soluciones que daban, en la época en que dichas leyes promulgaronse, las escuelas más adelantadas y mas radicales y los mejores tratadistas de Europa". Entonces, el Lodo. Díaz Navarro consigna claramente su rechazo a los que en ese momento desacreditan y desprecian el derecho hispano-puertorriqueño, al decir: "Esas leyes no son tan defectuosas como lo afirman algunos, tal vez porque no habiéndolas estudiado detenida y concienzudamente no las conocen a fondo". El tiempo, las circunstancias vitales nos la ilustra, además de los dos testimonios arriba indicados, el Dr. Leo S. Rowe, jurista norteamericano quien varios meses después es designado por el Presidente de los Estados Unidos miembro de la Comisión Codificadora de Puerto Rico. En su libro The United States and Porto Rico (153) explica el ambiente de este momento:

"Para la masa de norteamericanos residentes en la isla -y es-

pecialmente tratándose de abogados- todo el sistema de Derecho y de gobierno, de instituciones privadas y públicas, era malo simplemente porque era diferente al nuestro. Todo lo que no se conformaba con nuestro sistema no sólomente era no-americano sino anti-americano. El abogado de Massachusetts quería el sistema jurídico de Massachusetts, el abogado de Carolina del Sur el sistema de Carolina del Sur, etc... El sistema fue condenado porque era diferente al nuestro. El único medio de americanizar a los puertorriqueños, se argumentaba, era dándoles, sin tardanza, el sistema de Derecho de uno de nuestros Estados".

Insiste el ponente en que el ordenamiento jurídico puertorriqueño no debe permanecer "que no debe hacerse caso omiso de todo nuestro derecho y sí retener lo que haya sido provechoso y útil en el desarrollo de la vida social de este país". En el párrafo siguiente intuye - el peligro que implica para nuestro Derecho la existencia de otro cuerpo jurídico extraño pero que también comparta el territorio y el objeto del puertorriqueño, me refiero a las Leyes de los Estados Unidos, la llamada jurisdicción federal. Y es que como Secretario de Justicia, el Ldo. Díaz Navarro debía conocer la correspondencia y los planes del Mayor Sharpe con relación al establecimiento de un Tribunal Provisional de los Estados Unidos. Además de las conversaciones que mantenía el referido Judge Advocate del Departamento con los tres miembros de la Insular Commission para la preparación de un plan recomendando la organización de tribunales de los Estados Unidos en Puerto Rico

Más adelante protesta de la presencia de las Comisiones enviadas a Puerto Rico por el Gobierno federal norteamericano para "estudiar" y hacer recomendaciones sobre cual debía ser el futuro sistema gubernamental y las instituciones que convenían a los puertorriqueños. Hasta el momento en que nos encontramos, abril de 1899, tres comisiones oficiales habían visitado la isla, el Reverendo Thomas E. Sherman, S.J, quien era capellán del Fourth Missouri Division of the United States Volunteers. Su viaje investigativo comenzó en 19 de octubre de 1898. A finales de año el Presidente McKinley designó al Reverendo Dr. Henry K. Carroll como "Special Commissioner for the United States to Porto Rico". En la primavera de 1899 el Secretario de la Guerra Mr. R. A. Alger designó la Insular Commission y todo el tiempo el Cónsul de Estados Unidos Mr. Phillip C. Henna informaba constantemente a los focos de poder en Washington. También informaban sobre la isla y recomendaban innumerables soluciones, visitantes y grupos oficiosos.

Termina el Ldo. Díaz Navarro insistiendo que sean los puertorriqueños quienes reformen su Derecho e instituciones, o las Cámaras legislativas o la propia Secretaría de Justicia luego de consultar a los abogados del país. Como veremos más adelante la sociedad puertorriqueña resentía el que se designara una Comisión para revisar sus leyes y Códigos (155). El Informe del Secretario de Justicia sobre la legislación civil y criminal fue recibido por el Gobernador Militar pero a pesar del gran impacto que tuvo en la opinión pública no se siguieron sus recomendaciones. Luego el Secretario de Justicia lo presentó como su testimonio oficial a las audiencias que celebraba el -

Dr. Carroll. Sin embargo, aparecen relegadas y sin darle la importancia que tuvieron. Cuando se publicó la versión inglesa de este Informe en el libro del Dr. Carroll titulado, Report on the Island of Porto Rico, el Lcdo. Díaz Navarro suprimió la recomendación que había hecho en la versión original en español bajo el epígrafe, "Organización de Tribunales". Allí manifestaba: "1. Tomándose como base la organización de los Estados Unidos se establecerán Tribunales de Partido en Ponce, Mayagüez y la Capital, los que conocerán de los asuntos civiles y con el Jurado de los criminales. 2. Se creará una Corte Suprema en San Juan independiente del Tribunal de Partido". Y es que para el momento en que ofreció su testimonio ante el "Special Commissioner" Carroll, el ponente Lcdo. Díaz Navarro se había desilusionado de la "gran República de Repúblicas". Ya estaba convencido del peligro que representaba para la integridad y permanencia del Derecho puertorriqueño, los intentos de transculturación y americanización de los mismos por parte de las autoridades y ciudadanos norteamericanos y algunos puertorriqueños también. (156)

Pocos días después de circular el Informe preparado por el Secretario de Justicia el diario El Territorio de 17 de abril publica un vibrante artículo del Lcdo. Alfredo Arnaldo Sevilla titulado Por — Nuestro Derecho (157). En el mismo, su autor, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Arecibo, fustiga los planes norteamericanos de cambiar nuestro Derecho puertorriqueño. (158)

"El Gobierno de la Unión proyecta reformar nuestro derecho y la Secretaría de Justicia ha formulado ya el programa de dicha reforma, pero la verdad es que no hay una sola razón que

determine la necesidad de reforma tan festinada, que naturalmente resultará un fracaso, a pesar de la buena voluntad de todos.

Por imperfecto que sea nuestro Derecho, siempre será mejor que la reforma que se espera, y si se siente la necesidad de la reforma de él, esa reforma ha de labrarse en Puerto Rico; no puede venir del Gobierno americano, porque el legislador americano no sólo desconoce nuestro Derecho sino que nuestras costumbres y nuestras necesidades y nuestro modo de ser le son igualmente desconocidos, cuanto más no le serán desconocidas las materias sobre las que se sienta la necesidad de la reforma y el criterio que la debe presidir

Para la reforma de un sistema legal es condición esencialísima, absoluta, el conocimiento acabado y completo de él, sentir íntimamente el modo de ser del pueblo cuya vida judicial condiciona y regula el sistema legal de cuya reforma se trata, y haber estudiado no especulativa sino prácticamente ese sistema legal en sus aplicaciones a la vida del pueblo que vive a su sombra, la vida del Derecho, para conocer entonces y sólo entonces esa necesidad, los límites y toda la extensión de esa reforma.

¿Está en esas condiciones el legislador americano?

.....

..... el legislador del Derecho, el que acomete la empresa difícilísima de su reforma también debe serlo, y sólo puede serlo, con garantía de acertar el pueblo que vive

al amparo del derecho que vaya a mejorarse: sentemos el axioma de que sólo a Puerto Rico corresponde modificar en su día su sistema legal, no tan malo como la ignorancia y torcida intención de algunos lo quieren suponer.

.....

Este importante artículo es reproducido por otros periódicos y se comenta sobre el mismo.

Posición de la Suprema Corte de Justicia de Puerto Rico.

Además de haber pedido su opinión legal al Secretario de Justicia, el General Henry, también solicita de la Corte Suprema de Justicia que informe sobre la deseabilidad de cambiar o reformar sustancialmente el Derecho puertorriqueño vigente por el "Common Law" de los Estados Unidos, como sugiere la Insular Commission. El día 19 de abril de 1899 el pleno de la Corte Suprema de Justicia reunido en sesión extraordinaria tomó el siguiente ACUERDO: (159)

"Don Carlos Franco y Soto, Secretario de Gobierno de esta Suprema Corte de Justicia, Certifico que el Tribunal pleno en sesión extraordinaria de este día tomó el Acuerdo siguiente: Dada cuenta al Tribunal pleno en sesión extraordinaria de este día con precedentes comunicación del Sr. Presidente de la Comisión Insular y del decreto del Honorable Mayor General Comandante del Departamento disponiendo en su vista que se le informe con urgencia por esta Suprema Corte, el Sr. Fiscal exponne lo que sigue: ".... usando de toda la llaneza e independen

cia que acostumbra, pero con todo el respeto debido a la Comi
sión Insular y la Secretaría de Justicia, manifiesta a la Cor-
te Suprema que considera inconveniente toda reforma de las Le
yes civiles, penales y de procedimiento de ambas clases, mien-
tras subsista el régimen militar y carezca la isla de perso-
nalidad política ante la Unión Americana y de Cámaras legisla-
tivas propias en que las reformas se propongan satisfaciendo
necesidades sentidas y opinión pública manifestada con insis-
tencia. En dichas Cámaras Insulares se debatirían las reformas
por Diputados y Consejeros elegidos por las clases sociales -
formadas así tanto por puertorriqueños como por continentales
residentes en el país, a quienes es natural interesen también
las leyes. Se funda el Fiscal en que ese temperamento es el -
que exige la buena filosofía a la que repugna que se legisle
para un pueblo con precipitación y por personas o colectivida-
des que aunque ilustradas no pueden abarcar todas las conse-
cuencias de los sistemas y de los preceptos que por sí mismo
adopten; se funda también en la Historia, que enseña a las na-
ciones que ensanchan sus territorios a respetar las leyes de
estos mientras no se las hayan asimiladas en sus costumbres, -
porque las leyes son de lo que más se ama puesto que en ellas
se funda la vida, carácter y sentimientos. Y por último opina
el Fiscal que no solamente no conviene ahora el cambio de le-
gislación por los medios que se proyectan, sino que convendría
si fuera posible derogar cuanto se ha legislado en el orden de
lo civil, de lo penal y de sus procedimientos desde el día de

la ocupación americana hasta hoy, lo primero porque los males que se deploraban no eran de las Leyes sino de su mala aplicación práctica y lo segundo porque así lo estatuyó el Muy Honorable Mayor General Brooke, inspirado por la filosofía y - por la Historia en su notable Orden General Núm. 1 de diez y ocho de octubre último.

.....

En vista de todo y previa las oportunas deliberaciones los - Sres de la Corte Suprema dijeron: Evacuase el Informe de conformidad con el dictámen del Sr. Fiscal modificándolo en el - sentido de que en el supremo caso de estimarse que la reforma de la legislación secular del país sea conveniente, el proyecto, discusión y formulación se hagan en el mismo país oyéndose al Colegio de Abogados, a las Cortes de Justicia y a las - Secretarías respectivas para el mayor acierto en asunto tan - trascendental y que requiere de toda necesidad el conocimiento de las costumbres y de esas leyes que se trate de innovar, pero que en cuanto a lo ya innovado nada se haga por el peligro de los conflictos de derechos a que dará lugar el orden jurídico ya creado a la sombra de las reformas. Así lo proveyeron y firmaron los señores expresados al margen de que certifico: José S. Quiñonez, José C. Hernández, José María Figueras, Rafael Nieto y Abeille, Eduardo Acuña Aybar, Angel Acosta. Asistió el Fiscal Rafael Romeu".

Recibió el General Henry el anterior Acuerdo y por el momento -

desechó la idea propuesta por la Insular Commission. La sugerencia - de la Suprema Corte de Justicia pesó mucho en su decisión. La recomendación confidencial del alto tribunal fué publicada en El Territorio el 21 de abril (160). Allí se hizo un resumen del Acuerdo con el fin de informar al público, pero también de usarlo como argumento - ideológico en la campaña periodística que llevaba ese diario en contra de la americanización del Derecho puertorriqueño y defensa de su integridad. "Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia reunida en pleno, acordó informar al Honorable Mayor General Guy V. Henry, para que a su vez lo hiciera al Gobierno de Wáshington, que no debe hacerse reforma alguna por lo que respecta a la legislación del país, reformas que en su día harán las Cámaras de Puerto Rico, las únicas llamadas a hacerlas con plena competencia y conciencia de tan importante cometido. Acordó igualmente dicho Tribunal, que se manifestara si a pesar del acuerdo tomado el Gobierno de Washington creía de absoluta e imprescindible necesidad, hacer reformas en la legislación vigente, dichas reformas se llevarán a efecto de conformidad, con los informes del Colegio de Abogados, las Cortes de Justicia de esta isla y la - Secretaría del ramo". De esta manera se formaba una opinión pública, pero también los diarios recogían el sentido de la gran mayoría de - los puertorriqueños quienes consideraban sus tribunales y sistema de Derecho como parte de su asediada cultura y entendían que el momento era grave y delicado y que ameritaba estar alerta. No sólo se atentaba y se quería cambiar el ordenamiento jurídico puertorriqueño sino que también se planificaba en contra del uso de la lengua española y

se denigraba su cultura.

Las recomendaciones de la Insular Commission

Las recomendaciones de la Insular Commission causaron protestas indignación y preocupación. En las mismas se compara el sistema o - institución hispano-puertorriqueña con el que opera en Estados Unidos y usualmente se llega a la conclusión de que el primero está atrasado, es pomposo, caro y antinorteamericano y por ende malo y necesita do de ser cambiado por el "método y progreso norteamericano". Examinemos brevemente las recomendaciones referentes al ordenamiento jurídico e instituciones. Al narrar como era entonces el sistema judicial lo compara con el de un Estado norteamericano y concluye que la Corte Suprema de Justicia tardaba más en decidir una sentencia que lo que entonces empleaba un juzgado de policía o paz norteamericano en varias decisiones, y así por el estilo. Al tratar de los notarios, los encuentra excesivamente caros y el procedimiento muy formal. Recomendación: "Las personas interesadas en bienes raíces y venta de propiedades esperan de nosotros que recomendemos la corrección inmediata de estos obstáculos agobiantes y la adopción del sistema norteamericano de transferencia y archivo de los bienes raíces". Cuando se expresa de los testamentos termina la Insular Comisión proponiendo lo siguiente: "Todo el sistema de archivo de testamentos debe ser cambiado para requerir solamente el pago de costas razonables y confirmarlo a los - métodos que están ahora en práctica en los Estados Unidos". Sobre la organización judicial su posición es por supuesto que se conformen y

copien los sistemas judiciales de los Estados norteamericanos. Al referirse al nuevo tribunal supremo entiende que debe de estar compuesto por algunos magistrados que conozcan el "viejo derecho" porque pueden darse situaciones donde haga falta recurrir aquel derecho. Los demás magistrados serán conocedores del nuevo Derecho. Recomienda que se designe un "Attorney General" norteamericano. (161)

Además de los tribunales arriba expresados la Insular Commission, recomienda que se establezca un sistema de Tribunales Federales, con iguales poderes y jurisdicción a los que existen en los Estados Unidos. "Nosotros recomendamos el establecimiento de tres de tales tribunales de los Estados Unidos, uno de San Juan, uno en Ponce y el -tercero en Mayagüez o Aguadilla.." "Estos tribunales federales tendrán jurisdicción original concurrente con los otros tribunales de la isla, en lo civil, criminal y asuntos de herencia; y jurisdicción exclusiva en las controversias que envuelvan asuntos federales o de los Estados Unidos, como en los Tribunales federales de los Estados Unidos que funcionan en los Estados norteamericanos, autos de habeas corpus, interdictos y el auto de "mandamus". Luego recomienda que las decisiones y sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos sean obligatorias para los tribunales puertorriqueños y que sea la última instancia de Puerto Rico la de ese Tribunal Supremo antes mencionado. "El idioma oficial -según la Insular Commission- de los tribunales es el inglés, pero temporariamente las alegaciones y el procedimiento en los "Porto Rican Courts" puede ser en español y en los Tribunales Federales y en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en idioma inglés. Cada tribunal tendrá un intérprete" (162)

Culminan las recomendaciones de esta comisión norteamericana en Puerto Rico con la siguiente:

"... entendemos que es imperativamente necesario que ellas - tengan buenas leyes y procedimientos siguiendo los lineamientos de nuestro sistema.

El sistema de Derecho y procedimiento, aún cuando no es todo malo, difiere tan radicalmente en principios y estructuras así como en métodos y formas de práctica del nuestro, que a nuestro juicio el mejor modo de americanizar a Porto Rico es dándole el beneficio completo de nuestro sistema jurídico total y no tratar de insertar reformas parciales al sistema jurídico español".

.....
La única excepción a esta opinión viene de aquellos pocos que creen tener un derecho inherente a ocupar cargos y dictar las leyes y la política de la isla, llamada auto-gobierno.

.....
Por lo tanto, nosotros recomendamos que todas las leyes españolas, códigos civil y penal, códigos de enjuiciamiento civil y criminal y todos los reales decretos aplicables a Puerto Rico sean suprimidos y dejados de lado, y en vez de ellos se adopte el Derecho anglo-sajón de los Estados Unidos según está regulado por los Tribunales de allí, excepto cuando se modifique por las leyes federales norteamericanas.

Que la Constitución y leyes de los Estados Unidos localmente

aplicables tengan el mismo efecto en Porto Rico, como en cualquier parte de los Estados Unidos.

Que el derecho anglo-americano y los estatutos de los Estados Unidos constituirán el derecho del país, excepto que sea modificado o cambiado por órdenes y la autoridad del Presidente - de los Estados Unidos o el Congreso".

La reacción del país ante las recomendaciones de la Insular Commissions fueron de protesta y repulsa. El General Kennedy y el Juez Curtis también manifestaron al diario The San Juan News la deseabilidad de sustituir los Magistrados y Jueces puertorriqueños por funcionarios judiciales norteamericanos. No tarda en enviarse una Exposición al Presidente McKinley (163), donde todos los Magistrados, Jueces y funcionarios del poder judicial de Puerto Rico protestan de la proposición de los miembros de la Insular Commission.

"Señor:

El Secretario de Justicia del Gobierno Militar de Puerto Rico, en su propio nombre y en nombre y representación de los Presidentes y Magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Justicia de San Juan, Ponce y Mayagüez, de todos los jueces de instrucción y 1ª Instancia, de los Jueces Municipales, Registradores de la Propiedad, Abogados, Procuradores, Notarios, Secretarios y auxiliares de los Tribunales de esta isla, os dirige esta exposición a vos que representais el poder supremo en la patria americana.

El General Kennedy y el Juez señor Curtis, pertenecientes a -

la Comisión Insular enviada por el honorable señor Secretario de la Guerra, según las manifestaciones que aquí han hecho, tal vez os informen que sería oportuno el enviar jueces de otros territorios de la Unión a los Tribunales de Puerto Rico.

.....

Se producirán además hondas y trascendentales perturbaciones en la vida de esta sociedad.

.....

Los Jueces de los Estados Unidos que se envíen a Puerto Rico no podrán llenar su misión, aunque vos cambiaseis con la rapidéz del rayo todas nuestras leyes y nos diéseis las vuestras.

.....

¿Es que juzgan faltos de condiciones a los puertorriqueños para administrar la justicia en este país?

Puerto Rico, 19 de abril de 1899

Herminio Díaz Navarro, Secretario de Justicia" (164)

Al día siguiente el Ldo. Díaz Navarro envía una carta oficial al General Henry comentando los acuerdos y recomendaciones de la Insular Commission. Allí el Secretario de Justicia manifiesta: "La Insular Commission vino a estudiar las necesidades de este país y se va sin haberlas podido hacer. No es posible conocer el carácter, los medios, las costumbres, la legislación de un pueblo en unos pocos días, aún cuando dicho estudio se haga en buenas fuentes..." "El General Kennedy está equivocado al afirmar que el plan de reformas de nuestro Derecho, que he propuesto a usted, no debe ser llevado a cabo. El Ge

neral Kennedy desea que estas reformas se hagan en Wáshington; sin conocer ninguna de las leyes puertorriqueñas se ha permitido informar sobre las mismas..." (165)

También el Dr. Cayetano Coll y Toste, Secretario de Hacienda de Puerto Rico escribe al General Henry sobre las recomendaciones de la Insular Commission. Su carta oficial tiene fecha de 20 de abril de 1899 (166). "Los miembros de la Insular Commission han venido guiados por sus buenos deseos, pero no están familiarizados, ni conocen los usos y costumbres, la historia, el Derecho y reglamentos de la isla y aún el idioma español, que es clave esencial para no estar a merced de un intérprete bueno o malo..." "La segunda entrevista tuvo lugar en mi oficina, y los comisionados trajeron consigo, como su intérprete, al Sr. Roberto H. Todd, un político. Tuve la impresión de que la entrevista sería corta y poco satisfactoria; así fué, duró media hora..." "Soy de opinión, y lo declaro leal y honestamente, que si el Gobierno de Washington está por dictar nuevo Derecho para mi querido país, únicamente basándose en la información de los miembros de la Comisión, se encontrará con un lamentable fracaso".

En vista de las protestas y consejos contrarios a las recomendaciones de la Insular Commission el General Henry decidió por el momento en contra del proyecto de sustituir el Derecho puertorriqueño por el "Common law" norteamericano. Sin embargo, algunas de las sugerencias de la Insular Commission fueron luego puestas en vigor, no tanto por razón de haberlas hecho la tal junta, sino porque figuraban en los planes norteamericanos para Puerto Rico, e. g. el estable

cimiento de tribunal federal en San Juan. La única persona que feli
citó a los miembros de la comisión norteamericana, de que tengamos
noticia, fue el Sr. Roberto H. Todd, (167) quien escribió una obse-
quiosa carta personal al General Robert. P. Kennedy.

Como hemos manifestado anteriormente el informe preliminar (168)
de la Insular Commission fue entregado al Secretario de la Guerra,
Mr. Alger en mayo de 1899. Continúan los tres miembros de comisión
trabajando en su informe final y en los prometidos Códigos basados
en el "American Common Law" y que según su recomendación sustituirán
el Derecho puertorriqueño (169). El 9 de junio de ese año la impren-
ta del Gobierno federal publica el informe preliminar, aunque no lo
manifiesta (170). El mismo comienza a circular en los Estados Unidos
y Puerto Rico. Una de las personas que lo lee con mucho interés es
el nuevo Obispo de Puerto Rico, el sacerdote norteamericano, Monseñor
Blenk, quien por entonces se encontraba en Washington (171). El Obis-
po Blenk suscribe una carta junto al Arzobispo de Nueva Orleans, M.
R. Plácido Luis Chapelle, Delegado Apostólico para Filipinas, Cuba
y Puerto Rico dirigida al nuevo Secretario de la Guerra Mr. Elihu
Root (172). El tenor de la misma es el informe de la Insular Commis-
sion. En esta larga carta los dos eclesiásticos critican duramente
el Informe, especialmente los fundamentos y las recomendaciones. Nos
interesa sus comentarios sobre el Derecho puertorriqueño. En cuanto
al proyecto de códigos basados en el "american common law" que la -
comisión recomendaba para sustituir el Derecho hispano-puertorrique-
ño los Obispos Blenk y Chapelle sostienen que hacer esto es "necio,
impracticable y tiránico". Entienden que los miembros de la Insular

Commission "están totalmente incapacitados para calibrar la situación", luego añaden:

"Ellos no conocen las necesidades ni el carácter del pueblo puertorriqueño. Forzar en Puerto Rico unos Códigos completos hechos a priori, es maltratar a un pueblo que esta bien dispuesto hacia nosotros, pero con tal medida, inevitablemente se enajenará para siempre.

La gente indudablemente está deseosa de buenas leyes, tales como las que nosotros tenemos; pero cada Estado tiene sus leyes, las cuales al igual que las leyes federales son un sistema que se ha desarrollado lentamente. Sería una locura cambiar de un golpe todas las leyes, o casi todas las que están en vigor. El pueblo tiene ciertamente el derecho a participar en la preparación de las leyes que le han de gobernar".

Indudablemente este consejo de los dos Obispos, junto a las cartas y protestas del Secretario de Justicia Lodo. Díaz Navarro, la opinión de la Suprema Corte de Justicia, las campañas periodísticas y la agitada opinión pública evitaron que se cambiara el Derecho puertorriqueño. Como consecuencia de esto, el nuevo Secretario de la Guerra Root, archivó los Códigos propuestos por la Insular Commission. Los miembros de la comisión continúan insistiendo. El Comité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebra audiencias públicas en San Juan a principios de 1900. El 17 de enero Mr. Henry C. Curtis, miembro que ha sido de la Insular Commissión testifica sobre lo que él entiende conviene a Puerto Rico (173).

Al terminar se queja de que el Informe final de la Insular Commission tenía unos Códigos de Derecho para sustituir el Derecho vigente en Puerto Rico y que el mismo estaba en la oficina del Secretario de la Guerra Root sin imprimir. Que la excusa que se ofrecía era la falta de fondos, pero que el Senador Foraker había dicho que la publicación fue detenida por el Secretario Root porque desaprobaba la recomendación de la Insular Commission de que se sustituyese el Derecho puertorriqueño por el "Common Law". Nadie prestó atención a Mr. Curtis y los Códigos nunca se publicaron. Recordemos la opinión del nuevo Secretario de la Guerra y distinguido jurista Mr. Root sobre la recomendación de la Insular Commission: "Por supuesto yo nunca consideré la idea absurda de imponer el "common law" a estas comunidades que se han desarrollado bajo Códigos basados en el Derecho Civil".

Por supuesto no todos los puertorriqueños se manifestaban opuestos a las recomendaciones de la Insular Commission. Un sector de la sociedad se agrupó para fundar el Partido Republicano Puertorriqueño. A principios de mayo circula impreso el Manifiesto de esa colectividad política cuya base o punto número 13 titulado "Justicia" dispone lo siguiente: "13. Queremos el establecimiento del sistema de Administración de Justicia americano, que garantiza a cada ciudadano el imperio de la justicia mediante un juicio libre, recto, completo y rápido según las leyes del país". (174) El 2 de mayo de 1899 el diario El Territorio publica una serie de artículos donde comenta el referido manifiesto. El que nos interesa comenta el punto anteriormente expuesto: "El Partido Republicano. Analicemos las bases de —

nuestra constitución. Por la Base 13 que dedicais a la "Justicia" empleais el mismo sistema de indecisión y vaguedad que el empleado en la Base 9 respecto a la contribución. Si algo tiene Puerto Rico son "tribunales" y "legislación". Tribunales existen en los Estados Unidos, pero nuestra "legislación" civil, criminal, procesal en sus diversos ramos, hipotecaria y mercantil, no lo duden los firmantes de ese manifiesto es superior a la de cualquier Estado de la Unión americana. Algunos de los que firman ese manifiesto lo saben y tanto lo saben, que en el seno de la amistad no tienen inconveniente - en decirlo. No diremos por esto, que no haya que reformar algo, y - hasta que suprimir algo igualmente, pero ¡por Dios! que nos expliquen esa "charada" del "sistema de justicia americano"... Puerto Rico posee cultura y educación política, digan lo que digan los detractores de la raza latina y los aduladores de la raza sajona" (175)

Continúa la campaña del vocero periodístico de los intereses norteamericanos en Puerto Rico. Nos informa El Territorio que: "The San Juan News insiste nuevamente en sus ataques a la Administración de Justicia y cita el informe del General Grant. Tal parece que el San Juan News tiene carta blanca para injuriar impunemente no sólo al pueblo puertorriqueño sino a sus instituciones más notables" (176)

El Lcdo. Luis Muñoz Morales, abogado y primer Censor del Colegio Notarial de Puerto Rico, escribe un folleto contestando las conclusiones de la Insular Commission sobre la notaría y los registros de la propiedad. El mismo se titula THE NOTARIES OF PORTO RICO AND THE REPORT OF THE AMERICAN COMMISSION, REFUTATION OF ERRORS. Comienza el distinguido jurista: "Luego de leer el Informe oficial rendido

al honorable Presidente de los Estados Unidos por la Comisión especial nombrada y tal efecto, nos consideramos obligados a llamar energicamente la atención sobre el contenido de ese documento con relación a los funcionarios encomendados a la ejecución de documentos. No es raro que la ignorancia, la pasión o la mala fé, probablemente con una visión interesada pueda causar que las noticias más extravagantes sobre este país lleguen a círculos gubernamentales norteamericanos, pero es verdaderamente sorprendente que una Comisión Oficial, compuesta de personas que se creen a sí mismas serias y entendidas pueda incurrir en inexactitudes de tal peso y errores de tal magnitud como las contenidas en ese Informe, demostrativo de una ignorancia inexcusable sobre las materias a que se refiere". Luego discute una a una las conclusiones sobre notaría y registro de la propiedad y las refuta. Termina manifestando: "Nuestro Derecho, nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestras costumbres no son tomadas en cuenta por ellos; poco les importa que nuestras leyes obedezcan un plan científico y reflejen la forma de ser de la población, los comisionados norteamericanos encuentran todo censurable, todo es considerado defectuoso, únicamente porque es diferente a las prácticas que conocen". Más adelante dice: "nuestro Derecho es criticado sin haberse dado el trabajo de leerlo, cuando ellos deben saber que estas leyes, a pesar de los defectos naturales a todos los trabajos humanos, están juzgadas, especialmente en asuntos civiles, como unas de las mejores en el mundo..." Cayey, 5 de agosto de 1899.

El 9 de mayo de 1899 es relevado el Gobernador Militar Guy V. Henry y le sustituye el Brigadier General George W. Davis.

Gobierno del General George W. Davis, 9 de mayo de 1899 a 1 de mayo de 1900.

Establecimiento del United States Provisional Court

El ambiente social en la isla con relación al Derecho y tribunales puertorriqueños y la colonia de abogados y residentes norteamericanos nos la ofrece el General Davis en su informe oficial al Departamento de la Guerra. En el mismo encontramos una de las causas del por qué se estableció un Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico. Esta será siempre convalidada y no perderá su vigencia. Manifiesta el Gobernador Militar que:

"Muchos ciudadanos de los Estados Unidos residían en Porto Rico, y a veces eran partes en pleitos judiciales o sujetos de medidas punitivas. Ignorantes de las leyes locales y el procedimiento, el cual caracterizaban de injusto, cruel, ultrajante, atroz o bárbaro, no sorprende que aquellos objetaran el tener que arriesgar su vida o propiedades en los tribunales nativos. Sin embargo, después que cesó el estado de guerra no había otros tribunales que pudieran determinar legalmente sus causas o pleitos. Fueron numerosas las comunicaciones al Gobernador Militar para que "barriera" estas objetables leyes y tribunales y las sugerencias de nativos y americanos residentes en la isla para que se enmendara, suspendiesen o aboliesen estas ofensivas disposiciones fueron muchas y urgen

tes, y algunas no sin razón. Se insistía que toda esperanza de regeneración industrial de la isla sería fútil a menos que los extranjeros colaborasen con los habitantes y suplieran - capital en grandes cantidades para la inversión y desarrollo de los recursos dormidos, que constituyen una inmensa riqueza potencial, pero se manifestaba, "el capital no vendrá mientras no se le asegure otra protección que las ofrecidas por las leyes locales... Los norteamericanos no pueden o no quieren entender esas leyes y el procedimiento existente. Demandan el juicio por jurado, así como los privilegios del recurso de Habeas corpus..." (177).

Otro contemporáneo de los acontecimientos también norteamericano, nos ofrece una visión similar a la anterior del General Davis. Me refiero al jurista Mr. Leo S. Rowe, quien vivió en Puerto Rico a principios de siglo. Su comentario es el siguiente:

"Para la masa de americanos residentes en la isla y especialmente tratándose de abogados, todo el sistema de leyes y de gobierno, de instituciones públicas y privadas era malo simplemente porque era diferente del nuestro. Todo cuanto no se conformaba con nuestro sistema no sólo no era americano sino antiamericano. El abogado de Massachusetts deseaba el sistema de Massachusetts, el abogado de Carolina del Sur, el sistema de Carolina del Sur, y así... El sistema (jurídico puertorriqueño) fué condenado porque era diferente al nuestro. El único modo de hacer americanos a los puertorriqueños, se arguyó,

era dándoles, sin tardanza, el sistema de Derecho de uno de nuestros Estados. "Este es el modo que lo hacemos en los Estados", se tuvo como argumento suficiente para tratar de con vencer a cada nativo" (178).

Además de estos argumentos, pesó también en los planes para establecer dicho tribunal federal, el ejemplo que podía ofrecerse administrando el Derecho anglo-americano en Puerto Rico y la seguridad que ofrecería un tribunal norteamericano a las grandes corporaciones que por entonces comenzaban a entrar a Puerto Rico.

Continúa la polémica y la situación tirante con relación a la administración de la justicia y el Derecho puertorriqueño. El diario The San Juan News vuelve a intervenir, esta vez con un editorial en su edición del 20 de mayo: "Comentario Editorial". Venga una Audiencia americana. Eso se necesita más que cualquiera otra cosa. Si esto se preguntara mañana al pueblo de Puerto Rico, todos con excepción de los jueces españoles dirán: Venga la Audiencia Americana" (179). Inmediatamente contesta el combativo diario El Territorio:

"En estos últimos días venía laborándose, y se afirmaba como cosa hecha la constitución de Audiencias Americanas. Del rumor y del comentario se ha ido a la afirmación en la prensa.

.....

Habiendo americanizado la instrucción pública en Puerto Rico, suprimiendo el Instituto Civil y la Escuela Normal, sustituyendo a los maestros españoles (puertorriqueños), por maestros americanos, no es extraño que se pretenda y desee reem-

plazar las Audiencias y Jueces españoles (puertorriqueños) por Audiencias y jueces americanos.

Este es el deseo de The San Juan News, de sus colaboradores o inspiradores....

.....

Americanizada la instrucción pública, se pretende americanizar la Administración de Justicia.

The San Juan News, Mr. Smith, socio del Ldo. Landrón y el - Partido Republicano, desean y laboran por la americanización de la Justicia en Puerto Rico" (180)

El Mayor Sharpe inmediatamente que arriba el nuevo Gobernador Militar pone en su conocimiento los planes para establecer un Tribunal Provisional de los Estados Unidos. El General Davis le autoriza a - continuar con estos planes (181). La situación jurídica de las Comisiones Militares se hace insostenible. La Orden General Núm. 67 de 24 de mayo de 1899 dispone que: "Los Jueces de Instrucción y Cortes de Justicia de la isla conocerán en adelante de todas las causas criminales hoy pendientes de fallo' ante las Comisiones Militares, que a su jurisdicción traspase este cuartel General por conducto de la Secretaría de Justicia" (182). En este momento cesan las Comisiones Militares y su jurisdicción especial. Siete días después se dicta la Orden General Núm. 71 de 31 de mayo de 1899 que establece el Auto de Habeas Corpus (183) en Puerto Rico, sin embargo el mismo no tiene validez para las autoridades de los Estados Unidos. Ya es de público conocimiento que se creará un tribunal especial norteamericano que

lesionará la jurisdicción y competencia de los tribunales puertorriqueños. El dirigente obrero D. Santiago Iglesias escribe en la primera plana de El Porvenir Social de 31 de mayo de 1899: "De la Corte de Justicia... Ya para suerte, ondea gallarda en las almenas de San Juan la bandera de las estrellas, bajo cuyo gobierno se hace - justicia cuando se demanda en forma; así es que estoy resuelto y - tranquilo a esperar la última palabra de la justicia de origen "español y político", para invocar la primera de origen americano, que augusta y santa no consentirá jamás que los Magistrados sirvan a la manera antigua los intereses bastardos de despreocupados politicastros, que atropellaban los inalienables derechos de los ciudadanos. Por suerte las Cortes americanas, con leyes federales no se harán esperar, y el pueblo después estará seguro que en el templo de la - Justicia no podrán perdurar nunca las mezquinas rencillas de la política infame..." (184)

El proyecto de Orden General para crear el Tribunal Provisional de los Estados Unidos es sometido por el Mayor Sharpe al Gobernador Militar General Davis. El Secretario de Justicia, Lic. Herminio Díaz Navarro, se pronuncia en contra de la creación de la mencionada institución judicial federal y convence al Ldo. Juan Hernández López, en este momento republicano, para que por razones patrióticas le ayude en esta empresa. Igual hacen los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la gran mayoría de los Jueces de los demás tribunales. Los periódicos El Territorio, La Democracia, La correspondencia de Puerto Rico, La Bomba, El Liberal envían sus representantes a una Asamblea que cita el Ldo. Díaz Navarro en los locales de la Secre-

taría de Justicia. Estaban presentes los miembros de la Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. El País, órgano periodístico del Partido Republicano manifiesta en su editorial "Doble Juego (185), "Se cree necesaria la instalación de una Corte Federal. Los liberales ponen el grito en el cielo; el Secretario de Justicia reúne un cónclave, discuten, hablan de dignidad, de patriotismo, cruzan telegramas, se escriben protestas, se celebran conferencias de dos y tres horas en la Fortaleza, pero el resultado es la orden estableciendo la Corte". También El Diario de Puerto Rico (186) informa que: "Al mismo tiempo, Don Juan Hernández López, uno de los concurrentes a la Junta de funcionarios y abogados reunida con tal motivo en la Secretaría de Justicia, expidió un telegrama a Don Luis Muñoz Rivera, que se encontraba en Washington, con una misión patriótica, para que el ilustre hombre público representara al poder ejecutivo de la Metrópolis sobre la instauración de la Corte americana, anti constitucional y en grado sumo opuesta a los intereses y a la situación del país". "Pero, contra el dictamen del Secretario de Justicia, de la Suprema Corte y de los principales abogados de la isla, contra la voluntad colectiva de todo el país, se estableció, por la Orden General 88, la Corte Provisional de los Estados Unidos..."

El 20 de junio de 1899, un grupo de abogados y hombres de negocios norteamericanos y algunos puertorriqueños también enviaron una petición al Gobernador Militar Davis sobre diferentes aspectos de la sociedad puertorriqueña: Nos interesa el primer tema, pues nos demuestra las diferentes influencias que en este momento se ejercen:

"Administración de Justicia: A las diversas comisiones enviadas por los Estados Unidos nuestra principal recomendación ha sido que tribunales norteamericanos sustituyan los aquí - existentes. Así lo demandan los intereses comerciales.

Le hemos dicho lo mismo al Dr. Carroll, a la Insular Comisión, al Presidente McKinley, últimamente a usted y también al General Henry.

Le hemos manifestado a los representantes de nuestro nuevo gobierno que las condiciones aquí no pueden ser peor... que el Derecho de la isla es español y opresivo, y que los tribunales no pueden ser mejores que el Derecho.

Nada hay más tímido que el capital y no vendrá donde haya la más mínima duda de la validez de los títulos y la seguridad de los préstamos, escrituras e hipotecas.

Existen también otras consideraciones para solicitar un nuevo sistema de Derecho y Jueces y tribunales norteamericanos. La corrupción oficial está integrada en el carácter y hábitos de los españoles
..... las presentes leyes españolas son muy deficientes, a pesar de que los abogados españoles, comenzando por el actual Secretario de Justicia, manifiesten lo contrario" (187)

El Territorio y El País anuncian la próxima inauguración de la Corte Federal de Estados Unidos en Puerto Rico en sus ediciones del miércoles 28 de junio de 1899 (188). El editorial de El Territorio de su edición de 30 de junio de 1899 está dedicado a este acontecimiento. El mismo se titula, "La Corte Provisional" y reza así:

"Mañana se inaugurará este tribunal, con las formalidades - del caso. Lo decíamos ayer. Vemos como a pasos agigantados se consuma la ruina de las instituciones puertorriqueñas. Va mos a la absorción, a la anulación, sin que nos asista otro derecho que la inútil lamentación, que la protesta platónica y estéril.

La Corte comienza a funcionar mañana, el principio del fin - judicial de Puerto Rico. Arrebata a nuestros tribunales gran parte de su jurisdicción, y será un semillero de conflictos jurisdiccionales en el porvenir.

No es este desapoderado afán de hacer desaparecer nuestras - leyes y costumbres, de anular y borrar la personalidad jurídica de este país, lo que teníamos derecho a esperar los puer torriqueños

..... se crea un régimen de privilegios, una división en los factores sociales, con el establecimiento de esa Corte, de lo que resulta una ley para los nativos y otra para los continentales, un tribunal para nosotros y otro para ellos.

Habrá -ya lo sabemos- quien aplauda, quien celebre, quien festeje esa absorción. Habrá quien coopere a la anulación de - Puerto Rico, aunque esto comporte su propia anulación. La severa historia juzgará a esos patriotas.

Nosotros, en tanto, citados por la impotencia, veremos como se anula y se derrumba lo propio para dar lugar a lo exótico, sin poder oponer otra cosa que nuestra estéril protesta". (189)

La Gaceta de Puerto Rico de 1 de julio de 1899 (190) publica la Orden General Núm. 89 de 27 de junio, creando la "Corte Provisional de los Estados Unidos para el Departamento de Puerto Rico".

La razón para su establecimiento es expuesta en la sección I:

"En vista del creciente volúmen de casos que exigen resolución judicial y que son extraños a la jurisdicción de los tribunales insulares, tales como el contrabando en contravención de las leyes de aduanas, robo de bienes pertenecientes a los Estados Unidos, controversias entre ciudadanos de diferentes Estados y de naciones extranjeras, violación de las leyes postales de Estados Unidos, etc., etc., y en virtud de autorización del Presidente de los Estados Unidos, transmitidas bajo fecha de 14 de abril, 1899, por conducto del Secretario de la Guerra, en ejercicio; y después de una detenida consulta con la Corte Supremo y abogados de la isla, por la presente se establece una Corte Provisional de los Estados Unidos para el Departamento de Puerto Rico" (191) (énfasis suplido)

En el proyecto original (192) que se preparó, el Mayor Sharpe, no incluyó lo subrayado, esto es, la oración, "y después de una detenida consulta con la Corte Suprema y abogados de la isla", la misma se incluye para paliar la oposición que hay sobre el establecimiento de la Corte Provisional. Un contemporáneo, el Lcdo. Rodrigo Díaz manifiesta al respecto: "La Corte implantada por el Gobierno absoluto de Puerto Rico, después de una detenida consulta con la -

Corte Suprema y abogados de la isla, como dice el decreto de 27 de junio, sin añadir que la "detenida consulta" fue contraria a la instauración del exótico tribunal" (193) (énfasis suplido en el original). En realidad, a pesar de la larga lista de situaciones para las cuales se decía que era necesario un foro judicial federal en Puerto Rico, en ningún territorio de Estados Unidos existía tal tribunal. Al respecto se manifiesta oficialmente el "Attorney General of Porto Rico", Mr. James H. Harlan en una Opinión de 11 de marzo de 1903, dirigida al Consejo Ejecutivo de Puerto Rico (194):

"La Corte Federal de Puerto Rico, por ejemplo, está abierta a los ciudadanos de Puerto Rico en los casos procedentes, mientras que en los territorios organizados no hay cortes federales" (énfasis suplido)

Por supuesto que Puerto Rico en el momento que nos ocupa, julio de 1899, no es un territorio organizado, pero tampoco es territorio bajo la ley de la guerra. No es el caso de la Louisiana, cuando se establece allí un Tribunal Provisional de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión de 1865. Está vigente en Puerto Rico un Tratado de Paz, ratificado y promulgado. ¿Por qué entonces se establece dicho Tribunal federal en Puerto Rico? la sección IV dispone que sus decisiones seguirán los principios del "common law and equity" establecidos por las Cortes de los Estados Unidos. En la sección -- VIII se dispone lo siguiente:

"VIII. A fin de definir con más claridad ciertas ramas correspondientes a la jurisdicción criminal de la Corte Provisional, por la presente se dispone que abarcará y será exclusiva en

las siguientes clases de casos:

- 1.- Todos los delitos cometidos bajo las leyes estatutarias de los Estados Unidos.
- 2.- Delitos cometidos por o contra individuos extranjeros o americanos que no son vecinos de este Departamento, pero que se hallan de paso o viviendo temporalmente en él; o contra bienes de personas no vecindadas.
- 3.- Delitos contra la persona o hacienda de individuos pertenecientes al Ejército o Marina, los cuales delitos no competen legítimamente a la jurisdicción militar o naval, pero sin incluir las faltas leves de policía.
- 4.- Delitos cometidos contra extranjeros o por o contra ciudadanos de otro Estado, Distrito o territorio de los Estados, - residentes en este Departamento"

Luego en la siguiente sección dispone sobre los juicios de los súbditos españoles: "Los casos previstos en el artículo XI del Tratado de Paz entre los Estados Unidos y España, se resolverán de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo". Apparently los españoles por razón del referido artículo del Tratado de París quedaron exentos de la jurisdicción del Tribunal Provisional de Estados Unidos (195). En realidad, la Corte Provisional no lo interpretó de esa forma, pero el General Davis la desautorizó siendo desautorizado por Mr. - Elihu Root, Secretario de la Guerra.

En cuanto a la jurisdicción civil el novel tribunal tiene la siguiente competencia: "X. En las acciones civiles, cuando el montante

en controversia es de cincuenta dollars o más, todos los casos en - que sean partes cualesquiera de las clases de individuos enumerados en el párrafo VIII, o que los litigantes convengan en invocar su jurisdicción, serán presentados en la Corte Provisional". Luego añade que cuando los puertorriqueños sean parte o que la acción se origine en contratos que se celebren "de acuerdo a las leyes españolas o puertorriqueñas la Corte se ajustará en lo posible a los precedentes y decisiones de las Cortes de Estados Unidos, en casos análogos que hubiesen sido juzgados y resueltos en territorio anteriormente adquirido de España o Méjico, por los Estados Unidos" (196). En el artículo número XIV se reglamenta la admisión de los abogados puertorriqueños a la mencionada institución. Sin embargo, no se menciona en absoluto el proceso para admitir a los abogados norteamericanos. Esto - aparentemente se consigue cuando en el anterior artículo VI, se dice: "Los Jueces de la Corte Provisional ejercerán las mismas atribuciones que los de las Cortes de Circuito o de Distrito de los Estados Unidos". Una de las facultades inherentes a estos magistrados es la admisión de letrados al foro que presiden. Implícitamente el Mayor - Sharpe que preparó esta Orden General cuenta que los abogados norteamericanos serán los que regularmente practiquen allí pues en el artículo inmediato, el XV, dispone: "A todos los abogados que ejerzan en la Corte Provisional y no conozcan el idioma inglés, se les permitirá al solicitarlo, valerse de su propio intérprete, cuando se dirija a la Corte".

Son designados los siguientes funcionarios para la Corte Provi-

sional de los Estados Unidos: Mr. Hoah, B.K. Pettingill (197), Juez letrado, presidente; Mr. J.M. Keedy, como Fiscal (198) y como Jueces Asociados los Comandantes de caballería, Eugene D. Dimmisk (199) y - Earl D. Thomas. El Teniente Robert Alexander, Secretario y el soldado Samuel C. Bothwell, Alguacil jefe (200).

La inauguración de la Corte Provisional de los Estados Unidos se anuncia en la prensa para el día 1 de julio de 1899 en locales del edificio del Banco Territorial y Agrícola, calle Tetuán núm. 15 de - San Juan. El diario La Democracia (201) nos ilustra sobre los actos efectuados en la inauguración de la referida institución judicial.

"Varios fueron los oradores que hicieron uso de la palabra en inglés y español. Tocó a Mr. Sharpe el turno primero pudiendo sintetizarse su oración en las siguientes ideas: "La instalación de la Alta Corte Federal, es el paso de más trascendencia dado en el país en su camino de americanización... Mr Pettingill... proclamó la independencia de la Corte Provisional y dijo que sus actos y sus decisiones no pueden ser revisados sino por el más alto tribunal de los Estados Unidos ... El Cónsul de España D. Adolfo Martínez de Tudela, que había sido invitado para el acto, pronunció un discurso en inglés manifestando su agradecimiento por la invitación y las benévolas frases que habían emitido en honor de España, manifestando que había ido allí a felicitar a la Corte Provisional, porque necesitaba defender los intereses de la comunidad que representaba y que ya los veía ahora perfectamente garantizados. Hablaron también el Presidente de la Suprema - Corte y el Secretario de Justicia.

Las manifestaciones del Cónsul español Sr. Martínez de Tudela causan gran revuelo e indignación entre los puertorriqueños y españoles. El Territorio, de 4 de julio (202) publica un vibrante editorial en primera plana titulado "Aclare usted" protestando de esas palabras. Igual hacen otros periódicos de la isla. Un contemporáneo Rodrigo - Díaz nos ofrece su versión de lo ocurrido: (203)

"La Corte Provisional de los Estados Unidos se inauguró con pompa solemne; y el Cónsul español, que se había opuesto a la creación, fué el único representante diplomático que asistió a la apertura del Tribunal y pronunció su panegírico en inglés, para estar más en carácter, como si hubiera ido a cantar los primeros funerales, en Puerto Rico, de la lengua y del Derecho de Castilla. La Reina de España le trasladó a otro punto de - la América latina, para que aprenda como se perpetuan en el - continente la valerosa estirpe, el fecundo idioma, la santa - religión y el sabio derecho de su patria"

El incidente repercute en el Congreso de los Diputados en Madrid. Allí el Diputado, Conde de las Alámenas, interpela al Gobierno por - las actuaciones del Cónsul Sr. Martínez de Tudela en la inauguración del Tribunal Provisional de Estados Unidos (204). El Conde lee las - palabras del Cónsul y pide su destitución. Como sabemos, el Ministro de Estado ordena su traslado a Hispanoamérica.

Días después El Pregonero, hasta 1898 uno de los órganos de la colonia española de San Juan publica, "Saludémosle (al año económico) también por la implantación de la Corte Federal, por traernos savia

americana, pero savia sagrada por ser jurídica". El 3 de julio el combativo diario El Territorio publica un artículo titulado "Abjuración" contestando la oración de El Pregonero (205). "Nadie ignora - que hoy por hoy, es el periódico del cual reproducimos las anteriores líneas, el único que representa y defiende los intereses españoles en esta isla... Por virtud de la conquista implantó España en - Puerto Rico sus leyes, costumbres, religión e idioma. Siguen unas y otras informando y constituyendo nuestra manera de ser Estaba - reservado para españoles peninsulares el saludar como savia sagrada la implantación de un Tribunal que inicia la asimilación de aquel - Derecho y de aquellos procedimientos que implantó España. Nada justifica esta abjuración de algo que más que para nadie para ellos, - representa la entidad de la patria en toda su augusta majestad". Al día siguiente, 4 de julio (206), el Ldo. Antonio Sarmiento escribe una carta al Directo de El Territorio aclarando la posición de la colonia española de Puerto Rico en cuanto al comentario de El Pregonero. "No conozco ningún español peninsular que haya saludado ni como savia sagrada ni como ninguna otra cosa la implantación de la Corte Provisional... El Pregonero..... no se ha declarado hasta ahora periódico español. Conozco muchos españoles peninsulares que, en el su puesto de que esa Corte sea una rival de la actual administración de Justicia puertorriqueña, ven en ella una verdadera desgracia, porque comprenden que eso sería un paso gigante en la anulación del carácter de Puerto Rico y un lazo menos que nos ligaría con esta tierra".

El País (207) reprocha al Secretario de Justicia y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia su asistencia y participación en

los actos de inauguración de la Corte Provisional. A ello contesta El Territorio: (208)

"Ni incondicionales ni facciosos"

Si los señores Díaz Navarro y Quinones rindieron acatamiento a la creación de la Corte Provisional, no hicieron otra cosa, en su condición de Secretario de Justicia el uno, de Presidente de la Corte Suprema el otro, y ambos en su cualidad de miembros de un partido de orden, que respetar las órdenes emanadas del gobierno; por más que dichos señores, como puertorriqueños, deploraran la creación de ese organismo que merma la personalidad del país.

Y cuenta el mismo colega que el señor Díaz Navarro promovió reuniones, expuso observaciones en contra de la creación de ese tribunal, inició algo en suma, para oponerse a ello, intento que no le fue dable llevar a la práctica, porque el gobierno que nos rige es un gobierno militar, absoluto y supremo, y añadimos nosotros, irresponsable.

En cambio, el señor Rossy, abogado puertorriqueño, ha dicho - en la Asamblea republicana, en su afán de exaltar y poner por las nubes cuanto sea americano, que la restauración de la citada Corte Provisional representa para Puerto Rico efeméride tan gloriosa como el 4 de julio para los americanos".

La Corte Provisional continúa siendo un tribunal militar a pesar de su nombre y ostilo y la pretensión de asimilarla a los tribunales federales norteamericanos. Dos de sus Jueces Asociados son ofi-

ciales del Ejército, así como el resto del personal subalterno. La Orden General Núm. 103 de 18 de julio de 1899 designa a los Jefes - de los puestos militares de la isla como comisionados para efectuar las investigaciones previas, dictar órdenes de arresto, tomar declaraciones para la referida institución judicial.

El resumen de lo que significó la Corte Provisional de los Estados Unidos para los contemporáneos nos lo ofrece Rodrigo Díaz en su artículo Tratado de París - interpretaciones militares (209): - "Tribunal exótico, de jueces militares, que del país no entiende el idioma y tiene que oírlo, ni las leyes, y tiene que aplicarlas, aún cuando, en la mayoría de los casos, aplique leyes no promulgadas y procedimientos desconocidos en el país". Luego más adelante añade: - "No son puertorriqueños ni los jueces, ni el fiscal, ni el Secretario que la forman, ni el procedimiento a que se ajusta; sólo una cosa tiene del país, genuinamente del país, la Corte Provisional, el dinero que cobra". "La Corte Provisional, con jurisdicción mixta, que no es insular y administra las leyes y conoce de asuntos propios de la jurisdicción insular, que no es federal y administra las leyes y conoce de los asuntos jurisdiccionales de los Estados Unidos, la Corte Provisional debe ser disuelta, porque se instauró contra el espíritu del Tratado de París, de la Constitución de la República y de las leyes y de la isla".

Aparentemente se iba cumpliendo poco a poco la petición hecha - por el recién fundado Partido Republicano Puertorriqueño en el punto 13 de su programa o manifiesto político: "Queremos el establecimiento

del sistema de Administración de justicia americano". Los temores - de la opinión pública de que se cambie el sistema de tribunales y el Derecho puertorriqueños, por instituciones del "common law" norteamericano se va confirmando poco a poco. Antes ha sido la derogación de leyes e instituciones de Derecho, como por ejemplo la legislación sobre el matrimonio. Se introduce el divorcio y se cambia la ley por una norteamericana. Asimismo otras instituciones, esto se está haciendo por medio de Ordenes Generales. El establecimiento de la "Corte Provisional de los Estados Unidos", merma la jurisdicción de los Tribunales puertorriqueños; crea desconfianza en el funcionamiento - de éstos; introduce procedimientos extraños en un idioma extranjero desconocido por los habitantes de Puerto Rico y crea un foro especial y privilegiado, jurisdicción ésta que durante todo el siglo XIX fue combatida por los puertorriqueños como atentatoria de sus derechos. El sentir de la mayoría del país es recogido en la siguiente oración publicada en el artículo-editorial del diario El Territorio de 12 de julio de 1899 titulado, "La Corte Federal - Sentencias Pronunciadas" (210).

"Lo dijimos en otra ocasión, sólo cabe en nosotros los puertorriqueños la protesta esteril, y ante hechos que a nuestro - juicio oasen de lleno bajo ella, entendemos cumplir nuestro deber consignándola. De este modo conviene dejar demostrado en el futuro, que no todos los puertorriqueños se prestaron docilmente a una americanización que nos anula, y que además, - resulta un peligro para nosotros".

La afirmación de El Territorio no eran meras sospechas o palabras huecas. Veamos la opinión que tiene el Mayor Alfred C. Sharpe, Judge Advocate of the Depart of Porto Rico y el responsable de la -estructuración e instalación de la Corte Provisional de los Estados Unidos. La misma se encuentra en los documentos oficiales usados por éste, conocidos por los puertorriqueños (211), y que fueron publicados en 1900 y refrendados por el Gobernador Militar Davis. Allí el Mayor Sharpe manifiesta que: "La influencia de esta Corte está destinada a ser una potente agencia en la americanización de la isla y ciertamente es una de las mejores medidas instituídas desde la evacuación española" (212).

Desde el mismo momento de su instalación la United State Provisional Court comienza su tarea judicial. Celebra diariamente sesiones civiles, criminales, de equidad y ejecutivas. No sólomente celebró sesiones en San Juan sino también en Mayagüez, Ponce y Guayama. También se efectuó una reunión especial en la isla puertorriqueña - de Vieques. Según informes del "clerk", en adición a una gran cantidad de trabajo en Cámara la siguiente estadística informa su trabajo judicial: (213)

"San Juan:

| | |
|--|----|
| <u>Casos de equidad instituídos.....</u> | 19 |
| Pendientes | 13 |
| Concluídos | 6 |
| <u>Casos de common law instituídos ...</u> | 48 |
| Concluídos | 24 |
| Pendientes | 24 |

Casos criminales

| | |
|-------------------------|-----|
| Información registrada | 205 |
| Concluidos, "culpables" | 137 |
| Nole prosegui | 15 |
| Absueltos | 34 |
| Pendientes | 19 |

Ponce:

| | |
|-------------------------------------|----|
| <u>Casos de equidad instituidos</u> | 9 |
| Concluidos | 9 |
| <u>Casos de common law instit.</u> | 68 |
| Concluidos | 40 |
| Pendientes | 28 |
| <u>Casos criminales</u> | 35 |
| Concluidos, "culpables" | 19 |
| Nole prosegui | 10 |
| Absueltos | 2 |
| Pendientes | 4 |

Mayaguez:

| | |
|---------------------------|----|
| <u>Casos de equidad</u> | 4 |
| Concluidos | 4 |
| <u>Casos "common law"</u> | 38 |
| Concluidos | 32 |
| Pendientes | 6 |
| <u>Casos criminales</u> | 29 |
| Concluidos "culpables" | 18 |

Nole prosegui

4

Absueltos

7"

Cuatro juicios por asesinato se juzgaron en San Juan, dos en Ponce y uno en Vieques. Sólomente una sentencia de pena de muerte - fue impuesta siendo la misma conmutada por el Gobernador Militar a prisión perpetua. Los demás, resultaron con sentencias menores. Tal es el escueto y frío informe del "clerk" del United States Provisional Court. Ahora veamos el impacto y la opinión que sobre las sentencias y actas del Tribunal Federal Provisional antes mencionado, tiene el pueblo puertorriqueño. Rompe lanzas el diario El Territorio (214) destacando el hecho de una sentencia muy severa para el delito cometido por un humilde negro sanjuanero quien defendiendo su hogar agredió a un soldado norteamericano beodo. Luego de un análisis de los hechos y la sentencia manifiesta: "podremos decir que la Corte provisional no es un tribunal, sino un Consejo de Guerra sumarísimo, como los que funcionan sólo en tiempo de lucha entre los pueblos". El Tribunal federal provisional va caracterizándose poco a poco como una institución represiva. El Procurador D. José María Goicoechea se queja de esto en La Democracia (215). Dirige desde este diario unas preguntas a los abogados y procuradores, entre ellas, "¿No estáis viendo que se ha creado la Corte Provisional llena de atribuciones - y que el país desconoce sus responsabilidades?, ¿No estáis viendo que se está castigando con trabajos forzados a ciertos desheredados de la fortuna por lesiones leves?". En la ciudad de Mayagüez el periódico El Brujo (216) manifiesta el 13 de julio de 1899, "veremos qué

clase de sentencia le aplicará la Corte Provisional americana, al soldado que injustamente mató al anciano Cándido Rivera en Adjuntas. A la Corte Provisional se le presenta la ocasión de demostrar justicia, veremos cómo es la justicia americana!!".

El Imparcial (217), diario independiente, de Mayagüez informa sobre los planes de los republicanos de ese pueblo para agasajar la United States Provisional Court. "Los antiguos puros, hoy incondicionales americanos, han querido dar prueba de su entusiasmo por la instalación del Tribunal Provisional, y al efecto sacaron una música - con una bandera al frente y recorrieron las calles, reclutando gente que hiciese una manifestación popular, pero el pueblo se llamó andana, y no secundó los incondicionales deseos. Pésima impresión ha causado hoy la original ocurrencia de llevar a los acordes de la -- "Borinquena" a los señores que forman el Tribunal de la Corte Federal. Burdo resulta lo ocurrido". En el diario de la ciudad de Ponce, El Combate de 5 de agosto de 1899 se publica una carta del Sr. José Domínguez, un lector: "Habiendo leído en las columnas de su bien dirigido periódico las justas alabanzas a los magistrados del país en su artículo "Abajo la Corte Federal", no puedo menos que demostrar a usted la expresión de mi agradecimiento. Nunca, ni bajo ningún concepto se había visto aquí tanto extravío, castigándose al culpable y al inocente... Por este motivo, me uno a usted en solemne protesta, reconociendo con usted la injusticia de la justicia de la Corte Federal" (218). Escasos meses después -en octubre- La Democracia (219) también editada en Ponce publica la siguiente noticia: "Nuestro compañero en la prensa don Evaristo Izcoa (Díaz), ha sido puesto en pri-

sión por la Corte Federal Provisional, por causa que se le sigue - por un artículo titulado ANDUZE. ¿Pero no hay una circular por la - que se prohíbe la prisión preventiva? Entonces, ¿cómo está preso - Izcoa?". El periodista preso es Director de El Combate. Cada vez la prensa publica las sentencias de la United States Provisional Court ratificando su desconfianza en ese tribunal. Ejemplo de titular, el de La Democracia de 16 de diciembre (220): "Guayama, justicia provisional". Hasta el órgano oficial del Partido Republicano Puertorriqueño, El País, (221) simpatizante de dicho tribunal, pero que se caracteriza por la ausencia de noticias sobre el mismo, rompe su silencio publicando la siguiente nota: "Corte Federal. ¿Que pasó - ayer en la Corte Federal con un abogado puertorriqueño? Se dice que pretendió ser admitido a postular ante dicha Corte y ésta se reservó contestar más adelante sobre la admisión dando razones. Investigaremos el dato y daremos más detalles, con nombres y datos". De más está decir que en siguientes ediciones no aparece más referencia a este asunto. La Propaganda publica un suelto con este titular "Atropellos a diestra y siniestra, las sentencias federales provisionales" y La Democracia (222): "Abusos y atropellos -un caso inaudito- en la Corte Federal". El 6 de febrero de 1900 uno de los periódicos de San Juan, el Diario de Puerto Rico (223) publica una larga noticia titulada "Abusos y Atropellos -en la Corte Federal- un extranjero que no lo es".

La situación con respecto a la United States Provisional Court for the Department of Porto Rico se hace intolerable para la mayoría

de los puertorriqueños. La Democracia (224) de lunes 12 de marzo de 1900 publica un editorial donde recoge ese sentimiento. El mismo se titula "La Corte de Distrito".

"En este naufragio de todas las esperanzas a que asistimos, en que no sabemos a que tabla de salvación agarrarnos, ni ante qué poderes ni tribunales protestar, porque ya no sabemos donde empiezan nuestros derechos y donde acaban, sólo una esperanza nos alienta en nuestra vida de ciudadanos: los magistrados del país, esas Cortes de justicia, que cual la de Ponce tan alto han elevado en la isla el prestigio de la magistratura puertorriqueña; y hay que consignarlo así, sin ambages ni rodeos, aunque no agrade a los americanizados, a los que quisieron ver en cada distrito una Corte Provisional Federal Americana.

Podrán las autoridades y los centros gubernativos, atropellar el derecho de un ciudadano, escarnecer la justicia y cometer toda clase de desafueros, pero ese ciudadano puede acudir - por su honor y sus derechos a esas Cortes de justicia, compuestas de abogados del país que han hecho de la justicia un culto y de la misión que desempeñan una verdadera religión".

Desde su fundación, la United States District Court, ha ido poco a poco inmiscuyéndose en los asuntos de los tribunales puertorriqueños lesionando su dignidad y prestigio. Un ejemplo de ello nos lo ofrece el editorial de La Democracia de 5 de abril de 1900 (225). Se titula "Las Cortes Puertorriqueñas con la razón y el Derecho":

"A fines del pasado año el Lcdo. señor Guzman Benítez, en representación de D. Gregorio Cardona, promovió cuestión de competencia ante la Corte de Distrito de Ponce, para que esta requiriese de inhibición a la Provisional de los Estados Unidos; que venía conociendo de la quiebra del Señor Cardona promovida por varios de sus acreedores de nacionalidad española. La Corte de Distrito de Ponce aceptó la competencia y con arreglo al procedimiento de la ley civil requirió de inhibición a la (Corte) Provisional, contestando ésta que los tribunales nativos no podían invadir su jurisdicción y que sólo contestaba por cortesía y que esperaba que la Corte de Ponce no volviera sobre su acuerdo evitando así la posibilidad de que sufriera un menoscabo su dignidad". El asunto se decide meses después a favor del Tribunal de Distrito de Ponce y termina el referido editorial con el siguiente párrafo: "Así quedó la cuestión suscitada por el letrado señor Guzmán, hasta que la Gaceta del día 6 de este mes, con la Orden General Núm. 47, fijando que los españoles "están sometidos en lo civil y criminal a las Cortes Insulares, lo mismo que los puertorriqueños", vino a demostrar que los magistrados insulares supieron interpretar el Tratado de París y que en vez de sufrir menoscabo su dignidad, han evidenciado no necesitar ser continentales para saber pensar y discurrir para sostener con entereza su competencia jurisdiccional. Al felicitar a los magistrados de la Corte de Justicia de Ponce, lo hacemos también a todos los demás de la isla y abogados insulares, pues todos harán suyo el triunfo de la primera que es el triunfo de la Toga puertorriqueña".

Hasta el mismo momento de su abolición como consecuencia del ce

se del Gobierno Militar de Estados Unidos, la United States Provisional Court for the Department of Porto Rico, continuó ejerciendo su jurisdicción para disgusto de la mayoría de los puertorriqueños. El nuevo tribunal federal establecido por la llamada ley Foraker - en 1900 no paliaría este sentimiento, como veremos luego.

La política oficial sobre el Derecho Puertorriqueño.

El Presidente McKinley designó al abogado Mr. Elihu Root Secretario de la Guerra para que se hiciese cargo junto al Secretario de Justicia Mr. John W. Griggs de los asuntos de las nuevas posesiones. Root no tenía dudas de que lo que debía estructurarse era una política colonialista. No apoyo para Puerto Rico ni la unión con Estados Unidos como un Estado más, ni la ciudadanía norteamericana. Opinaba el nuevo Secretario de la Guerra que los puertorriqueños no tenían derechos que reclamar bajo la constitución norteamericana, puesto que los Estados Unidos poseían completa soberanía sobre las nuevas posesiones, únicamente limitada por el Tratado de Paz de París. Sin embargo, admitía, que tenían el "derecho moral de ser tratados por los Estados Unidos conforme a los principios de justicia y libertad que hemos expresado en nuestra Constitución" (226).

En su Informe Anual para el año fiscal que termina el 30 de junio de 1899 el Secretario de la Guerra Root establece la pauta política pública que entiende debe de aplicarse al Derecho puertorriqueño. (227) Es necesario consignarla lo más completa posible por cuanto como veremos luego dicha declaración de política pública fue puesta en ejecución y aplicada por la Comisión de Códigos designada por el

Presidente en 1900. Ahí está el origen de lo que luego sucederá con nuestro ordenamiento jurídico.

"Cual debe ser el tratamiento del Derecho de la isla y cuanto deben cambiarse las leyes que ahora regulan los derechos y conducta de los ciudadanos para confirmarlos a las ideas - prevalecientes entre el pueblo de los Estados Unidos? presenta poca dificultad real. El Código Civil establecido por España para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y en vigor al momento de la cesión, es un cuerpo de Derecho excelente, adecuado en lo principal y adaptado a las costumbres y condiciones del - pueblo (puertorriqueño). Debe mantenerse en vigor, con las - graduales modificaciones que la experiencia sugiera de tiempo en tiempo a los que actualmente estén encargados de su cumplimiento.

El problema no ha sido que el Derecho fuera defectuoso o vicioso sino que nunca ha sido administrado bien y honestamente. El curso de tal administración se dirigía naturalmente a enmiendas y mejoras, sobre las cuales el pueblo afectado por - ellas debe tener una voz. Las costumbres y las condiciones del pueblo que han de ser gobernados deben de ofrecer la verdadera base para el Derecho bajo el cual han de vivir, y cualquier intento de sustituir en esas islas, su Derecho por el sistema jurídico basado en la experiencia y características de una - comunidad de Nueva Inglaterra sería tanto opresivo como fútil. Para asegurar una buena administración de las leyes, será ne-

cesario efectuar cambios extensos en el Procedimiento judicial, y debe haber cambios materiales en el Derecho penal.

Las condiciones de vida son comparativamente simples, y ambos, el Derecho penal y los métodos de procedimiento, en primera instancia por lo menos, deben ser simples también.

Uno de los grupos de personas más capaces que se dedicaron a tal asunto en este u otro país, adaptaron las Leyes de Louisiana, que vivió largo tiempo bajo el Derecho español, a las nuevas condiciones que siguieron a la cesión de ese territorio a los Estados Unidos. El curso antes bosquejado se asemeja estrechamente el que ellos prepararon y siguieron con señalado éxito. Un rumbo igual fue seguido después de la adquisición del Bajo Canadá por los ingleses en 1763. La Provincia francesa estaba gobernada por las Leyes y ordenanzas de Francia y la costumbre de París, un sistema mixto de Derecho romano y franco. Por el Estatuto del 14, George III, el Derecho inglés fue introducido en asuntos criminales, y el Derecho privado civil fue dejado igual. El resultado parece que ha sido enteramente satisfactorio tanto a la población francesa de Quebec y al resto del Dominio que se gobierna bajo el Derecho inglés".

Efectivamente el esquema o política pública sugerida por el Secretario de la Guerra Mr. Root se basa en el tratamiento que se le dio al Derecho de Louisiana cuando pasó a la soberanía de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1803 (228). Las leyes y el Derecho español estaban vigentes desde que fueron establecidas por el Mariscal -

Alejandro O'Reilly en 1769 (229). Uno de los dos delegados o comisionados norteamericanos Mr. William C. C. Claiborne declaró vigente el referido cuerpo de derecho. Los abogados norteamericanos y franceses que se establecieron en Nueva Orleans, con escasas excepciones juristas de primer orden, se declararon a favor del Derecho español, autóctono del territorio. El antiguo delegado Mr. Claiborne, ahora Gobernador, abogado entrenado en el "common law", no entendía ni francés ni español, comenzó una campaña intensa para sustituir el Derecho español por el "american common law". Y hubiera triunfado en sus planes el Gobernador si no es por la oposición dirigida por el abogado Mr. Livingston. Luego de varios sucesos que no son necesarios narrar aquí la Legislatura del Territorio de Nueva Orleans, aprobó en 1806 una ley manifestando que el territorio sería regido por las leyes y el derecho romano-español. Claiborne vetó la ley y luego de varios incidentes la Legislatura aprobó una Ley para que se aprobase un Código Civil basado en el Derecho civil español. Se designó una Comisión Codificadora compuesta por un abogado entrenado en el "common law", Mr. Brocon y otro cuyos estudios habían sido los principios del Derecho civil francés. Mr. Moreau-Islet. Ambos trabajaron en el proyecto y el resultado fue un Código Civil, basado en el derecho civil francés según el Código de Napoleón. No se ha ofrecido nunca una explicación satisfactoria de por qué sucedió esto. Independientemente de la sustitución antes descrita se reconoció formalmente el Derecho civil en su versión francesa y no el "American common law", en cuanto al Derecho privado.

La Ley del Congreso de los Estados Unidos de 19 de marzo de 1804

estableció el Territorio de Orleans. La misma disposición declaró que los habitantes tendrían el derecho al Auto de Habeas Corpus, - al juicio por jurado, a la fianza (excepto en ciertos delitos graves) y la inmunidad de ser castigados en forma cruel e inusitada. Todos estos "derechos" son modificaciones al Derecho penal español que entonces regía en el territorio. Asimismo la Ley de 1804 autorizaba al Gobierno del territorio a decidir en los órganos locales el ordenamiento jurídico que se deseaba. Como antes manifestamos, la Legislatura no permitió la abolición del Derecho civil. En cuanto al Derecho penal y al procedimiento o enjuiciamiento criminal se manifestó por su sustitución por el "common law" o derecho anglo-americano.

La ley aprobada manifiesta que: "Todos los crímenes, ofensas y delitos menos graves aquí designados serán tomados y construidos de acuerdo y en conformidad con el Derecho común de Inglaterra, y que las formas de acusación, el método del juicio, las reglas de evidencia y la acusación de esos crímenes, ofensas y delitos menos graves serán procesados de acuerdo al referido Derecho común" (230). Esta era la experiencia histórica a que se refería Mr. Root. Aunque él no la menciona, el mismo esquema o política pública establecida y reconocida en el caso de la Louisiana se aplicó a la Florida. La Ley del Congreso para la administración de Florida de 30 de marzo de 1822 siguió el precedente de Louisiana. Sin embargo, como en el Territorio no había gran población española, el Consejo legislativo de Florida en una Ley de 2 de septiembre de 1822 (231) abolió todas las leyes y el Derecho en vigor y lo sustituyó por el Derecho Común de Inglaterra, con la salvedad de que ninguna ley británica respecto a los delitos esta-

ría en vigor en el territorio. Una ley posterior de 17 de septiembre estableció un Código penal. Volvieron a ser aplicados estos antecedentes en 22 de septiembre de 1846 cuando el General S. W. Kearney comandante de Nuevo México recién arrebatado a México promulgó un - Código Penal derogando el Derecho penal hispano-mexicano.

En cuanto al ejemplo ofrecido por el Secretario de la Guerra con Quebec, efectivamente, el Gobierno inglés únicamente sustituyó el Derecho penal y su procedimiento. El Derecho civil continúa siendo de origen francés (232). Procedió el Secretario de la Guerra aplicando los precedentes que conocía. Louisiana y Quebec, y no dudamos que la Florida y Nuevo México, ejemplos todos del mundo americano (233). No pesó en el pensamiento del distinguido jurista que la situación histórica, sociológica, lingüística, racial y cultural de Puerto Rico - era muy distinta a la de sus ejemplos (234). Sin embargo, cuando la Comisión codificadora establecida por la Ley Orgánica de 1900 llamada Foraker se reuna, aparentemente las instrucciones que tenían los dos miembros norteamericanos Mr. Rowe y Mr. Daly, ninguno oriundo o familiarizado con el Derecho civil del Estado de Louisiana, eran en el sentido establecido por Mr. Root. Sin embargo, a pesar de que el Presidente McKinley siguió las opiniones del Secretario Root casi al pie de la letra en su Mensaje anual al Congreso del 5 de diciembre de 1899, en cuanto a la política recomendada por el Secretario de la Guerra para el Derecho puertorriqueño no fue así. Manifiesta el Presidente McKinley que: "El sistema de Derecho civil ahora adoptado por el pueblo de esta isla es descrito por abogados competentes, que están familiarizados con él, como completamente moderno y científico, en lo

que se refiere a asuntos mercantiles internos, comercio, producción y derechos sociales y privados en general". No menciona para nada - el Derecho penal ni los de enjuiciamiento. Imaginemos el disgusto de los abogados norteamericanos y los comisionados insulares.

La Americanización de los Tribunales Puertorriqueños.

La actitud y la actividad desplegada por el Secretario de Justicia, Ldo. Díaz Navarro, contra el establecimiento de la Corte Provisional de Estados Unidos le cuesta el cargo que ocupaba. La Orden General Núm. 98 de 15 de julio de 1899 suprime el cargo de Secretario de Justicia y establece una Junta Judicial en su lugar. La Judicatura es declarada independiente del Departamento de Justicia (235). - Luego se dispone que "El Departamento de Justicia ejercerá en lo sucesivo las mismas atribuciones que las correspondientes a los Departamentos de Justicia y Fiscalías Generales en los Estados Unidos y - diversos Estados de la Unión..." La dirección del Departamento de Justicia está encomendada a la referida junta, así como la política pública en relación con la administración de justicia. El Secretario de ese organismo colegiado será el "Attorney General" o Procurador - General quien también despachará los asuntos del Departamento.

El General Davis designa miembros de la Junta Judicial a los siguientes señores: Ldo. Hilario Cuevillas Hernández, Decano del Colegio de Abogados y uno de los abogados de mayor práctica en San Juan; Mr. Noah B.K. Pettingill, Judge United States Provisional Court; Mayor Alfred C. Sharpe, Acting Judge Advocate of the Department; Ldo.

Manuel F. Rossy (236), representando al Partido Republicano y Lcdo. Juan Hernández López (237), representante del Partido Liberal. La creación de la Junta Judicial le permite al Gobernador Militar tener un control absoluto sobre los asuntos de la Administración de Justicia. Obsérvese que tres de sus miembros son incondicionales suyos y partidarios de la rápida americanización de la justicia y el Derecho puertorriqueños. Me refiero a los señores Pettingill, Sharpe y Rossy. Y aún los Sres. Cuevillas y Hernández López no parecen ser obstáculo para los planes del Gobernador Militar y el Mayor Sharpe. Un comentario del General Davis sobre la Junta Judicial nos ilustra de cierta manera el papel que ésta desempeña: "Esta Junta fue una de las agencias más importantes y que más ayuda prestó a los planes del Comandante del Departamento" (238). De ahora en adelante, será la Junta Judicial responsable de todas las medidas que con relación a la administración de Justicia y el Derecho puertorriqueño emita el Gobernador Militar. Obsérvese que en la Junta de referencia tienen participación dos personajes que en realidad y en pureza de procedimiento no debieron ser nombrados, me refiero a Sharpe y a Pettingill. El primero era el "Acting Judge Advocate of the Department", designado como tal por el General Henry el 16 de enero de 1899. Desde el 10 de enero de 1899 hasta su supresión fue asociado del Secretario de Justicia para auxiliarle en la preparación de leyes o sistemas de acuerdo a las que rigen en los Estados Unidos. Mr. Sharpe es el consejero del General Davis en cuanto a la conveniencia de la americanización del Derecho puertorriqueño (239). Mr. Pettingill por el contrario era el portavoz del grupo de abogados norteamericanos que entonces se encontra-

ban en la isla y de otros ciudadanos estadounidenses. El General - Davis en su Informe oficial manifiesta lo siguiente sobre aquellos:

"Muchos ciudadanos de los Estados Unidos residían en Porto Rico, y a veces eran partes en pleitos judiciales o sujetos de medidas punitivas. Ignorantes de las leyes locales y el procedimiento, el cual caracterizaban de injusto, cruel, ultrajante, atroz o bárbaro, no sorprende que ellos objetaran el - tener que arriesgar su vida o propiedades en los tribunales nativos".

De esta colonia era portavoz Mr. Pettengill, asimismo era el - Magistrado del Tribunal Provisional de Estados Unidos. Ambos funcionarios no debían ser miembros de la Junta Judicial por cuanto tenían lealtades contrarias a los intereses de los puertorriqueños. Amén de que servían al Gobierno Militar. Su consejo y asesoramiento estaba ya inclinado a ese punto de vista. Las decisiones de la Junta se podían tomar con el voto y asistencia de tres de sus miembros.

La Junta Judicial se dedica inmediatamente a estudiar y preparar los cambios ya proyectados en el sistema judicial de Puerto Rico. Ya para el día 21 de julio tiene preparado un proyecto de nueva organización de la judicatura (240). Esta será la primera reorganización total de los tribunales hecha por las autoridades norteamericanas. El 8 de enero de 1899 se efectuarán algunos cambios, pero iban dirigidos más bien a sustituir la designación oficial de los juzgados. En vez de Audiencia Criminal de Ponce se designa Corte de Justicia de lo Criminal de Ponce y así por el estilo. Las Ordenes Generales Núms. 114 y 118 de 7 y 16 de agosto respectivamente, recogen la propuesta es-

tructuración de nuestros tribunales y la hacen oficial. La misma comenzará a regir desde el 10 de agosto de 1899. Esta reorganización - cambia totalmente el panorama judicial que existía en Puerto Rico - hasta ese momento. El cambio casi rompe definitivamente con la tradición jurídica hispano-puertorriqueña. El nuevo sistema es una copia del que por entonces existía en varios de los Estados norteamericanos (241). Podemos afirmar que la nueva organización es producto de los reiterados intentos de asimilar la judicatura de Puerto Rico. Tan similar a las estructuras norteamericanas que la sección 33 de la nueva Ley Orgánica otorgada por el Congreso de Estados Unidos a Puerto Rico en 1900, llamada Ley Foraker por el legislador que la presentó, deja existente esta organización judicial.

El nuevo sistema establecido es el siguiente:

"Junta Judicial (242)

4 de agosto de 1899

Secretaría.

Esta Junta ha acordado proponer al Hon. Gobernador General la reorganización de los tribunales de la isla en la forma siguiente:

- 1.- Una Corte Suprema en San Juan, compuesta de un Presidente, cuatro Jueces Asociados, un Fiscal, un Secretario, dos Oficiales, un Archivero-tasador y el personal subalterno necesario
- 2.- Cinco Tribunales de Distrito para lo civil y lo criminal en San Juan, Rumacao, Mayagüez, Arecibo y Ponce, con tres Jueces, un Fiscal, un Secretario, dos oficiales y personal subalterno suficiente.

Se propone la supresión de los Juzgados de Primera Instancia

y de Instrucción y sus escribanías.

3.- Los Juzgados municipales continuarán como en la actualidad.

(Continúa la designación de los Jueces)

Rafael Nieto Abeille

Secretario, Junta Judicial

Procurador General"

Obsérvese que se han eliminado las Cortes de Justicia de lo Criminal de Ponce y Mayagüez, sucesoras de las antiguas Audiencias de lo Criminal con sede en esas ciudades y dedicadas exclusivamente a ser juzgados criminales. Asimismo se elimina la jurisdicción criminal primaria que tenía la Corte Suprema y que antaño compartía con las Audiencias de lo Criminal. Esa potestad se le transfiere al recién creado Tribunal de Distrito de San Juan (243). También se suprimen los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Ahora se establecen cinco Tribunales de Distrito que tienen jurisdicción en asuntos civiles y también en asuntos criminales. Por ahora continúa la judicatura colegiada.

La anterior propuesta de sistema judicial hecha por la Junta Judicial fué aprobada por el Gobernador Militar Davis y puesta en vigor por la Orden General Núm. 114 como anteriormente mencionamos. Poco tiempo después el mismo funcionario emite la Orden General Núm. 118 de 16 de agosto de 1899 (244). Esta ley militar complementa la anterior. La gran importancia de esta Orden 118 es que establece un nuevo procedimiento o ley de enjuiciamiento civil y criminal sustituyén-

do al que hasta entonces se venía usando en los tribunales puertorriqueños. Debe tenerse en cuenta que a pesar de ello se continuó aplicando partes de las antiguas leyes de enjuiciamiento. La opinión del Gobernador Militar sobre la reorganización que ha patrocinado y hecho aprobar por la Junta Judicial es la siguiente:

"La reorganización de los tribunales y el procedimiento legal fue causa de mucha preocupación. En Puerto Rico se encontró una corte suprema de siete miembros, dos audiencias de tres miembros cada una, y, en adición, doce tribunales de primera instancia e instrucción (245). Sus jurisdicciones y procedimiento eran complicados y había grandes dificultades y tardanzas en sus juicios criminales y civiles. Los Códigos de Derecho y Reglamentos en vigor eran numerosos y voluminosos, y todo el sistema era anti-americano y extraño. La Orden General Núm. 114, recientemente expedida, ofrece la base para un nuevo sistema judicial. Los tribunales y sus jurisdicciones se diseñan en el sistema usual de los tribunales estatales en la Unión Americana. No fue fácil hacer esto, pero a golpe de constantes esfuerzos y con una completa y libre discusión, se consiguió una recomendación unánime de la Junta Judicial para abandonar el viejo sistema e instalar estos nuevos tribunales. Esto fue mas fácil que lograr que se abandone el enjuiciamiento español. Al fin esto fue logrado, y se promulgó una Orden General prescribiendo un procedimiento que si bien en muchos aspectos no es totalmente americano, se aparta del que hasta

este momento prevalece".

Bajo este nuevo orden de cosas hay todavía tosquedades y - muchos requerimientos y reglas extrañas a los abogados y jueces norteamericanos, pero una a una desaparecerán, y al final una más completa armonía del sistema procesal de Puerto Rico y el norteamericano vendrá a ser realidad" (246)

Sin embargo, para el puertorriqueño la realidad era otra. En - carta publicada en El Territorio de lunes 31 de julio de 1899, el Dr. Felipe B. Cordero de Camuy manifiesta en síntesis lo que está ocurriendo: "El año venció, y excusándose con los rigores de un régimen militar, aunque accidental, nuestras costumbres no se respetan, pues se truecan en cambios rápidos de americanización, como ocurre con - nuestros tribunales de Justicia". (247).

Otro punto de vista representativo del sector de puertorriqueños americanizados y norteamericanos residentes en la isla y que aspiran y desean la asimilación de las instituciones hispano-puertorriqueñas a las de Estados Unidos es ofrecido por el diario El País en su editorial de primera página titulado: "Un caso judicial" (248):

"Indudablemente es que las nuevas leyes judiciales estableciendo nuevos procedimientos para la administración de justicia y dando severo golpe a las corruptoras prácticas de la ley antigua habían de traer dudas en su interpretación; sobre todo - cuando está rompiendo por completo la tradición casuística de la ley española que en este punto no se ha curado aún del excesivo influjo del Derecho romano, se ha limitado tan sólo a

consignar...."

Conflicto de jurisdicción entre los Tribunales de Puerto Rico y el Tribunal federal.

Conflictos jurisdiccionales entre ambos tribunales, los de Puerto Rico y la United States District Court for the Department of Puerto Rico no tardan en surgir. El 2 de septiembre de 1899 el Juez del Tribunal de Distrito de San Juan, Don Juan Ramón Ramos envía una carta oficial al General Davis dando cuenta del problema de jurisdicción surgido entre su institución y la Corte Federal (249). Allí informa al Gobernador Militar los antecedentes del asunto. En 22 de mayo de 1899 se iniciaron los procedimientos judiciales en el antiguo Juzgado de Instrucción de San Francisco contra seis acusados de falsificación de moneda. Tres de ellos eran súbditos españoles y tres "ciudadanos" de Puerto Rico. Luego se trasladó el caso a la sección criminal de la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico y de ahí a la recién creada Corte de Distrito de San Juan. El 20 de agosto se comenzó a ver el caso. A estas alturas la Corte de Distrito recibió una comunicación del Tribunal Federal de Estados Unidos solicitando el envío de los expedientes del caso y la inhibición del Tribunal de Distrito por cuanto tres de los acusados eran españoles. El fiscal de ese último tribunal y los magistrados rehusaron reconocer la competencia del Tribunal Provisional de Estados Unidos. Las razones ofrecidas son: "(1) Tres de los acusados son puertorriqueños, y los otros tres, aún suponiendo que sean españoles, están bajo la jurisdicción

del tribunal, de acuerdo con el artículo XI del Tratado de París - que establece que los españoles sólo pueden ser juzgados por - las leyes y tribunales empleados para juzgar a los ciudadanos del - país en que vivían; (2) Que el Tribunal Provisional, no era un tribunal del país, ni sus procedimientos eran los empleados en Puerto Rico, sino que la Orden que lo constituye, la número 88, indicaba que era un Tribunal Provisional de los Estados Unidos; (3) Porque era un principio de Derecho que nadie podía ser sentenciado sino por la ley cuya existencia es previa al delito cometido. Y que éste delito fue cometido antes de la creación del Tribunal Provisional, y por lo tanto el caso no puede ser juzgado por ese foro".

Continúa la comunicación del Juez Ramos manifestando que el Tribunal Provisional de los Estados Unidos insistió en su petición y - que enviaron a la Corte de Distrito un escrito de réplica con los siguientes argumentos: "(1) Que este Tribunal federal, por ciertas decisiones, ha promulgado principios de ley por los cuales la falsificación de moneda era asunto de su competencia privada, no importa la fecha en que fue cometido el delito; (2) Que cuando algunos individuos eran acusados del mismo delito, y unos eran puertorriqueños y los otros españoles u otros extranjeros, era su competencia juzgarlos a todos. (3) Que el Tribunal Federal no podía entender como el - Tratado de París entre España y los Estados Unidos podría tener ningún efecto sobre él, pues ellos entendían que el Tribunal Provisional de los Estados Unidos era tan del país como cualquiera". Volvió el - Fiscal de la Corte de Distrito a insistir en su posición anterior y a

recurrir a la Corte Suprema de Puerto Rico, pues si el Tribunal Provisional manifestaba que era igual a cualquier otro foro judicial - puertorriqueño la Corte Suprema era ciertamente superior a todas. El 29 de agosto el carcelero de San Juan recibe una comunicación del - Tribunal Provisional de Estados Unidos ordenándole que ponga a los - tres prisioneros españoles del caso de falsificación de moneda bajo la exclusiva jurisdicción de esa institución judicial. El mismo día el Secretario del Tribunal de Distrito recibió la visita de un mensajero ordenándole que entregara los documentos del caso Zinestra y - otros al tribunal federal. El Secretario, Sr. Ramón Falcón Elías contestó "que a menos que se usara la fuerza, él no enviaría los documentos de referencia sin ser instruido al respecto por los Jueces de Distrito. También insistió en la anterior petición el Fiscal interino de la U. S. Provisional Court, Mr. Arthur F. Odlin (250). El pleno - del Tribunal se negó a tal solicitud, por las razones expuestas (251).

Termina su carta oficial el Juez Ramos manifestando: "Los hechos especificados son suficientes para permitirle al Honorable Gobernador formarse una idea de la forma violenta e insultante usada por el Tribunal Provisional (de los Estados Unidos) para decidir un problema jurisdiccional..." "Y solicitamos del Gobernador que se mantengan - nuestros derechos y dignidad ordenando que este conflicto de jurisdicción se resuelva por la autoridad competente, sea la Corte Suprema de Justicia de la isla, o la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington o por el Gobernador Militar, como autoridad suprema de la isla, pero nunca aceptaremos que sea resuelto de la manera propuesta por la Corte Provisional, porque nuestro prestigio y decoro como tri-

bunal no lo permite".

La anterior comunicación fue enviada por el Gobernador Militar al Juez Pettingill del Tribunal Federal. Este magistrado contesta a los anteriores argumentos el 5 de septiembre. Comienza diciendo que: "Desde la organización de este Tribunal he estado tan ansioso como usted puede estar de evitar cualquier conflicto de jurisdicción con los tribunales insulares, pero de información recibida de varios sitios, así como de sus acciones, yo temo que algunos jueces de esos tribunales especialmente Becerra de Ponce y Acosta de San Juan, buscaran la primera oportunidad disponible para propiciar tal conflicto". Luego el Juez Pettingill descarta la importancia del Tratado de París, artículo XI en el asunto. Argumenta que la Corte de Distrito de San Juan no entendió bien la Orden General Núm. 88 por defectos en la traducción y que el Tribunal Provisional tiene jurisdicción exclusiva en delitos sobre la falsificación de monedas, independiente de que sean cometidos antes o después de establecerse el Tribunal, y trae como ejemplo los Tribunales marciales. Termina su carta oficial el Juez Pettingill con el siguiente párrafo que resulta muy interesante:

"Pero el método adoptado por el Tribunal de Distrito al recurrir a usted para que intervenga envuelve más serias consecuencias de las que resultarían del caso individual. Si usted oree necesario en este caso el señalar a este tribunal la acción que ha de seguir, sea positiva o negativa, ese poder podría ser luego ejercitado (sin sacrificar ningún principio) en ordenar qué veredicto o sentencia debemos de rendir en cualquier

caso ante nosotros y el Tribunal dejaría de ser un cuerpo - judicial, como lo entienden los norteamericanos. Yo entiendo que esa acción destruiría el uso de este Tribunal y yo confío que usted contestará esa comunicación de manera que continúe en efecto los propósitos por los cuales este Tribunal fue - creado y prevenga otros intentos de invocar su intervención - con ordenado procedimiento de cualquiera de los tribunales."(252)

Al día siguiente, 5 de septiembre, el "Judge Advocate" del Departamento, Mayor Sharpe envía su opinión jurídica al Gobernador Militar. El tenor de su consejo es el siguiente. Que según el párrafo IX de la Orden General Núm. 88 el Gobernador Militar se reservó la decisión de los problemas jurisdiccionales que se relacionen con litigios en que los súbditos españoles sean parte (253). Que es claro - que la intención del artículo XI del Tratado de Paz fue asegurarle a los súbditos españoles, residentes en Puerto Rico, libre acceso a los tribunales con cuyo idioma, derecho y procedimientos ellos están familiarizados, pero si eligen otro tribunal competente, no parece - que el Tratado se lo impida. En asuntos criminales, sin embargo, la parte acusada está obligada a someterse a la jurisdicción del Tribunal competente para juzgarle. Una vez la referida jurisdicción se consigue, el acusado no puede escapar de ella por usar el privilegio del Tratado de Paz. Concluye pues que en cuanto a los súbditos españoles se refiere, aquellos que deseen invocar la jurisdicción de los tribunales locales o tribunales insulares, tienen tal Derecho bajo el artículo XI a hacerlo. De lo cual se concluye que los tribunales puer

torriqueños tienen la misma jurisdicción, con relación a los súbditos españoles, que antes de la invasión norteamericana, incluyendo la falsificación de monedas. En cuanto a los tres nativos puertorriqueños, éstos están sujetos a la United States Provisional Court, - de acuerdo a la Orden General Núm. 88. En el futuro, si los súbditos españoles acusados ante el Tribunal Federal Provisional desean eximirse de su jurisdicción tienen derecho a ello bajo el artículo XI del Tratado de Paz. Si no lo reclaman, el juicio proseguirá en - ese tribunal. (254)

El mismo día 5 de septiembre, el General Davis toma una decisión y escribe al Juez de los Estados Unidos, Mr. Pettingill. En la misma no presta atención a la súplica del referido juez. Por supuesto dicha opinión incorpora todos los argumentos de su Asesor Jurídico, Mayor Sharpe (255), por ello me relevo de reproducirla. Idéntica carta se le envía al Juez Juan Ramón Ramos, Juez de Distrito de - San Juan. El "Acting Provisional U. S. Attorney", Mr. Arthur Odlin, presenta un alegato repitiendo los argumentos del Juez Federal, pero no se le presta atención al mismo (256). El 14 de septiembre vuelve el Juez Ramos a enviar otro escrito al Gobernador Militar donde resume otra vez la posición de su Tribunal. Se rumoraba que el Gobernador iba a someter el asunto al Departamento de la Guerra. Efectivamente, el General Davis somete el expediente al Departamento de la Guerra - el 28 de septiembre (257). El Duque de Arcos, Embajador de España en Washinton interviene en la controversia (258). El 26 de octubre escribe una carta oficial de cuatro pliegos donde expone su posición de la misión. Luego de hacer una narración de los antecedentes del -

caso, el Embajador sostiene que la United States Provisional Court for the Department of Porto Rico es un tribunal del país y que por lo tanto los españoles deben estar sujetos al mismo como lo están los demás extranjeros. Que el Tratado no ofrece privilegios a los súbditos españoles. La referida comunicación se envía al Secretario de la Guerra. El Gobernador Militar envía un alegato el 16 de noviembre con los antecedentes del asunto y sus recomendaciones (259). El 11 de diciembre el Secretario de la Guerra personalmente emite un proyecto de opinión (260) y el 18 de diciembre se envía al General Davis como la opinión formal del Departamento de la Guerra. En la misma se aprueba la decisión del Gobernador Militar de 5 de septiembre (261).

La Democracia publica un editorial haciéndose cargo de la situación de inestabilidad por la que pasan los tribunales de justicia puertorriqueños con las intervenciones de la United States Provisional Court en los procedimientos de aquellos. En esta época surgen varios problemas jurisdiccionales entre ambas clases de instituciones judiciales. El referido editorial se publica en la edición del día 28 de septiembre de aquel periódico:

"Un caso anómalo (262)

.....

Esa dualidad de Derecho en que vive la justicia, esa suspensión de juicios en causas determinadas, por razones de desconocimiento, muchas veces, de los Códigos que han de regir en esta isla, como sucedió ha poco en que hubo de suspenderse un

juicio para consultar a Washington si podía o no el referido tribunal (Corte Provisional de los Estados Unidos), ha traído tal perturbación en el orden jurídico que dentro de poco no va a saber el ciudadano nacional o extranjero residente - en Puerto Rico a qué fórmula debe ajustar sus derechos y en caso de reclamación, a qué tribunal deberá recurrir para obtener justicia".

El anterior conflicto de jurisdicción que hemos examinado brevemente es uno de las muchas situaciones de esta naturaleza que entonces surgían entre ambas clases de tribunales. Sin embargo, al problema se le dará una solución que favorece los grandes intereses - norteamericanos y que a mi juicio viola el espíritu y la letra del Tratado de París, como veremos a continuación.

Como antes vimos, el 18 de diciembre de 1899, el Departamento de la Guerra envía una comunicación oficial al Gobernador Militar - Davis aprobando la solución que éste ha dado al problema jurisdiccional sobre falsificación de moneda. Casi dos meses después, el 14 de febrero de 1900, Mr. Richard T. Greene, abogado, socio del Bufete de New York, Greene and Stotesbury, escribe al Secretario de la Guerra (263). El propósito de la carta es comunicar al Secretario Root de un posible problema jurisdiccional entre la United States Provisional Court y los Tribunales puertorriqueños, por razón de una demanda de su cliente, la Western Electric Company contra la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Mayagüez. La misma fue radicada ante el primer tribunal mencionado para ejecutar una hipoteca a favor de la corporación norteamericana. Se designó un síndico de quiebra y la com-

pañía puertorriqueña se opuso al procedimiento. Mr Greene termina -
su carta de la siguiente manera:

"He recibido ahora mismo de Mr. Arthur F. Odlin, Esq. de --
Odlin and Abbot, San Juan, Puerto Rico, nuestros abogados locales, una carta en la cual él afirma que su orden disponiendo
el traslado del Tribunal Provisional a la Corte nativa de los casos de los tres alegados criminales españoles ha sido interpretada ampliamente para incluir también norteamericanos, y que el General está próximo a emitir una orden confiriendo a los tribunales nativos jurisdicción sobre todos los casos - que envuelven los derechos de los ciudadanos, firmas y corporaciones norteamericanas donde los nativos son parte. Esta nue
va orden como está redactada manda al "clerk" de la United - States Provisional Court que transfiera a los tribunales nativos todos los casos pendientes donde un español o un nativo es una parte, independientemente del status del otro litigante. De las circunstancias del caso estoy convencido de que transferir la demanda pendiente de la Western Electric Company al tribunal nativo resultará prácticamente en una negación de la justicia y le quitará a la compañía la protección que está - llamada a recibir. Yo entiendo que su orden ha sido mal interpretada, y respetuosamente solicito que esa medida sea retirada para prevenir la transferencia propuesta " (264)

Ese mismo día el Secretario de la Guerra Mr. Root envía un cablegrama al General Davis ordenándole que la referida orden no debe

de emitirse y que la interpretación que le dió el General a las - instrucciones de Root sobre el caso de falsificación de moneda no debe de entenderse como de aplicación general. Termina su comunicación Mr. Root manifestando que los casos que de acuerdo a la Orden General de su constitución pertenezcan al Tribunal Provisional deben verse allí aún cuando un súbdito español sea parte del pleito (265). El 16 de febrero, dos días después de recibir el cablegrama del Secretario de la Guerra, el Gobernador Militar Davis contesta y expone su posición.

"Se proyecta una Orden como la descrita por la Western Electric, pero sus disposiciones específicas todavía no están determinadas. Fue mi entendimiento de su opinión, expresada verbalmente, que las causas civiles y criminales que afectaban a súbditos españoles, deben verse en los tribunales locales. El artículo Nueve menciona dos clases de causas como enjuiciables en los tribunales de la isla.

Western Electric es acreedor de una corporación local en Mayagüez y está demandando en el Tribunal Provisional... pero un súbdito español, no miembro de la corporación tiene una hipoteca sobre la propiedad y ha sido hecho co-demandado. Bajo su interpretación, el artículo once, Tratado de París, se entiende que tiene el derecho a exigir que se adjudique en un tribunal local y tengo conocimiento de que ha hecho tal solicitud. ¿Puede él obligar a Western Electric a someter su demanda en los tribunales locales, o puede el demandante obligar al súbdito español a someterse a la jurisdicción del Tribunal Pro-

visional? A mi me parece que el procedimiento hipotecario - en contra de la compañía puertorriqueña debe ser efectuado - únicamente en los tribunales locales. El artículo nueve del - Tratado dispone que los españoles empeñados en la industria o el comercio están sujetos a las leyes aplicables a otros - extranjeros....

Termina el General Davis su largo cablegrama oficial con el siguiente párrafo que nos ilustra muy claramente, y por testimonio de un observador de excepción, la opinión y el sentimiento que los puertorriqueños en general y la judicatura nacional en especial tenían por el Tribunal Provisional de los Estados Unidos.

"Los tribunales locales (puertorriqueños) y el Tribunal Provisional (de los Estados Unidos) confligen en un número creciente de casos y pleitos, y como no hay tribunal superior común a ambos, la solución de los problemas jurisdiccionales descansa en mí. No es agradable interferir de forma ejecutiva en procedimientos legales, y el efecto es malo a los tribunales y en la opinión pública. Los rumores en constante circulación son a los efectos de que el Tribunal Provisional será suprimido y yo no tengo la menor duda de que los tribunales puertorriqueños desean esto. Sin embargo tal evento sería el más grande desastre para los nativos pues el capital no vendrá aquí a menos que se le asegure protección en otros tribunales que los tribunales - nativos (puertorriqueños). Davis"

Poco tiempo tardó el Secretario de Justicia Mr. Root en contestar la comunicación del Gobernador Militar. El 19 de febrero de 1900 escribe al General Davis un largo memorando donde expresa su opinión sobre la jurisdicción del Tribunal Provisional y los derechos de los españoles residentes en Puerto Rico (266). "..... Los derechos de propiedad de los súbditos españoles están sujetos a las leyes que se aplican a los demás extranjeros. Pero en los procedimientos judiciales los derechos garantizados a los españoles son aquellos que disfrutaban los nativos. Los súbditos españoles estarán sometidos en lo civil y en lo criminal a los tribunales del país en que residan, con arreglo a las leyes comunes que regulen su competencia". "Los súbditos españoles no están exentos de las leyes o de la jurisdicción de los tribunales por razón de su ciudadanía. El propósito del Tratado es hacer imposible que se les niegue tal jurisdicción y por lo tanto asegurar a los súbditos españoles el derecho de presentarse ante los Tribunales del país, demandar y recibir audiencia allí en igual situación con los ciudadanos del país. Muchos países deniegan este privilegio a los extranjeros...". "Teniendo el derecho á invocar los poderes de todos los tribunales del país, están correlativamente obligados a respetar esos poderes cuando son invocados por otros y la condición por la cual se mantienen los derechos garantizados por el Tratado es, que tales derechos estén sujetos a las leyes del país; siendo el propósito del Tratado prevenir que las leyes del país discriminen en contra de los españoles con relación a estos asuntos por razón de su ciudadanía. El Tribunal Provisional de Puerto Rico ha sido establecido, instalado y

mantenido como uno de los tribunales del país. Están pues los súbditos españoles sujetos a su jurisdicción igualmente que otros residentes de la isla en los casos en que dicho tribunal tenga jurisdicción sobre el asunto. Se mantiene en cumplimiento de una ley del país y los españoles residentes que permanecen en esa isla están sujetos a la jurisdicción y poderes tanto de la ley como del Tribunal (Provisional)" Termina el Memorando de Mr. Root distinguiendo el caso "especial" de la falsificación de moneda de la actual posición oficial.

Como puede observarse la interpretación que se le ha dado a las cláusulas del Tratado de París relativas a los derechos de los españoles en cuanto a los tribunales que han de juzgarles ha sido torcida para acomodarla a la situación deseada por el Departamento de la Guerra, dirigido por un distinguido jurista norteamericano, Mr. Root. Se le ha cambiado la denominación oficial de "United States Provisional Court", (267) según consta en el artículo I de la versión en idioma inglés de la Orden General Núm. 88 de 27 de junio de 1899. En la versión en idioma español se titula oficialmente a dicho foro judicial de la siguiente forma: "Corte Provisional de los Estados Unidos para el Departamento de Puerto Rico". En ninguna de las dos versiones se le designa "The Provisional Court of Porto Rico", como se hace ahora. Y no es solamente una cuestión de nombre, sino que al examinar las disposiciones de la Orden General Núm. 88 vemos que la U.S. Provisional Court es asimilada en todo a un tribunal de los Estados Unidos. Unos ejemplos bastan: "I. En vista del creciente volúmen de casos que exigen resolución judicial y que son extraños a la jurisdicción de los

tribunales insulares... ". En el artículo II se dispone: "Las decisiones de dicha Corte se ajustarán a los principios de justicia y - equidad establecidos por las Cortes de los Estados Unidos, y sus procedimientos, reglas y archivos concordarán en lo posible con lo observado y llevado en dichas Cortes Federales". En el artículo VI: -- "Los jueces de la Corte Provisional ejercerán las mismas atribuciones que los de las Cortes de Circuito o Distrito de Estados Unidos". El idioma usado por la "Corte Provisional de Estados Unidos" es el inglés, su estilo, su jurisdicción, su origen y sus miembros no son puertorriqueños. Entonces, como se atreve el Secretario de la Guerra, Mr. Root a sostener que la "United States Provisional Court", ha sido instituído, instalado y mantenido como uno de los tribunales del país" y que ahora su nombre es "Provisional Court of Porto Rico". Por supuesto - que entendemos el por qué de esta entelequia, de ese nombre falso y - de toda esa teoría; para presentar someter a los súbditos españoles a la jurisdicción del tribunal federal de Estados Unidos.

Diez y seis días después de emitida la anterior opinión por el - Secretario de la Guerra, el General Davis la incorpora en su totalidad en la Orden General Núm. 47 de 6 de marzo de 1900. El artículo II dispone: "De conformidad con la precedente interpretación, todas las cuestiones de jurisdicción que se susciten entre la Corte Provisional de los Estados Unidos, creada por las Ordenes Generales, Núm. 88, serie de 1899, de este Cuartel General, y las Cortes Insulares, establecidas por las Ordenes Generales, Núm. 118, serie de 1899, de este cuartel General, se resolverán por las citadas Cortes en consonancia con dicha interpretación". En el artículo 11 y último resuelve el a-

sunto de la falsificación de moneda. "Según Instrucción del Departamento de la Guerra, el delito de falsificación de monedas en la Isla de Puerto Rico no cae dentro de la jurisdicción de la Corte Provisional de los Estados Unidos, y las Ordenes Generales núm. 88, que dan en tal sentido modificadas".

Rodrigo Díaz dedica su ensayo "Tratado de París... Interpretaciones militares" (268) a analizar la Orden General Núm. 47. Me permito citar solamente algunos pasajes en aras de la brevedad; "... Por fin luego de tantos circunloquios y vueltas inútiles, se llega al centro, al verdadero y único motivo de la Orden Núm. 47, la jurisdicción civil y criminal a que están sometidos los españoles residentes en Puerto Rico. En tanto los tribunales, los genuinos tribunales del país, organizados por las leyes puertorriqueñas y compuestos de jueces insulares, que administraban recta y cumplida justicia, por el clásico derecho de los siglos, las costumbres y la ciencia habían consagrado en nuestra tierra, en tanto que los españoles, lo mismo que los otros extranjeros tenían, como los nativos, en el foro y en los tribunales, la honradez y la competencia de los jurisconsultos, en el derecho sustantivo los sabios preceptos, que con leves adaptaciones han perpetuado el espíritu de Roma en las naciones de más elevada cultura jurídica... ni una sola protesta podía levantarse contra el funcionamiento de la administración de justicia, ni la duda más ligera ocurrió en la interpretación del artículo XI de la convención última entre España y los Estados Unidos".

"Pero, contra el dictámen del Secretario de Justicia, de la

Suprema Corte y de los principales abogados de la Isla, contra la voluntad colectiva de todo el país, se estableció por la Orden 88, del retropróximo año, la Corte Provisional de los Estados Unidos, donde sólo intervienen dos o tres puertorriqueños, como intérpretes o subalternos, tribunal exótico, de jueces militares, que del país no entiende el idioma y tiene que oírlo, ni las leyes y tiene que aplicarlas, aún cuando en la mayoría de los casos aplique leyes no promulgadas y procedimientos desconocidos en el país".

Luego continúa Rodrigo Díaz su narración e interpretación de la situación entre la U. S. Provisional Court, los Tribunales puertorriqueños y el artículo XI del Tratado de París que estatuye el status judicial de los españoles en Puerto Rico.

"quedó abierta la flamante Corte y, con ella la discusión del fuero que para los españoles estatuye el artículo XI del Tratado de París: empezaron las cuestiones de competencia entre los tribunales insulares y la Corte Provisional, con asombro del Presidente de ésta, que se extrañaba de que los tribunales del país "le escribiesen".

.....

!La Corte Provisional de Puerto Rico! ¿Qué Corte es esa, cuya existencia ignoraban los poderes públicos, los Tribunales de justicia, los abogados y el pueblo todo de la isla? Aquí existe creada, creada por un decreto a 27 de junio de 1899,

una Corte Provisional de los Estados Unidos para el Departamento de Puerto Rico, según expresa textualmente en el artículo I, del decreto de su creación... sin que en parte alguna del mismo decreto se estampe la denominación o título de Corte Provisional de Puerto Rico"

.....

Están los puertorriqueños, en cuanto determina la Orden 88 - del año pasado, sujetos al tribunal que se instauró con el - nombre de Corte Provisional de los Estados Unidos, porque el nombre entonces convenía para justificar la creación de un organismo que despojase de atribuciones a los juzgados y Audiencias del país.

Paróse luego en mientes de que el Tratado estatuye que los españoles queden sometidos a los tribunales del país, en la misma forma que los puertorriqueños, y conviene ahora decir "Corte Provisional de Puerto Rico", como si en la isla no hubiese habido antes Corte ninguna de justicia o como si pudiera crearse provisionalmente lo que preexiste con carácter definitivo. Con este cambio de nombre, que parece una travesura infantil, consideró el Gobierno debidamente preparado el asunto para fijar el precepto del artículo XI del Tratado de París".

De esta forma solucionó el Gobierno Militar el problema jurisdiccional que representaba el artículo XI y la "Corte Provisional de Estados Unidos". Los españoles quedaron sometidos a la jurisdicción del referido tribunal (269). Recuérdese que el Embajador español en

Washington solicitó que los españoles fueran juzgados por el Tribunal Federal Provisional. Y de esta forma se violó la letra y el espíritu del Tratado de Paz de París (270).

La Supresión de la Profesión de Procurador.

La representación procuratoria, profesión del Procurador, fue suprimida por la Junta Judicial en la sección XI de la Orden General Núm. 134 de 31 de agosto de 1899. De un plumazo se suprimió una profesión de especialistas en enjuiciamiento civil y criminal, porque era extraña al sistema legal norteamericano, como manifestó el General Davis.

Esta profesión, de mucha importancia en el sistema jurídico puertorriqueño, existía desde tiempo en Puerto Rico. La Compilación de las disposiciones Orgánicas de la Administración de Justicia en las Provincias y Posesiones Ultramarinas de 5 de enero de 1891 había reglamentado la representación procuratoria y autorizado la fundación de un Colegio de Procuradores en Puerto Rico. (271). A tenor con esa legislación los procuradores puertorriqueños solicitan Real Orden que los autorice acogerse a los beneficios y deberes de la colegiación obligatoria. No tarda la referida disposición en llegarles. La Real Orden de 19 de enero de 1893 dispone:

"Procede acceder a lo solicitado por los procuradores de la capital, autorizando a todos los de la isla para que puedan formar colegio y declarar que el Decano y el Secretario sean siempre elegidos entre los vecinos de la ciudad de San Juan

y que los procuradores de fuera de la capital que sean elegidos para cargos en la Junta de Gobierno puedan, con la conveniente autorización, trasladarse a la misma para ejercer sus funciones" (272)

Seis meses después, 23 de junio, se reúne en San Juan una representación de los Procuradores de Puerto Rico. Presidió el acto - el más antiguo de ellos, D. José Manuel Rossy y Guerra, quien actuó de Decano. Allí estaban los señores D. José Palacio, D. Emigdio Ginorio Alayón, D. Evaristo Vélez y D. José Boneta (273). Los presentes procedieron a la formación de los Estatutos colegiales quedando redactados en 72 artículos. Los mismos fueron enviados al Presidente de la Audiencia Territorial de Puerto Rico para su aprobación final como era obligatorio. Luego se procedió a la elección de la Junta - de Gobierno, resultando designados por unanimidad: D. Jose Manuel - Rossy y Guerra para Decano; D. Tomás Caballero y Osorio para Contador; D. José Palacio Echevarría para Tesorero; D. José Boneta y D. Emigdio Ginorio para Vocales y D. Evaristo Vélez Vélez para Secretario-Archivero. Todos tomaron posesión de sus cargos con excepción - del Procurador Caballero y Osorio por estar ausente. Luego se designaron Delegados en la isla. Los Estatutos fueron sometidos por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial al Ministro de Ultramar el 9 de septiembre de 1893. La aprobación no se hizo esperar, la Real Orden de 16 de noviembre de 1893 refrendó el referido reglamento, con excepción del artículo 61 (274). Luego este fué redactado de acuer-

do a las instrucciones recibidas. Comienza la vida institucional del Colegio de Procuradores de Puerto Rico. Recuérdese que la existencia de Procuradores en la isla es muy antigua.

Como antes hemos informado, ya para el 15 de julio de 1899, la situación creada por la oposición del Secretario de Justicia, Lcdo. Díaz Navarro, a la creación del Tribunal Federal hace crisis. Es entonces cuando se suprime la Secretaría de Justicia y se establece la Junta Judicial. Mientras el Lcdo. Díaz Navarro estuvo al frente de la Secretaría antes mencionada pudo contener, con su presencia moral, sus consejos, en reuniones y acuerdos, los claros intentos de americanización del sistema jurídico puertorriqueño. Muchas veces, claro está, no triunfó en su cometido patriótico, otras se adelantaba a los planes transculturadores y presentaba reformas, pero siempre que podía ejercía su influencia para salvaguardar y defender las instituciones del país, tan peligrosamente amenazadas en este momento de desasosiego, de confusión y desorientación. Al ser despedido y crearse la Junta Judicial, ésta, por influencia de Mr. Sharpe, Mr. Pettingill y el Lcdo. Rossy, y la tímida oposición de los Lcdos. Hernández López y Cuevillas, proceden a asimilar en lo posible el ordenamiento jurídico hispano-puertorriqueño al de los Estados Unidos. La judicatura copiada de modelos norteamericanos; el Enjuiciamiento Civil y Criminal ahora Leyes de Procedimientos Civil y Criminal en igual situación; así instituciones como el matrimonio y las Profesiones jurídicas, para solo mencionar unas cuantas. La abogacía puertorriqueña es objeto de estudios y reformas para igua-

larla dentro de lo posible a la norteamericana. Ejemplo de ello es la Orden General que dispone: "A partir de esta fecha, el título de abogado deberá obtenerse en alguna Universidad de los Estados Unidos..." (275). Específicamente se prohíbe cursar la carrera de abogado en España o Cuba. Asimismo, se intenta cambiar el sistema registral inmobiliario y el notarial.

Los Procuradores adelantándose a los rumores circulantes de que se eliminaría su profesión proceden a elevar al Gobernador Militar, General Davis, una Instancia (276). La misma tiene fecha de 2 de -- agosto de 1899 y manifiesta en sus párrafos más importantes que:

"Los suscribientes, de esta vecindad, ante ud. comparecemos y de la manera que mejor proceda decimos: Que la actual ley sobre organización del Poder Judicial fiel a las tradiciones de la antigua legislación ha conservado a los procuradores para que representen a las partes en los juicios civiles y criminales más inspirándose en las ideas y principios de la época, declaró limitado el número de aquellos funcionarios, para ejercer su profesión, resultando de ello una especie de Monopolio que obliga a los litigantes a escoger sus representantes de entre escaso número de personas, por más que acaso ninguna de ellas mereciese su elección.

Los suscribientes estamos en posesión del título de Procurador adquirido mediante examen con arreglo al Reglamento aprobado por R. O. de 8 de agosto de 1891.

El objeto de conceder ese título como se desprende de la le-

tra y espíritu del mismo Reglamento y R.O. fué hacer libre el ejercicio de la procura, tan libre como el de la abogacía al cual se asimila o cualquier otra profesión"

Luego la Instancia se refiere a los Procuradores que obtuvieron sus oficios mucho antes de 1891 y que compraron o enagenaron. Como éstos tenían unos derechos adquiridos se aprobó para ellos una Real Orden de 19 de agosto de 1891 "privando a los Procuradores con título de ejercer en donde hubiera de esa clase de oficios y de aquí el más irritante de los privilegios que nunca ha tenido razón de subsistir y mucho menos en las actuales circunstancias". Por ello los peticionarios suplican "que se declare libre el ejercicio de la procura, derogando también la limitación que impone el requisito de ser Bachiller para ejercer donde haya Audiencias Territoriales a fin de que todos puedan tener los mismos derechos abriendo de este modo de par en par las puertas de los Colegios de Producers para que puedan ejercer su profesión cuantos se encuentren en condiciones legales". Firman la Instancia, D. Damián Montserrat, D. Luis Freire Barbosa, D. Francisco Lásalle, D. Sandalio Torres y unas rúbrica irreconocible. El escrito fue entregado en las oficinas del General Davis por una Comisión de los firmantes el mismo día 2 de agosto. El endoso que se le hizo decía: "Damián Montserrat y otros 4, solicitan del Comandante General en contra de la abolición del cargo de Procurador" (277). La petición se envía a la Junta Judicial y luego se devuelve, rehusándose tomar acción.

El 23 de agosto procedieron los Procuradores Suliveres, Gino-
rio, Montserrat, Freyre y Torres a dirigir una carta-circular a -
un grupo de abogados invitándoles a comentar la supuesta acción de
la Junta Judicial o el Gobierno Militar para suprimir la profesión
de Procurador. El texto de la carta-circular es el siguiente: (278)

"Sin duda habrá ud. tenido ocasión de apereibirse de la gra-
ve cuestión que suscita la Junta Judicial suprimiendo en ab-
soluta la representación procuratoria para darla forzosamen-
te a los letrados.

El aspecto dominante en materia debe ser la conveniencia del
público. ¿Puede, en su concepto competente, resolverse la re-
forma procesal a beneficio exclusivo de la clase de letrados
en ejercicio por la razón de hallarse éstos en mayoría en el
seno de la Junta Judicial?

¿Cómo considera ud. el criterio de la Junta?

Deseamos conocer su opinión para utilidad general y vernos -
autorizados a publicarla."

El 24 de agosto de 1899 se recibió la contestación del Lodo. -
Antonio Alvarez Nava. Califica el asunto de "grave cuestión", y lue-
go manifiesta: "Creo como uds. que en esta como todas las cuestio-
nes legales, el verdadero objetivo deben ser los intereses del pú-
blico. Y honradamente debo declarar que éstos, a mi juicio quedarían
perjudicados con aquella medida. Mi criterio en este asunto es el de
la libertad profesional, es decir: que debe permitirse la dirección
y defensa de los asuntos judiciales a todos los abogados y la gestión

y representación a todos los procuradores". Ese mismo día contestó el Lcdo. Herminio Díaz Navarro: "Hasta ahora, eso que me indican solo se dice... A veces es tan calumnioso el se dice... que para emitir fundada opinión en el caso que teneis la bondad de consultarme paréceme discreto esperar que se confirmen los rumores que por ahí se dicen. Os adelantaré sin embargo, la idea de que juzgo acertado a derecho la supresión de los procuradores, pero suprimidos estos, destruyéndose así un privilegio..." Termina su exposición el ex Secretario de Justicia diciendo: "... una vez ahogados los procuradores por la ola que sube con desesperante rapidez y que no lo duden Uds. ahogará también a los abogados puertorriqueños".

La respuesta del Lcdo. Emilio García Cuervo es de 25 de agosto y dice así: "Que no estoy de acuerdo con la supresión de la representación procuratoria para darla forzosamente a los letrados en ejercicio; pues esto en nada favorece los intereses del público y en cambio coartaría su libertad" "... que se debe de permitir ejercer la profesión tanto de Abogado como de Procurador, a todos los que posean título". El distinguido letrado puertorriqueño, Lcdo. Francisco de Paula Acuña manifiesta lo siguiente: "Sobre la materia que uds. se sirven tengo un criterio muy amplio. Es mi opinión que la profesión de Procurador ante los Tribunales debe ser libre y que debe admitirse a ella a los que en la plenitud de sus derechos civiles acrediten su suficiencia y presten una fianza. Cada interesado escogerá entre los que se inscriban en los Tribunales el que le merezca más confianza. Debo rectificar el concepto de que la medida que se indi-

ca no tenga más razón que la de pertenecer a la Junta Judicial -- tres letrados en ejercicio. No puedo bajo ningún concepto atribuirles una conducta tan egoísta". Desde Ponce, contesta el Ldo. Rosendo Matienzo Cintrón, el 1 de septiembre de 1899. "Mi opinión es la misma que tengo respecto al notariado. Soy de los más perjudicados con la libertad profesional y sin embargo, no he querido dar un paso ni una opinión sobre la materia. Respecto del Procurador no podría pensar de otro modo. Creo que con el cambio de cosas algunas -- cosas tenían que ser cambiadas".

El último de los testimonios es el del Ldo. Pascasio Fajardo Cardona de Mayagüez. Dice en su comunicación que: "Hábame propuesto guardar silencio contemplando con profundo pesar la desacertada labor que lleva a cabo la Junta Judicial, con motivo de las reformas en nuestra organización judicial, pero obliganme uds. a quebrantar mi propósito en vista de la opinión que de mi interesan... No puedo como buen puertorriqueño abstraerme de censurar los actos llevados a cabo por dicha colectividad, en quien con fundados motivos cifrábamos todos grandes esperanzas por contarse en su seno con hombres encanecidos en la Ciencia del Derecho y práctica de los tribunales. La triste realidad nos ha convencido del erróneo juicio formado. Parece que todos los elementos se han conjurado contra esta bendita -- tierra; y que nuestros hermanos han hecho voto de llevar a este país a la desesperación y a la anarquía social". Luego en el siguiente párrafo manifiesta el Ldo. Fajardo Cardona:

"El derrotero por donde dirige sus pasos la Junta es poco --

práctico y llegará el día en que el pueblo de Puerto Rico - anatemice con los calificativos más duros tales actos encaminados a la negación de la personalidad puertorriqueña".

Termina el referido abogado con las siguientes lapidarias palabras:

"Las reformas tan decantadas y fraguadas en el silencio serán conocidas en toda la isla con el nombre de Reformas de las - Supresiones"

Todas las gestiones de los Procuradores y otras personas cerca del Gobernador y la Junta Judicial son inútiles. La Orden General - Núm. 134 de 31 de agosto de 1899 en su sección XI suprime la profesión de Procurador:

"XI. Queda suprimido el cargo de Procurador. Los que lo hayan ejercido ante cualquier tribunal y con buena nota, tendrán de recho a ser nombrados Jueces Municipales, o Secretarios de - los Tribunales Municipales, en defecto de abogados".

".... en defecto de abogados". Suprime la referida disposición militar una antigua profesión legal, dejó ipso facto sin trabajo a un grupo de ciudadanos que tenían derechos adquiridos y reconocidos. Tampoco se dispone resarcimiento o retribución alguna. En cuanto a la promesa de designar a los Procuradores como jueces y Secretarios Municipales -en defecto de abogados- es huera y sin valor. Tan es - así, que pocos días después la misma Junta Judicial manifiesta: "Que en vista de las próximas elecciones en la cual los jueces municipa-

les se elegirán por voto popular, no se hacen designaciones para esos cargos" (279). En su intento de cambiar el Derecho puertorriqueño y asimilarlo al norteamericano la Junta Judicial no tomó en cuenta - que el Procurador es un especialista en enjuiciamiento civil y criminal y que el ordenamiento jurídico de Puerto Rico y la filosofía que lo informa dependían de la intervención profesional de este funcionario en ciertas fases decisivas del proceso. En ello, el abogado no era ducho ni tenía práctica.

La sección doce de la Orden General Núm. 134 estipula:

"XII. En lo sucesivo, cuando las partes no comparezcan personalmente serán representadas ante el Tribunal Supremo y Tribunales de Distrito exclusivamente por un abogado, sin que - sea necesario, en este caso, otorgar poder....

En los Juzgados Municipales las partes podrán representar por sí mismas o por un apoderado vecino de la localidad".

La sección trece dispone:

"XIII. Los abogados, para el efecto de la tramitación de los negocios, podrán valerse de agentes que designarán por escrito al Tribunal".

Ambas disposiciones son confusas y enagenadas. Por una sección (XI) eliminan la profesión de Procurador, de especialista diplomado, con estudios, colegiación obligatoria y un Reglamento o Estatutos de 72 artículos y por otra sección (XIII) entregan la tramitación - de los negocios a agentes que designarán los abogados. Estos agentes

sin los estudios, garantías y conocimientos jurídicos de los Procuradores. Se le ofrece como única recompensa a los Procuradores designarles jueces y Secretarios municipales cuando no haya abogados disponibles, y aún eso les es negado días después al manifestar la propia Junta que no designará a nadie para los referidos cargos pues se suplirán por elección popular. Cabe mayor enagenación o mala planificación. El abogado norteamericano Mr. A. Salomon califica este hecho de "inconsistencia singular" (280).

Como sus gestiones no han tenido fruto, los Procuradores perjudicados contratan los servicios de Mr. A. Salomón abogado que les representará. Este prepara un alegato y lo somete al Presidente — McKinley en octubre de 1899 (281). Luego de reseñar la Orden General Núm. 134 manifiesta Mr. Solomon:

"Esta acción, que ha desaforado de la práctica en los tribunales una clase profesional de alrededor de ochenta miembros, es contraria a la justicia, la política pública y el espíritu del acuerdo internacional expresado en los artículos VIII y IX del Tratado de Paz, suscrito por los representantes de los Estados Unidos y España."

.....

La profesión de Procurador es, bajo las condiciones, extremadamente necesaria. De acuerdo al Derecho español, la práctica ante los tribunales es conducida por dos clases de funcionarios conocidos respectivamente como Abogados y Procuradores. Al cuidado del primero se confía la argumentación, el

asesoramiento y los detalles legales estrictamente legales de la litigación. El segundo se encarga de lo relacionado con el procedimiento. Cada uno complementa al otro y cada uno es necesario mientras los códigos españoles de enjuiciamiento - estén en vigor. Como evidencia de que la situación es la descrita, la antes mencionada Orden General -que es un mal dirigido intento de reforma- suprime la profesión de Procurador pero autoriza a los abogados a designar agentes para atender para atender los asuntos de procedimiento. Ningún reconocimiento mejor de la inhabilidad de los abogados para atender ambas ramas de la litigación que la anterior. Es difícil de entender qué razonamiento indujo la remoción de función tan importante de las manos de expertos técnicos, y las puso en las manos de agentes no profesionales e irresponsables. La - profesión de Procurador no debe su existencia a un capricho.

.....

Estos intereses creados deben ser sagrados. Nunca antes en la historia fue eliminada de un plumazo una profesión completa.

.....

Habiendo solicitado al General Davis, sin resultado, la modificación de esta orden general, los Procuradores de Puerto Rico respetuosamente solicitan:

1. Ser reinstalados en su profesión o en su defecto, ser indemnizados.

.....

.....

5. Que sea designada una Junta Examinadora ante la cual -- se examinen los Procuradores para ser luego designados Abogados, siendo indispensables de los requisitos usuales de educación, pues se supone que profesionales en la práctica judicial tienen suficiente entrenamiento -- literario".

La anterior Instancia o Alegato fue enviada, como hemos dicho antes, a la Casa Blanca. De allí lo trasladaron al "War Department". En 27 de octubre de 1899 se envió a San Juan para estudio y comentarios del Gobernador Militar. El 9 de noviembre se refirió al Mayor Anthony C. Sharpe, Inspector General and Acting Judge Advocate. El dictamen del Judge Advocate fue emitido el 10 de noviembre. Nos dice el Mayor Sharpe, Juez y parte de la controversia, pues como -- miembro de la Junta Judicial había participado y votado por la supresión de la profesión de Procurador:

"El cargo de Procurador fue abolido por desconocido a nuestro sistema de Derecho e innecesario bajo los cambios públicos -- operados. Se presentará á la Junta Judicial por los miembros norteamericanos una proposición extendiendo el derecho a -- practicar en los Tribunales a todos los Procuradores, condicionado a que aprueben los exámenes requeridos".

No creo que merezca ningún comentario el dictamen de Mr. Sharpe. El General Davis contesta al Departamento de la Guerra el 14 de noviembre de 1899. Allí le informa:

"Fue determinado, después de cuidadosa consideración, que era necesario emitir cierta reglamentación para la práctica del Derecho y también abolir un cargo (Procurador), que era extraño a nuestro sistema de Derecho, y cuyo único objeto parece que es el requerir de todas las partes que son tan infortunadas por verse obligadas a resolver sus problemas en los Tribunales, emplear a miembros de cierta profesión, que causaba gastos adicionales a las partes litigantes, sin que se derive ningún beneficio.

.....
El asunto de la indemnización para los Procuradores por la pérdida de sus cargos ha estado y todavía está, bajo consideración y será sometido para decisión del Departamento de la Guerra, tan pronto como la información del asunto se obtenga".

Aparentemente, aquí termina este proceso histórico. De los documentos examinados no se desprende ninguna otra información. Puedo asegurar sin embargo, que los Procuradores no fueron admitidos a la profesión de abogado como sugiere Mr. Sharpe.

La transición al Gobierno civil norteamericano, 1900.

La aprobación de la Ley Orgánica de Puerto Rico de 1900
(Foraker)

El informe final del Dr. Henry K. Carroll titulado Report on the Island of Porto Rico (282) que fue sometido al Presidente McKinley el 6 de octubre de 1899. Recomienda el Dr. Carroll que la Constitución y las leyes de Estados Unidos se extiendan a Puerto Rico. Una judicatura similar a la de cualquier Estado, pero no menciona la necesidad de establecer una United States District Court o Tribunal federal. Cree que los Códigos Penal, Civil y Mercantil deben continuar en vigor mientras sean consistentes con la Constitución de Estados Unidos y hasta que una comisión designada por el Presidente los considere, revise y enmiende siendo aprobada ésta por el Congreso. Luego entiende que una Comisión de cinco personas, tres de las cuales deben ser puertorriqueñas y dos norteamericanas deben ser designadas por el Presidente para revisar, y si es necesario, refundirlos. Que se aprueben disposiciones para celebrar juicios por jurado en casos criminales y en ciertos casos civiles también. Que se extiendan a Puerto Rico las leyes federales de bancos, patentes, marcas de fábrica y derechos de autor. Termina recomendando que los Códigos, las leyes de la Asamblea Legislativa y los documentos del Gobernador se publiquen en los idiomas español e inglés; que los tribunales tengan intérpretes para idioma inglés y que todos los documentos de apelación al Tribunal Supremo de Estados Unidos sean traducidos al inglés, tales las recomendaciones del Informe -

Carroll que nos interesan. Algunas de ellas, reformas de Códigos, idiomas oficiales, extensión de leyes fueron luego incorporadas a las disposiciones proyectadas para la Ley Orgánica de Puerto Rico.

Siguiendo las recomendaciones del mensaje del Presidente de - 5 de diciembre de 1899 y el Informe del Secretario de la Guerra y sugerencias de otras fuentes se radicó en ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos sendos Proyectos de Ley para dotar a Puerto Rico de un Gobierno civil temporero. El 9 de enero de 1900, Mr. Joseph B. Foraker (283), Presidente republicano del Comité del Senado para las Islas del Pacífico y Puerto Rico, radicó un proyecto de "constitución o ley orgánica". En la Cámara de Representantes, Mr. Sereno Payne, presentó otro proyecto de ley que disponía sobre los aspectos comerciales entre la nueva metrópoli y la isla (284). Luego del trámite legislativo usual, las audiencias públicas y privadas, la intervención de los representantes de los grandes intereses corporativos y agrícolas (285) y muy pocos puertorriqueños en éstas reuniones celebradas en Washington, se aprobó por mayoría de los legisladores republicanos la Ley Orgánica de 1900 llamada Foraker por su patrocinador original.

El Partido Demócrata de los Estados Unidos, minoritario en este momento histórico, y que había participado en las deliberaciones y se oponía a los planes del Partido Republicano de Estados Unidos, quien estructuró la Ley Foraker declaró en su Convención o asamblea anual de 1900 lo siguiente sobre la Ley Foraker: (286)

"Declaramos otra vez que todos los gobiernos instituidos entre los hombres derivan sus justos poderes del consentimiento

to de los gobernados; que cualquier gobierno no basado en ese consentimiento es una tiranía, y que imponerle a cualquier pueblo un gobierno por la fuerza es sustituir los métodos del imperialismo por aquellos de una república Creyendo en estos principios fundamentales denunciamos la - Ley (orgánica) de Puerto Rico, legislada por un Congreso Republicano en contra de la protesta y oposición de la minoría demócrata, como una audaz y abierta violación a la Constitución de la nación y una flagrante alteración de la buena fe nacional. Impone al pueblo de Puerto Rico un gobierno sin consentimiento suyo e impuestos económicos sin representación..... "

Un abogado de la época el Ldo. Enrique López Díaz nos ofrece la opinión que muchos puertorriqueños tenían en ese momento sobre el ordenamiento orgánico de referencia. La misma es consignada en su raro folleto titulado El Liberalismo o la Razón cívica, actitud americana, situación puertorriqueña. (287).

"Después de admitidas estas teorías, veamos si a ellas se - ajusta el Bill Foraker, Carta constitucional o Acta orgánica de Puerto Rico. Ella fue votada, como ya he expresado, en 12 de abril de 1900 por el Congreso de los Estados Unidos Puerto Rico no tenía representación alguna en ese Congreso, su voluntad no fue explorada; ninguna elección, votación o acto alguno de consentimiento del Pueblo de Puerto Rico concurrió en forma alguna a apoyar la proposición, votación y

aprobación de la expresada ley, y ésta se hizo por hombres extraños al país, en raza, idioma, religión y costumbres. - Pregunto yo: ¿Tiene autoridad legítima, el Acta Orgánica sobre los puertorriqueños? El Derecho, la conciencia y la justicia contestan a una con la negativa. Es hija de la arbitrariedad y su poder el de la fuerza, porque toda arbitrariedad es abuso, y todo abuso constituye fuerza. Ha sido hecha fuera de toda regla política".

Ahora expongamos el pensamiento del único Presidente en Propiedad que tuvo el gabinete ministerial o Consejo de Secretarios establecido por la Constitución Autonómica de Puerto Rico de 1897. Me refiero a D. Luis Muñoz Rivera quien luego durante el régimen establecido bajo la Ley Orgánica de 1900 (Foraker) será miembro de la Cámara de Delegados y Comisionado residente de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, así como jefe político del Partido Unión de Puerto Rico, colectividad que gana todas las elecciones desde 1904 en adelante, durante casi veinte años. Su opinión sobre la Ley Foraker se manifiesta en una extensa carta que dirige al Presidente William McKinley y que se publica luego en la edición de 13 de julio de 1901 del diario puertorriqueño de Nueva York, The Puerto Rico Herald. (288)

".....

La Ley Foraker, señor Presidente, buena en la económico, no debió nunca salir del Capitolio de Washington, es una ley indigna de los Estados Unidos que la imponen y de Puerto Ri

co que la soporta. No existe en ella ni la más leve sombra de un pensamiento democrático. Se os faculta para nombrar - al Gobernador y para rodearle del Consejo a vuestro arbitrio. Y el Gobernador y el Consejo eligen a los demás funcionarios, sin que se permita a la Cámara de Representantes fijar la - cuantía de los sueldos ni la importancia de los servicios. En los días del que llamaron en América despotismo español, Puerto Rico mandaba sus diputados a las Cortes de Madrid, - votaba sus leyes, era una provincia de España igual a las - provincias europeas por la constitución que las amparaba, - nivelándolas en el derecho y aún otorgando a la isla del - Atlántico la autonomía que rehusaba a las tierras del conti- nente. Existía también un Consejo, pero ¡qué diferencia del Consejo de entonces, de origen popular y de carácter parla- mentario, al Consejo de ahora de origen oficinesco y de ca- rácter burocrático!"

La Ley provisional orgánica de 1900 (Foraker) (289) establece un Gobierno civil norteamericano para Puerto Rico. La sección 8 di- pone que "las leyes y ordenanzas de Puerto Rico que ahora están en vigor continuarán en pleno vigor y efectividad, salvo en lo que - sean alteradas, enmendadas o modificadas más adelante, o en cuanto hayan sido alteradas, enmendadas por órdenes militares y decretos en vigor cuando esta ley entre en vigor y hasta donde las mismas - no sean incompatibles o contradictorias con las leyes norteamerica- nas..." Por la sección 14 se ordena que las "leyes de Estados Uni- dos que no sean localmente inaplicables... deberán tener la misma

fuerza y vigor en Puerto Rico que en los Estados Unidos, con excepción de las leyes de rentas internas..." la sección 16 ordena que todo procedimiento judicial, excepto los criminales se seguirán en el nombre de "Estados Unidos de América, ss. El Presidente de los Estados Unidos". Los penales se llevarán a nombre de "El Pueblo de Puerto Rico". Se establece una Asamblea Legislativa compuesta de dos estamentos, el Consejo Ejecutivo cuyos miembros serán los seis Secretarios o ministros de gobierno, Secretario Ejecutivo, Procurador General, Tesorero, "Auditor", Comisionado del Interior y el Comisionado de Instrucción y cinco "habitantes nativos de Puerto Rico". Todos designados por el Presidente de Estados Unidos. Como siempre se nombraban norteamericanos en las carteras ministeriales y también miembros del Partido Republicano Puertorriqueño, que propugnaba una política de asimilación cultural a Estados Unidos, la defensa de los verdaderos intereses puertorriqueños era muy difícil en el Consejo Ejecutivo o cámara alta. El otro estamento o cuerpo co-legislador era la Cámara de Delegados de Puerto Rico, de auténtica elección popular y que representaba y defendía los intereses del país con las limitaciones de rigor en un régimen colonial.

El Poder judicial establecido por la "Ley Foraker" es el mismo en existencia. Esto es, deja subsistente los Tribunales y juzgados en funcionamiento y que había establecido la Orden General 118 de 16 de agosto de 1899 y los Tribunales de Policía establecidos por la Orden General Núm. 195 de 29 de noviembre de 1899. Los Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, sucesor de la Suprema Corte de Justicia, serían designados por el Presidente de Estados Uni

dos y confirmados por el Senado de esa nación. Los Jueces de los Tribunales de Distrito serían nombrados por el Gobernador con el consentimiento del Consejo Ejecutivo. Los Jueces Municipales podían ser electos o designados por el Gobernador. Se le otorga potestad a la Asamblea Legislativa para cambiar la organización de Tribunales con excepción del Tribunal Supremo. La sección 34 establece un "District Court of the United States for Puerto Rico" (290). Para efectos de la judicatura federal se constituye a la isla en "The District of Puerto Rico". La designación del "District Judge"; "District Attorney" y el "Marshall" será hecha por el Presidente. Cada nombramiento de estos es por el término de cuatro años. Dicho tribunal "tendrá además de la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos, jurisdicción en todos los casos de los cuales conocen los Tribunales de Circuito de los Estados Unidos, y deberá proceder, en cuanto a los mismos, en forma análoga a la de un tribunal de Circuito". La sección 40 establece una Comisión para revisar tres Códigos puertorriqueños.

El Ldo. Pedro Muñoz Amato, actual Catedrático de Derecho, manifiesta sobre la Ley Foraker que: "Se hizo muy claro que la política, como la expresaba el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo (de Estados Unidos) era gobernar a Puerto Rico como una colonia sin ninguna promesa definitiva para su futuro desarrollo hacia la integración como Estado o la independencia". Luego añade, "las deliberaciones en el Congreso se caracterizaron por la ignorancia, la indiferencia y el desprecio de las condiciones e ideales puertorriqueños, fueron un mal ejemplo de democracia". (291).

El Dr. David M. Helfeld, en su artículo El Preludio histórico a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (292) - analizando la Ley Foraker opina que "la judicatura fue sustraída - de la más leve sombra de ingerencia local: el Presidente de los Estados Unidos nombraba los jueces de la Corte Suprema con el consentimiento del Senado de los Estados Unidos, mientras el Gobernador nombraba los jueces de distrito con el consentimiento del Consejo Ejecutivo". Por supuesto al Gobernador lo designaba el Presidente y la mayoría del Consejo Ejecutivo eran secretarios o ministros de su gabinete. Luego Helfeld manifiesta, "el Acta Foraker, mientras - concedía algún gobierno propio evidenciaba un conjunto de actitudes hacia Puerto Rico que transparentaba rechazo, desconfianza, colonialismo, con cierto reconocimiento de la situación económica de la isla" (293). "El Acta Foraker proveía que todas las leyes serán enviadas al Congreso de los Estados Unidos, el cual se reserva el poder y la autoridad para anularlas si lo creyese oportuno". Más adelante nos informa el Dr. Helfeld:

"En ningún sitio aparecía más evidente la actitud imperialista que en aquellas cláusulas que requerían que toda ley local futura debía estar de acuerdo con la legislación congressional, concordancia que debería ser determinada finalmente por las cortes federales.

.....

El Acta Foraker, a pesar de ciertas medidas de gobierno propio, venía impuesta sobre la Isla por un poder imperial con la intención de realizar drásticos cambios legales y políti-

cos. Ninguna medida o ley del gobierno territorial tendría vigencia a menos que armonizase con la práctica y la ley norteamericana. Ni estaba esta imposición basada en otra cosa que la fuerza, pues el dominio por los americanos nunca fué sometido a plebiscito popular".

Sobre la judicatura puertorriqueña según organizada por la nueva Ley Orgánica manifiesta su decepción el Lcdo. Enrique López Díaz: "El Presidente crea, nombra y subordina de una manera absoluta el poder judicial supremo en sus magistrados, que serán respetados en sus puestos mientras presten su asentimiento a la tendencia del poder arbitrario que emana de los Estados Unidos, y los sujeta a la coacción exterior que es mortal para la justicia en este país. Los magistrados inferiores, o sea de Cortes de Distrito, son nombrados por el Gobernador, a quien nombra a su vez el Presidente" (294). Termino este breve recuento de opiniones sobre la llamada Ley Foraker de 1900 con un comentario de Mr. Robert J. Hunter: "A pesar de la oposición pública general, de los memoriales y peticiones de los puertorriqueños, y de una opinión virtualmente unánime de la prensa contra el Proyecto de Ley puertorriqueña, el liderato congresional republicano llevó dicha legislación para su aprobación final" (295).

Según la Ley Orgánica, la United States Proviisional Court cesó y el nuevo tribunal federal de Distrito sería su sucesor.

Mientras se está aprobando la referida Ley Orgánica en Estados Unidos el Gobierno Militar continúa funcionando en la isla. El 19 de abril de 1900 el Gobernador Militar General Davis comunica en carta oficial confidencial a Mr. Root sus impresiones y recomenda-

ciones para el futuro Gobierno civil. Sólo me ocupo de las partes pertinentes a nuestro estudio. (296)

".....

Respecto a la Corte Suprema diría que el presente personal; Juez Presidente y cuatro asociados, el Fiscal; está bien - constituida, todos han sido jueces muchos años. Nombre de - los Jueces y orden de antigüedad: José Severo Quiñones, Juez Presidente, Conrado Hernández, José María Figueras, Rafael Nieto Abeillé y Juan Morera Martínez. Hay algunas razones - para que estos jueces deban ser todos nativos, siendo la - principal el idioma, y que el Derecho y el procedimiento que son exclusivamente españoles y así deben continuar por algún tiempo. La Cámara de Delegados nunca consentirá a ninguna medida que disponga con los estatutos que son familiares y los sustituya por Códigos extraños. Las leyes no serán probablemente cambiadas hasta que sean codificadas por una Comisión y legisladas por el Congreso; por lo tanto yo pienso que los Códigos presentes y el procedimiento deben continuar. A menos que los Jueces conozcan el Derecho español, el procedimiento y el lenguaje, serán incapaces, por lo tanto ineficientes. De otro lado algunos urgen que las leyes nunca - serán revisadas y los abusos corregidos a menos que nuevos hombres y métodos anglosajones se traigan a la Corte Suprema. Como el Tribunal de los Estados Unidos no toma competencía de casos civiles de menos de dos mil dólares, todos los que estén bajo ese límite deben ser decididos en los tribu-

nales locales. Algunos insisten que el capital extranjero no vendrá aquí sabiendo los empresarios que los pleitos menores serán llevados sólo ante los tribunales locales. Aquí los norteamericanos están divididos en dos opiniones, una que todos los Jueces de la Corte Suprema sean norteamericanos -visión con la que disiento-. Otros desean que dos o tres jueces sean norteamericanos, de manera que ellos puedan ejercer influencia encaminada a la reforma del procedimiento, el cual ellos insisten con razón es la principal objeción a los Códigos locales. Yo sugiero que se designen dos norteamericanos en la Corte Suprema, con tal que conozcan el idioma español, el Derecho y su práctica. Ninguno así en Puerto Rico. Si algún norteamericano ha de ser designado, yo recomiendo que los nativos cesados sean aquellos al final de mi anterior lista".

Dos perspectivas nos ofrece esta comunicación del General Davis al Secretario de la Guerra, hasta ahora inédita. Primero el asunto de la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no tan sólo en su aspecto humano sino en la influencia que ejercen los jueces o magistrados de ese alto tribunal pautando y desarrollando el Derecho puertorriqueño. Recuérdese que ahora, Puerto Rico entra a un sistema, que como el de Estados Unidos, el Derecho judicial interviene de manera preponderante en la formación de nuestro ordenamiento jurídico. El segundo, más sutil, el de la jurisdicción de la - District Court of the United States for Porto Rico o Tribunal Federal. La forma en que quedó establecida la jurisdicción de esa ins-

titución en la Ley Orgánica Foraker dejó muy disgustados a los abogados norteamericanos de San Juan y del resto de la isla. Obsérvese que el General Davis respalda la solución moderada, esto es, el nombramiento de varios magistrados norteamericanos en el Tribunal Supremo de manera que de allí ejerzan influencia. Sin embargo, es importante notar que había un influyente grupo de norteamericanos abogados entre ellos, que deseaban, y así lo manifestaban, que la totalidad de nuestro Tribunal Supremo estuviera compuesta por jueces norteamericanos. El momento es realmente delicado.

La ampliación de la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico era asunto que traía preocupados a los abogados norteamericanos. Un grupo de ellos, de la ciudad de Ponce, Mr. Frank Howe, Mr. A.E. Linhart, Mr. Charles M. Boerman (297) y Mr. L. J. Brown se reúnen, discuten el asunto y aprueban una Resolución que envían al Gobernador Militar el 20 de abril de 1900. El texto de la misma, firmada por los interesados lee como sigue: (298)

"Petición de los miembros del 'Bar of Ponce', Puerto Rico: Los miembros del 'Bar of Ponce', Puerto Rico, en una reunión celebrada el día 19 de abril de 1900 adoptaron la siguiente resolución.

Por cuanto, la sección treinta y cuatro de la Ley del Congreso estableciendo un Gobierno civil en Puerto Rico crea una United States District Court for Puerto Rico (299), investida con la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de Distrito y Circuito de los Estados Unidos; y

Por cuanto, dicha Ley del Congreso no estatuye cual procedimiento será usado en dicho Tribunal; y

Por cuanto, la sección treinta y tres de dicha Ley mantiene en vigor los existentes tribunales de Distrito establecidos por el Gobierno Militar de los Estados Unidos en Puerto Rico, con la misma jurisdicción conferida por dicho Gobierno Militar; y

Por cuanto, en la sección treinta y cuatro de dicha Ley la United States Provisisonal Court for Puerto Rico es descontinuada; y

Por cuanto, la jurisdicción de la United States Provisisonal Court, según establecida por la Orden General Número ochenta y ocho, promulgada por el Brigadier General Davis, United States Volunteers, es sólo parcialmente seguida en la jurisdicción de la United States District Court of Puerto Rico - creada por esa Ley, y no poseído de ninguna manera por los Tribunales de Distrito cuya existencia continúa por la sección treinta y tres de dicha Ley, por ello dejando a muchas personas sin remedio en ley,

Por lo tanto, se resuelve:

Que los abajo firmantes aquí solicitan al Congreso de los Estados Unidos que enmiende la sección treinta y cuatro de dicha Ley confiriendo a la United States District Court for Puerto Rico, en adición a la jurisdicción otorgada en esa - sección treinta y cuatro, la jurisdicción adicional poseída por la United States Provisisonal Court, antes nombrada y - también enmendar dicha sección treinta y cuatro proveyendo que el procedimiento de dicha United States District Court

of Puerto Rico será de acuerdo a las reglas del Common Law"

La Resolución fué dirigida al General Davis quien la recomendó favorablemente luego de consultar con el "Judge Advocate" del Gobierno Militar. Los abogados norteamericanos de San Juan visitaron al General e hicieron toda la presión que pudieron. El Departamento de la Guerra recomendó muy favorablemente la petición en carta dirigida a Mr. Joseph B. Foraker, Chairman del Committee on Pacific Island and Porto Rico del Senado, el 7 de mayo de 1900. Mr. Foraker la recomienda favorablemente y la referida petición es aprobada por el Congreso en una Ley de 2 de marzo de 1901 (300). En la misma se añadió aquella jurisdicción "to embrace controversies where the parties, or either of them, are citizens of the United States, or citizens or subjects of a foreign States or States wherein the matter in dispute exceeds, exclusive of interests or costs, the sum of a value of one thousand dollars".

Este cambio otorgó al Tribunal amplios poderes, intolerables para los puertorriqueños. Veremos luego, como durante muchos años se demandará constantemente la abolición de esta jurisdicción. Ejemplo de ello es el Memorial de la Cámara de Delegados Núm. 1 de 4 de febrero de 1909 donde se manifiesta: "Que la ampliación de la jurisdicción de la Corte Federal se inspiró en los falsos, calumniosos y concupiscentes informes de varios abogados, sin arraigo en Puerto Rico ni conocimiento de las Leyes y los tribunales de la isla, recién llegados al país, con el único anhelo de ganar la mayor fortuna en el menor tiempo posible" (301). Otro ejemplo; el 13 de enero de 1910 el Colegio de Abogados de Puerto Rico presidido por el Ldo. Juan Hernán-

dez López y siendo miembros de la Junta de Gobierno los Lodos, Manuel F. Rossey, D. Francisco de Paula Acuña y D. Rafael López Landrón y formando también los letrados D. Juan de Guzmán Benítez, W. Martín Travieso y D. Cayetano Coll y Cuchí, aprobó una Resolución solicitando la supresión de esa jurisdicción. Dicha Resolución fue sometida a la Asamblea General de la institución siendo aprobada por unanimidad. También se opuso el Partido Republicano Puertorriqueño, cuyo Comité Territorial votó el 16 de febrero unánimemente por "quitarle - las actuales e injustificadas atribuciones" al Tribunal Federal. Refrendan la medida los Sres. Guzmán Benítez, Parra Capó. Tous Soto, Rossey, Quiñones, Franceschi, Gómez Lassere, Vélez, Quiñones (D. Francisco), Torres Monge y Vizcarrondo (302). Parecido acuerdo tomó la Junta Central del Partido Unión de Puerto Rico en reunión de 16 de febrero de ese año (303). Asistieron a esa reunión los Sres. Eduardo Georgetti, D. José de Diego, D. Manuel Zeno Gandía, D. Carlos María Soler, D. Ramón H. Delgado, D. José C. Torres, D. Francisco Coira, D. Juan García Ducós y D. Pedro de Elzaburu. También protestaron contra dicha jurisdicción los diarios, El Tiempo, La Democracia y El Herald. La opinión en ese sentido era general y unánime entre los abogados y políticos puertorriqueños. En el lugar oportuno examinaremos el problema que nos ocupa y ofreceremos la opinión de los abogados norteamericanos que componían la asociación federal de abogados

El Idioma español y la nueva Ley Orgánica.

Según nos manifiesta el Lodo. Alfonso García Martínez, en su clásico estudio Idioma y Derecho en Puerto Rico (304), "la Ley Fo-

raker contenía las siguientes disposiciones relacionadas con los - idiomas: 1.- El artículo 30 exigía que los miembros de la Cámara de Delegados supieran leer y escribir cualquiera de los dos idiomas: español o inglés. 2.- El artículo 34 creaba la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Estados Unidos. También ordenaba que "(t)odas - las defensas y procedimientos de dicha Corte se harán en el idioma inglés". 3.- El artículo 35 regulaba las apelaciones desde los tribunales de Puerto Rico hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También ordenaba que "(t)odos los citados procedimientos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se llevaran en el idioma inglés". 4.- El artículo 39 que se refiere al cargo de Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados Unidos vedaba la ocupación de dicho cargo a las personas que no supieran leer y escribir el idioma inglés". De ahora en adelante, en forma continua, el problema del idioma español en Puerto Rico, que es el idioma nacional de los puertorriqueños, será asediado tratándose de erradicarlo y menospreciarlo.

III

El Régimen Civil de la Ley Orgánica de 1900.-La inauguración del gobierno.

El nuevo Gobernador designado para Puerto Rico de acuerdo a la Ley Orgánica fue el subsecretario del Ministerio de la Marina, Mr. Charles H. Allen. Cuando desembarcó en San Juan el 27 de abril de 1900, el Gobierno que se inauguraría dentro de unos días no estaba constituido, ni designado ningún miembro del mismo. Como antes manifestamos el General Davis por medio de la Orden General Núm. 102 de 30 de abril de 1900, reorganizó el Gobierno Militar para que se asemejase al que poco tiempo después sería estructurado por la Ley Foraker (1). Ya aquí, observamos el inicio de la política paternalista de designar norteamericanos para ocupar los altos cargos de Gobierno. El 1 de mayo fue inaugurado el Gobierno civil norteamericano de Puerto Rico. En su discurso de despedida el General Davis en una parte de su anodino discurso manifestó:

"Las leyes con que estais familiarizados continúan en vigor, excepto en cuanto hayan sido modificadas por Ordenes Militares; y las modificaciones que en esas leyes se han introducido no fueron dictadas, en casi todos los casos, sino después de haberse meditado cuidadosamente y haber sido apoyadas por distinguidos hijos de esta tierra, versados en el conocimiento de sus instituciones y leyes, y compenetrados de las condiciones sociales y económicas del país" (2).

Comienza en ese mismo momento la campaña de los gobernantes - para poco a poco ir desvirtuando la realidad y llevar a la opinión pública -situación que tuvo éxito- que en Puerto Rico no hubo protestas y vigorosa oposición en muchas fases de la nueva situación. Otro ejemplo de esto, y abundan, esta consignado en el Informe - Anual al Gobernador de Puerto Rico de 1901 (3) suscrito por el "Attorney General de Puerto Rico", Mr. James S. Harlan.: "Es quizás - cierto, como se ha dicho en los Estados Unidos por estos críticos, que ningún tribunal de Puerto Rico ha tenido jamás la misma confianza del pueblo que tuvo la Corte provisional establecida por las autoridades militares y que consistía en jueces americanos".

La "organización del Tribunal Supremo de Puerto Rico"

Ya a finales de mayo la prensa puertorriqueña comienza a publicar rumores sobre los nombramientos de los nuevos funcionarios. El Presidente del Partido Republicano Puertorriqueño, Ldo. Manuel F. Rossy (4), patrocina públicamente las candidaturas de los letrados D. Rosendo Matienzo Cintrón (5) o D. Juan Hernández López (6) para Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, en 5 de junio el Presidente de los Estados Unidos designó a todos los incumbentes, Hon. Quiñones, Presidente, Hernández, Figueras y Nieto Abeillé, con excepción de D. Juan Morera Martínez (7). La vacante - creada fue ocupada por Mr. Louis Sulzbacher quien fue designado el 4 de junio de 1900 (8). Téngase presente que el esquema del General Davis está siendo cumplido.

The San Juan News publica la designación de Mr. Louis Sulzbacher

en primera plana y muy destacada en su edición de 6 de junio de - 1900 (9). Informa que el nuevo Magistrado está, "extraordinariamente capacitado para el cargo, tiene cerca de 50 años de edad y en los últimos años ha vivido en Kansas City". Seguidamente añade: "Fue - educado en Alemania, tiene completo conocimiento de las leyes españolas y domina el castellano. Antes de 1893 y por algunos años practicó su carrera en ambos idiomas ante la Corte Suprema de Nuevo México y estaba considerado como uno de los mejores abogados del Estado. El Presidente McKinley ha demostrado gran acierto al nombrar un americano ante el Tribunal Supremo y hubiera sido difícil escoger un hombre de mejores aptitudes para el cargo que el Juez Sulzbacher" (10). Efectivamente el nuevo Magistrado era un distinguido jurista educado por los métodos de la Escuela alemana del siglo XIX. Poco tiempo duró el entusiasmo del diario norteamericano de San Juan con Mr. Sulzbacher. Llega a la isla el juez y hace unas declaraciones - al The San Juan News. Las mismas se publican el 12 de agosto de 1900. El título es, "Juez Sulzbacher complacido", y el subtítulo, "Las - Leyes de Puerto Rico son justas": (11)

"El Juez Sulzbacher, nuevo miembro americano del Tribunal Supremo designado por el Presidente McKinley, está muy complacido con su nueva posición tanto con el ambiente como con sus asociados. Habla muy bien de la isla y del sistema judicial y estuvo muy entusiasta en sus saludos a la profesión legal en Puerto Rico.

.....

Los jueces del Tribunal Supremo son pares en su profesión, - poseen el más alto nivel de inteligencia, erudición y expe-

riencia en el Derecho. Los miembros de la profesión legal, hasta donde he podido ver, tienen el más alto entrenamiento legal y comparan más que favorablemente con sus iguales en muchos Estados....

Profundo conocimiento y condiciones son precedentes a la admisión al foro. Las Leyes de Puerto Rico son justas y lógicas y siempre deben ser mantenidas en la isla, pero el procedimiento debe ser modificado en muchas partes y simplificarlo para conformarlo a nuestro sencillo y progresivo sistema norteamericano y política democrática" (énfasis suplido)

En el ambiente en que son hechas estas declaraciones, por quien son ofrecidas y siendo un reconocimiento y defensa del Derecho puertorriqueño -el primero que se hace públicamente por un abogado norteamericano- desquician, enojan y molestan al grupo de "american Lawyers" de Puerto Rico. Vuelvo a citar una oración del testimonio de Mr. Leo S. Rowe sobre las condiciones y ambiente entre los abogados norteamericanos de la isla: "Para la masa de americanos residentes en la isla -y especialmente tratándose de abogados- todo el sistema de leyes y de gobierno era malo, simplemente porque era diferente del nuestro. Todo cuanto no se conformaba con nuestro sistema no solamente era no americano sino antiamericano" (12). Podemos imaginarnos la repercusión y el efecto de las palabras del Juez Asociado del Tribunal Supremo Mr. Sulzbacher: "Las Leyes de Puerto Rico son justas y lógicas y siempre deben ser mantenidas en la isla..." Poco se tardó en contestársele al Magistrado y en el mismo diario que escasamente alrededor de un mes le cumplimentaba. Esta vez no será un

Editorial, sino una "carta" o artículo anónimo, con la firma simbólica de "Jankee". Su título es: "Yankee hace algunas preguntas" y el subtítulo, "No está de acuerdo con el Juez Sulzbacher acerca del Derecho puertorriqueño" (13).

"San Juan, August, 13, 1900

Editor, San Juan News:

Su entrevista con el Juez Sulzbacher del Tribunal Supremo en su edición del domingo fué leída con agudo interés. Después que muchos norteamericanos han estado estudiando por más de un año las leyes de esta isla y uniformemente concuerdan de que las mismas son en su mayoría malas y deben ser totalmente erradicadas por otras de manera que se asegure un buen gobierno, es extremadamente grato saber oficialmente que estos caballeros están todos equivocados, de hecho tan claramente equivocados que este juez puede descubrirlo en una semana. En vista de esta muy valiosa declaración algunas preguntas - son pertinentes, que ruego conteste usted si es posible - y sería muy deseable conocer la opinión del sabio juez.

Primero. Como declara éste último, "las actuales leyes de - Puerto Rico son justas y lógicas y siempre deben ser mantenidas en la isla".

¿Por qué razón vamos a tener una costosa comisión para revisar y codificar todas las leyes existentes?

Segundo. Actualmente un hombre joven llega aquí con un grado de Bachiller en Derecho otorgado por la Universidad de Madrid o Barcelona y le es permitido practicar ante el Juez - Sulzbacher. Otro joven llega aquí con el mismo grado otor-

gado por la Escuela de Derecho de Harvard o de Yale y le es denegado el derecho a practicar ante dicho tribunal. ¿Aprueba esto el Juez Sulzbacher? ¿Es Puerto Rico todavía una isla española o norteamericana? ¿Es el ilustrado Juez español o norteamericano?

Tercero. ¿Cree o no el Juez Sulzbacher que lo que esta isla necesita más que cualquier cosa es un influjo de capital norteamericano? ¿Crée el Juez Sulzbacher que el capital norteamericano vendrá algún día aquí mientras las inicuas, complejas y estúpidas leyes que gobiernan el traspaso de propiedad inmueble permanezcan en vigor?.....

No, Sr. Editor, cualquier hombre inteligente sabe que esta isla se atrasará en vez de ir adelante mientras continúe el sistema de Derecho español. En cuanto al abajo firmante, --- quien le ha dado cuidadoso pensamiento a este asunto por dos años, está convencido que a menos que los Estados Unidos intenten establecer aquí un sistema de gobierno y Derecho similar al que lo ha hecho, grande mejor será que abandone la isla. Si los (Estados Unidos) permiten que permanezca el sistema que España dejó cuando América entró, entonces lo más inteligente que hay que hacer es devolver Puerto Rico a España (como muchos nativos lo desean), otorgándole a los norteamericanos, digamos tres meses de plazo de manera que puedan cerrar sus negocios lo mejor que puedan y entonces regresar a los Estados Unidos"

Yankee"

No creo necesario comentar la carta anónima firmada por Yankee, indudablemente fue escrita por un abogado por los conceptos jurídicos que expresa. El Juez Sulzbacher, por supuesto no contesta. En marzo de 1901 el Gobernador de Puerto Rico, Mr. Allen designó abogados norteamericanos y puertorriqueños miembros del Partido Republicano para ocupar la mayoría de las plazas de Jueces de Distrito. El diario The San Juan News (14) destaca el nombramiento de dos jueces norteamericanos. En el Tribunal de Mayagüez entra Mr. J. E. Erwin quien junto a los Lcdos. Arturo Aponte y Juan José Perea forman la magistratura y en el Tribunal de San Juan a Mr. J. R. F. Savage, quien con los Lcdos. Morera Martínez y Juan Ramón Ramos administran justicia en la capital. El Fiscal de Distrito de Humacao será Mr. Kearney y uno de los tres jueces de Distrito de Arecibo es Mr. Otto Schoenrich. En el año siguiente entrarán en el escalafón judicial como jueces -mientras otros de ellos renuncian- Mr. Frank Richmond, Mr. E. B. Wilson y Mr. Charles E. Foote (15). Por supuesto la mayoría de los jueces son puertorriqueños miembros del Partido Republicano como por ejemplo: D. José Tous Soto, D. Jesús M. Rosay, D. Arturo Aponte, D. Enrique González Darder, D. Isidoro Soto Nusa, D. Carlos Franco Soto por sólo mencionar algunos. Corona el nombramiento de abogados norteamericanos el de Mr. J. H. -- McLeary (16) como Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora de cinco magistrados del Alto Tribunal tres son puertorriqueños y dos norteamericanos (17). El Juez Sulzbacher cesa en 1904 y en ese mismo año el Presidente de los Estados Unidos designa otro norteamericano, Mr. Adolph G. Wolf, a pesar de las solicitudes de

los abogados, la prensa y los partidos políticos de que un puertorriqueño ocupase dicho alto cargo. Luego en 1914 al retirarse el Juez MacLeary se designará a Mr. Harvey M. Hutchison como nuevo Juez Asociado. Ambos, Wolf y Hutchison pautarán y confirmarán el Derecho puertorriqueño hasta el año 1940, en que los dos se retiran. En el discurso que pronuncia el Lcdo. Cayetano Coll y Cuchí en nombre del Colegio de Abogados de Puerto Rico glosa brevemente, y con el cuidado que el momento requiere, la despedida del Juez Wolf, la labor de algunos de los jueces norteamericanos en el Tribunal Supremo. Así como el quehacer jurídico de jueces puertorriqueños "americanizados"

"Se formó inicialmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico con abogados cuyas mentalidades eran europeas en sus costumbres y en su cultura, y, sobre todo, en sus conocimientos jurídicos. Fué más tarde que comenzó a venir elemento nuevo al Tribunal Supremo, impregnado de las corrientes norteamericanas, como el Hon. Juez Presidente de este Tribunal (Emilio del Toro Cuevas) (19), como él lamentado Juez Félix Córdova (20) - Dávila, como los ilustres Jueces Franco (21) y Texidor (22), como los justicias señores De Jesús (23) y Travieso (24); - pero en los inicios era imprescindible que la orientación de nuestro Tribunal hacia los nuevos horizontes fuera estableciendo un nexo de cooperación con hombres doctos en el Derecho procedentes de Norte América. Hoy gracias a Dios, todos somos iguales, todos hemos aprendido lo que sabemos en las

mismas fuentes. En aquella época el trabajo del Juez Wolf y del Juez Hutchison y el trabajo del Juez Mac Leary, aparentemente duro e ingrato, porque representaba científicamente el avance de la agresión contra la resistencia en manos de nuestros jueces tradicionales adictos al antiguo Derecho español debió haber sido extraordinario. Fue una tarea primordialmente modesta, porque cualquier actitud que implicara superioridad hubiera traído la destrucción de la buena armonía en el Tribunal y, al mismo tiempo, adusta, severa y científica (25). Una labor que gradualmente incorporará dentro de nuestras tradiciones las nuevas ideas, que interpretando nuestros preceptos inspirará al Tribunal decisiones que pudieran ser admitidas y suscritas por los tribunales de apelación de los Estados Unidos".

Recuérdese que hasta 1952, el Presidente de los Estados Unidos designaba los Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El sistema funcionaba a base de recomendaciones y patronazgo político tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos. La oficina federal encargada de hacer la recopilación de la información, de las recomendaciones, ofrece opiniones sobre cada candidato e investigar los fue el Bureau of Insular Affairs que era dirigido usualmente por un General de Brigada. Allí se preparaba un cuestionario sobre cada candidato y al fin se le ofrecía alternativas al Presidente - quien en realidad daba poca importancia al asunto, descansando en los candidatos que se le ofrecían.

La importancia e influencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el desarrollo continuo y la pautaación del Derecho puertorriqueño es sumamente grande. En virtud de una Ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el 12 de marzo de 1903, el Tribunal Supremo se convirtió en Tribunal de apelación. Se decretó que en sus deliberaciones y fallos en todos los asuntos, no se limitara solamente a las infracciones de Ley o quebrantamientos de forma, según fuesen señalados y alegados por los litigantes sino que como el más alto fin de la justicia demandaba, el Tribunal debía conocer de todos los hechos y tramitaciones de la causa, tal como comparecieren de los autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de la justicia (27).

Examinemos brevemente los cambios producidos en el poder decisonal del Tribunal, esto es el impacto que en su función ha tenido la influencia del método legal del Derecho angloamericano. Muchos de ellos fueron expuestos en la interesante monografía del Dr. Manuel Rodríguez Ramos titulada, Interaction of Civil Law and Anglo-American Law in the Legal Method in Puerto Rico (28). Allí dice el Decano Rodríguez Ramos: que a pesar de sendas declaraciones del alto Tribunal sobre la supremacía de la Ley y los Códigos, luego se dan muchas ocasiones en que dicho foro expresa su poder para interpretar y desechar dichos estatutos. Asimismo alterna el uso de las reglas de interpretación contenidas en el Código Civil con la aplicación de las máximas y aforismos en boga en la jurisprudencia anglo-norteamericana (29). Que el Tribunal Supremo complementa los artículos del Código Civil con citas de fuentes de Derecho norteamericano.

En un artículo que escribe el Ldo. Ulpiano Crespo en 1914 titulado Uniformidad de Legislación (30), nos ofrece la siguiente visión de lo que venimos exponiendo:

"Un hecho que demuestra la identidad existente entre los - principios del Derecho sajón y el nuestro, es que casi todos los abogados de la isla tienen en sus bibliotecas un juego completo de las decisiones de California, la Enciclopedia de Ley y Procedimiento y hasta las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y estos son los libros que se usan en la preparación de los alegatos para sostener cualquiera contención jurídica ante cualquier corte insular.

Y aún mas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sanciona como buena esta práctica y en sus decisiones cita jurisprudencia americana y la obra de texto de autores sajones. Se comprueba esto, por ejemplo, ojeando el tomo 17 de las Decisiones de Puerto Rico, y leyendo las opiniones contenidas en él se verá que están basadas sobre los mismos razonamientos que - servirían de base en cualquier decisión análoga en una corte cualquiera de los Estados Unidos (17 D.P.R. 1116)

Luego añade el Ldo. Ulpiano Crespo lo siguiente: "La terminología de la jurisprudencia española va desapareciendo por momentos, pues hay tendencia entre los jueces y abogados puertorriqueños en usar términos legales americanos en lugar de los ya casi olvidados de nuestra vieja jurisprudencia". Sobre este particular escribió - treinta y tres años después (1947) el ex Decano de Derecho de la -

Universidad de Puerto Rico, Lodo. Rafael Martínez Alvarez, en su artículo, Influencia de la Ley Común en el Derecho Civil de Puerto Rico: "No es de extrañar, por lo tanto, que frases derivadas de la ley común sean de uso corriente y continuo en la jurisprudencia nativa" (31)

En cuanto al "stare decisis" (32), la misma ha tenido gran importancia e influencia en el Derecho puertorriqueño desde 1904. Manifiesta el Lodo. Martínez Alvarez que: "Es digno de notarse que la filtración de la stare decisis se va operando a través de las decisiones de los jueces norteamericanos, especialmente de las del Juez Mac Leary mostrándose reacios los jueces de procedencia hispánica a utilizarla". Luego añade: "Así comenzó el trasplante de la ley común en el derecho civil, y a germinar el criterio de que los tribunales puertorriqueños tomasen "the same view of the binding force of judicial precedent as do the judges of any Common Law jurisdiction" ". (33). Poco a poco los magistrados puertorriqueños del alto tribunal comenzaron a usar los precedentes bajo el liderazgo de los jueces norteamericanos y el patrocinio de D. Emilio del Toro - Cuebas quien permaneció en el Tribunal Supremo de Puerto Rico la friolera de 31 años. Desde 1909 a 1922 como Juez Asociado y desde 1922 a 1940 como Juez Presidente (34). Durante el período histórico que examinamos, podemos afirmar que se citan en demasía, a diestro y siniestro, y que se acude usualmente en las decisiones y sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico a las opiniones de los tribunales norteamericanos, federales y estatales. Aún cuando las únicas que le obligan son las opiniones del Tribunal Supremo de los Estados

Unidos (35). Finalizó este sucinto análisis del stare decisis - con una cita de la monografía del Dr. Manuel Rodríguez Ramos titulada, Reexamen del Precedente Judicial en Puerto Rico.

"En Puerto Rico el Derecho positivo ha sido siempre, primordialmente Derecho emanado de la Legislatura, y no Derecho judicial. Ciertamente es que al resolver todos los problemas legales que se presentan tiene el Tribunal Supremo que interpretar la Ley aplicable al caso y que al convertir en precedente obligatorio esa interpretación, lo que hace el Tribunal realmente es legislar.... De otra parte, en distintas ocasiones ha expresado el Tribunal Supremo que su función no es la de legislar, y que solamente lo hace intersticialmente."

Además del aspecto del stare decisis el precedente judicial ha influido en Puerto Rico en otros aspectos de la problemática que venimos examinando: en la enseñanza del Derecho y en la preparación y vida profesional del abogado. En realidad histórica ambos aspectos están muy unidos hasta 1913 (36), pues no es hasta ese año en que se establece la Escuela de Derecho del Estado, la de la Universidad de Puerto Rico. El estudiante de Derecho hasta 1912 cursa la carrera por estudios libres, esto es, por su cuenta o bajo la dirección de un "abogado en la práctica". Ya en 1904 el Secretario de Justicia de Puerto Rico, o como entonces se le designaba el Attorney General, Mr. Frank Feuille, describe en su Informe Oficial como estudia y se prepara un letrado puertorriqueño, al comentar la recién

aprobada Ley de Procedimiento Civil: (37)

"Uno de los mas grandes beneficios derivados de la nueva - ley de práctica se encuentra en el impulso que le ha dado al estudio del Derecho americano por los abogados nativos. Pocos de ellos no tienen libros de Derecho norteamericanos, y en la selección de dichos libros, no se limitan a obras sobre procedimiento, sino que han extendido sus investigaciones a muchas otras ramas del Derecho norteamericano. El resultado ha sido un marcado cambio en el pensamiento jurídico en Puerto Rico. Para poder leer el Derecho norteamericano el abogado portorriqueño tiene que aprender inglés, y la dedicación de muchos de ellos en esa dirección es valedora de la más alta alabanza".

La prensa de la época contiene anuncios de casas editoras de obras de Derecho norteamericanas. Vienen a la isla viajeros de las mismas y es necesario e imprescindible tener en su oficina profesional dichos libros norteamericanos. La situación es descrita en 1914 por el Ldo. Ulpiano Crespo en el artículo antes citado, Uniformidad de Legislación: "Un hecho que demuestra la identidad existente entre los principios del Derecho sajón y el nuestro, es el que casi todos los abogados de la isla tienen en sus bibliotecas un juego completo de las decisiones de California, la Enciclopedia de Ley y Procedimiento y hasta las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y estos son los libros que usan en la preparación de los alegatos para sostener cualquiera contención jurídica ante cual

quier corte insolar". En el año 1935 un distinguido jurista y político puertorriqueño el Lcdo. José Ramírez Santibañez describe - la situación de esta forma:

"Desde el cambio de soberanía, o sea desde 1898 acá y siempre en crescendo, el letrado ha ido perdiendo en puerto Rico, fuerza creativa e imaginación, ha desatendido el estudio de la lógica, de la filosofía y de la historia, amén - del abandono manifiesto en que se tiene el idioma, para convertirse no en un analizador de la ley sino en un simple - bibliotecario, coleccionador de interminables tomos de las decisiones y buscador de citas, circunstancia que le ha venido apartando de la noble misión del togado profesional, de hombre pensante, razonador y analítico para convertirlo en un simple eco de cosas dichas por otros, en interpretación de Leyes disímiles en estructuras sociales diferentes, en pueblos que responden a otro impulso de formación y se orientan por una muy opuesta ideología. El sistema de interpretación por el ritual de decisiones está quizás justificado, aunque hoy grandemente combatido en comunidades regidas por el derecho común, no como en la nuestra, por Códigos preestablecidos" (38).

En cuanto a la enseñanza del Derecho en Puerto Rico la misma confronta iguales problemas que la abogacía para los estudiantes que permanecen en Puerto Rico y cursan la carrera por cursos libres, esto es, por cuenta propia o bajo la dirección de un abogado. De -

otra forma, y esto para las clases acomodadas, si se desea estudiar en una Facultad de Derecho hay que trasladarse a los Estados Unidos, pues así lo estipula la Orden General Núm. 134 de 31 de agosto de 1899, política publica que es reiterada por la Asamblea Legislativa por Ley de 8 de mayo de 1906. La ausencia de una Escuela o Facultad de Derecho en Puerto Rico es problema vital durante los primeros quince años del nuevo régimen. El País de 3 de julio de 1900 ve el peligro que ello conlleva para el Derecho puertorriqueño y advierte sobre el mismo, sin eco en las esferas gubernamentales quienes no establecerán una Facultad hasta 1913 y ello obligados por las circunstancias. Dice El País: "Sin esa escuela - dentro de quince o veinte años no tendremos jurisprudencia propia, y el Derecho a que estamos sometidos habrá que traerse de otra - parte, si pudiera decirse que dentro de cuatro o cinco años tendremos Escuela de Derecho, el temor sería injustificado, pero aún así, sería racional; hoy, tenemos hombres que pueden dedicarse a esa enseñanza, dentro de ocho o diez años habrá que traerlos de otra parte" (39). Sibilinas palabras las del diario republicano. Por esta época se publicaba diariamente un anuncio en The San Juan News, sobre la Facultad de Derecho de la National University of Washington. Comenzaba anunciando los requisitos necesarios para ser admitido y luego reproducía la siguiente nota: "En vista del crecimiento número de estudiantes cubanos y puertorriqueños que hay matriculados en el Colegio de Leyes de la Universidad Nacional, esta Facultad anuncia haberse agregado al plan de estudios ordinario, varios cursos encaminados a elevar las necesidades especiales de -

aquellos estudiantes que piensan ejercer la abogacía en Cuba y - Puerto Rico. Entre estos cursos hay uno de Almirantazgo y Leyes Marítimas, una Exposición del sistema Judicial de los Estados Unidos y conferencias sobre el método para establecer reclamaciones contra el Gobierno de los Estados Unidos (40). Terminó con una cita del jurista y sociólogo puertorriqueño Dr. Santos P. Amadeo (41), "Este Tribunal (se refiere al Tribunal Supremo de Puerto Rico) al interpretar estos estatutos especiales así como las disposiciones del Código Civil las ha interpretado a la luz de la jurisprudencia americana".

Las Comisiones Codificadoras.

La idea de revisar el ordenamiento jurídico puertorriqueño - es antigua entre los nuevos gobernantes norteamericanos como hemos visto (42). Dos Comisiones sucesivas se encargarán de examinar, revisar y recomendar cambios en el ordenamiento jurídico puertorriqueño. La primera cuyo nombre oficial es Commission to compile and revise the laws of Porto Rico (43), es creada por el artículo núm. 40 de la Ley Orgánica de 1900 (Foraker). El mismo dispone : "que una Comisión compuesta de tres miembros, siendo por lo menos uno de ellos ciudadano natural de Puerto Rico, será nombrada por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado, para compilar y revisar las leyes de Puerto Rico, como también los varios - Códigos de procedimiento y sistema de Gobierno municipal actualmente en vigor; y para formular y proponer las leyes que fueran -

necesarias para formular un gobierno sencillo, armónico y económico..." La segunda es creada por una Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de fecha 31 de enero de 1901 y su nombre oficial es Comisión Codificadora de Puerto Rico. (44). Su encomienda es la siguiente: "La compilación, revisión y codificación de un sistema de leyes para Puerto Rico". Luego en su informe se manifiesta: "La citada Ley ordena a la Comisión presentar un minucioso informe de su labor al Gobernador de Puerto Rico, quien someterá los Códigos propuestos a la próxima Asamblea Legislativa de Puerto Rico. - Se exige también a la Comisión que presente los Códigos en inglés y español" (45). El Gobernador de Puerto Rico designará los tres miembros.

La primera Comisión, 1900.

El artículo 40 de la Ley Foraker estipula que la Comisión para revisar y compilar las Leyes de Puerto Rico tiene el término de un año para efectuar su delicada, extensa y muy complicada tarea. Esto es, desde el 12 de abril de 1900 hasta el 12 de abril de 1901. Un examen estadístico y cronológico de ese año en relación con las tareas de la referida comisión nos ilustra y demuestra que ésta - dedicó muy poco tiempo a trabajar como tal cuerpo. La estadística reflejará el tiempo pasado desde la vigencia de la Ley: un año de 11 meses, 13 días.

Resumen estadístico sobre el funcionamiento de la Comisión para
revisar y compilar las Leyes de Puerto Rico.-

I. Fechas Básicas

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Aprobación de la Ley Orgánica (Foraker) | 12 de abril de 1900 |
| 2. Vigencia de la misma disposición | 1 de mayo de 1900 |
| 3. Tiempo disponible para trabajar y reunirse | 11 meses, 18 días |

II. Nombramientos (juramento)

| <u>Nombre</u> | <u>fecha</u> | <u>tiempo transc.</u> |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Mr. Leo S. Rowe | 25 junio 1900 | 1 mes, 25 días |
| 2. D. Juan Hernández Lopez | 30 junio 1900 | 2 meses |
| 3. Mr. Joseph M. Daly (Presidente) | | 2 meses, 3 días |

III. Reuniones de los Comisionados en Nueva York.
(Mr. Rowe y Mr. Daly exclusivamente)

1. 26 de junio de 1900 (Daly no ha jurado)
2. 27 de junio de 1900
3. 2 de julio de 1900
4. 10 del mismo mes
5. 19 del mismo mes
6. 26 del mismo mes
7. 17 de agosto de 1900
8. 24 del mismo mes

Total de reuniones: 8

IV. Traslado de los Comisionados norteamericanos a Puerto Rico.

| <u>Nombre</u> | <u>Llegada P.R</u> | <u>Regreso EEUU</u> | <u>Tiempo de estancia</u> |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Mr. Rowe* | 30 agosto 1900 | abril 1901 | Alrededor de 7 meses y 7 días |
| 2. Mr. Daly | 8 septiembre 1900 | 16 septiembre 1900 | 7 días |

* Advertencia: La fecha de regreso de Mr. Rowe no ha podido ser -- exactamente conocida, aparentemente fue a finales de abril. El mes de octubre y parte de noviembre viajó por pueblos.

Tiempo transcurrido desde 1 de mayo de 1900 (vigencia Ley)

| <u>Nombre</u> | <u>Tiempo</u> |
|---------------|-----------------|
| 1. Mr. Rowe | 4 meses |
| 2. Mr. Daly | 4 meses, 8 días |

V. Audiencias Públicas de la Comisión en Puerto Rico.

| <u>Participantes</u> | <u>Fecha</u> | <u>Días laborales disponibles.</u> |
|------------------------|----------------------------|--|
| 1. Mr. Rowe | 6 al 20 septiembre de 1900 | 13 días excluyendo Domingos e incluyendo Sábados |
| 2. Sr. Hernández López | | |

VI. Fechas límites impuestas por la Comisión.

| <u>Fecha</u> | <u>Asunto</u> |
|----------------------------|---|
| 1. 30 de noviembre de 1900 | Hasta cuando se consideraron los informes y escritos enviados por personas escogidas invitadas por la Comisión. |
| 2. 12 de abril de 1901 | Entrega oficial del Informe al Congreso de Estados Unidos. |

El Presidente de los Estados Unidos, Mr. William McKinley, - designó miembros de la Commission to revise and compile the Laws - of Porto Rico a los abogados norteamericanos. Mr. Joseph Daly, ex Juez, residente en Nueva York y Mr. Leo S. Rowe de Pennsylvania - (46) y al puertorriqueño, ex Secretario de Justicia, Ldo. Juan Hernández López. Los miembros norteamericanos se reunieron en Nueva York, lugar de residencia del Presidente de la Comisión Mr. Daly, el 26 de junio de 1900, casi tres meses después de la aprobación de la Ley Orgánica Foraker (47). En dicha reunión, se constituyeron en comisión "y acordaron invitar al tercero, a la sazón residente en - Puerto Rico, para que se sirviese venir a unirse a sus colegas en - la ciudad de Nueva York con el fin de organizarse, delinear un plan general de los trabajos y preparar una entrevista con el Presidente de los Estados Unidos y el Fiscal General" (48). Además de este reunión inicial los dos comisionados norteamericanos se reunieron siete veces más durante los días 27 de junio, 2, 10, 19 y 26 de julio y - 17 y 24 de agosto. Durante estas reuniones se dividió el trabajo de la Comisión entre ambos comisionados (49), todo ello sin la participación del Ldo. Juan Hernández López quien continuaba en Puerto Rico. A su debido momento contesta el comisionado Hernández López:

"Habiéndole el miembro puertorriqueño de la Comisión, Dr. Juan Hernández López, contestado a la carta de invitación manifestando su preferencia porque la organización se llevase a cabo en San Juan, Puerto Rico y apoyándose para ello en excelentes razones, fue acuerdo que el comisionado Rowe saliese para Puerto Rico..." (50).

Las razones expuestas por el Comisionado puertorriqueño las imaginamos por ser obvias. ¿Cómo efectuar la revisión y compilación del Derecho puertorriqueño desde Nueva York?. La seria dedicación, no a la revisión y compilación, a meramente conocer aunque superficialmente un ordenamiento jurídico como el puertorriqueño de ese momento, 1900, obligaba a comenzar trasladándose a Puerto Rico. Y si manifiesto que sea para conocer y estudiar dicho cuerpo jurídico se debe a que el mismo es uno técnico, muy avanzado, ciertamente mucho más completo y complicado que el Derecho a que estaban acostumbrados los noveles comisionados norteamericanos. Añádase a esta perspectiva que como la misma Comisión reconoce en su informe oficial:

"Al dar comienzo la Comisión a sus trabajos de revisión el material que existía era fragmentario, y en muchos casos defectuoso. No se habían hecho traducciones de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, pues la que se publicó de la primera, en enero del corriente año (1901), no llegó a Puerto Rico sino en el mes de febrero siguiente. Aquellas traducciones de qué podíamos aprovecharnos, exigían asimismo una detenida revisión con objeto de que fueran del todo utilizables" (51)

Aflora pues en estas actitudes y declaraciones de los miembros de la Comisión una de las dificultades más grandes que existen en - en el seno de la misma para poder efectuar la tarea encomendada. El desconocimiento total del idioma español por parte de los comisionados norteamericanos y la misma situación por parte del comisionado puertorriqueño con respecto al idioma inglés. Asimismo el conocimien

to superficial del Derecho Civil y el ordenamiento jurídico de raíz civil por los comisionados Rowe y Daly y la completa ignorancia del sistema legal anglo-americano, estatal o federal, por parte de D. - Juan Hernández López, quien cursó la carrera de Derecho en las Universidades Central de Madrid y Sevilla en 1881 (52).

Mr. Leo S. Rowe llega a San Juan el 30 de agosto de 1900, esto es, cinco meses desde la aprobación de la Ley Orgánica Foraker. - ¿Cual era el ambiente y la opinión de los puertorriqueños con respecto de la Comisión para revisar y compilar las Leyes de Puerto Rico?. Un testigo excepcional por su posición y del que no se puede juzgar de parcial a los puertorriqueños, nos ofrece el estado de la opinión pública sobre este asunto. Me refiero al Gobernador Militar, General George W. Davis, quien en su informe oficial manifiesta:

"A pesar de que pocos, si algunos de los más ilustrados nativos, y ninguno de los españoles de la clase del comercio, se inclinan a comentar abierta y desfavorablemente la exigencia del Congreso de que sus leyes sean codificadas y alteradas por una Comisión extraña, todos, en su fuero interno, resienten la insinuación de que ellos mismos, sin la ayuda de los americanos, no sean perfectamente aptos para revisar sus propios Códigos si el nuevo estado de cosas así lo requiere. Están ellos conscientes de tener ahora una Asamblea Legislativa en la cual ha delegado el Congreso el poder de legislar. ¿Qué falta hace una Comisión codificadora?. Ellos saben que el Congreso ha establecido en la isla un Tribunal en el cual los ciudadanos de los Estados Unidos y los extranjeros pueden dirimir sus controversias y ha-

llar castigo para los delitos. Así los americanos no tienen motivo de queja. "Las leyes puertorriqueñas son satisfactorias para los puertorriqueños", aducen éstos, "y si no lo son, nosotros mismos podemos cambiarlas, pero siempre nos negaremos a aceptar de buen grado una revisión de nuestros códigos que no sea nuestra propia revisión" (53).

Seguidamente añade el Gobernador Militar:

"Pero el Congreso exigía que tal revisión se hiciera. Aunque - parecería físicamente imposible que tres de los más sabios juristas que jamás existieran pudieran revisar y redactar de nuevo en pocos meses un completo Código de leyes para un pueblo extraño (casi un millón en número) Supongamos que se somete el informe a la consideración del Congreso. Cuando la revisión alterase substancialmente las leyes existentes, las protestas llegarán al Congreso firmadas por millares, con razones de peso en contra de la innovación. De otra parte, nadie estará dispuesto a sostener y defender tal medida, excepción hecha de la Comisión Codificadora y de algunos americanos, residentes en la isla. - ¿Puede alguien dudar que el Congreso, en tal caso, desistiría - de forzar en ese pueblo un Código extraño que no sería bien visto por sus habitantes?" (54)

Sin embargo, el diario norteamericano publicado en Puerto Rico, - The San Juan News, reflejando la preocupación de la colonia norteamericana residente en la isla publica la siguiente nota en primera plana: "La tardanza de los comisionados en venir a la isla y dedicarse a la -

muy importante tarea de revisar las leyes existentes y hacer recomendaciones en esto ha sido el objeto de considerable ansiedad en la isla. Primero se anunció, hace algún tiempo atrás, que la Comisión tendrá sus oficinas principales en Washington a cuya proposición el miembro puertorriqueño objeto basándose en varios fundamentos" (55).

En vista de que el comisionado Daly no llegaba a San Juan para descargar la responsabilidad contraída, la Comisión por mayoría de Rowe y Hernández López decidió celebrar audiencias públicas desde el 6 al 20 de septiembre. El 8 de ese mes, ya comenzadas las visitas llegó a San Juan Mr. Joseph Daly. Luego se procedió a reunir dicho organismo y a distribuir por segunda vez las áreas de estudio entre los comisionados. "Al Hon. Joseph Daly: (1) código penal; (2) enjuiciamiento civil y criminal, particularmente el habeas corpus; (3) ley de pruebas, juicio por jurados; (4) organización de tribunales. Al Sr. Juan Hernández López: (1) código civil; (2) enjuiciamiento civil y enjuiciamiento criminal; (3) Ley Hipotecaria y territorial; ley notarial; (4) jurisdicción y organización de los tribunales. Al Dr. L. S. Rowe: (1) gobierno local rural; (2) gobierno local urbano; (3) organización de los departamentos administrativos; (4) tributación y rentas; (5) instituciones de beneficencia. Según el acuerdo cada miembro "debería concretarse y para hacer el correspondiente informe". Ocho días después, el Presidente de la Comisión Mr. Daly se ausentaba permanentemente de Puerto Rico, mientras dicho organismo continúa trabajando en San Juan con sólo dos miembros. Tanto llamó la atención la ausencia de Mr. Daly que el diario The San Juan News, de miércoles 13 de febrero de 1901 se vé

obligado a publicar una nota al respecto: "El Juez Daly trabaja en - el Informe, "Desde que recibió su nombramiento, el Juez Daly ha venido desempeñando su cargo desde Nueva York, habiendo visitado esta isla una sola vez" (56). Esta irregular situación nos ofrece una idea - del marco de circunstancias en que se desenvolvió este organismo.

Ante la Comisión testifican abogados puertorriqueños y norteamericanos (58) y personalidades especialmente invitadas. Las audiencias duraron escasamente trece días y no vuelven a celebrarse, asimismo se pone de fecha límite para tener en cuenta los informes que se le envían. Otra noticia del The San Juan News nos ofrece una idea del impacto de los trabajos de la Comisión en los abogados norteamericanos. La fecha de la misma es domingo 9 de septiembre de 1900 y se titula: La - Comisión propone audiencia", "Importante reunión de la Asociación de Abogados Americanos celebrada ayer tarde"

".....
Ayer tarde se celebró una reunión de la Asociación de Abogados Americanos en las oficinas de Mr. Dexter. Mr. José R. F. Savage actuó de Secretario pro temp y los más importantes abogados de San Juan estaban presentes. Muchas importantes enmiendas que se consideran necesarias en leyes que existen actualmente fueron - discutidas, así como los más importantes argumentos serán traídos a la consideración de la Comisión".

Luego el sábado 15 de septiembre de 1900 la Comisión, Mr. Rowe y el Ldo. Hernández López, dedicaron todo el día a escuchar el testimonio y las sugerencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Asocia-

ción de Abogados Americanos. La influencia que trataron de ejercer - los miembros de esta organización y la colonia americana sobre las de terminaciones finales de la Comisión fue grande. Muchas de sus propues- tas fueron aceptadas, la mayoría de las veces con la desaprobación o el voto en contra de D. Juan Hernández López. En un artículo-editorial de Review of Review, revista que se publica en Estados Unidos, titula- do The New Porto Rican Law Codes, Contact of the spanish with the ame- rican legal system (58) se apunta y menciona el hecho que antes afir- mamos. "Es evidente además, del comentario contenido en el Informe, - que se adujo considerable presión sobre la comisión para que barriese el sistema español de un solo golpe y lo sustituyese por el código de un Estado de la Unión...".. "Esta ignorancia de los sistemas jurídicos extranjeros explica el sentimiento tan prevaleciente en el foro, de - que cualquier otro sistema fuera del "Common Law" no puede llenar los requisitos de la justicia".

Mr. Leo S. Rowe, publica tres años después, en 1904, un extenso libro sobre la isla y lo titula, The United States and Porto Rico. - Cito una vez más su opinión sobre el ambiente y las inter relaciones entre los norteamericanos -especialmente los abogados- y los puerto- rriqueños en su isla:

"En Puerto Rico nos hemos confrontado con un pueblo extraño a nosotros en su modo de pensar y marcadamente europeo en su vi- da institucional. Por cerca de cuatro siglos el Derecho roma- no, con su esencialmente distinta teoría de la familia, ha go- bernado las relaciones domésticas; un sistema administrativo

altamente centralizado ha fijado el tono a la vida ciudadana y la iglesia Católica Romana, sostenida por el Estado e identificada con éste, ha fortalecido el principio de autoridad - que penetra tanto las relaciones domésticas como las públicas. Cualquiera que sea nuestra opinión con respecto a la conveniencia de esta estructura social, es evidente que la misma no puede ser variada súbitamente sin que necesariamente se ponga en peligro la totalidad del orden social de la isla. De no haber sido por la política conservadora del Gobierno civil establecido bajo la Ley Foraker, pudimos haber despertado una desconfianza en las instituciones americanas que habría demorado por no menos de una generación la americanización de la isla. Para la masa de los americanos residentes en la isla, especialmente para los abogados, la totalidad del sistema de ley y gobierno, de instituciones domésticas y públicas, era malo sencillamente porque era distinto del nuestro. Todo lo que no se conformaba a nuestro sistema era no sólo no americano, sino antiamericano. El abogado de Massachusetts quería el sistema de Massachusetts, el abogado de South Carolina quería el sistema de North Carolina, y así sucesivamente. No tuvo peso el hecho de que uno de los prósperos Estados de la Unión vive bajo un derecho civil que en muchos aspectos es similar al sistema español. Se condenaba el sistema porque difería del nuestro. El único modo de hacer americanos a los puertorriqueños, se argüía, era darles, sin dilación, el sistema de Derecho de uno de nuestros Estados. "Esta es la forma en que lo hacemos en los Estados Uni

dos" se consideraba un argumento suficiente para crear el convencimiento en la mente de cada nativo".

El 17 de diciembre de 1900, D. Manuel F. Rossy, Presidente de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, solicita por acuerdo de ese cuerpo un resumen de los trabajos hechos por la Comisión "para que puedan servir de base y auxilio a la comisión legislativa de este cuerpo" - (59). Al día siguiente los Comisionados Rowe y Hernández López contestan enviando proyectos de ponencias individuales.

El Informe de la Comisión tiene fecha de 16 de abril de 1901. Se envió el mismo al Attorney General of the United States, Mr. P. C. - Knox, para que éste más tarde lo remitiera al Congreso, encomienda que este funcionario cumplió el 3 de diciembre de 1901 (60). Cinco partes tiene dicho Informe: I, Preámbulo General; II, Comentarios a los Proyectos de Ley Acordados por la Comisión; III, Comentarios a los Proyectos propuestos por individuos de la Comisión; IV, Texto de las revisiones propuestas por la Comisión; V, Texto de las revisiones propuestas por individuos de la Comisión (61).

En cuatro páginas nos narra la Comisión "El Problema de la Revisión (62). De ellas espigaré lo que entiendo sea más interesante para nuestro estudio. Comienza distinguiendo la diferencia entre Leyes públicas y privadas. Luego ofrece unos consejos sobre la administración local llegando inmediatamente a la médula de su encomienda:

"La revisión de los códigos criminal, civil y de comercio y de las leyes de enjuiciamiento que entra en el propósito de la - Ley Foraker ofrecen mayores dificultades que las del sistema -

político y administrativo. Al acometerla nos ponemos en contacto con instituciones íntimamente identificadas con las tradiciones, hábitos y vida del pueblo y en cierto modo nacidas de éstos. Todo cambio, pues, especialmente en la ley sustantiva, debe someterse a prueba, no sólo en cuanto a su viabilidad y valor intrínseco, sino también por lo que respecta a la influencia que haya de ejercer en la estabilidad y ordenado desenvolvimiento de las instituciones del país" (63) (énfasis - suplido)

Es necesario consignar aquí que tales instrucciones no fueron ni seguidas ni respetadas, cuando la Comisión de Códigos de Puerto Rico, sucesora de la Comisión para revisar y compilar las Leyes de Puerto -cuyo informe estamos examinando- entregó sus recomendaciones. Téngase en cuenta que la segunda Comisión estaba integrada por los mismos -miembros que la primera, con excepción de Mr. Daly, que fue sustituido por Mr. J. M. Keedy, ex Fiscal de la United States Provisional Court.

Luego continúa inmediatamente el informe que antes interrumpimos.

"Hay que notar, por otra parte, que los códigos civil y de comercio de Puerto Rico han sido cuidadosamente revisados por sucesivas comisiones codificadoras españolas y que constituyen - un sistema de Derecho mucho más avanzado que los que existen - en cualquiera de los países de Sud América"

.....

El mas importante problema que presenta la revisión de los có-

digos civil y de comercio es la simplificación del sistema -
en ciertas partes, y la eliminación de instituciones que no
han echado raíz en Puerto Rico. El Código penal vigente no -
ha recibido el beneficio de la misma esmerada revisión
Las leyes de enjuiciamiento civil y criminal exigen simplifi-
cación, con el objeto de que su aplicación sea menos embara-
zosa y pesada. La sencillez en los procedimientos, que carac-
teriza muchas de las leyes de nuestros Estados, puede ser in-
troducida aquí muy fácilmente sin violar o contravenir ningun-
na de las tradiciones establecidas. A la verdad, la adaptación
del sistema español al sistema americano del Derecho privado,
convendría que se iniciase por medio de las leyes de enjuicia-
miento. (énfasis suplido) (64)

Luego procede a hacer unas interesantes observaciones que nos o-
frecen una visión de los problemas que estamos examinando.

"No cabe duda que fue el propósito del Congreso armonizar las
instituciones de la Isla con el sistema americano, haciendo -
esto, no obstante, sin repentinos cambios que pudieran ocasio-
nar a los habitantes cargas y gastos minando así su respeto -
por el Derecho. El esfuerzo que significaba el estudio de nue-
vos sistemas legales y su ajuste a la vida diaria recae en la
comunidad con todo el vigor de una nueva e inesperada carga.
Cualesquiera cambios violentos despertarán un espíritu de re-
sistencia pasivo como impedimento a todo esfuerzo por america-
nizar la isla. Debe tenerse en mente que la base de los códi-

gos españoles es el Derecho Civil o romano, el que, habiendo sido durante siglos el único sistema en los países de los cuales derivamos el Derecho Común, puede considerarse fuente de origen de este último, al cual ha prestado muchas de sus saludables instituciones. El sistema legal de Estados Unidos es completamente compatible con la preservación de instituciones que han resistido la prueba del tiempo y la experiencia de los países más avanzados de Europa y Sur América.

.....

La Comisión no fue nombrada para barrer por completo con el sistema legal de la isla, sino más bien para preservar las instituciones nativas que han dado evidencia de vigor y crecimiento y para adaptarlas a los principios fundamentales del Derecho Americano " (65)

Se refiere a que sobre los miembros de la Comisión se ejerció influencia para que recomendasen la total sustitución del Ordenamiento jurídico puertorriqueño por un sistema legal parecido al norteamericano (66). Como nos informa el Attorney General de Puerto Rico, Mr. James S. Harlan en su Informe Anual al Gobernador de Puerto Rico de 1 de abril de 1901, "Muchos de los abogados americanos residentes aquí, creen que hubiera sido más sabio implantar un sistema de leyes americanas en la isla" (67). Continuemos; asimismo leyendo este último párrafo me sorprende la candidez de la Comisión pues, ¿quien decide cuales instituciones nativas han dado evidencia de vigor y crecimiento?, ¿cómo se efectúa esto técnicamente?, y asumiendo para efectos de discusión que

tales decisiones se puedan tomar seria y jurídicamente y sin arbitrariedad, las resultantes instituciones nativas serán "adaptadas a los principios fundamentales del Derecho anglo-americano". ¿Puede pedirse mayor confusión, hibridismo exótico y mayor desconocimiento jurídico y metodológico? Más no podemos ser exigentes con el informe de la Comisión pues, ¿cómo descargar la encomienda congresional de revisar y recopilar las Leyes de una nación como Puerto Rico, diferente en idioma, cultura, raza y con un sistema jurídico codificado superior al de los comisionados norteamericanos?. La misma Comisión reconoce su incapacidad para entender en su enmienda al manifestar:

"Exceptuándose la revisión de la Ley Orgánica, todas las materias confiadas a la Comisión caen dentro de la competencia de la Asamblea Legislativa local, y a menos que el Congreso se disponga a aprobar un completo código de leyes para la isla, la revisión del sistema legal tendrá que ser hecha por la Asamblea insular. (68)

Terminamos el análisis de "El problema de la revisión" con una última cita. "Cualquiera de estas materias exigiría de por sí gran parte del tiempo que dispone la comisión para el estudio de las condiciones actualmente existentes y para discurrir acerca de un plan de reformas. Habiéndosele ordenado presentará su dictamen general dentro del año siguiente a la fecha de la aplicación de la Ley Foraker (abril 12, 1900) el nombramiento de los miembros que la componen no se llevó a cabo sino dos meses después. Dado el tiempo y el material y los recursos de que disponía, se consideró provechoso y conveniente re-

concentrar todo nuestro pensamiento en aquellas partes de los códigos existentes que más necesitaban de revisión. Siguiendo este plan, se remediarán las más urgentes necesidades de la isla y las reformas subsiguientes se podrían llevar a cabo gradualmente por la Asamblea legislativa de Puerto Rico".

Termino con una cita del Dr. Rodríguez Ramos sobre la Comisión: "Si nos propusieramos descubrir en dos palabras la situación y las circunstancias que rodearon el Trabajo de la Comisión escribiríamos: premura y confusión" (69) (énfasis suplido)

La Segunda Comisión, 1901.

El Congreso de los Estados Unidos no estaba dispuesto a legislar aprobando un ordenamiento jurídico para Puerto Rico. Así, el informe de la Comisión para revisar y compilar las Leyes de Puerto Rico fué impreso y distribuido, pero dicho cuerpo legislativo se ocupó más del asunto. Una Ley de la Asamblea Legislativa de 31 de enero de 1901 estableció una Comisión Codificadora de Puerto Rico (70), la cual se dedicaría a revisar, compilar y codificar el Derecho puertorriqueño, entregando al Gobernador un Informe Oficial con sus recomendaciones al término de su encomienda. El término para efectuar tan delicada, - extensa y muy complicada tarea es de ocho meses y diez y ocho días, - esto es, desde el 12 de abril al 31 de diciembre de 1901. Entiendo ne cesario para una mejor comprensión de los trabajos de ésta muy importante Comisión Codificadora, examinarlos estadísticamente:

Resumen estadístico sobre el funcionamiento de la Comisión Codificadora de Puerto Rico.

I. Fechas básicas.

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Creación de la Comisión Codificadora de Puerto Rico | 31 de enero de 1901 |
| 2. Comienzo de los trabajos | 12 de abril de 1901 |
| 3. Entrega del Informe al Gobernador | 31 de diciembre de 1901 |
| 4. Tiempo disponible para trabajar y reunirse | 8 meses, 18 días |

II. Nombramientos

Fecha

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Mr. Leo S. Rowe, Presidente | 28 de marzo de 1901 |
| 2. Sr. Juan Hernández López | id. |
| 3. Mr. John M. Keedy | id. |

III. Fecha de vigencia de los nuevos Códigos.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Código Civil | 1 de marzo de 1902 |
| 2. Código Penal | id. |
| 3. Código de Enjuiciamiento Criminal | id. |
| 4. Código Político | id. |
| 5. Código de Procedimiento Civil | 10 de marzo de 1904 |

IV. Nueva reunión de la Comisión de Códigos de Puerto Rico.

Fecha

Asunto

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Reunión de 10 de marzo de 1904 | Ley de Enjuiciamiento Civil |
|-----------------------------------|-----------------------------|

No hay ninguna comunicación oficial entre el Congreso de los Estados Unidos y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o el Gobernador, en el sentido de que el primer cuerpo legislativo que hemos mencionado no aprobaría un ordenamiento jurídico para la isla. Por supuesto en comunicación confidencial del Bureau of Insular Affairs se le comunica al Gobernador Mr. Charles Allen, que sería conveniente que dados los hechos antes estipulados y de que la Ley Orgánica otorgaba a la Asamblea Legislativa plenos poderes legislativos, sujetos solamente a revisión por el Congreso norteamericano, sería propio que se creara una Comisión Codificadora local. Esta colaboraría y trabajaría en armonía con el Consejo Ejecutivo y Cámara de Delegados, cuerpos colegisladores de la Asamblea, sometiendo al Gobernador un Informe para ser considerado por este último foro en su próxima reunión (71). De acuerdo a estas "sugerencias" el Dr. José C. Barbosa presentó en el Consejo Ejecutivo un Proyecto de Ley que creaba una Comisión Codificadora. Luego del trámite usual se aprobó por la Cámara de Delegados y el Consejo Ejecutivo dicha Ley el 31 de enero de 1901. La constitución y filiación política de ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa puertorriqueña es importante conocerla para entender el por qué de la aprobación de estos códigos. Según disponía la Ley Foraker la cámara alta de la Asamblea Legislativa era el Consejo Ejecutivo. Este estamento estaba integrado por once miembros, de los cuales cinco tenían que ser puertorriqueños. Los miembros se dividían en seis ex officio, pues pertenecían también al gabinete ministerial del Gobernador y cinco designados li-

brememente por el Presidente de Estados Unidos. En el momento en que nos ocupamos el Consejo Ejecutivo se componía de Mr. William H. - Hunt, Secretario de Puerto Rico; Mr. James S. Harlan, "Attorney - General"; Mr. Jacob H. Hollander, Tesorero; Mr. William H. Elliot, Comisionado de lo Interior; Mr. Martin G. Braumbaugh, Comisionado de Educación (72). Los cinco puertorriqueños eran los señores, D. - Rosendo Matienzo Cintrón (73), D. José Celso Barbosa (74), por el Partido Republicano Puertorriqueño; D. José de Diego (75), D. Manuel Camuñas por el Partido Federal y D. Andrés Crosas (76), independiente. De los once miembros del Consejo Ejecutivo cinco eran - abogados. Los norteamericanos Mr. Hunt y Mr. Harlan y los puertorriqueños Sres. Matienzo Cintrón, de Diego y Crósas. Sobre el Consejo Ejecutivo dice el Ldo. Bolívar Pagán, en su Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños que:

"Tenía que ser íntimamente chocante al pensamiento político del liderato puertorriqueño que la nueva metrópolis angloamericana, al dar por terminado el transitorio régimen militar, proveyera una carta gubernativa retrógrada como la Ley Orgánica Foraker, que retenía en manos norteamericanas el poder ejecutivo, destruía o menoscababa el poder legislativo con una mayoría de norteamericanos en la cámara alta o Consejo Ejecutivo, sin cuyo concurso quedaba toda iniciativa legislativa insular y reservaba expresamente al Congreso de Washington el poder para anular toda la legislación emanada de las Cámaras de Puerto Rico" (77).

Las primeras elecciones para llenar las vacantes de la Cámara de Delegados de Puerto Rico (78) se celebraron el 6 de noviembre de 1900. Como el Partido Federal no asistió a las mismas todos los cargos en la Cámara de Delegados fueron ocupados por los republicanos. De los treinta y cinco miembros de este cuerpo legislativo únicamente cinco eran abogados. Estos eran los señores, D. Manuel F. Rossy, quien presidía la Cámara; D. Francisco Parra Capó, Mr. - Frederick Cornwell, D. José Tous Soto y D. Leandro Aponte.

A tenor con la potestad que le confería la Ley, el Gobernador Mr. Charles H. Allen designó a los miembros de la Comisión Codificadora de Puerto Rico el 28 de marzo de 1901. Recibieron dicho nombramiento los miembros de la anterior Comisión Mr. Leo S. Rowe y el Ldo. Juan Hernández López. Para sustituir al Comisionado Daly se invitó al abogado norteamericano, Mr. John M. Keedy (79), ex Fiscal de la United States Provisional Court y uno de los líderes de la Association of American Lawyers of Porto Rico. Asimismo se había creado en el Consejo Ejecutivo una Comisión para estudiar las leyes y recomendar enmiendas a los Códigos vigentes; la integraban los Sres. Matienzo Cintrón, Garrison y Guzmán Benítez (80). Otra Comisión idéntica se estableció en la Cámara de Delegados compuesta por el Ldo. Tous Soto, los Sres. Todd y Fajardo. La función de ambos comités no era competir con la Comisión Codificadora sino estar preparadas las Cámaras para cuando se les enviase el Informe de la Comisión Codificadora. Obsérvese que esto prejuzga de cierta manera el Informe de la antes mencionada Comisión, pero es que todos sabían cual sería el destino de los Códigos puertorriqueños.

La Comisión comenzó su trabajo el 12 de abril de 1901, cuando expiraba el término de vigencia del anterior organismo, creado por la Ley Foraker.

"Con arreglo al plan adoptado en la sesión inicial de la Comisión, se encomendó al Comisionado Keedy la revisión del Código Penal y Código de Enjuiciamiento Criminal; al Comisionado Hernández López, la revisión del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil y al Comisionado Rowe la redacción de un Código Político. El contingente de cada miembro fue luego discutido en conferencias de la Comisión, con el resultado que consta en la revisión propuesta" (81).

Durante casi nueve meses estudiaron los miembros de la Comisión el ordenamiento jurídico puertorriqueño, teniendo en cuenta el Informe de la anterior Comisión. Los Códigos estudiados y revisados fueron el Código Civil de Puerto Rico (82); el Código Penal (83); el Código de Enjuiciamiento Criminal (84) y el Código Político. — "Lo limitado del tiempo de que podía disponer la Comisión —nueve meses escasos— hacía imposible intentar la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley, por otra parte, se halla tan íntimamente relacionada con leyes especiales, como la Notarial y la Hipotecaria, que sólo podrá acometerse la revisión de ella después de un detenido estudio de éstas leyes especiales".

La revisión del Código Civil de Puerto Rico la llevó a cabo el Lcdo. Hernández López, educado en la tradición civilista de las Universidades Central de Madrid y Sevilla. En el Comentario al Código

Civil revisado el Comisionado puertorriqueño se presenta muy preocupado por el giro que han tomado los asuntos encomendados a la Comisión y el destino de los Códigos de Puerto Rico. Comienza haciendo un breve recuento de lo acontecido y manifestando es posible que continúen en vigor los Códigos, con las revisiones de rigor para atemperarlos a las nuevas condiciones políticas de la isla.

"En resumen, pues, las reformas legislativas no deben ser - un rompimiento absoluto e injustificado con el pasado y mucho menos con el presente, sino que por el contrario, dentro de lo establecido por el propio "Bill Foraker", el pasado y el presente especialmente, habrán de subsistir para servir - de base al desarrollo legislativo en lo futuro; o, en una palabra, las reformas legislativas no deben ser un cambio radical, sino una evolución sistemática y reflexiva, que tenga por norte o rumbo la identidad civil y jurídica con las instituciones que son comunes a los Estados y Territorios de la Unión, por medio de la adaptación, y no por medio de la igualdad, la cual resultaría prácticamente inaplicable y contraria a la variedad que es principio esencial de vida, así en la - naturaleza como en la constitución política del hombre en - sus manifestaciones colectivas.

Puerto Rico, como parte integrante de los Estados Unidos, tiene derecho, mientras no quebrante leyes fundamentales o el - principio de unidad nacional, a desenvolver su vida local con toda variedad o especialidades en su manera de ser como pue-

blo regional, que constituyen prácticas legítimas o instituciones de carácter local que no se oponen a las instituciones de carácter general que están obligados a guardar y cumplir los Estados y Territorios de los Estados Unidos.

Así realizada la obra legislativa, resultará segura, eficaz y fecunda en los resultados de una americanización gradual, perfectamente consciente, que no nazca de una imposición de arriba hacia abajo, sino que, por el contrario, sea el fruto sazonado de la influencia y de la acción que los admirables principios del Pueblo de los Estados Unidos van ejerciendo - poco a poco, pero muy hondamente, en el corazón, en las costumbres y en el pensamiento de los puertorriqueños. Y así las leyes serán el resultado de una americanización que ha actuado primeramente sobre el pueblo y de éste ha pasado a las - disposiciones legislativas, y no el resultado de una americanización precipitada que este sólo en la ley y no en el pueblo llamado a cumplirla.

Tales principios y tal criterio han servido de base a la revisión del Código civil, y si de algo peca, es más bien por haber caído del lado de la reforma en muchos casos, no tanto por el convencimiento de que algunas de las instituciones actuales reformadas no sean buenas, cuanto por el deseo de demostrar prácticamente el amor ferviente al principio de la - identidad en todo lo que pueda parecer justo o siquiera racional" (85).

No creo necesarios muchos comentarios a lo expuesto por el - Lcdo. Hernández López. Indudablemente lo que tan tímidamente, respetuosamente y cuidadosamente quiere expresar y lo consigue, es que los otros miembros de la Comisión, la colonia de norteamericanos de San Juan (86) y el grupo republicano desean la sustitución de - las instituciones jurídicas y Códigos puertorriqueños por otros - traídos de Estados Unidos. No olvidemos que estos años al comienzo del régimen civil norteamericano eran de confusión y que algunos - puertorriqueños desorientados y de buena fé entendían que convenía al progreso de la isla borrar todo vestigio de lo hispano-puertorri- queño. Asimismo recordemos que son los tiempos del inicio de la pr^édica orientadora y exaltadora de los valores puertorriqueños del - Lcdo. Rosendo Matienzo Cintrón. Sin embargo, ni aún el tímido recla- mo del Lcdo. Hernández López le será concedido, como veremos ense- guida.

En el COMENTARIO AL CODIGO POLITICO, el Comisionado Rowe sostie- ne que, "la Comisión abriga el convencimiento de que la isla no só- lo está preparada para ello, sino que el pueblo ansía recibir los - beneficios del sistema americano y entrar de lleno, cuanto antes, en la práctica de un régimen administrativo que corresponda a los mejores modelos de la metrópoli" (87). El Comisionado Keedy en su Comentario al CODIGO PENAL Y A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, de casi dos páginas, expresa el propósito y la filosofía que le ha movido en su misión "al compilar, revisar y codificar las leyes pe- nales, el principal objeto ha sido reunir en el volumen todo el - cuerpo de leyes relativas a delitos y penas, y armonizar en lo po-

sible la legislación vigente con las leyes y procedimientos adoptados por los diversos Estados de la Unión". Sorprende la afirmación de Mr. Keedy, pues no entiendo como puede hacer la anterior manifestación si el Código Penal de Puerto Rico, vigente hasta ese momento ha sido descartado y el Proyecto de Código que él recomienda es uno totalmente norteamericano, el del Estado de California. Más adelante dice el Comisionado Keedy, "se han examinado detenidamente las leyes y estatutos de los diversos Estados, con el fin de incluir en este Código unas leyes que respondieran al desarrollo y desenvolvimiento de nuevos delitos..." El Lcdo. Hernández López consignó - en el Informe oficial su enérgica protesta por dicha sustitución - del Código Penal puertorriqueño. En el "Voto particular del Comisionado Juan Hernández López contra la totalidad del proyecto de Código Penal", consigna que:

"El Comisionado que suscribe entiende que el Código Penal - en la actualidad vigente en Puerto Rico, está necesitado de importantes reformas, sustanciales en muchos puntos, así como de una eliminación de varios de sus preceptos que no guardan armonía con el sistema político y de gobierno en que está constituida esta isla de Puerto Rico, después del cambio de soberanía sancionado por el Tratado de París de fecha 11 de abril de 1899. Y es igualmente urgente llevar a cabo una perfecta concordancia entre las nuevas leyes políticas y administrativas y muchas de las disposiciones y aún doctrinas de dicho Código Penal. Pero ésta necesidad de tales cambios y reformas no justifica, a juicio del que suscribe, una sus-

titución completa del sistema penal vigente, o sea la derogación completa y absoluta del expresado Código Penal que hoy rige y la promulgación de uno totalmente nuevo, así en su sistema general de los delitos y faltas, de la responsabilidad criminal, de las penas y de su aplicación, como en muchas partes de su tecnicismo legal, como en el detalle, fórmula y desarrollo de sus diferentes preceptos y disposiciones".

En el párrafo siguiente el Comisionado puertorriqueño expone el criterio que tiene sobre la forma o modos de efectuar la reforma de la legislación que se está llevando a cabo en el país. Dos procedimientos se ofrecen: "uno, la sustitución de unas leyes por otras, tomando éstas entre las que se consideran mejores de las múltiples y varias que rigen en los diversos Estados de la Unión. Este procedimiento, que es el más fácil para el legislador y para la rapidez de la labor legislativa, es quizás el más perturbador y menos conveniente para la vida jurídica del país; en primer lugar, por que es muy dudoso y problemático que las leyes tomadas totalmente de Estados y Territorios de los Estados Unidos y nacidas allí al calor de costumbres y condiciones especiales, puedan tener aquí, de momento, y sin más preparación que la hasta ahora realizada, una completa adaptación y un fecundo y provechoso desenvolvimiento; en segundo lugar, porque tales sustituciones harán que las nuevas leyes no resulten fácilmente comprendidas, por su propia y absoluta novedad, y de esto habrá de seguirse confusión en la práctica, a

más de que las leyes que no son o pueden ser entendidas fácilmente por el pueblo caen en descrédito y producen la desconfianza a su derredor; y en tercer lugar, porque, no puede negarse ni desconocerse que muchas de las leyes vigentes hoy en Puerto Rico, entre ellas el Código Penal, contienen principios y doctrinas que a más de haber echado raíces en las prácticas jurídicas del pueblo de Puerto Rico, son buenas en sí y corresponden perfectamente a elevados conceptos de justicia y a indiscutibles principios de la ciencia del Derecho". Termina el Ldo. Hernández López su voto particular contra la totalidad del Proyecto de Código Penal llamando la atención a que ni siquiera se tomó en cuenta los Códigos o leyes norteamericanos "cuyo pueblo guarde más analogía o semejanza con el pueblo de Puerto Rico". Aquí demuestra el Comisionado puertorriqueño un desconocimiento total de la historia de los Estados Unidos, pues como sabemos, ningún Estado tiene Leyes penales de origen hispano. Ni California, Texas, Nuevo México, Louisiana o Florida preservaron el Derecho hispano-mexicano. El mismo fué abolido y únicamente en Louisiana se preservó el Derecho autóctono pero al momento de "revisarlo y codificarlo" la Comisión se equivocó y preparó un Código Civil francés al estilo napoleónico. Por supuesto que luego se incorporaron leyes españolas y que aquellas y éstos pertenecen a un tronco común.

El jurista puertorriqueño, contemporáneo de estos acontecimientos, Dr. Luis Muñoz Morales (88), manifiesta que "el proyecto de Código Penal, que fué redactado por el Comisionado Mr. Keedy, quien presentó un brevísimo informe explicativo pero sin mencionar que -

ese proyecto estaba copiado casi en su totalidad del Código Penal y el de Enjuiciamiento Criminal de California, lo presentó como si fuera una novedad y un progreso en relación con lo existente". Luego sostiene el Dr. Muñoz Morales al discutir el Plan del Código que:

"Según dejamos indicado, ese proyecto del Comisionado Keedy es copia literal del Código de California, y en su plan primitivo y distribución de materias se siguió hasta el extremo de presentar bajo un solo articulado las disposiciones - positivas del Código Penal, y las adjetivas de Enjuiciamiento Criminal, aunque separándolas en dos leyes distintas, la Legislatura Insular, cambió el plan, en cuanto al articulado, estableciendo uno distinto para cada Código, y en cuanto al orden de materias también se separó en algunos casos que sólo sirvieron para resaltar más la falta de plan científico de ese nuevo Código, y notamos que el Código modelo de California (el que copió Keedy) fué la antigua edición de 1873, anterior, y muy inferior en su método y principio científico, al derogado español (puertorriqueño) de 1879" (89).

El Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico fue entregado el 31 de diciembre de 1901 al nuevo Gobernador de Puerto Rico, Mr. William H. Hunt, quien era abogado. Inmediatamente la mayoría de los abogados de Puerto Rico se oponen a los nuevos Códigos. Entre estos abogados se distinguen, el Ldo Rosendo Matienzo Cintrón quien tan temprano como el 16 de enero de 1902 "lanza un fuerte ataque a los nuevos Códigos, recomendando a la Cámara de Delegados que

no les impartiese su aprobación" (90). También se oponía el Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan, Ldo. Jesús María Rossy (91), hermano del Presidente de la Cámara de Delegados. En una serie de artículos publicados en La Democracia. De uno de ellos es el siguiente párrafo:

"... aquí todos hemos afirmado que el proyecto de Código Penal que nos ocupa es un disparate jurídico, y los que lo hemos asegurado públicamente, lo hemos demostrado con razonamientos de índole científica; los impugnadores de nuestra legislación actual, deben seguir el mismo método para convencernos de que el proyecto supera a cuanto aquí hay escrito - en materia penal, porque no basta decir que una obra es buena porque sí y que ya veremos cuando se aplique que buenos resultados nos dá, sino que es preciso demostrar primero sus bondades para poder confiar en sus resultados.

Pero no estamos satisfechos aún con esto sólo; si el autor del proyecto o cualquiera de sus defensores desea discutirlo en otro terreno que no sea el periodismo, pueden elegir entre cualquiera de los abogados distinguidos del país y el que más les convenga, para estudiar y resolver la interesante cuestión, que yo estoy seguro de que ninguno se negaría al llamamiento. Por lo que a mí, el último de esta clase, se refiere, yo estoy a las órdenes de los autores de proyecto o sus defensores para demostrarles de nuevo que ese Código no es obra de la ciencia, ni es digno de un pueblo culto" (92).

La oposición a los proyectos de Códigos, especialmente a los preparados y recomendados por los Comisionados norteamericanos, - calcos de Leyes de Estados de los Estados Unidos, es intensa y por supuesto en ella toman parte destacada los abogados (93). Poco tiempo tienen para estudio y propaganda pues ya para el 28 de febrero - de 1902, escasamente dos meses después de entregar los Comisionados su Informe al Gobernador, el Consejo Ejecutivo lo somete a votación. El único miembro de este cuerpo colegislador que se opone a la aprobación de los nuevos Códigos calcados de los Estados norteamericanos es el Lcdo. Rosendo Matienzo Cintrón. Los argumentos de éste son (1) "que las propuestas eran perjudiciales al país, por no estar en armonía con la opinión pública ni favorecidas por ésta"; - (2) "que habían sido redactadas aprisa, sin haber tomado en consideración las condiciones en que se hallaba el país"; (3) "que el - pueblo no estaba representado en la Cámara de Delegados, de donde estaba ausente el elemento federal" (94). Luego de un intercambio de palabras con el Dr. Barbosa, el Consejo aprobó los Proyectos de Códigos, con el único voto en contra del Lcdo. Matienzo Cintrón. - Por unanimidad la Cámara de Delegados aprobó las recomendaciones hechas por la Comisión de Códigos de Puerto Rico, con muy pocos cambios, especialmente en cuestiones de estilo. Recordemos que en este cuerpo colegislador compuesto de treinta y cinco miembros, sóla-
mente eran abogados cinco Delegados, cuatro puertorriqueños y un norteamericano, asimismo téngase en cuenta que todos eran miembros del Partido Republicano Puertorriqueño. (95).

Los siguientes cuerpos de Derecho fueron aprobados cada uno

por una Ley de fecha 1º de marzo de 1902. Código Penal de Puerto Rico, copiado, como manifiesta el Secretario de Justicia de Puerto Rico, Mr. James S. Harlan, "casi palabra por palabra, con aquellos cambios que fueran necesarios para adaptarlos a nuestro sistema, - del Código Penal y de Enjuiciamiento Criminal del Estado de California" (96). En realidad el modelo usado por Keedy y que fue aprobado, es el Código Penal de Montana, quien a su momento lo había adoptado de California (97). Ambos tienen como origen los códigos modelos preparados por Mr. David Dudley Field de Nueva York a mediados del siglo XIX. El Código de Enjuiciamiento Criminal fue tomado del Code of Criminal Procedure del Estado de California (98). Y el Código Político de Puerto Rico fue copiado en gran parte del mismo estatuto de California. (99). En cuanto al Código Civil de Puerto Rico el Dr. Luis Muñoz Morales sostiene que:

"Se introdujeron en el texto del Código Español, sobre todo en el libro primero, bastantes modificaciones en los referentes al matrimonio, divorcio; tutela, patria potestad, ausencia, paternidad y filiación, derechos de los hijos legítimos, adopción y otras que detalladamente estudiaremos, pero en la mayor parte de ellas predominó el propósito de incorporar a nuestro Derecho civil muchos preceptos del Código de Louisiana, que por cierto fueron tomados de la edición revisada del año 1870, muy anterior por tanto a la promulgación del Código Civil Español; y no se tuvo en cuenta que la mayor parte de esas modificaciones chocaban sustancialmente con nuestro

Derecho tradicional y arraigadas costumbres, que no se adaptaban a nuestro ambiente, y que no eran exigidas por ningún estado de opinión, de tal modo que luego hubo que ir las desechando para restablecer en lo más fundamental mucho de lo que se había derogado del Código español". (100)

El responsable de la reforma que se hizo al Código Civil de Puerto Rico sostuvo que la razón subyacente para esas reformas fue: "Tales principios y tal criterio han servido de base a la revisión del Código Civil, y si de algo peca, es más bien por haber caído - del lado de la reforma en muchos casos, no tanto por el convencimiento de que algunas de las instituciones actuales reformadas no eran buenas, cuanto por el deseo de demostrar prácticamente el amor ferviente al principio de la identidad en todo lo que pueda parecer justo o siquiera racional" (101).

La anterior sustitución de Códigos es completada en 1904. Aunque debo mencionar el hecho de que en el mismo año 1902 es aprobada una Ley de Corporaciones (Sociedades Anónimas) que es modificada en 1911, que es idéntica con algunas excepciones menores, a la misma del Estado de Nueva York, California. Y que se aplica e interpreta siguiendo con los principios de práctica y jurisprudencia sentados por los tribunales norteamericanos. (102). En 1904 se termina la tarea iniciada en 1902 sustituyendo los Códigos puertorriqueños. El 12 de mayo de 1903 se aprobó una Ley en virtud de la cual la anterior Comisión de Códigos "quedaba autorizada para continuar celebrando sesiones con objeto de preparar y presentar a la

próxima Asamblea Legislativa, proyectos de Ley para revisar el Código de Enjuiciamiento Civil y para corregir y revisar aquellas - leyes y códigos que necesiten ser corregidos o revisados". A pesar de esta disposición, dicha comisión no funcionó y quien en realidad preparó el Proyecto de Ley sometido a las cámaras fué el Attorney General de Puerto Rico, Mr. Willis Sweet (103). El 10 de marzo de 1904, se aprobó el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, tomado del Estado de Idaho (104).

Veamos los comentarios de un testigo excepcional, Mr. William H. Hunt, Governor of Porto Rico, en relación con la aprobación de este Código antes mencionado.

"También se ha legislado un nuevo código de procedimiento - civil, que tomará el lugar del viejo código español el cual había sido mantenido por los abogados locales con gran tenacidad. Bajo el nuevo código de práctica los asuntos se llevarán a cabo por los mismos métodos que están en boga en California y otros Estados. Se requerirá algún tiempo para que los jueces y abogados se acostumbren a los grandes cambios hechos.....

Sólamente quedan en vigor en Puerto Rico dos de los antiguos códigos españoles, a saber, el código de comercio y la ley hipotecaria. Estos dos son considerados por los jueces y jueces puertorriqueños casi perfectos en sus diversas áreas, y es posible que sean modificados hasta donde sea necesario para conformarlos a los códigos Americanos que ya se han adop-

tado. Tenemos ahora en la isla un código político, un código civil, un código de procedimiento civil, un código penal y un código de procedimiento penal, todos modelados por el sistema Americano; y muchos otros estatutos, tales como el "bill of rights", la ley del jurado, las leyes del matrimonio, y otras similares, las cuales han sido adoptadas del continente norteamericano". (105)

Termina Mr. Hunt sus comentarios hechos como Gobernador en su Informe Oficial de la siguiente manera:

"No hay método más rápido y práctico de Americanizar nuestras nuevas posesiones que aprobando y poniendo en vigor las leyes Americanas y la introducción y práctica de la jurisprudencia norteamericana". (106)

El sucesor de Mr. Sweet en el Departamento de Justicia, Mr. Frank Feuille nos ilustra cómo ha funcionado la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil norteamericana en Puerto Rico. En su Informe Oficial el nuevo Gobernador de la isla Mr. Beekman Winthrop manifiesta que: "Los jueces y los abogados.... están estudiando la misma a la luz de la jurisprudencia norteamericana, y especialmente con la ayuda de las decisiones del tribunal supremo de California, Estado del cual fue tomada" (107). Más adelante Mr. Feuille concluye:

"Uno de los más grandes beneficios derivado de la nueva ley de procedimiento se encuentra en el impulso que la misma está dando al estudio del Derecho Norteamericano por los abogados nativos. Pocos de ellos están ahora sin libros norteamer-

ricanos de Derecho, y en la selección de esos libros no se limitan a obras sobre procedimiento, sino que están extendiendo sus investigaciones a muchas otras ramas de Derecho norteamericano. El resultado ha sido un marcado cambio en el pensamiento legal en Porto Rico. La sabiduría de un sistema que confía en la sana discreción del Tribunal está siendo admitida cada vez más. Para poder leer el Derecho norteamericano el abogado puertorriqueño ha tenido que aprender el idioma inglés y merece al más gran encomio la dedicación de muchos de ellos en esa dirección" (108)

Don Rosendo Matienzo Cintrón recapitula el clima de la época, "Cuando llegaron los americanos a la isla hubo una verdadera locura que consistía en abominar de todo lo que era español o puertorriqueño, en obsequio a la ingerencia de los nuevos métodos venidos del norte... Así matamos el mejor notariado del mundo y aprobamos de un modo frenético en una noche no sé cuantos Códigos extranjeros casi sin leerlos entonces, menos antes y muy poco después" (109).

Terminemos con algunos comentarios que juristas distinguidos han emitido sobre esta sustitución de los Códigos puertorriqueños. El eminente penalista español, Don Luis Jiménez de Asúa, manifiesta sobre el trabajo de Mr. Keedy que: "La tarea se cumplió con tanta rapidez como irresponsabilidad" (110). Don Luis Muñoz Morales, civilista, Catedrático y autor; Don Santos P. Amadeo, penalista, sociólogo y Catedrático y D. Manuel Rodríguez Ramos, Catedrático, civilista y comparativista sostienen que dicho acto fue un retroceso -

jurídico (111). El Dr. Amadeo afirma sobre el Código Civil que: - "Más esto no quiere decir que el Código civil, en algunas de sus fases haya dejado de ser influenciado también por el derecho americano. Esta influencia se ha ejercido de dos maneras: Primero, por interpretación judicial de ciertos estatutos especiales de carácter substantivo y procesal que afectan los derechos consagrados en el Código civil. Segundo, a través de la interpretación judicial de muchas de las disposiciones del mismo Código por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este tribunal, al interpretar estos estatutos especiales, así como las disposiciones del Código civil, las ha interpretado a la luz de la jurisprudencia norteamericana". (112)

Don Guaroa Velázquez, civilista y Catedrático de Derecho manifestó que: "Los efectos de la influencia que el Common Law ha ejercitado sobre el Derecho Civil, luego de cincuenta años de estarse produciendo en Puerto Rico, saltan a la vista en la materia que hemos examinado. Una institución secular del Derecho vernáculo, fundamental, diáfana y precisa, aparece subvertida y reducida a un remedo vacilante, incierto y obscuro" (113). D. Alfonso L. García Martínez, Magistrado y Catedrático de Derecho sostiene que, "No cabe duda que la radical transformación de nuestras instituciones jurídicas a comienzos del período del Gobierno Civil adquirió visos de cambios catastróficos. Se llegó a pensar hasta en abolir por completo nuestro secular sistema de Derecho civil". (114)

IV

El Tribunal de los Estados Unidos para Puerto Rico.-

El 19 de abril de 1900 se reunía un grupo de abogados norteamericanos residentes en San Juan y que llevaban su práctica profesional en la United States Provisional Court. (1) El propósito de la misma era establecer una organización de abogados norteamericanos y prepararse para cuando cesara la institución antes mencionada y comenzase la que sería establecida por la recién aprobada Ley Orgánica. Mr. Thomas D. Mott (2) fué electo "temporary chairman", entre los presentes se constituyó un comité de reglas y reglamentos. El mismo se componía de Messrs. Adlin (3), Degetau (4) y Dexter - (5). Los diez primeros abogados (6), fundadores de dicha asociación serán, Mr. N.B.K. Pettingill, J.M. Keedy, T.D. Mott, Jr. (7), Benjamín J. Horton, Herbert E. Smith, W. Vincent Robbins, Andrés B. - Crosas (8), Charles M. Boerman (9) y Frederick L. Cornwell (10).

El San Juan News informa que "uno de los puestos que se solicitan con más empeño es el de Presidente de la Corte Federal que se establece por virtud del Bill" (11). El 5 de junio de 1900 el diario The San Juan News anuncia que el Presidente McKinley ha designado a Mr. William H. Holt de Frankfort, Kentucky, Juez de la District Court of the United States for Porto Rico" (12). Asimismo se nombró a Mr. Noah B.K. Pettingill como Fiscal Federal (13). No será hasta

septiembre cuando Mr. Holt comience a organizar su Tribunal. La -
 plantilla de la District Court of the United States for Porto Rico
 es la siguiente:

| | |
|----------------------|---|
| Judge.- | Mr. William H. Holt |
| District Attorney.- | Mr. N.B.K. Pettingill |
| Clerk.- | Mr. George W. Lieberth |
| Deputy Clerk.- | Sr. Ricardo Nadal, Mayagüez y D. Manuel Cortada, Ponce |
| Marshall.- | Mr. E.S. Wilson |
| Deputy Marshalls.- | Mr. A.S. Hubbard, Office. Mr. J.S. Miller, San Juan Mr. George Trautman, Ponce Mr. Wilhem Lutz, Mayagüez |
| Court Interpreter.- | Mr. Z. Vall Spinoza |
| Stenographer.- | Mr. Harry Leak |
| Court Commissioner.- | Mr. A.R. Thompson |

Todos los procedimientos en la District Court of the United States for Porto Rico se celebran en idioma inglés según estipula la Ley Orgánica de 1900.

Jurisdicción.

En la sección 34 de la Ley Foraker se describe la jurisdicción que tendrá la District Court of the United States for Porto Rico: "Además de la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos, jurisdicción en todos los casos de los cuales conocen los Tribunales de Circuito de los Estados Unidos, y deberá proceder, en cuanto a los mismos, en forma análoga a la de un Tribunal de Circuito. Las leyes de los Estados Unidos, relativas -

a apelaciones, "writs" de error y de "certiorari", competencias y otras cuestiones de procedimientos semejantes a las que se plantean entre los Tribunales de los Estados Unidos y los Tribunales de los diversos Estados, serán las que se rijan en análogas cuestiones y relaciones entre el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y los Tribunales de Puerto Rico" (14). Por una Ley del Congreso de los Estados Unidos se cambió la anterior jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico, añadiéndole otra jurisdicción que no poseerán los tribunales similares en Estados Unidos. La Ley de 1 de marzo de 1901 dispone:

"Sección 3. Que la jurisdicción del Tribunal de distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico en los casos civiles se extenderá, además de la conferida por la Ley de 12 de abril de 1900, (Ley Foraker) a controversias donde las partes, o alguna de ellas, son ciudadanos de los Estados Unidos, o ciudadanos o súbditos de un Estado o Estados extranjeros, siempre que la cuestión en litigio exceda, sin contar los intereses y las costas, la suma o el valor de mil dólares".

Esta Ley tiene el efecto de aumentar la jurisdicción que tenía este Tribunal Federal en Puerto Rico. Unicamente requiere que una de las partes en cualquier lado de la controversia sea ciudadano norteamericano o de un Estado extranjero para que tenga jurisdicción sobre el asunto; por supuesto se refiere al aspecto civil.

En carta que escribe Mr. Francis A. Dexter al General Edwards el 1 de febrero de 1910 oponiéndose al clamor de los puertorriqueños

contra la jurisdicción del Tribunal nos describe como surgió la -
extensión de la misma. (15)

"Por los términos de la Ley Foraker, la jurisdicción del -
Tribunal Federal de Puerto Rico fué establecida igual que -
los tribunales federales en los Estados Unidos. Se encontró
sin embargo, que en los casos civiles, esta jurisdicción li
mitada prevenía a los ciudadanos americanos (16) y extranje
ros, residentes en la isla, de usar dicha Corte.

En ausencia de una cuestión federal (y había pocos casos de
esta naturaleza) un pleito civil sólo podía llevarse en ese
tribunal bajo la cláusula de "diversidad de ciudadanía" de
la Ley del Congreso definiendo la jurisdicción de los Tribu
nales de Circuito de los Estados Unidos.

Se encontró que los ciudadanos de Puerto Rico no eran ciuda
danos de un Estado dentro del sentido de la Ley Judicial y
que el Tribunal Federal no podía tener competencia de un -
pleito en que los puertorriqueños figurasen en cualquier la
do de la controversia. Tampoco en los casos en que los ex-
tranjeros estuviesen en ambos lados de la controversia.

Bajo estas circunstancias, los intereses norteamericanos y
extranjeros en la isla solicitan una ampliación de la juris
dicción del Tribunal Federal, extendiéndola de manera que
este último tenga jurisdicción en un caso que se lleve por
o en contra de un norteamericano o extranjero, aún cuando se
encuentren puertorriqueños al otro lado de la controversia.

La experiencia demuestra que un tribunal imparcial con la dignidad y la jurisdicción de un Tribunal Federal así constituido, será una garantía para los sustanciales intereses poseídos en la isla por extranjeros y norteamericanos.

Estas consideraciones fueron presentadas al Congreso, y como resultado se aprobó la Ley de 2 de marzo de 1901".

.....

La antes mencionada jurisdicción avivará la oposición de los puertorriqueños al Tribunal Federal. Comienza sus trabajos judiciales la referida institución.

La Crisis de 1909

El Tribunal Federal es presidido desde 1906 por Mr. Bernard Rodey. En las elecciones de 1904, 1906 y 1908 el Partido Unión de Puerto Rico se había convertido en el mayoritario de la isla. La Cámara de Delegados electa en 1908 estaba compuesta totalmente por miembros de ese Partido político (17). Inaugurados los trabajos parlamentarios el 12 de enero de 1909, seis días después, el 18 de enero, los Delegados siguientes presentaron la Resolución de la Cámara de Delegados Núm. 1, titulada Acerca del modo como administran justicia los Jueces de la Corte Federal y sobre sus nombramientos (18), Señores Coll y Cuchí, Muñoz Rivera, Benítez Castaño, Oppenheimer, Díaz Navarro, López Díaz, Elzaburu, Aldrey, Aponte, Vivoni, - Acuña y Lluveras. El texto de la Resolución antes mencionada es el siguiente: "Por cuanto la Corte de Distrito de los Estados Unidos

para Puerto Rico ha creado en el país un sentimiento de hostilidad y desconfianza, debido a que sus jueces por ser desconocedores en absoluto de nuestro Derecho histórico, interpretan nuestras leyes del modo más opresor o injusto para los litigantes, la Cámara de - Delegados, resuelve... se pida al Congreso la supresión de dicha - Corte". (19). A petición del Ldo. Herminio Díaz Navarro, Presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara, se acordó que dicha resolución pase al orden del día de la siguiente sesión. La Democracia de 20 de enero de 1909 publica la siguiente nota (20):

"Cámara de Delegados

Comisión de Legislación

Habiéndose pasado a esta Comisión para Informe, un Proyecto de Resolución de la Cámara, que implica un voto de censura a la Corte Federal, esta Comisión ha decidido oír públicamente el próximo viernes y días siguientes de 2 a 4 de la tarde, en el Salón de Conferencias de la Cámara, a los abogados americanos y del país y a cualquier otra persona que desee ser oído en pro o en contra de la dicha Resolución de la Cámara, advirtiéndose que todo cargo o exculpación deberá aducirse presentándose pruebas".

San Juan, 20 de enero de 1909"

Las vistas comienzan el viernes 22 de enero. Presidía el Ldo. Díaz Navarro, asisten como miembros de la Comisión Legislativa los Delegados D. Rosendo Matienzo Cintrón, E. Félix Santoni, D. José - de Jesús Tizol, y D. Eduardo Acuña Aybar. El Boletín Mercantil nos

informa que "la concurrencia era numerosísima, Consejeros del Ejecutivo, Abogados, Delegados, periodistas y personalidades. Mr. Francis H. Dexter informó primero, haciendo cargos de carácter general a la Corte; luego habló el Lic. Mott, formulando cargos y pruebas concretas acompañadas de pruebas", (21). "Ambos informantes se mostraron de acuerdo con el funcionamiento de la Corte Federal pero descontentos con el Juez respecto de cuyos actos dieron su opinión" (22). El sábado 23, concurreció Mr. Joseph Anderson quien testificó a favor del Tribunal y su Juez (23). Asimismo, compareció en ese día el Lcdo. Juan Vías Ochoteco (24), Secretario del Departamento de Caridad, Sanidad y Prisiones y miembro del Consejo Ejecutivo. Su testimonio fue contrario a la permanencia del Tribunal Federal. En igual sentido se manifestó D. Laureano Sarria de Vieques. En la misma ocasión compareció el abogado norteamericano Mr. Henry H. Hond, quien además de tener buena práctica profesional en la District Court of the United States for Porto Rico desempeñaba desde el 15 de junio de 1907 el cargo de "Reporter" de ese Tribunal, por designación del Juez Rodey. Su testimonio ante la Comisión Legislativa es desfavorable al Tribunal Federal (25).

El Sr. Vicente Balbás Capó, Director del diario "El Herald - Español" testificó el lunes 25 de enero (26). Manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente:

"La Corte Federal se nos presenta señores como algo sobrenatural, como algo que tiene poder divino y absoluto, como si fuera la representación del Zar de todas las Rusias; y sería ocioso que yo me esforzara en demostrar esta verdad con prue

bas pues aún están latentes, y vivas las palabras de distinguidos abogados americanos en los días de anteayer y precedentes, los que expusieron con tonos más vivos, la arrogancia y la superioridad de ese juez y de esa Corte sobre - testigos y abogados que ante ella comparecen" (27)

.....

Mientras transcurrían las vistas o audiencias públicas del Comité de Legislación de la Cámara de Delegados de Puerto Rico circulaba en San Juan una carta de respaldo al Juez Federal (28).

"Enero 25 de 1909

Al Honorable B.S. Rodey, Juez de la Corte Federal de los Estados Unidos para Puerto Rico.

Señor: En vista de lo desautorizado, ilegal y dentro de todos los sentidos injustos ataques contra usted, nosotros, los abajo firmantes abogados que ejercemos en el "Bar" de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, toman esta oportunidad para expresar nuestro disgusto por la acción ejercida por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y para notificar a usted nuestra confianza en su integridad y habilidad como Juez y nuestro respeto hacia usted como hombre y como ciudadano.

Respetuosamente,

Frank Antonsanti, Damián Montserrat Jr., Edward S. Paine, -
Antonio P. Rodríguez, M. Olmedo, Antonio J. Amadeo, H.P. Leake, Benjamín Horton, José Benet, José Ramón Freyre y José -

Fournier" (29)

Como consecuencia del testimonio de las vistas y otra información recogida, el Lcdo. José de Diego, Presidente de la Cámara de Delegados y los Sres. Luis Muñoz Rivera, Herminio Díaz Navarro y Cayetano Coll y Cuchí presentan el 4 de febrero de 1909, el Memorial Núm. 1 de la Cámara "sobre limitación de la Jurisdicción de la Corte Federal" (30)

"Resúelvase por la Cámara de Delegados dirigir al Congreso de los Estados Unidos una Exposición concebida en esta forma: La Cámara de Delegados de Puerto Rico conoce la investigación efectuada por el Comité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes (de E.U.) en el año 1901, con referencia a la situación judicial de Puerto Rico, y tiene esta Cámara (puertorriqueña) por cierto que la ampliación de la jurisdicción de la Corte de los Estados Unidos para Puerto Rico, según fue estatuida por (la) Sección 3 de la Ley de 2 de marzo de 1901, se inspiró en los falsos, calumniosos y concupiscentes informes de varios abogados, sin arraigo alguno en Puerto Rico, ni conocimiento de las leyes y los Tribunales de la isla, recién llegados al país, con el único anhelo de ganar mayor fortuna en el menor tiempo. Informes tan injuriosos a las Cortes puertorriqueñas sólo podían ser inspirados en malignos intereses personales.....

Los jueces de Puerto Rico fueron siempre varones ejemplares de honradez, y sabiduría y, si en las Cortes de la isla han ocurrido casos de gravísima corrupción judicial, en ellos no

ha figurado ningún funcionario puertorriqueño.

Los habitantes de la isla nativos y extraños, tenían y tienen una profunda confianza en las Cortes insulares y no había ni hay razón alguna para que la Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico haya invadido por virtud de la Sección 3 de la Ley de 2 de marzo de 1901, la legítima jurisdicción de nuestros Tribunales en nuestro territorio.

Dicha Ley arrebató a los puertorriqueños el derecho de administrarse ellos mismos su propia justicia en su propio país, y privó también a los españoles residentes el derecho que les fue otorgado por el artículo IX del Tratado de París con que los Estados Unidos y España terminaron la Guerra de 1898.

Más adelante el Memorial Núm. 1 de la Cámara de Delegados de Puerto Rico manifiesta sobre los Jueces federales norteamericanos lo siguiente:

"Jueces inesperados, sin el más ligero conocimiento del idioma, de las costumbres y de las leyes de Puerto Rico, pasaron sucesivamente por la Corte de los Estados Unidos en este Distrito; no aprendieron, ni entendieron, ni aplicaron las leyes del país... administraron justicia en nuestro país como los primeros Pretores, con las XII tablas, cual si en nuestro país no existiera un moderno sistema de Leyes codificadas; no pudieron comprender ni apreciar las declaraciones de los testigos puertorriqueños, en las causas civiles y criminales; y, con toda esta ignorancia y confusión, la justi-

cia de la Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico produjo las mayores sorpresas, los más grandes contrasentidos y la más insufrible tiranía en lo más delicado de las relaciones civiles.

.....

Tan graves causas serían suficientes para determinar la Resolución de esta Cámara a pedir al Congreso la supresión de la Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico. Ni esta determinación iría contra las instituciones federales, pues, aún suponiendo que Puerto Rico fuera un territorio de los Estados Unidos, existen territorios sin Cortes de los Estados Unidos; pero no siendo Puerto Rico nada en el Derecho constitucional americano, perteneciendo y no formando parte de los Estados Unidos, según ha declarado la Suprema Corte de la República, es una antinomia jurídica y política que haya una Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico que no forma parte de los Estados Unidos.

.....

Solicitamos se derogue la Ley de 2 de marzo de 1901 y se restablezca la Sección 34 de la Ley de 12 de abril de 1900 - (Foraker) si es que esta Ley autocrática e injusta ha de seguir por algún tiempo más rigiendo y oprimiendo al Pueblo de Puerto Rico.

.....

El Memorial de la Cámara antes mencionado es aprobado por unanimidad (31) el miércoles 24 de febrero de 1901. Dos días después

se discute una Resolución solicitando la destitución del Juez Federal B. Rodey (32). La misma es puesta a votación y es aprobada - por 22 votos a favor y siete en contra, estando dos delegados ausentes (33). Dicho Memorando y Resolución de la Cámara de Delegados de Puerto Rico es enviado al Congreso de los Estados Unidos. Obsérvese que dichos recursos legislativos son la expresión del único - cuerpo colegislador que es electo por el Pueblo de Puerto Rico cada dos años y que se componía desde 1904 de los miembros del Partido Unión de Puerto Rico, quien obtiene en cada elección el respaldo popular, No era pues una Resolución Conjunta, que hubiera necesitado la aprobación del Consejo Ejecutivo, el otro cuerpo colegislador según la Ley Foraker. Este Consejo Ejecutivo se componía de once miembros, seis de los cuales eran Secretarios de Gobierno y cinco ciudadanos de Puerto Rico, ambas clases de miembros designados por el Presidente de los Estados Unidos.

Desde el 19 de febrero de 1909 la prensa anuncia la comparecencia de los abogados norteamericanos Mr. Hord, Mr. Dexter y Mr. Molt ante el Juez Rodey del Tribunal Federal, para iniciar procedimientos por desacato (34). Los orígenes de esta decisión del Juez Federal pueden trazarse a la Asamblea de la Federal Court Bar Association celebrada el 6 de febrero de 1909. A la misma asisten 23 abogados (35). Mr. Sweet, Presidente saliente presenta una Resolución con - relación a los acontecimientos ocurridos en relación con el Tribunal Federal. La misma dispone lo siguiente: "Por cuanto se ha hecho un ataque vigoroso e infundado a la Corte de Distrito de los Esta-

dos Unidos para Puerto Rico; y Por Cuanto miembros de la Asociación de Abogados de esta Corte se han unido con los enemigos de la institución en sí, para el propósito de exhortar o conseguir la destitución del presente Juez de dicha Corte; y Por Cuanto el ataque a dicha Corte como una institución creada por el Gobierno de los Estados Unidos fue efectuado sin base alguna en la ley, y si se tomase nota de ello, habría de resultar, no solamente en perjuicio del Pueblo de Puerto Rico, sino de la Corte, por lo tanto; Resuélvase: que la Asociación de Abogados de la Corte Federal de Puerto Rico expresa su sincero desagrado de que algunos de sus miembros hayan tomado parte en dicho ataque a la Corte o al Juez de la misma, en la manera, forma y lugar en que dicho ataque tuvo lugar. Resuélvase, además, que por la presente expresamos nuestra confianza en dicha Corte y en el presente Juez de la misma" (35).

Mr. Pettingill descontento con la Resolución presentó la siguiente enmienda, "Resuélvase, además, que esta Asociación considere la acción de aquellos miembros que comparecieron ante una Comisión Legislativa y tomaron parte en el ataque antedicho, como un acto en menoscabo de la profesión y una seria violación de sus deberes a la Corte, mereciendo dicha acción una investigación por parte de dicha Corte y el consiguiente castigo que autorice la Ley". — Efectivamente, el Juez Rodey inicia el procedimiento judicial para castigar por desacato a los abogados Hord, Dexter y Molt y al Lcdo. Sarmiento. El 23 de marzo de 1909 es radicada la opinión del Juez Rodey sobre este asunto. La misma consolida cuatro causas tituladas

"Ex Parte Thomas D. Molt, Jr.; "Ex Parte Henry H. Hord"; "Ex Parte Francis H. Dexter" y la del puertorriqueño, "Ex Parte Antonio Sarmiento" (36). Comienza narrando los hechos por los cuales estos abogados son objetos de desacato al Tribunal Federal; que el "Bar Association" solicitó dicho procedimiento; que los tribunales federales carecen prácticamente de poder para castigar por desacato, - que dicho Memorial era un ataque al Tribunal Federal como institución y que el mismo solicitaba la abolición de la District Court of the United States for Porto Rico o la restricción de su jurisdicción (37). Niega la jurisdicción de la Cámara sobre el Tribunal. - Luego condena la presencia de los abogados norteamericanos allí pues "están educados de acuerdo a la ética legal americana". "Estos mismos hombres, según se dice, tomaron una gran parte en inducir al Congreso a establecer este Tribunal en Puerto Rico, como un ejemplo de los Tribunales norteamericanos, y sin embargo comparecen ante dicho desautorizado Comité" (38). Termina Mr. Rodey su larga opinión imponiendo sentencias suspendiendo por diferente tiempo de la práctica en el Tribunal Federal y multas. Al Lcdo. Sarmiento le absuelve. (39).

En marzo de 1909 cuando la Cámara de Delegados de Puerto Rico revisa el Presupuesto anual del país para el año siguiente: "introdujo (también la Cámara) una rebaja del 90 por ciento en los oficiales de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, cuyos salarios no fija el Acta Orgánica (40). Esta rebaja era una protesta contra la Corte de Distrito de los Estados Unidos, cuya modificación o su-

presión había pedido la Cámara. Virtualmente, al suprimir los suel-
dos, se suprimía la Corte". Así describen los Delegados D. Luis Mu-
ñoz Rivera, D. Cayetano Coll y Cuchí y D. Eugenio Benítez Castaño
la acción de la Cámara rebajando los sueldos que dicho cuerpo anual-
mente aprobaba (41).

El Gobernador de Puerto Rico, Mr. Regis H. Post, decide aus-
cultar la opinión pública enviando un cuestionario con siete pregun-
tas en relación con otros tantos temas sobre posibles enmiendas a -
la Ley Orgánica Foraker. Las preguntas se dirigieron a varios ciuda-
danos en septiembre de 1909. Nos interesa la pregunta número tres,
la misma trata sobre la District Court of the United States for —
Porto Rico. (42)

"3. ¿Crée usted que deba hacerse algún cambio en la jurisdic-
ción de la Corte Federal?

¿Crée usted que deba proveerse lo necesario para apelaciones
a una Corte de Circuito en los Estados Unidos, y de ésta en
definitiva para ante la Corte Suprema de Estados Unidos?

¿Crée usted que los asuntos de la Corte Federal justifiquen
la creación de otra corte, o el nombramiento de dos jueces
para la misma?"

De los cómputos oficiales preparados en la oficina del Gober-
nador Post me permito reproducir las relacionados con esta pregun-
ta número tres.

"Pregunta III - Tribunal Federal.

Parte I, Cambios en la jurisdicción del Tribunal.

| <u>A favor</u> | | <u>En Contra</u> |
|----------------|-------|------------------|
| Abogados | 37 | 13 |
| Alcaldes | 23 | 3 |
| Médicos | 12 | 3 |
| Propietarios | 24 | 9 |
| Comerciantes | 9 | 5 |
| Misceláneos | 8 | 1 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Total ... | 113 | Total ... 34 |

Parte 2, Apelaciones al Tribunal de Circuito

| <u>A favor</u> | | <u>En contra</u> |
|----------------|-------|------------------|
| Abogados | 20 | 25 |
| Alcaldes | 3 | 23 |
| Médicos | 5 | 11 |
| Propietarios | 7 | 23 |
| Comerciantes | 2 | 11 |
| Misceláneos | 6 | 4 |
| a condioión | 1 | |
| | <hr/> | <hr/> |
| Total ... | 44 | Total... 97 |

Parte 3. Aumento en Tribunal o Jueces

| <u>A favor</u> | | <u>En contra</u> |
|----------------|----|------------------|
| Abogados | 12 | 31 |
| Alcaldes | 3 | 24 |
| Médicos | 4 | 7 |
| Propietarios | 4 | 24 |
| Comerciantes | 2 | 10 |
| Misceláneos | 2 | 8 |
| a condición | 1 | |
| <hr/> | | <hr/> |
| Total... | 28 | Total... 104 |

De las 147 contestaciones ofrecidas en la encuesta sobre el - Tribunal Federal, pregunta número tres antes transcrita, me permito escoger dos para dar una idea, aunque somera de las respuestas recibidas. Seleccioné dos opiniones contrarias, las de Don Vicente Balbás Capó y Dr. José Celso Barbosa, ambos ayunos en Derecho, pero con gran sentido jurídico y de la realidad de su tiempo, según la entendieron.

Vicente Balbás Capó

Editor, Heraldó Español

Independiente

"Creo que debe ser suprimida por innecesaria y peligrosa, habida cuenta de que no sólo es una amenaza constante al derecho de los ciudadanos, pues los jueces ignoran nuestra legislación, y sus

sentencias, basadas en legislaciones de otros países, están en pugna con nuestro Derecho y hasta con nuestros usos, sino porque la existencia de una Corte Federal implica desconfianza en nuestros tribunales insulares que constituyen sobrada garantía para proteger todos los intereses"

José Celso Barbosa

Médico

Republicano:

"Creo que la Corte Federal de Puerto Rico debe tener la misma jurisdicción que sus similares en los Estados Unidos; que al Distrito Federal de Puerto Rico se agregue una Corte de Circuito de los Estados Unidos para sus apelaciones menores de cinco mil pesos y - que se cree otra Corte".

Termino esta sección reproduciendo las partes pertinentes de un artículo del Lcdo. José de Diego publicado en el diario La Democracia de 1 de abril de 1910 titulado, "La Jurisdicción de la Corte Federal en el Bill Olmsted": (43)

"Desde que se aprobó la Ley de 2 de marzo de 1901, hasta - que se introdujo en la Cámara de Representantes (de Estados Unidos) el Bill Olmsted, en ese largo período de nueve años, sólo la Cámara (de Delegados) realizó gestiones tendentes a reducir la jurisdicción de la Corte Federal de Puerto Rico. Ni el Colegio de Abogados, ni otro organismo alguno se había movido en la justa demanda reparadora de nuestro poder judi

cial, cuando la Cámara velaba por éste, como por todos los privilegios de la interna soberanía, ella sola y valiente clamando y luchando por el Derecho de la Patria. En la primera sesión de la Quinta Asamblea, que se celebró el pasado año de 1909, la Cámara (de Delegados) reiteró al Congreso su anterior pedimento en un memorial razonado y concreto sobre el asunto, que fué reproducido y enviado en la sesión del - cursante año, mereciendo la aprobación del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que entregó el Memorial a sus comisionados, como un documento de gran fuerza en apoyo de la solicitud del Colegio de Abogados sustancialmente conforme con el Memorial de la Cámara".

El Proyecto de Ley Olmsted

El 15 de marzo de 1910 se presentó en el Congreso de los Estados Unidos el llamado proyecto de Ley o "Bill Olmsted". De esta forma inician los trámites legislativos para dotar a Puerto Rico de una nueva Ley Orgánica, que sustituya la primera norteamericana - llamada Ley Orgánica de 1900 (Foraker) (44). Todo el año de 1910 se rá marcado por los esfuerzos de los puertorriqueños de obtener mayores libertades constitucionales. Ya desde fines de 1909 se sabía que se trabajaba en la reforma de la Ley Foraker. El 7 de enero de 1910 un grupo representativo de los abogados puertorriqueños de la Bar Association of the District Court of the United States for Porto

Rico recomiendan que se modifique la sección 34 de la Ley Foraker de manera que los procedimientos en el referido Tribunal Federal se conduzcan oficialmente en los idiomas inglés o español. "Tal — cambio —razonan— parece ser justo y propio pues es un Tribunal Federal establecido en un país hispano-americano cuyo idioma nativo generalmente es el español. De esta forma la justicia como es administrada por dicho Tribunal estaría en contacto directo e inmediato con el pueblo y dichos procedimientos, mejor conocidos tenderían a aumentar la validez y el prestigio del Tribunal ante el pueblo. Esto también aumentará el número de jurados accesibles en casos de — juicios por jurado y facilitaría la práctica de los abogados puertorriqueños, quienes en la mayoría de los casos, o no conocen el idioma inglés o lo conocen deficientemente, siendo la ventaja total de parte de los abogados norteamericanos, quienes tienen un conocimiento total de su lengua nativa" (45)

Ante la reforma que se espera, el Colegio de Abogados de Puerto Rico se reúne el 13 de enero de 1910. Preside el Ldo. Juan Hernández López, y siendo miembros de la Junta de Gobierno los letrados D. Manuel F. Rossy, D. Francisco de Paula Acuña y Paniagua y D. Rafael López Landrón, aprobó una Resolución solicitando la supresión de la jurisdicción extra que tenía la District Court of the United States for Porto Rico por la referida Ley de 1901. Dicha Resolución fué sometida a la Asamblea General siendo aprobada por unanimidad (46). Asimismo, se acuerda enviar dos abogados a representar al Colegio cuando se inicien las audiencias o vistas públicas en el Con-

greso de Washington sobre las reformas a la Ley Orgánica. Diez - días después -el 13 de febrero-, el Comité Territorial del Partido Republicano Puertorriqueño (47) votó unánimemente por "quitarle las actuales e injustificadas atribuciones" que tenía el Tribunal Federal, esto es, la abolición de su jurisdicción extra otorgada en 1901. Votaron a favor, los señores Guzmán Benítez, Parra Capó, Tous Soto, Rossy Calderón, Quiñones, Franceschi, Gómez Lassere, - Vélez, Quiñones (Fco.), Torres Monje y Vizcarrondo. Parecido tenor tiene el acuerdo unánime de la Junta Central del Partido Unión de Puerto Rico en reunión de 16 de febrero (48). Los diarios El Tiempo, La Democracia, Boletín Mercantil de Puerto Rico y La Correspondencia de Puerto Rico. La opinión pública era general y unánime en contra de la continuación del Tribunal Federal con los privilegiados poderes conferidos por la Ley de 1901.

La reacción no tarda en oponerse. El Lcdo. Francis H. Dexter escribe al Secretario de la Guerra el 26 de enero de 1910: (49)

"Desde su partida, los abogados puertorriqueños están celebrando varias reuniones con el asombroso y ostensible objeto de asegurar la reducción del Tribunal Federal de aquí. Han preparado y enviado a Washington una memorando a esos - efectos. Yo sólo deseo manifestar que ello será poco - afortunado para los sustanciales intereses comerciales de - la isla".

El Bar Association of the District Court of United States for

Porto Rico se opone a dicha medida y envia al Secretario de la Guerra un largo informe firmado por su Presidente, Mr. Charles Hartzell y fechado el 1 de febrero de 1910. Allí manifiestan su respaldo al tribunal y argumenta por el mantenimiento de la jurisdicción y el establecimiento de otro Tribunal Federal (50). Vuelve a insistir - Mr. Dexter sobre este asunto, primero en una carta de 1 de febrero donde entre otros argumentos sostiene que: "Yo entiendo que los abogados puertorriqueños están pidiendo demasiado... Si el pueblo de Puerto Rico es sincero en su profesión de americanismo y en su deseo de americanización, no deben tener objeción a por lo menos un Tribunal norteamericano en la isla ejerciendo jurisdicción concurrente con los tribunales insulares". "Yo le aseguro a usted que esta sugorencia no la hago en interés de los abogados norteamericanos practicando ante el Tribunal Federal, sino para beneficio de los intereses norteamericanos y extranjeros en la isla". "Yo confio que usted favorecerá la permanencia del presente Tribunal Federal, el cual es uno de los más importantes factores en asegurar una imparcial administración de justicia y la real americanización de la isla" (51). La segunda carta de Mr. Dexter es de 9 de febrero y en ella ofrece su solución al problema judicial de Puerto Rico:

"A mi juicio, la apropiada solución del problema judicial en Puerto Rico es la sustitución de los tribunales insulares y federal, digamos por cinco Tribunales territoriales que - tengan ambas jurisdicciones, local y federal, incluyendo - "Equity". Habría una revisión completa del Derecho y la adop

ción de un Código Civil Norteamericano.

Hemos hecho avances radicales en el Derecho español por introducción de varias Leyes norteamericanas, y, como resultado, nuestras leyes están en un estado de conflicto y confusión. Hemos adoptado el Código de Procedimiento Civil de California, el Código Penal y de Procedimiento Criminal de Idaho. Tenemos el juicio por jurado en casos criminales. Tenemos el Habeas Corpues, Mandamus e Injunction. Tenemos la ley norteamericana de evidencia y la de testamentos. ¿Porqué no ir un paso adelante y adoptar un "American Civil Code", el cual sería consistente y compatible con las otras - Leyes en vigor y la inevitable norteamericanización de la - isla? (52)

Dos representantes del Colegio de Abogados de Puerto Rico embarcaron para Washington para participar en las audiencias públicas que el Congreso celebraba en torno del Proyecto de Ley Olmsted. - Las instrucciones de D. Jacinto Texidor y D. Manuel Rodríguez Serra eran en el sentido de que se limite estrictamente la jurisdicción del Tribunal Federal a asuntos federales. (53) También la Cámara de Delegados envía una Comisión para solicitar que la District Court of the United States for Porto Rico sea reducida a su mínima jurisdicción (54). Sobre el Tribunal Federal el Lcdo. Coll y Cuchí manifiesta: "Es lo mismo que si se trajera aquí (a Washington) un juez de España para aplicar la Ley en el Distrito de Washington y Georgetown. Sin tener el menor conocimiento del castellano los jue-

ces de la Corte Federal aplican leyes españolas" (56). El editorial de la Porto Rico Review, revista dirigida por el abogado Mr. Willis Sweet, antiguo Attorney General de Puerto Rico nos ilustra sobre el estado de opinión entre los abogados puertorriqueños: (56)

"Los abogados puertorriqueños están opuestos a la Corte Federal en cuanto a su actual constitución. Si se prescribe la jurisdicción de la Corte de manera que quede eliminada de la vida jurídica del país, entonces el Colegio de Abogados o al menos la mayor parte de sus miembros encontrarían consuelo suficiente en este particular para reconciliarse con todos los extremos del "Bill". Las opiniones de los abogados norteamericanos (de Puerto Rico) no impresionaron favorablemente a Mr. Dickinson (Secretario de Guerra) y dícese que manifestó que dudaba de si los abogados continentales fueron o no inspirados por motivos egoistas".

A pesar del esfuerzo de los puertorriqueños pocos cambios se introdujeron en el "Bill Olmsted". El mismo fué aprobado por la Cámara de Representantes pero no así por el Senado de Estados Unidos (57).

Desde el Bill Olmsted a la Ley Orgánica de 1917

El 18 de julio de 1913 Don Luis Muñoz Rivera, entonces Comisionado Residente en Washington, escribió una carta a D. José de Diego donde le expresa su pensamiento con relación a un Proyecto de Ley -

Orgánica preparado en el Bureau of Insular Affairs. Allí entre - otros asuntos manifiesta que "merecen franco apoyo... la supresión de la Corte Federal" (58). El 8 de diciembre de 1913, el asesor - jurídico del Bureau antes mencionado, Mr. Félix Frankfurter, preparó un "Announcement of Porto Rican Policy", (59). El mismo es una declaración de la política del Gobierno de Estados Unidos para con Puerto Rico, y para que basándose en sus disposiciones se prepare una nueva Ley Orgánica. El mismo no se publicó pero circuló entre las personas interesadas en el asunto. Cuando trata sobre la judicatura sostiene que la "United States District Court for Puerto - Rico" debe ser abolida, pues tal tribunal no tiene funciones en nada que se acerque a un gobierno autonómico". (60). Cuando se prepara el Proyecto de Ley Orgánica se usa dicha declaración de Mr. Frankfurter, participando éste personalmente en el proceso. La sección 43 del Proyecto original antes mencionado suprime o discontinúa la District Court of the United States for Porto Rico. Dicho - proyecto, como es usual se envía junto a la declaración (Announcement) a los funcionarios que por sus cargos pueden ofrecer sus comentarios. El 15 de diciembre de 1913, el Gobernador de Puerto Rico, Mr. Arthur Yager, escribe una carta oficial al General McIntyre - fechada el 15 de diciembre de 1913. La misma se refiere a las enmiendas a la Ley Orgánica. En el cuarto punto el Gobernador manifiesta que: "El Tribunal Federal debe ser o discontinuado o su jurisdicción modificada". En este punto estoy en duda, pero me inclino a la continuación del Tribunal con jurisdicción modificada (61).

El Attorney General de Puerto Rico, Mr. W. Pittin en carta a

Mr. Frankfurter de 28 de enero de 1914 comenta oficialmente el - nuevo Proyecto de Ley Orgánica. Sobre el Departamento de Justicia manifiesta que, "Puerto Rico está todavía en estado formativo, cambiando su sistema de Justicia español a norteamericano. Por muchos años en el porvenir este cambio necesitará ser conducido bajo la - supervisión de un abogado norteamericano (62). En la eventualidad de la abolición del Tribunal Federal, y el cambio al mismo tiempo a un Attorney General puertorriqueño, con poder de supervisión sobre los tribunales locales, será considerado ésto por muchos norteamericanos que tienen intereses invertidos aquí, como una calamidad". (63). En cuanto a la abolición del Tribunal Federal, el Attorney General está de acuerdo si se dan ciertas condiciones. Por esta época, D. Luis Muñoz Rivera prepara y circula un proyecto de - Ley Orgánica en el cual la District Court of the United States for Puerto Rico se descontinúa. Su jurisdicción es conferida al Tribunal Supremo de Puerto Rico, hasta que la legislatura actúe (64). En la versión oficial y final que se prepara del Proyecto de Ley Orgánica y que se envía al Congreso continua figurando el Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico (65).

En 11 de febrero de 1914, el Presidente del Bar Association of the District Court of the United States for Porto Rico, Mr. Francis H. Dexter protesta de los planes para abolir dicho Tribunal (66). En la misma comunicación vuelve a reiterar los argumentos ya sabidos de la conveniencia de que dicho foro permanezca en la isla. Acepta que "se están haciendo grandes esfuerzos para abolir el Tribunal Federal en relación con la referida legislación". Y que "la

existencia de la Corte Federal es una de las grandes consideraciones en la inversión de capital por los ciudadanos americanos y extranjeros en esta isla". A dicha carta contesta el Bureau of Insular Affairs asegurando que no se eliminará dicha institución. Aunque sabemos que el asesor jurídico del Bureau, el que será insigne Catedrático y Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Mr. Frankfurter, contempló la idea de suprimir el Tribunal Federal en Puerto Rico y que lo propuso en su Declaración de política pública y en la redacción original que se efectuó de la nueva Ley Orgánica. Luego sabemos que se cambia de idea en el War Department.

El 24 de febrero de 1914, Mr. Pitkin, Attorney General de Puerto Rico, escribe una opinión oficial al Gobernador Yager (67). La misma ofrece las recomendaciones del funcionario últimamente citado sobre el nuevo Proyecto de Ley. Con relación al Tribunal de Estados Unidos, Mr. Pitkin recomienda que se suprima la jurisdicción extra que posee desde 1901, asimismo que se elimine el cargo de Juez Federal y que el "Attorney General of the United States" asigne un Juez cada vez que haga falta. En el próximo párrafo le informa Mr. Frankfurter por qué el pueblo de Puerto Rico se opone tenazmente a la creación, funcionamiento y existencia institucional del Tribunal Federal: "Las causas principales para el descontento grande, considerable y general para con la United States Court for Porto Rico han sido dos, primero, su rápida jurisdicción general que permite a cualquier ciudadano americano, sea residente de Puerto Rico o no, transferir su caso a dicho tribunal o juzgarlo original-

mente en ese tribunal, y, segundo, la falta de reputación y habilidad de los hombres que han actuado como jueces de ese tribunal federal". Es por entonces que el Juez del Tribunal Federal en Puerto Rico, Mr. Peter J. Hamilton, escribe una carta al Hon. J.F. - Shafroth sobre los asuntos de Puerto Rico donde termina con estas palabras: "Las Escuelas Públicas y el Tribunal Federal son las dos grandes fuerzas educacionales de norteamericanización en la isla" (68). Asimismo el Secretario de Justicia, Mr. Pitkin envía al Gobernador un plan gradual para abolir la United States District Court for Porto Rico (69).

Es en este momento en que se publica en la Revista de Legislación y Jurisprudencia de la Asociación de Abogados de Puerto Rico (70) un artículo escrito por el letrado D. Jorge V. Domínguez que llama la atención y se comenta en la prensa. Su título es: "La abolición de la Corte de Distrito de los Estados Unidos".

".....

La abolición o limitación jurisdiccional de aquella Corte, no había de beneficiar sensiblemente los intereses profesionales del que suscribe, ni según creo, los de ninguna clase o parte del elemento profesional nativo. Nuestras observaciones no obedecen tampoco a sentido de animosidad o recelo - profesional hacia sus compañeros americanos que derivan, casi exclusivamente, sus fuentes de ingreso de la obligada - clientela que la actual organización de dicha Corte crea, - haciendo en cierto modo necesaria la existencia de algunos bufetes de nacionalidad americana. No es asimismo sentido -

alguno de prejuicio hacia los magistrados que en distintas ocasiones la presidieron, juicio acerca de alguno de los cuales nos reservamos por considerar su exposición inoportuna. Es sin embargo necesario que el país discuta seria y discretamente la necesidad de una importante e inmediata limitación, ya que no una total abolición de las facultades jurisdiccionales de dicha Corte. Hemos de admitir que la Corte Federal representa en Puerto Rico el principio de autoridad federal del Gobierno de los Estados Unidos..." "Es el agente o medio de que el poder dominador se sirve para llevar a cabo y hacer efectiva la autoridad de sus leyes nacionales", "en tanto el status político de Puerto Rico sea definido, es bien seguro que una total supresión de la Corte Federal será combatida y derrotada... por los que ven en toda justa demanda de nuestro pueblo una ofensa a la nación.... un despreciable desconocimiento por nuestra parte del mérito o valor indiscutible de las sabias prácticas democráticas y de la supuesta superioridad de las instituciones jurídicas anglosajonas". Luego el Ldo. Domínguez recomienda que la jurisdicción del Tribunal Federal debe restringirse a los siguientes asuntos: "1) Al castigo de violaciones de las leyes penales de los Estados Unidos y leyes de correo; 2) A la tramitación de los asuntos de quiebra; 3) A la resolución de las causas de almirantazgo"

A este artículo del Ldo. Domínguez contesta otro abogado, el

Lodo. Francisco Soto Gras. Su breve nota lleva por título: Sobre - la Corte Federal.

"Abundo en la opinión del Director de esta Revista: la Corte Federal debe restringirse en su jurisdicción a materias puramente federales: Quiebras, Leyes Penales de los Estados Unidos y Leyes Marítimas (Admiralty). Desde luego quiero aclarar, que al aceptar la continuación de la Corte Federal en estas condiciones, no es que sea partidario de su existencia en este país, sino que acepto un término medio conciliatorio, inspirándome en el refrán que dice: "del mal al menos" ya que si bien es verdad que la Corte en cuestión, con sus sistemas, leyes, idioma y demás particularidades distintas, hasta antagónicas de las de nuestra patria, necesariamente ha de producir y ha producido fatales resultados y un estado general de incertidumbre y recelo en ambos, litigantes y abogados. Necesidad que bien sabemos todos, no subsistiría por un sólo instante si ello dependiera de la voluntad de los puertorriqueños, pero que con el fanatismo de las realidades desesperantes hemos de aceptar resignados" (71)

Es en este momento en que el Colegio de Abogados de Puerto Rico aprueba por unanimidad una Resolución solicitando la supresión de la District Court of the United States for Porto Rico. Consignada en un cablegrama se envía a D. Luis Muñoz Rivera en Washington:

"Asociación de Abogados de Puerto Rico solicita Congreso -

supresión Corte Federal fundándose en razones legales. No fijado status político de Puerto Rico continuación esta - Corte de forma territorial especial es contraria sentimientos de esta Asociación. No siendo posible supresión, insista adecuada limitación jurisdicción al conocimiento leyes - penales, postales, marítima y quiebras. Cualquier otra jurisdicción será contraria a la soberanía de las cortes insulares" (72).

Asimismo la Cámara de Delegados de Puerto Rico elige al Ldo. Benigno Fernández García, miembro del cuerpo, como su representante oficial ante las audiencias que el "Committee on the Pacific Islands and Porto Rico" celebraba entonces -marzo de 1914- sobre reformas - a la Ley Orgánica (73). El 9 de marzo el Delegado Fernández García (74) comparece ante dicho Comité y solicita la abolición del Tribunal Federal en Puerto Rico a nombre de la Cámara de Delegados (75).

Mr. Francis Dexter, Presidente del Bar Association of the District Court of the United States envía una carta al Ldo. Luis Muñoz Morales, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico el 15 de junio de 1914, invitando formalmente a esta última organización a la inauguración oficial del nuevo edificio del Tribunal Federal. Cuatro meses después contesta el Sr. Muñoz Morales, manifestándole que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados se reunió, discutió el asunto y decidió por unanimidad no asistir oficialmente a dicha inauguración. Los actos se llevan a cabo el 4 de noviembre del 1914. En su discurso Mr. Dexter intenta analizar la razón de -

la oposición de los puertorriqueños al Tribunal Federal. Por lo -
que manifiesta, no llegó a comprender el problema, pues compara
la realidad puertorriqueña con la de Nueva York u otros Estados -
norteamericanos.

.....

El gran Estado de Nueva York no considera los tribunales fe-
derales que ejercen jurisdicción en un enorme número de ca-
sos judiciales dentro del territorio como una intervención
en su sistema judicial o invasión de sus poderes soberanos.

.....

Se pretendió que esta provisión (estableciendo el Tribunal
Federal), y así debería ser considerada, una concesión y un
privilegio para el Pueblo de Puerto Rico. Paradójicamente,
un considerable número de elementos puertorriqueños la con-
sideran todo lo contrario, como una amenaza y un peligro,
¿a qué? (76)

.....

En carta que escribe al Gen. Frank McIntyre, Chief of the Bu-
reau of Insular Affairs, Mr. Dexter da noticia del anterior acto
y de la actitud del Colegio de Abogados de Puerto Rico. "La ocasión
fue un éxito a pesar de que los abogados puertorriqueños se hicie-
ron conspicuos por su deliberada y estudiada ausencia. Su actitud,
como esta explicada en la comunicación del Señor Muñoz Morales no
se debe a ninguna antipatía personal al Juez y abogados de la Dis-

trict Court of the United States for Porto Rico, sino al espíritu de oposición a dicho tribunal como institución" (77). Al año siguiente, el 9 de marzo de 1915 la Cámara de Delegados vuelve a solicitar la abolición del Tribunal Federal en Puerto Rico o en su defecto, el otorgamiento de jurisdicción exclusiva del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los asuntos federales que aquella conocía (78).

La Ley Orgánica de 1917 (Jones)

El 20 de enero de 1916, el Congresista Mr. William Jones presenta un Proyecto de Ley Orgánica para Puerto Rico. Es el resultado de consultas privadas a diferentes estamentos gubernamentales. Incluye la District Court of the United States for Porto Rico, aunque con algunos cambios en su jurisdicción. Cuatro días después, el Colegio de Abogados de Puerto Rico se reúne en Asamblea extraordinaria y aprueba una Resolución en relación con el Tribunal de Estados Unidos en la isla. En el primer por tanto se solicita "que se suprima la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, confiriendo la jurisdicción adicional necesaria a la Corte Suprema de Puerto Rico para ver y determinar todos los casos en que una cuestión federal este envuelta o en que los estatutos de los Estados Unidos hayan de hacerse cumplir, con jurisdicción asimismo sobre los casos de Almirantazgo y Quiebra. En el segundo por tanto dice la Resolución: "En caso de que la anterior medida no se estime factible, que entonces se restrinja la jurisdicción de la dicha

Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico al conocimiento de casos en que esté envuelta la violación de las leyes estatutarias de los Estados Unidos, y de casos sobre almirantazgo y quiebra, confiriendo toda la demás jurisdicción a las Cortes insulares de Puerto Rico".

Las razones del Colegio de Abogados puertorriqueño para solicitar tales medidas se encuentran en los, por cuantos, que contiene la referida Resolución: "La Asociación de Abogados de Puerto Rico ha recomendado, repetidas veces, la supresión de la Corte de Distrito para Puerto Rico, ateniéndose a la opinión manifiesta de la mayoría de sus miembros, y en anteriores ocasiones ha tomado acuerdos a tal efecto". Más adelante expresa la "reconocida eficiencia, capacidad de integridad de los jueces de las Cortes insulares..... se ha hecho siempre cumplida justicia en todos los casos y en todas las ocasiones, y la vida, la libertad y la propiedad de los nativos de Puerto Rico, de los ciudadanos americanos y de los extranjeros, están debidamente protegidas y garantizadas por dichas cortes (puertorriqueñas). Finalmente, en el séptimo por cuanto se trata el problema del idioma. No debe olvidarse que todos los procedimientos se conducen y llevan en idioma inglés en la District Court of the United States for Porto Rico. (S)iendo el castellano el único idioma que habla la gran mayoría de los habitantes de la isla, incluyendo a los abogados en ejercicio, son grandes las dificultades y excesivo el trabajo que pesa sobre las partes y sus abogados en las vistas de los casos y en la determinación de sus derechos - ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico,

circunstancia que no ocurre cuando recurren a las cortes insulares". Firman la Resolución los Lcdos. D. Luis Muñoz Morales y D. Pablo Berga Ponce de León (79). El Colegio de Abogados envía al - Lcdo. Manuel Rodríguez Serra para que le represente y argumente - la referida Resolución ante el Committee on Insular Affairs de la House of Representatives en Washington. Así lo hace el Lcdo. Rodríguez Serra en la sesión del 5 de febrero de 1916. Como la discusión toma otro rumbo el testimonio principal de este letrado sobre el Tribunal Federal es el siguiente: "En representación del Colegio de Abogados de Puerto Rico, deseo manifestar que su convicción es que la United States for Porto Rico debe ser discontinuada. No -- es necesaria. No ha hecho en el pasado nada bueno, que nuestros - tribunales no puedan ejecutar, Ha creado una diferencia en la con dición jurídica y los derechos privados de los ciudadanos, no jus tificada y mucho menos entendida en Puerto Rico" (80).

Es interesante comparar el largo testimonio del abogado Mr. - Francis H. Dexter ante el mismo Comité congresional, pero unos días antes, el 26 de enero de 1916. Testifica a nombre y representación del "Bar Association of the District Court for Porto Rico". Su motivo, aumentar aún más la jurisdicción de esa institución o por - lo menos que se mantenga como es en ese momento. Argumenta en contra de que se asimile al Tribunal Federal en Puerto Rico con los tribunales federales en Estados Unidos. Vehementemente sostiene que debe continuar la jurisdicción aumentada en 1901, no para beneficio de los abogados norteamericanos sino del Pueblo de Puerto Rico y las Corporaciones norteamericanas. Podemos sacar la siguiente -

conclusión del testimonio de Mr. Dexter, que oculta al Comité la verdadera situación y actitud de los abogados y ciudadanos puertorriqueños sobre el Tribunal de los Estados Unidos. Lleva al Comité a creer que no hay protestas u oposición sobre dicho foro. Por supuesto el posterior testimonio de los representantes de la Cámara de Delegados; del Colegio de Abogados; del Partido Unión de Puerto Rico; de la Unión Antillana y otros organismos y testimonios individuales pondrán en conocimiento de dicho Comité y del Congreso la verdadera situación del Tribunal Federal en Puerto Rico (81).

En el mismo mes de febrero testifica la Comisión del Partido Unión de Puerto Rico compuesta por los Señores D. Antonio R. Barceló y D. Cayetano Coll y Cuchí. Con relación a la District Court of the United States for Porto Rico, solicitan la supresión de la misma. Manifiesta el letrado Barceló: "Esta demanda representa desde luego el sentimiento de la gran mayoría de los puertorriqueños y yo debo hacer constar aquí ese deseo de mis compatriotas. Pero si considera el Comité que no es conveniente la supresión de dicha Corte, nos satisfará el que se reduzca la jurisdicción de este tribunal" (82). El 16 de febrero La Democracia editorializa:

"Y aún con esos defectos, llegamos a la conclusión de aceptar el Bill, considerándolo, en su conjunto superior a la Ley Foraker que nos rige. Porque se merma la jurisdicción de la Corte Federal, restituyendo a las Cortes de Distrito del país mayor suma de facultades, con acrecentamiento de su prestigio" (83)

En la misma fecha antes mencionada, la minoría parlamentaria del Partido Republicano Puertorriqueño radica un Proyecto de Resolución donde solicita al Congreso de Estados Unidos, entre otras - peticiones, "que se establezca como idiomas oficiales de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, así el inglés como el español". Por supuesto que esta petición no pasa de ser - una declaración de dicho Partido en cuanto a este problema vital. Es necesario consignar que ya anteriormente la Presidencia del Partido Republicano, en enero del mismo año, había establecido como - norma política de la colectividad con referencia a dicho tribunal federal que se le suprimiese la jurisdicción extra que tenía desde 1901 y que el idioma español también fuese oficial en ese foro (84)

Ante la inminencia de la aprobación de una Ley Orgánica para Puerto Rico, vuelve la Cámara de Delegados de Puerto Rico, aprueba por unanimidad, la Resolución de la Cámara Núm. 3, titulada "Para solicitar del Congreso de los Estados Unidos que decrete la Supresión de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, delegando sus facultades en la Corte Suprema de Puerto Rico". La misma es presentada por los Delegados, Lcdos. José Tous Soto, - Francisco Parra Capó, Enrique González Mena, Antonio Piñero Rodríguez, Benigno Fernández García y el Presidente del Cuerpo, José de Diego (85). La Resolución cuya fecha es de 13 de abril de 1916 estipula que:

"Por cuanto, no siendo Puerto Rico un Estado de los Estados Unidos, no existe motivo constitucional alguno para que exis

ta una Corte de Distrito federal y con jurisdicción, además de que carecen las Cortes Federales de los diferentes Estados.

Por cuanto, el prestigio de la Corte Suprema de Puerto Rico aconseja que la jurisdicción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico se confiera a la Corte Suprema de la isla.

Por cuanto, esta medida estará de acuerdo con los precedentes establecidos en todos los territorios.

Por cuanto, existe un hondo disgusto en la opinión pública de Puerto Rico contra dicha Corte, debido a los procedimientos seguidos por la misma desde su fundación, consistentes en desconocer en sus decisiones las leyes civiles de Puerto Rico, en aplicar el Derecho común de Inglaterra.

Por tanto, resuélvase por la Cámara de Delegados de Puerto Rico solicitar del Congreso de Estados Unidos que decreta - la abolición de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico". (86)

Un Memorando oficial del General Frank McIntyre fechado el 7 de julio de 1917 glosa las recomendaciones del Departamento de la Guerra, del cual dependía el Bureau of Insular Affairs, con relación a la "pendiente Ley Orgánica de Puerto Rico". Allí el autor - narra una serie de eventos desvirtuando la verdad histórica. Por - ejemplo, sostiene que el Tribunal provisional de los Estados Uni- dos fué establecido para proteger a los españoles y resolver sus -

asuntos. Luego se refiere a la District Court of the United States for Porto Rico de la cual manifiesta: "Siendo éste un Tribunal donde se habla el idioma inglés y se aplica el sistema de Derecho de Estados Unidos en vez del de España, prácticamente excluyó de sus procesos a los abogados puertorriqueños. La práctica en este tribunal estaba en manos de unos pocos abogados norteamericanos que habían ido a Puerto Rico. Estas condiciones crearon un gran prejuicio en contra del tribunal en la mente de los puertorriqueños y que se hizo mayor por el hecho de que los ciudadanos norteamericanos - en Puerto Rico eran tratados diferentes a los ciudadanos puertorriqueños" "Se ha pensado que la Cámara (de Representantes) al continuar la District Court of the United States for Porto Rico, a pesar de su impopularidad con el pueblo de Puerto Rico, las peticiones de la Cámara de Delegados para su abolición y la opinión general de que es innecesaria, probablemente sigue la línea de menor resistencia, ya que es muy probable que la supresión del Tribunal Federal en el Proyecto hubiera militado en contra de la aprobación del mismo". (87)

El Proyecto de Ley Jones se convirtió en Ley el 2 de marzo de 1917. La sección 41 que se refiere a la "District Court of the United States for Porto Rico" efectuó algunos cambios y adiciones en la estructura de dicha institución. Se aumentó el término de servicio del Juez de cuatro a ocho años y su sueldo se aumentó a 10.000 dólares. Se le concedió al tribunal jurisdicción adicional para la

naturalización de extranjeros y puertorriqueños. Se alteró la jurisdicción conferida a dicho Tribunal federal por la Ley de marzo de 1901. Ahora es más restringida que la jurisdicción que antes tenía, pues requiere el no domicilio, se aumenta la cuantía y se exige la ciudadanía de un Estado, territorio o un distrito de los Estados Unidos. Esto en lo civil, porque toda la demás jurisdicción que poseía continúa intocable. Los esfuerzos de los puertorriqueños para que se suprima la District Court of the United States for Porto Rico resultan fallidos, asimismo los de la colonia de abogados y ciudadanos norteamericanos de mantener el status quo (88).

Tres meses después, el 14 de mayo de 1917, se reúne la Asamblea General del Partido Republicano Puertorriqueño, colectividad que favorece las instituciones norteamericanas en Puerto Rico, la americanización de los puertorriqueños y la integración a Estados Unidos como un Estado más. El punto cuatro de su Programa sostiene que:

"4. Mientras llegue este momento, demandamos del Congreso - una declaración explícita o inmediata de que Puerto Rico es un Territorio incorporado de los Estados Unidos, y la organización consiguiente de nuestra Corte Suprema y Cortes de Distrito como Cortes territoriales, suprimiendo la Corte - de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, cuya jurisdicción se transferirá a las Cortes locales" (89)

Es muy importante observar que dicha Resolución del Partido Republicano fue aprobada tres meses después de ser firmada y tener vigen-

cia la Ley Orgánica Jones. Recuérdese que de ahora en adelante - los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos por imposición del Congreso. Continúa pues el problema que plantea la existencia del Tribunal Federal en Puerto Rico. En 1920 el mismo Partido ratificó íntegramente su programa. Quizás una explicación del por qué se insiste una vez tras otra por los puertorriqueños de todos los credos y confesiones, por los abogados puertorriqueños y otros nos la ofrece un letrado norteamericano de Nueva York que visitaba la isla con frecuencia. Me refiero a Mr. Perry Allen quien en una carta al asesor jurídico del Bureau of Insular Affairs, Mr. Félix Frankfurter de fecha 16 de diciembre de 1912 sostiene que: (90)

"Es verdaderamente para ser deplorado que todos los puertorriqueños nativos parecen tener este tribunal no solamente en el más grande odio sino en terror,teniéndolo como una - máquina de opresión. Tampoco este sentimiento está por ningún confinado a los puertorriqueños, sino que parece ser - compartido por casi todos los norteamericanos con los cuales hablé".

Termino esta sección con una declaración del General Frank - McIntyre, chief of the Bureau of Insular Affairs del War Department. Como sabemos, esta oficina es la encargada de llevar a cabo, coordinar y recomendar toda la política pública federal con referencia a Puerto Rico, Filipinas y otras áreas menores dependientes. En una carta oficial que envía el General McIntyre al Gobernador de Puerto Rico Mr. Horace M. Towner fechada el 25 de abril de 1928 sostiene

que favorecía la abolición de la District Court of the United States for Porto Rico en 1916-17, pero que a pesar de que así lo recomendó al Congreso de Estados Unidos, éste no tomó en cuenta tal opinión. En palabras del Gen. McIntyre: "Yo puedo decir, como usted puede acordarse, que yo estaba a favor de la abolición de la - U.S. District Court for Porto Rico, pero esto no fue el punto de vista tomado por el Congreso en ese momento. ¿Crée usted que hay razones ahora para que se tome un punto de vista diferente en este asunto? (91). Mr. Towner, ex Presidente del Comité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes de Estados Unidos contesta a la carta del General McIntyre el 2 de mayo de 1928: "Yo estoy de acuerdo con usted en el pensamiento de que la United States District Court de aquí (Puerto Rico) no es necesaria, y estoy bien seguro que después de un tiempo puede y debe ser abolida" (92).

Finalmente la revista Pica-Pica de 5 de abril de 1924 rinde homenaje a D. Luis Muñoz Rivera como uno de los líderes puertorriqueños que más lucharon por la supresión del Tribunal Federal en Puerto Rico. Pues "Muñoz Rivera sabía lo que una exótica institución de justicia significaba para el país; Muñoz Rivera, quien no empequeñecía lo que significaba para los puertorriqueños, en su mayoría ignorantes del idioma inglés, tener juicios conducidos en una lengua extraña, con testimonios presentados en idioma desconocido; Muñoz Rivera, quien analizó el espinoso problema de que las sentencias así rendidas eran casi inapelables, pues la apelación costaba un mar de gastos, además de abogados y costas que muy pocos

podían pagar; Muñoz Rivera quien sabía todo esto, sin jactarse en los periódicos, poniendo su deber sobre todo lo demás, desde el inicio de los debates del Proyecto de Ley Jones, nunca cesó ni un sólo día de laborar con su indomable insistencia para lograr la abolición del Tribunal Federal en Puerto Rico, sin animosidad contra ninguno, simplemente usando los argumentos serenos de la absoluta razón sobre el asunto. Y si la muerte no le hubiera llevado, sus esfuerzos, porque eran continuos y verdaderos, a esta hora hubieran merecido el triunfo" (93)

Desde la Ley Jones de 1917 hasta la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Siete años después de aprobarse la Ley Orgánica Jones, el Comisionado Residente en Washington, Lcdo. Félix Cordoba Dávila presenta un Proyecto de Ley para otorgar un nuevo gobierno civil a Puerto Rico, liberalizando la anterior constitución. El mismo se presenta el 17 de diciembre de 1923 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En el artículo número 49 se suprime el Tribunal Federal, traspasándose su jurisdicción al Tribunal Supremo de Puerto Rico y a los demás Tribunales de Distrito puertorriqueños. Este Proyecto muere en Comisión sin que se le preste atención (94)

El 2 de abril de 1928, D. Antonio R. Barceló, Presidente del Senado y D. José Tous Soto, Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico solicitan del Presidente de Estados Unidos Mr. Calvin Coolidge, entre otras peticiones que: "se invista a la Corte Supre

ma de Puerto Rico con la jurisdicción federal, tal cual sucede - en los Territorios..." A dicha petición que no es otra cosa que la abolición del Tribunal Federal responde el Bureau of Insular Affairs en un Memorando interno de abril de 1928 (95).

"La jurisdicción del Tribunal Federal en Porto Rico ha sido discutida durante muchos años. Cuando la presente Ley Orgánica (Jones) era discutida, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, por medio de su representante en Washington, urgió el punto de vista de que no había necesidad para la existencia de la "United States Court for Porto Rico". El Colegio de Abogados de Puerto Rico se compone de casi exclusivamente de letrados puertorriqueños. Los miembros del "Bar" de practicantes ante el Tribunal Federal, tomaron de otra manera, la posición a favor de la más amplia jurisdicción del Tribunal Federal". "Mucho se puede manifestar a favor de la abolición del Tribunal Federal en Puerto Rico y conferirle la jurisdicción de ese tribunal a los tribunales locales de Distrito y Supremo. Esta es prácticamente la situación en las Islas Filipinas. Ello enfatiza la necesidad de fortalecer el Tribunal Supremo de Puerto Rico y de esta forma más que compensa por la pérdida del Tribunal Federal".

Obsérvese que en el Bureau of Insular Affairs continúan sutilmente sosteniendo la conveniencia de la supresión de la District Court of the United States for Porto Rico. En una carta que escribe

el General McIntyre al Gobernador Towner de Puerto Rico el 25 - de abril de 1928 le informa de este asunto y termina concluyendo: "Entonces, al oírse hablar de lo que ha sucedido cada vez que las Leyes Orgánicas de Puerto Rico se han discutido, será opuesto por los - norteamericanos que practican Derecho en la isla y por los grandes financieros en la isla, particularmente los norteamericanos. Usted recordará que esta proposición para abolir la "U. S. District Court for Porto Rico" fué considerada bastante cuando la presente Ley - Orgánica estaba siendo considerada por el Congreso".

El 10 de agosto de 1931, tres años de los anteriores acontecimientos el Partido Unión de Puerto Rico, "Denuncia del régimen de Gobierno que Estados Unidos de América impone al Pueblo de Puerto Rico".

"En la administración de justicia en nuestro país hay algo más trágico que esa subordinación de los tribunales al poder invasor. Además del sistema de Cortes insulares, funciona una "Corte de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico", con funcionarios de nombramiento presidencial y amplia jurisdicción en asuntos locales de significativa trascendencia. La intromisión de este tribunal en la vida judicial de Puerto Rico, no sólo merma notablemente las facultades de - nuestra judicatura y en ciertos momentos de nuestra historia colonial ha tendido a paralizar la maquinaria administrativa, sino lo que es más grave, somete al pueblo puertorriqueño a la tortura de procedimientos judiciales que se llevan

a cabo en una lengua extraña, que no es la del acusado, en un ambiente exótico, ante un magistrado que, por delitos - que no existen en nuestro Código Penal, impone castigos que deben cumplirse en la prisión de una ciudad lejana del continente noesteamericano". (96)

Firman dicho manifiesto D. Antonio R. Barceló, D. Luis Llorens Torres, D. Manuel A. Martínez Dávila, D. Ernesto Ramos Antonini, D. Vicente Geigel Polanco, D. Antonio Coll Vidal, D. José Dávila Ricci, D. Samuel R. Quiñones, D. Joaquín Velilla y D. José Enrique Gelpí.

En 1945 el Colegio de Abogados de Puerto Rico aprueba una Resolución (97) donde en el Apartado C -Poder Judicial, protesta de que "el Pueblo de Puerto Rico, en el cual y sobre el cual hace Justicia esa Corte (Federal), no interviene, ni directa ni indirectamente, en el nombramiento de sus funciones, ni en la elección de las autoridades que las nombran". Asimismo protesta de que se use el idioma inglés en sus trabajos judiciales y se pregunta: ¿Cómo - puede aplicarsele justicia a un pueblo que desconoce el idioma en que dichas leyes están redactadas?". Termina el Colegio de Abogados manifestando que la District Court of the United States for Porto Rico, es "extraña a nuestra idiosincracia".

Se inician los procedimientos preliminares a la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952. En la prensa diaria no aparece ninguna noticia o artículo sobre la reforma constitucional y el Tribunal Federal, con excepción de un

artículo publicado por El Imparcial de sábado 20 de octubre de 1951, donde se reproduce un editorial del Diario de Nueva York:

"Si el propósito de los líderes puertorriqueños que gestionaron del Congreso la llamada Ley de Constitución hubiera sido el de establecer un genuino gobierno propio en aquella isla y el Congreso hubiera compartido ese propósito en todas sus implicaciones jurídicas, de la nueva estructura gubernativa se hubiese eliminado la Corte Federal, que funciona en Puerto Rico, y toda apelación de los Tribunales puertorriqueños para ante las cortes norteamericanas.

Pero como en puridad de verdad, el propósito no iba tan lejos, ni pretendía crear nada genuino, sino mantener la colonia, con ligeros retoques y remiendos que la hicieran aparecer más democrática en la Ley 600 del Congreso de Estados Unidos, se ha dejado subsistente la Corte Federal - en Puerto Rico y sigue subordinada la independencia de los tribunales puertorriqueños a las decisiones de la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston y del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los fallos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no son definitivos. Son revisables por Cortes norteamericanas. La Administración de Justicia en Puerto Rico resulta así una especie de sucursal colonial de la Administración judicial de Estados Unidos", (98)

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

1952 no trae ningún cambio en el ámbito de la judicatura federal o sobre la United States District Court for the District of Puerto Rico. Así lo establece la sentencia de Mora v. Mejía (99) También véase el comentario del Juez Federal Hon. Clemente Ruiz Nazario con referencia al idioma español en el Tribunal Federal: "El Pueblo de Puerto Rico votó a favor de que quedaran en vigor bajo el Estado Libre Asociado, las disposiciones de la antigua - Ley Orgánica que establecen como requisito para poder actuar como jurado en la Corte Federal, el hablar inglés" (100)

En octubre de 1968 el Lcdo. Federico A. Cordero, hijo, presenta un alegato en la United States District Court for the District of Puerto Rico, impugnando la jurisdicción de esa institución federal para entender en casos que envuelvan exclusivamente leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En resumen la contención del Profesor Cordero es la siguiente: (101)

"Sostiene el Licenciado Cordero en su memorando que en - virtud de la Ley 600 de 1950 y de la Ley 447 de 1952, - (del Congreso de Estados Unidos) se creó una entidad política jurídica dentro del sistema constitucional americano, el Estado Libre Asociado.

Agrega que al crearse el Estado Libre Asociado, el Congreso voluntaria e irrevocablemente, cedió al Pueblo de Puerto Rico la autoridad plena y absoluta con relación a todos los asuntos de Gobierno interno en sus tres fases, - ejecutiva, administrativa y judicial. Se indica además, -

desde la creación del Estado Libre Asociado, las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no pueden alterarse por el Congreso.

Se alega que luego, a partir del 25 de julio de 1952 - cuando se inauguró el Estado Libre Asociado, Puerto Rico dejó de ser un territorio de los Estados Unidos, sin convertirse en un Estado federado y por tal razón la Corte Federal dejó de tener jurisdicción sobre los casos que - envuelven cuestiones de Derecho interno puertorriqueño. Más adelante se indica que el Congreso así lo reconoció en 1956 al enmendar el Código Judicial Federal para conferirle jurisdicción a la Corte de Distrito Federal para - adjudicar casos en los que exclusivamente estén planteadas cuestiones de Derecho de carácter puramente local del Estado Libre Asociado".

La alegación del Lcdo. Cordero, hijo, no fue decidida, ni siquiera tomada en cuenta por la United States District Court - for the District of Puerto Rico. Continúa pues dicha institución con iguales, y aún más poderes que cuando se estableció. Su idioma oficial y obligatorio es el inglés, así como el Derecho que - aplica es de factura anglo-americana.

Conclusiones.-

- 1) Cuando llegaron a Puerto Rico las tropas del Ejército de los Estados Unidos la isla tenía un régimen producto de la Constitución Autonómica de 1897. Asimismo, una sociedad cuatricentenaria con una cultura, una historia y un idioma vernáculo diferente - al del pueblo invasor. Puerto Rico tenía un sistema legal de origen español, científico, técnico, moderno y bastante justo. Su sistema judicial, altamente organizado, era similar al europeo - de la época.
- 2) La irrupción de los Estados Unidos en la sociedad puertorriqueña trajo como consecuencia una serie de problemas jurídicos muy delicados. Desde un principio se comenzaron los intentos de suplantar el Derecho puertorriqueño así como la organización judicial y la filosofía que la informaba. La llegada de los abogados norteamericanos agudiza el problema de la sustitución de Códigos y la norteamericanización de las instituciones. El establecimiento de la primera United States Provisional Court obedece a dos principales razones, primero a la necesidad de un foro cuasi militar que reprima los numerosos intentos de oposición a los militares y segundo ofrecer un foro apropiado a los abogados norteamericanos que no conocían el idioma nacional de los puertorriqueños, el español y donde pudieran practicar el derecho anglo-ame

ricano.

3) La gran mayoría del Pueblo de Puerto Rico se opuso tenazmente a la suplantación del Derecho y la organización judicial hispano-puertorriqueña. Con excepción del Partido Republicano Puertorriqueño que preconizaba la asimilación y transculturación de Puerto Rico, la Suprema Corte de Justicia de Puerto Rico, la Secretaría de Justicia, el Colegio de Abogados y los órganos de opinión pública también se opusieron al novel Tribunal Provisional de los Estados Unidos. A pesar de esto los Gobernadores Militares llevaron a cabo durante el bienio de su régimen todas las medidas originales que poco a poco fueron cambiando las instituciones jurídicas puertorriqueñas, e.g. la judicatura, la organización administrativa y partes muy importantes del Derecho procesal y el civil.

4) La nueva Ley Orgánica de Puerto Rico de 1900 establece las pautas y las condiciones mediante las cuales se llevará a cabo la sustitución de los principales Códigos puertorriqueños. La primera Comisión de Códigos establecida por el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de su trabajo superficial, y de asegurar que "no fue nombrada para barrer con el sistema de Derecho de la isla..." sienta las condiciones para lograr en gran parte ese fin. La segunda Comisión compuesta como la primera, de dos norteamericanos y un puertorriqueño, establecida por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, procede a recomendar la sustitución de cua-

tro cuerpos de Derecho por otros tantos Códigos de Estados norteamericanos. En su momento se presenta la protesta del Comisionado puertorriqueño ante la recomendación de derogar el Código Penal y la afirmación de que no ve necesaria dichas reformas. - Una Asamblea Legislativa compuesta totalmente por miembros del Partido Republicano aprueba en una noche la sustitución de dichos Códigos, ante la protesta firme del país y letrados puertorriqueños. Los abogados norteamericanos desempeñan un papel preponderante en todo el proceso.

5) La referida Ley Orgánica establece un Tribunal de los Estados Unidos para Puerto Rico permanente, a pesar de la reiterada repulsa del país durante el Gobierno Militar. Hay prueba histórica de que los contemporáneos comprendieron el papel de instrumento de norteamericanización que le asignaron sus creadores y valedores. Estos pudieron no establecerlo en las Leyes Orgánicas de 1900 y 1917 por cuanto ningún territorio de los Estados Unidos lo tenía, con excepción de Hawai y Alaska, similares a Puerto Rico. Su presencia correspondió al esquema trazado por el Congreso para la nueva colonia. Recuérdese que éste es el período histórico designado por los historiadores norteamericanos como la época de la génesis imperial,

6) La sustitución de los Códigos Penal, Político, Enjuiciamientos Criminal y Civil, la presencia del Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico, que aplica un Derecho de factura anglo-sa

jona, en idioma inglés y en donde practican en su mayoría, al principio abogados norteamericanos, ha creado las condiciones - óptimas para el progresivo avance del Derecho anglo-americano sobre lo que queda del Derecho tradicional de Puerto Rico. Añádase a esta perspectiva la continua copia por la Asamblea Legislativa puertorriqueña de las Leyes Uniformes de Estados Unidos así como otra legislación y el gran papel desempeñado por la educación jurídica de los abogados puertorriqueños quienes, o cursan la carrera en Estados Unidos o en la isla siguiendo patrones similares a los norteamericanos.

7) El Tribunal Federal en Puerto Rico (District Court of the United States for Puerto Rico) ha sido desde sus comienzos factor - principal en los cambios jurídicos que va sufriendo nuestro Derecho Puertorriqueño. Desde su primer momento, dicho foro ha estado aplicando un Derecho que nos es extraño y en el cual no tenemos participación legislativa. Tampoco tenemos participación en las leyes que reglamentan ese Tribunal ni tomamos parte en el nombramiento de sus jueces quienes hasta 1952 fueron estadounidenses con desconocimiento del idioma y el Derecho del país. Dicho Tribunal ha ido poco a poco sustituyendo jurídica y espiritualmente, el ámbito de los Tribunales puertorriqueños. Foro especial que - desarrolla una jurisprudencia exótica por ser de factura anglo-americana y al cual se opusieron los puertorriqueños y sus instituciones más representativas de una forma u otra.

A N O T A C I O N E S
=====

Introducción.

- 1.- Como dato de apoyo a esta contención recuérdese que en 1810 cuando el Comisario Regio, enviado desde España para dirigir desde Puerto Rico las operaciones de pacificación contra Venezuela, el pueblo puertorriqueño le hizo saber que "no sufrirá jamás que se saque un solo miliciano para llevarlo a pelear contra sus hermanos los caraqueños". Tomás Blanco, - Frntuario Histórico de Puerto Rico, Biblioteca de Autores - Puertorriqueños, 1955, p. 55-56. Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, siglo XIX, Río Piedras, Editorial Universitaria. Manuel Maldonado Denis, Puerto Rico: una interpretación histórico-social, México, Siglo XXI, 1971.
- 2.- Su autor material fue el Ministro de Ultramar D. Segismundo - Moret.
- 3.- Carmelo Delgado Cintrón, El Consejo Autonomista de Secretarios (estudio de cambios constitucionales), San Juan, Escuela de - Derecho, 1972. Carmelo Delgado Cintrón, El Régimen Autonómico de Puerto Rico, ponencia ante el coloquio celebrado en el Ateneo Puertorriqueño, el 21 de febrero de 1973, conmemorando el septuagésimo quinto aniversario de la inauguración de la autonomía. La Toga, 1973, p. 15
- 4.- Angel Rivero Méndez, Crónica de la Guerra Hispano-Americana en Puerto Rico, Madrid, 1920 (Hay edición facsímil hecha por la Editorial Edil en 1971)
- 5.- Blanco, op. cit. p. 105; Ponencia del Ldo. Eladio Rodríguez Otero en Status of Puerto Rico, Vol. 2, Socio-cultural factors in relation to the Status of Puerto Rico, Washington, U.S. - Government Printing Office, 1966, p. 307
- 6.- 141 Colección Legislativa de España, p. 1251; Gaceta de Puerto Rico, 18 de diciembre de 1888, Núm. 151, p. 1-4.
- 7.- Ibid. Tomo 146, p. 24; Gaceta de Puerto Rico, 14 de enero de - 1891, Núm. 20, p. 1 y ss, termina en Ibid., 28 de febrero de - 1891, Núm. 26, p. 1 y ss.
- 8.- Creada por el Real Decreto de 19 de junio de 1831 con la designación de Real Audiencia.
- 9.- La Audiencia Criminal de Ponce fué creada por el Real Decreto de 26 de octubre de 1888.
- 10.- La Audiencia Criminal de Mayagüez fue creada por el Real Decre-

to de 5 de enero de 1891

- 11.- Gaceta de Puerto Rico, 27 de noviembre de 1888, Núm. 42, p. 1 y ss.
- 12.- Real Decreto de 26 de octubre de 1888. Sucesores de las antiguas Alcaldías Mayores establecidas en 1831.
- 13.- Real Decreto de 23 de mayo de 1879, mandando a observar el Código Penal de 17 de junio de 1870 en las islas de Cuba y Puerto Rico y la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal para la aplicación de ese Código. Véase CXXII Colección Legislativa de España, p. 927. Gaceta de Puerto Rico, 17 de junio de 1879, Núm. 72, p. 3.
- 14.- Real Decreto de 19 de octubre de 1888, aprobando para Cuba y Puerto Rico la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en la Península desde 4 de septiembre de 1882, empezando a regir el 1 de enero de 1889; Gaceta de Puerto Rico, 27 de noviembre de 1888, Núm. 142, p. 1 y ss.
- 15.- Real Decreto de 25 de septiembre de 1885, se aprueba y publica la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada para las islas de Cuba y Puerto Rico. Antes de este Código rigió en Puerto Rico la Ley española de 1856 siendo trasladada en 1865. Gaceta de Puerto Rico de 17 de octubre de 1885, Núm. 125, p. 3 y ss.
- 16.- Real Decreto de 31 de julio de 1889, aplicación del Código Civil a Ultramar. Gaceta de Puerto Rico de 29 de agosto de 1889, Núm. 104, p. 1 y ss, termina en Ibid. 12 de diciembre de 1889, Núm. 149, p. 1.
- 17.- Real Decreto de 6 de diciembre de 1878, disponiendo que se publique desde luego en Puerto Rico la Ley Hipotecaria vigente en España con las modificaciones propuestas por la Comisión nombrada al efecto. Gaceta de Puerto Rico, 4 de enero de 1879, Núm. 2, p. 1. Real Decreto de 4 de julio de 1893, nueva reforma de la Ley Hipotecaria por incompatibilidades con el Código Civil.
- 18.- Real Decreto Haciendo extensivo a Cuba y Puerto Rico el Código de Comercio para la Península de 1885. Gaceta de Puerto Rico, 6 de marzo de 1886, Núm. 28, p. 1.
- 19.- Real Decreto de 6 de noviembre de 1885, aprobando la ejecución de la Ley del Registro Civil.

- 20.- Decreto de 29 de octubre de 1873 disponiendo que el Notariado de Cuba y Puerto Rico se rijan por la Ley Orgánica y Reglamento que se determinan
- 21.- Ex Parte Mauleón, 4 D.P.R. 123 (1903), cita a la página 134

ANOTACIONES

Capítulo I.-

- 1.- Annual Report of the War Department for the fiscal year ended June 30, 1899. Washington, Government Printing Office, 1900, - (Part 13, Report of the Military Governor of Porto Rico on Civil Affairs). p. 18-30
- 2.- Publicada en James D. Richardson, A Compilation of the Messages and Papers of the President, 1789-1905, Bureau of Literature and Art, 1906, p. 350.
- 3.- Publicada en Manuel Fraga Iribarne, Las Constituciones de Puerto Rico, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1953, p. 269. Documents on the Constitutional History of Puerto Rico, Washington, Office of the Commonwealth of Puerto Rico,
- 4.- Ibid, pág. 271. También Cayetano Coll y Toste, Boletín Histórico de Puerto Rico, San Juan, Tipografía Cantero, Fernández y Co, 13 volúmenes y dos números del vol. 14, vol. VI, p. 66
- 5.- Véase Col. W. Winthrop, A digest of Opinions of the Judge Advocate of the Army, Government Printing Office, 1901, (Revised Edition), p. 462
- 6.- Compilation of the Acts of Congress, treaties and Proclamation relating to insular and military affairs, from March, 4, 1897 to March 3, 1903. Government Printing Office, 1903, p. 343-345

Capítulo II.-

- 1.- La misma se encuentra integrada en la "General Orders of the War Department, 100, A. G. O., 1863". También puede encontrarse en Apéndice al Judge Advocate General's School Special Text Number 7, The Law of land Welfare, 1943, p. 155-186. Hoy están en desuso
- 2.- Como ejemplo de arbitrariedades véase la supresión de la profesión de Procurador; al juzgar a los súbditos españoles en la - United States Proviisional Court for the Department of Puerto Rico, cuando el artículo 11 del Tratado de París claramente estipulaba que tenían que ser juzgados por los tribunales ordinarios y comunes de Puerto Rico. Asimismo, una serie de decisiones del Gobernador Militar y del referido tribunal federal. En el -

momento oportuno examinaremos con detalle estos asuntos.

- 3.- El Bureau of Insular Affairs creado en el Departamento de la - Guerra supervisó los asuntos de Puerto Rico desde 1898 a 1900 - y desde 1909 hasta 1934. Su primer nombre fue Division of Customs and Insular Affairs, luego en 10 de diciembre de 1900 se cambió la designación a Division of Insular Affairs. En 1902 - una Ley del Congreso lo cambió a Bureau of Insular Affairs. - Véase Report of the Chief of the U.S. Bureau of Insular Affairs to the Secretary of War, 1909, Washington, Government Printing Office, 1909, p. 20
- 4.- Se encuentra incluido en Reports on the Law of Civil Government in territory subject to military occupation by the military forces of the United States, Washington, Government Printing Office 1902, p. 11.
- 5.- Magoon, op. cit., p. 20. La traducción es del autor.
- 6.- Proclama y comunicación se encuentran en Anual Report of the War Department, op. cit.
- 7.- Gaceta de Puerto Rico, sábado 1 de septiembre de 1899, núm. 233 p. 1
- 8.- Ibid., domingo 2 de octubre de 1898, núm. 234, p. 1; ibid, martes 4 de octubre de 1898, núm. 235, p. 1
- 9.- Los decretos de los Gobernadores Militares de Puerto Rico reciben el nombre de "General Orders" u Ordenes Militares.
- 10.- Véase Ordenes Generales del Departamento de Puerto Rico, compilación de las disposiciones del Gobierno Militar, 1898-1900, s. p. Citada de ahora en adelante por las abreviaturas. O.G.P.R. También Gaceta de Puerto Rico, jueves 20 de octubre de 1898, - núm. 3, p. 1. Esta Orden General es la única que firma por sí - el General Brooke, las demás se promulgaron a su nombre.
- 11.- Gaceta de Puerto Rico, viernes 28 de octubre de 1898, núm. 10, p. 1.
- 12.- Ibid.
- 13.- Ibid., domingo 6 de noviembre de 1898, núm. 18, p. 1
- 14.- El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo se componía de los "cuatro Magistrados que forman las dos secciones que se compone la Audiencia de San Juan de Puerto Rico..." según el Real Decre-

to de 15 de agosto de 1893. Antes de esta organización y según el Real Decreto de 23 de noviembre de 1888 el Tribunal de lo - Contencioso-Administrativo se componía del Presidente de la Audiencia Territorial, dos Magistrados de la misma y dos Magistrados Administrativos. La jurisdicción de lo Contencioso-administrativo fué abolida por una Ley de 10 de marzo de 1904. - Véase Leyes de Puerto Rico, 1904, p. 133.

- 15.- Carta-informe del General Brooke al Adjutant General of the - Army de fecha 30 de noviembre de 1898. National Archives, Washington. D.C., Bureau of Insular Affairs (Record Group No. 350) File 129. De ahora en adelante abreviado NAUS-BIA, seguido del número del expediente.
- 16.- He buscado insistentemente dicha disposición, no existe. El autor anónimo de la reseña que aparece frente al Tomo I de Fallos y Sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, - Bureau of Printing and Supplies, 1906, nos informa que "no se encuentra, que sepamos, en los textos legales ninguna disposición de carácter militar que de modo expreso ordene la creación de la Corte Suprema de Justicia y fije su competencia" --
- 17.- Encontré que el Tribunal Supremo de Justicia se le denomina en la Gaceta de Puerto Rico de diferentes maneras: Tribunal Supremo; Suprema Corte de Justicia; Suprema Corte; Supreme Court of Justice. A pesar de la nueva denominación, aparentemente al - Secretario de Gobierno de dicho foro, D. Pedro de Aldrey, se - le olvidó el cambio y la llama por última vez Audiencia Territorial en un Decreto publicado en la Gaceta el sábado 12 de noviembre de 1898, núm. 23, p. 1
- 18.- En este momento componían la Audiencia Territorial de Puerto Rico D. Venancio Zorrilla y Arredondo, Presidente; D. Nicolás Lillo de Rodas, Presidente de Sala; D. Antonio Martínez Ruiz, D. José C. Hernández y Santiago; D. Darío Olloa Varela; D. - Aristides Maragliano y D. Francisco Vasco, Magistrados; D. Enrique Díaz Girrajo, Fiscal; D. Indalecio Villaverde, Teniente Fiscal y D. Rafael Nieto Abeillé, Abogado Fiscal.
- 19.- D. José Conrado Hernández y Santiago ingresó muy joven en la carrera judicial de ultramar. Fue ascendiendo hasta Magistrado de Audiencia durante el régimen español. En 1898 D. Luis Muñoz Rivera, Presidente del Partido Liberal de Sagasta en Puerto Rico había solicitado a D. Segismundo Moret, Ministro de - Ultramar que designara a Hernández y Santiago Presidente de la Audiencia Criminal de Mayagüez, pero éste no aceptó. Durante - el régimen norteamericano en Puerto Rico ascendió a Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el segundo de ese foro, y

allí permaneció largos años hasta su jubilación.

- 20.- Rafael Nieto Abeillé será luego designado Magistrado del Tribunal Supremo y en 1899 ocupará el cargo de Procurador General de Puerto Rico. Al terminar esa encomienda regresará al Tribunal Supremo y en 1902 renunciará por presiones del Gobernador de Puerto Rico para designar a Mr. Harvey H. McLeary, según el esquema sugerido por el General Davis y deseo de los abogados norteamericanos de San Juan que entienden que debe de haber dos o tres jueces norteamericanos en el Tribunal Supremo de manera que ejerzan influencia en el proceso de americanización del Derecho. Véase comunicación confidencial del General G. W. Davis al Secretario de la Guerra de 19 de abril de 1900, NAU-BIA, file no. 168-29; The San Juan News, Saturday March 16; 1901, vol. VI, No. 63, p. 1; Ibid, Saturday, March 30, 1901, Vol. VI, No. 75, p. 1; Ibid, Saturday, October 5 - 1901, Vol. VI, No. 232, p. 1.
- 21.- Véase Annual Reports of the War Department for the fiscal year ended June 30, 1900, op. cit. p. 72
- 22.- Los Lcdos. Díaz Navarro, Rossy y Ramos declinaron sus nombramientos, por aceptar otros destinos; de Diego solicitó transferencia a Mayagüez de cuyo tribunal fue Presidente. Acuña fue designado Secretario de Estado. Ibid, p. 72. Cf. Federico Acosta Velarde; El Primer Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, 1940, p. 20
- 23.- El Pastor protestante Dr. Henry K. Carroll fue designado por el Presidente William McKinley para que preparase un detallado informe sobre Puerto Rico en los temas de población, gobierno civil, comercio, industrias, producción, carreteras, tarifa y moneda. Carroll tomó muy en serio su encomienda y celebró innumerables entrevistas y vistas públicas (hearings) que publicó junto a su informe. El libro sumamente raro es imprescindible para entender el pensamiento de algunos dirigentes puertorriqueños en ese determinado momento. Henry K. Carroll, Report on the Island of Porto Rico, Washington, Government Printing Office, 1899, p. 289-290
- 24.- Gaceta de Puerto Rico, jueves 8 de diciembre de 1898, núm. 45 p. 1
- 25.- Fraga Iribarne, op. cit. p. 261. También en Documentos presentados a las Cortes en la Legislatura de 1898 por el Ministro de Estado (Duque de Almodóvar del Río), Imprenta Rvadeneyra, 1899
- 26.- NAUS-BIA, 77-2
- 27.- Traducción del autor.

- 28.- Véase In'reclaim made by the Government of Spain, that paragraph 14, of General Orders, No. 19, issued by the Military - Governor of Porto Rico, is in violation of article XII of the Treaty of Peace between the United States and Spain, en Magoon, op. cit., p. 646
- 29.- Copia del juramento en su versión en inglés aparece en página 5 de la carta del abogado John G. Meyers al Hon. Elihu Root, Secretario de la Guerra de fecha 4 de diciembre de 1898. Versión en idioma español del autor. NAUS -BIA, 437-15
- 30.- El Lcdo. Sarmiento, graduado en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1882, se inscribió en el Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico en 1899. Es uno de los dirigentes de la Colonia española de San Juan. En 1911 fué Profesor de la Escuela de Derecho del Ateneo Puertorriqueño.
- 31.- NAUS-BIA, 437
- 32.- Del tenor del documento se desprende que "V" se refiere al Gobernador Militar. Mi interpretación es la siguiente: que en caso de que el Tribunal Supremo determinase negativo lo propuesto por el peticionario, dicho foro le propusiese al Gobernador Militar la forma de juramento. Debe tenerse en cuenta - que no tengo en mi poder copia de la resolución de la Corte Suprema de Justicia pues se ha perdido, y que la conozco porque el interesado, Sarmiento, la copió en su instancia que dirige al Gobernador.
- 33.- Muchas decisiones del año 1899 no fueron publicadas y están todavía perdidas. El resumen que reproduzco lo suple el Lcdo. Sarmiento en su alegato.
- 34.- Aparentemente el Lcdo. Sarmiento preparó la Instancia cuando el General Brooke era Gobernador Militar y la entregó cuando el General Henry había tomado posesión por ello la portadilla de la Instancia tiene el nombre del General Henry pero la fecha de la Instancia en el texto es de 15 de noviembre de 1891
- 35.- La fecha de la Petición es 3 de noviembre, sin embargo, en el texto al comenzar manifiesta: "En quince del corriente mes dirigí a la Corte Suprema de esta isla solicitud para que resolviese". Si la solicitud es de 3 de noviembre, ¿cómo puede decir que dirige el quince de los corrientes? ¿Lo posdató?
- 36.- El Lcdo. Francisco Pelegri Roger cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona y se inscribió en el Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico el 2 de diciembre de 1882.

Véase Carmelo Delgado Cintrón, Libro de Matrículas del Colegio de Abogados de Puerto Rico, San Juan, Edición Oficial del Colegio de Abogados, 1970, p. 82

37.- NAUS-BIA, 437

38.- Ibid.

39.- Suprimo las condiciones para ejercer la abogacía por no ser pertinentes.

40.- NAUS-BIA, 437-2

41.- Ibid.

42.- Asesor jurídico militar, interino. Su nombramiento como tal - fue hecho en la Orden General Número 3 de 16 de enero de 1899

43.- Traducción del autor.

44.- No debe de olvidarse que Mr. Sharpe es el creador del Tribunal Federal en Puerto Rico, de las reformas americanizantes de la judicatura de Puerto Rico y que se le coloca en el Departamento de Justicia para introducir los "métodos y progresos americanos". Véase Orden General Núm. 16 de 10 de febrero de 1890.

45.- NAUS-BIA, 437-1.

46.- Ibid., 437-5

47.- Traducción del autor.

48.- Ibid. Obsérvese que se aplica el Derecho y las leyes norteamericanas, sin tener en cuenta las puertorriqueñas

49.- El Lcdo. Antonio Alvarez Nava y Lobo era el principal abogado de los intereses españoles en San Juan. Desde 1896 desempeñaba el cargo de Notario de la Capital de Puerto Rico. Era socio profesional del Lcdo. Emilio García Cuervo. En 1915 fue - Profesor de Economía Política del Instituto Universitario José de Diego y Vice Presidente de la Casa de España

50.- NAUS-BIA, 437

51.- Ibid.

52.- Gaceta de Puerto Rico, sábado 22 de abril de 1899, Núm. 95, - p. 1.

53.- ¿Por qué procedía así el Lcdo. Díaz Navarro? Una posible ex-

plicación es la dicotomía existente en la sociedad puertorriqueña entre españoles y puertorriqueños, que ahora por la especial situación en que se encontraba la isla surge a realidad de las relaciones diarias. División que desde que nos sentimos unos puertorriqueños y otros españoles desde principios del siglo XIX va en continua y ascendente trayectoria. Ejemplos: Cortes de Cádiz; incidente del anillo pastoral del Obispo D. J. Alejo de Arizmendi primero y único nacido en Puerto Rico durante el largo régimen español; Insurrección de Lares; año terrible de 1887; partidos políticos: conservadores (españoles sin condiciones) y liberales-autonomistas; régimen autonómico; partidas sediciosas, entre otros.

54.- NAUS-BIA, 437

55.- El resumen de esta entrevista aparece en la carta que dirige Mr. Meyers al Secretario de la Guerra el 23 de mayo de 1899

56.- Traducción del autor.

57.- Ibid.

58.- Gaceta de Puerto Rico, jueves 25 de mayo de 1899, Núm. 123 - p. 1.

59.- Traducción del autor

60.- NAUS-BIA, 437. En un párrafo de la referida carta dice el Lcdo Alvarez Nava: "La orden de su señoría ha sido acatada, no por el Secretario de Justicia, sino por el Comandante del Departamento de Puerto Rico". Traducción del autor.

61.- Ibid. file 437-10. Traducido por el autor.

62.- Traducido por el autor.

63.- Ibid. Enfasis suplido.

64.- NAUS-BIA, 437-15

65.- Traducido por el autor.

66.- Ibid.

67.- Véase Orden General Núm. 23 de 6 de diciembre de 1898. La ceremonia de juramento y reunión con los miembros del Consejo de Secretarios aparece narrada en La Democracia, jueves 8 de diciembre de 1898, Año VIII, Núm. 2085, p. 2.

- 68.- José G. del Valle, A través de diez años (1897-1907) Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Feliu y Susanna, 1907 p. 97
- 69.- Gaceta de Puerto Rico, sábado 17 de diciembre de 1897, Núm. 53, p. 1
- 70.- Ibid., domingo 11 de diciembre de 1898, Núm. 48, p. 1
- 71.- La palabra "caso" en Puerto Rico es equivalente a Sentencia.
- 72.- Winthrop, op. cit., p. 464
- 73.- Véase Luis Manuel Diaz Soler, Rosendo Matienzo Cintrón, Orientador y Guardián de una cultura, Río Piedras, Ediciones del - Instituto de Literatura Puertorriqueña, 1960, 2 vols.
- 74.- Véase Davil Cecil Johnson, Courts in The Philippines, Ald-New en Michigan Law Review, vol. XIV, 1915-1916, p. 300
- 75.- H. G. Curtis, The status of Puerto Rico en Forum. Vol. 28 , december, 1899, p. 403.
- 76.- Este funcionario es similar a un asesor jurídico, aunque tiene otras potestades entre ellas judiciales.
- 77.- Traducción del autor. La cita original en idioma inglés es: - "A statute cannot be frame bywhich a civilian can lawfully be ameable to the military jurisdiction in time of peace".
- 78.- Véase: Angel Rivero Méndez, Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico, Madrid, Imprenta Sucesores de Rivadeneira, 1922, véase capítulo XXII y Apéndice núm. I; Diario; - Asimismo proclama del Gobernador Macias de 15 de agosto de 1898; Joseph Wheeler y J. de Olivares, Our Islands and their people as seen with camera and pencil, 1899, 2 vols, tomo I, p. 361; El testimonio del Mayor Charles L. Cooper ante el Dr. Henry K. Carroll, Report on the Island of Porto Rico, Washington, Government Printing Office, 1899, p. 302 titulado "Special trials of bandits"; Annual Report of the War Department for - the year ended june 30, 1900, (Part 13, Report of the Military Governor of Porto Rico on civil affairs) Washington, 1902, p. 73; Carta del General John F. Brooke al Adjuntant General, Uni ted States Army, fechada en 30 de noviembre de 1898; Carlos - Ripoll, Cuba y la Independencia de Puerto Rico en El Tiempo - (Nueva York) domingo 28 de junio de 1970, p. 4, parte b; Miñi Seijo Bruno, Qué culpa tendré yo de todo esto en Claridad, 12 de agosto de 1973, p. 12.
- 79.- Hay un fotografia de la época donde aparece Aguila Blanca y

su gente enarbolando la bandera puertorriqueña. Es necesario un estudio serio y objetivo de este interesante personaje. La fotografía la publican entre otros Ripoll, op. cit. y Seijo Bruno, op. cit.

- 80.- Halleck, International Law, Third Edition, vol. 2, chapter - 34, part 18, p. 487. Esta obra es una de las más citadas por Mr. Magoon en su estudio "The Powers, functions and duties of the Military Government, op. cit. p. 20.
- 81.- 18 United States Supreme Court Report 281 (Lawyers Editors) Esta decisión es muy conocida y dado el sistema jurisprudencial que impera en Estados Unidos es la misma mandatoria para situaciones similares. Ex Parte Milligan es estudiada en la Academia de West Point y otros centros pues establece un hito en la Historia del Ejército.
- 82.- New York, Haper and brothers publishers, 1899, p. 235. Este juicio lo emite el autor de referencia refiriéndose al Tribunal de Justicia Militar.
- 83.- El Judge Advocate es el asesor jurídico militar del Gobernador Militar.
- 84.- Annual Report of the War Department for the fiscal year ended june 30, 1900, op. cit. p. 210-211. Traducción del autor.
- 85.- Ibid. Continúa el referido informe pero se refiere a los orígenes del Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico y será tratado en otra parte de esta monografía.
- 86.- Ex Parte Milligan, op. cit., p. 142. La cita en inglés es: - "Ma~~ter~~ial rule can never exist where the courts are open, and in the proper and unobstructed exercise of their jurisdictions it is also confined to the locality of actual war"
- 87.- Estadística oficial publicada por el Judge Advocate of the Department, Mayor Sharpe. Véase Annual Report of Brigadier General George W. Davis, Department of Porto Rico to the Adjutant General of the Army, 1899, Adjutant General Office, San Juan, Porto Rico, 1899, s.p.
- 88.- El diario The San Juan News es uno de los primeros periódicos en inglés en la isla de Puerto Rico. De hecho es el tercero, siendo precedido por The New Sun de Arecibo y Porto Rico Mail de Ponce fundados en octubre de 1898. En noviembre se estableció The San Juan News, periódico bilingüe que se ganó el apodo de San Juan Esnú. Su tónica editorial fue claramente americanizante, antipuertorriqueña y de rudos ataques a los puertorri-

- queños. Célebre fue su "despiadada campaña contra nuestros tribunales de Justicia y repetidas veces fué denunciado por libelo". Véase Antonio S. Pedreira, El Periodismo en Puerto Rico, Bosquejo histórico desde su iniciación hasta el 1930, La Habana, Imprenta de Ucar y Cia, 1941, (Monografías de la Universidad de Puerto Rico) p. 247.
- 89.- Recuérdese las palabras del Ldo. Rosendo Matienzo Cintrón, - abogado y hombre público de fina sensibilidad y vasta cultura: "Cuando llegaron los americanos a la isla hubo una verdadera locura que consistía en abominar de todo lo que era español o puertorriqueño, en obsequio a la ingerencia de los nuevos métodos venidos del norte". Arturo Morales Carrión, Ante un centenario - Rosendo Matienzo Cintrón, también citado en - Alfonso L. García Martínez, Idioma y Derecho en Puerto Rico, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. XX, mayo 1960, núm. 3, p. 183, 194.
- 90.- La noticia es una entrevista que se publica en el San Juan -- News, Thursday, october 25, 1900, vol. V, No. 97, p.s. Carece de veracidad la afirmación de que el Ldo. José R. Freyre es "el primer abogado americano en ser admitido a las Cortes españolas de Puerto Rico" (énfasis suplido). El Ldo. Francis H. Dexter oriundo de Owego, New York, fue admitido a la de -- 1900. Véase Revista de Legislación y Jurisprudencia de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, vol. IV, mayo-junio, 1917 No. 3, p. 237. No se entienda que afirmo que Dexter fue el primero de los abogados norteamericanos en ser admitido, pero sí definitivamente el Tribunal Supremo le autorizó primero que a Freyre. En Puerto Rico después de 1898 muchas personas usan la palabra "corte" como sinónimo de "Tribunal de Justicia".
- 91.- Véase La Democracia de 12, 15 y 17 de noviembre de 1898. En cuanto al Reverendo Fernando Pastor, La Democracia nos dice - que "se dedica al deporte de los folletos religiosos". Luego manifiesta el diario de Luis Muñoz Rivera: "No necesitamos ser educados por ningún Fernando... si hay alguna libertad de religión en este país, entonces déjese que cada uno abrace la religión que mejor le convenga y respétese los derechos de los demás". La Democracia, 5 de diciembre de 1898.
- 92.- Véase por vía de ilustración la actitud del General Henry, - Gobernador Militar, con relación a los abogados norteamericanos que solicitaban admisión a los tribunales de Puerto Rico en febrero de 1899: "it is only an inferior class that is trying to be admitted and I mill not approve of it". Véase su carta de 14 de febrero de 1899, NAUS-BIA, 258.
- 93.- Su autor es Thomas Campbell Copelan, publicado por Franck and Wagnall Co., New York, 1899, 180 p.

- 94.- Autor: Charles Morris, publicado por Lippincott, Phila, 1899, 488 p.
- 95.- Autor: Thomas P. Vivian y Ruel P. Smith, publicado por R. F. Fenno and Co. New York, 1899, 182 p. La Bibliografía Puertorriqueña de Pedreira ofrece varias páginas con fichas de estas guías de la p. 12 a la 20. Antonio S. Pedreira, Bibliografía Puertorriqueña, 1493-1930, Madrid, Imprenta y Casa Editorial Hernando (S.A.), 1932, (Monografía de la Universidad de Puerto Rico)
- 96.- La Correspondencia de Puerto Rico, 14 y 15 de noviembre de 1898. En The Puerto Rico Herald, Mr. George Marvin publicó su serie "Puerto Rico, 1900-1903". En el número de 8 de agosto de 1903 manifiesta: "La población flotante de aventureros y carpetbaggers que invadieron aquí después de la guerra están poco a poco escurriéndose otra vez".
- 97.- Mr. Dexter nació en Owego, N. Y. Estudió en Notre Dame obteniendo su grado de derecho en 1886. Admitido al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Estados en 1900 y por el Tribunal Federal en 8 de octubre de 1900. Figurando tercero en antigüedad en el escalafón, antecediéndole Mr. N.B.K. Pettingill y Mr. J.M. Keedy. Admitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 16 de mayo de 1900. Ocupó la presidencia de la Asociación de Abogados del Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico en varias ocasiones. Este interesante personaje tuvo una larga, activa y accidentada vida profesional; en dos ocasiones fué suspendido en la Corte Federal por los Jueces de los Estados Unidos, una por Mr. Rodey en 1909 y otra por Mr. Jenkins en 1910. Tuvo una intensa y floreciente práctica profesional.
- 98.- Véase Henry K. Carroll, Report on the Island of Porto Rico, - Washington, Government Printing Office, 1899. Obsérvese que Mr. Dexter es parcial a sus compañeros, pues el General Henry, Gobernador Militar de Puerto Rico califica a dichos abogados de la siguiente manera: "It is only an inferior class that is trying to be admitted and I will not approve of it". (Es únicamente una clase inferior la que está tratando de ser admitida y yo no lo apruebo) Téngase en cuenta que las declaraciones de Dexter fueron hechas en audiencias públicas ante el Comisionado Carroll y las del General Henry fueron vertidas en una carta oficial al Departamento de la Guerra. Traducción del autor.
- 99.- Unos meses después, Mr. Keddy será designado Fiscal del Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico, en julio de 1899. Sin embargo, no se le nombrará en 1900 para el mismo cargo cuando el Fiscal Federal sea reorganizado por motivo de la Ley

Orgánica de ese año llamada Foraker. Y esto a pesar de la -
 campaña que Mr. Keedy organizó a su favor, designaron a Mr.
 Noah B. K. Pettingill.

- 100.- Transcribo completa la opinión del Secretario de Justicia Her-
 nández López porque la misma es rigurosamente inédita y por
 su importancia para la historia jurídica puertorriqueña.
 NAUS-BIA, 258-2.
- 101.- Obsérvese que para esta época no se le exigía un examen de -
 reválida a los puertorriqueños.
- 102.- NAUS-BIA, 258.
- 103.- Ibid, segundo endoso.
- 104.- El cargo es equivalente al de Asesor Jurídico Militar.
- 105.- NAUS-BIA, 258, tercer endoso.
- 106.- Ibid.
- 107.- Su autor: O.P. Austin y fue publicado en el National Geographic
Magazine, vol. II, January, 1900. No. 1, p. 32-33. Su título
 en español es: Nuestras nuevas posesiones y el interés que le-
vantan. Traducción libre.
- 108.- Publicado en The Nation, Vol. 70, March, 15, 1900, No. 1811
 p. 195. Su título en español: Los mejores cargos van para nor-
teamericanos incompetentes. Traducción libre.
- 109.- Publicado en The Nation, Vol. 71, August. 5, 1900, No. 1831,
 p. 81-82. Su título español: Malos sentimientos contra los
norteamericanos en Puerto Rico. Traducción libre.
- 110.- NAUS-BIA, 258-1. Traducción del autor.
- 111.- NAUS -BIA, 258-1, primer endoso.
- 112.- El oficial que remite la carta a Washington a nombre del Ge-
 neral Henry es el primer teniente de infantería Frank McIn-
tyre. Pasados los años sería jefe del Bureau of Insular Affairs
 que por tantos años sirvió de "oficina de asuntos coloniales"
 en relación con Puerto Rico. Toda la política norteamericana,
 la grande y la pequeña, dirigida a Puerto Rico fue diseñada
 en este "Bureau". Desde el nombramiento de un gobernador has-
 ta las crisis más agudas. Es revelador que el Bureau of Insu-
 lar Affairs se comunicaba con los oficiales norteamericanos
 que gobernaban a Puerto Rico con telegramas y cartas cifradas
 y en clave. Un estudio sobre esta oficina colonial, especie

de Ministerio de Ultramar es muy importante para nuestra historia.

- 113.- La fecha de esta carta es de 2 de marzo de 1899.
- 114.- Carroll, op. cit. p. 310. Traducción del autor.
- 115.- Durante esta época la inmensa mayoría, si no la totalidad de los que practicaban en la "U. S. Provisisonal Court" eran abogados norteamericanos.
- 116.- Report of the United States Insular Commission to the Secretary of War, op. cit. p. 66. Traducción del autor.
- 117.- Opiniones del Attorney General de Puerto Rico, San Juan, Tipografía
- 118.- El diario El País publica la siguiente el 20 de enero de 1900: "Corte Federal.- ¿Qué pasó en la Corte Federal con un abogado puertorriqueño? Se dice que pretendió ser admitido a postular ante dicha Corte y ésta se reservó contestar más adelante — dando razones". Examiné toda la prensa del momento y no aparece ninguna otra mención de este asunto.
- 119.- La Democracia, miércoles 21 de diciembre de 1898, año VIII, Núm. 209, p. 2. También NAUS-BIA, 1022-1.
- 120.- Don Manuel F. Rossy y Calderón era uno de los líderes del Partido Autonomista Puertorriqueño, luego del Partido Autonomista Ortodoxo, cuando la división de la anterior colectividad. En 1899 disuelto el Partido Ortodoxo es uno de los fundadores del Partido Republicano Puertorriqueño, pro-norteamericano y propugnador de la americanización de Puerto Rico.
- 121.- Gaceta de Puerto Rico, domingo 25 de diciembre de 1899, Núm. 60. p. 1.
- 122.- Ibid., sábado 31 de diciembre de 1898, Núm. 65, p. 1
- 123.- La Democracia, nos informa del asunto en su Editorial "El Escándalo y la protesta": La prensa.... representada en el caso presente por uno de sus voceros ilustrados, El Liberal, protestó elocuentemente contra las atribuciones que venían irrogándose empleados subalternos del poder militar en asuntos exclusivos de las municipalidades..." La Democracia, lunes 16 de enero de 1899. año VIII, Núm. 2117, p. 2. Cf. Orden General Núm. 1 de 18 de octubre de 1898. Ya anteriormente se habían dado situaciones similares. Pedreira en su libro El Periodismo en Puerto Rico manifiesta: "En abril de 1898 se —

trasladó a Puerto Rico, (D. Evaristo Izcoo Díaz) y en septiembre inició una segunda época de La Epoca. Publicó entonces un artículo titulado Bandidos o Soldados contra los desmanes de algunos miembros del ejército norteamericano y el director - fue arrestado y el periodico suspendido por el General Henry" Pedreira, op. cit, p. 239

- 124.- La Democracia, martes 17 de enero de 1899, año VIII, Núm. - 2118, p. 2; Gaceta de Puerto Rico, domingo 14 de enero de - 1899, Núm. 80, p. 2
- 125.- Orden General Núm. 4 de 17 de enero de 1899, Gaceta de Puerto Rico, viernes 20 de enero de 1899, Núm. 17, p. 1
- 126.- Ibid.
- 127.- Ibid, p. 1
- 128.- La Democracia, lunes 6 de febrero de 1899, año VIII, Núm. 2134 p. 2. El País, 7 de febrero de 1899, año V, Núm. 32, p. 2
- 129.- Ibid, 21 de julio de 1899, año V, Núm. 170, p. 2; Ibid, 6 de febrero de 1899, año V, Núm. 31, p. 2. La Democracia, 8 de - febrero de 1899, año VIII, Núm. 2136, p. 2; Ibid, jueves 9 - de diciembre de 1899, año VIII, Núm. 2137, p. 1.
- 130.- La Democracia, jueves 9 de diciembre de 1899, año VIII, Núm. 2137, p. 1. Véase la segunda carta de renuncia del Consejo - de Secretarios y respuesta del Gobernador Militar en Gaceta de Puerto Rico, domingo 12 de febrero de 1899, Núm. 37, p. 1 También en Coll y Toste, op. cit. p. 108.
- 131.- La Democracia, 2, 9, 12 enero de 1899, p. 1.
- 132.- Gaceta de Puerto Rico, miércoles 8 de febrero de 1899, Núm. 33, p. 1.
- 133.- El párrafo IV trata de las vacantes y no interesa a nuestro tema.
- 134.- Gaceta de Puerto Rico, viernes 10 de febrero de 1899, Núm. 35, p. 1.
- 135.- Ibid.
- 136.- Ibid., domingo 12 de febrero de 1899, Núm. 37, p. 1.
- 137.- Cf. "Nuestro antiamericanismo" en The Puerto Rico Herald, -

Vol. 2, 9 de Mayo de 1903, Núm. 93, p. 63; "Puerto Rico para los puertorriqueños" en Ibid, vol. 2, 11 de abril de 1903 Núm. 89, p. 567

- 138.- Véase Annual Report of the War Department for the year ended june 30, 1899, -op. cit. p. 74-77 y 210-212. Traducción del autor.
- 139.- Véase, Magoon, op. cit., p. 19-30. Traducción del autor.
- 140.- Pedreira, op. cit. p. 247
- 141.- La Insular Commission fue enviada a Puerto Rico a principios de marzo de 1899 por el Secretario de la Guerra, Mr. Alger. El propósito de la encomienda era preparar un informe detallado sobre todos los aspectos posibles de la realidad puertorriqueña. Dicho informe fue entregado el 27 de mayo al nuevo Secretario de la Guerra, Mr. Elihu Root, éste que era uno de los más distinguidos juristas norteamericanos rechazó el informe por ser muy deficiente. En la biografía de Root escrita por el profesor Phillip C. Lessup se dice al respecto: "An Insular Commission had been sent to the island to make a report wich was completed in september, 1899. Root thought very little of this report wich, among other things, suggested that the English common law system throughout the island" Véase Phillip C. Lessup, Elihu Root, New York, Dodd, Mead and Co., 1938, 2 vols. Tomo I, p. 375-376. Eran miembros de la Insular Commission el General Robert P. Kennedy, Mayor Charles W. Watkins y el Juez H. G. Curtis.
- 142.- El Territorio, sábado 1 de abril de 1899, año I, Núm. 15, p. 2.
- 143.- The San Juan News, april 6, 1899, p. 2. Traducido por el autor. La parte suprimida corresponde a un refrán vulgar norteamericano intraducible.
- 144.- El Territorio, sábado 8 de abril de 1899, año I, Núm. 21. p. 2.
- 145.- Ibid. martes 18 de abril de 1899, año I, Nú. 29, p. 2
- 146.- Ibid. sábado 15 de abril de 1899, año I, Núm. 27, p. 1
- 147.- Véase, Report of the Insular Commission to the Secretary of War upon investigation made into the civil affairs of the island of Porto Rico with recommendations, Washington, Government Printing Office, 1899, p. 61.

- 148.- Ibid. p. 61. La recomendación de los comisionados lee de la siguiente forma: "We will hereafter submit as a part of this report a full code of laws, and recommend : their promulgation by the authority of the Commander in chief as the laws of Porto Rico while under military control, hoping that they will prove so efficient and the government be so sucessfull that they may be retained largely after the island shall be ready for territorial government; trusting that the operation of these laws may grove so beneficial as to meet the approval of the people there and those contemplating investing capital and seeking homes in the island".
- 149.- NAUS-BIA, 613-7, existe copia en español
- 150.- Obsérvese como el Secretario de Justicia puertorriqueño presenta de forma original el peligro que representa para Puerto Rico la americanización o transculturación.
- 151.- Carta de Brooke al General Corbin, 30 de noviembre de 1898; Manus crito, Historical Society of Pennsylvania.
- 152.- Carta de Phillip C. Hanna a J.B. Moore, 13 de diciembre de - 1899, NAUS-BIA, 50-2
- 153.- Leo S. Rowe, The United States and Porto Rico, Longmans, Green and Co, 1904, p. 15
- 154.- La parte del Informe de la Insular Commission relacionada con la judicatura y la recomendación de que se establezca en Puerto Rico, tribunales federales y su jurisdicción especial fue basada en un informe preparado a petición de los comisionados por el Mayor Alfred C. Sharpe.
- 155.- Véase Annual Report of the War Department for the fiscal year ended june 30, 1900, op. cit. p. 62-63. Resentian los puertorriqueños la presencia de comisionados norteamericanos en la Comisión para reformar los Códigos de 1900, así lo consigna Davis.
- 156.- La versión original del Informe sobre la legislación civil y criminal de Puerto Rico y sobre las reformas que deben hacerse en la misma, fue publicado como un suplemento en página - fuera de serie de tamaño periódico grande por El Territorio. Sin embargo, al encuadernarse la colección de este raro periódico se incluyó en la última página, destruyéndose. El mismo se daba por perdido, sin embargo, se encuentra la copia - original que se le envió al Gobernador Henry en los archivos de la extinguida Division of Insular Affairs, hoy en los National Archives de Washington. Una traducción en inglés fíel y exacta de dicho Informe se encuentra en dichos archivos. El

Lcdo. Díaz Navarro la ofreció como su testimonio ante el Dr. Carroll. Sin embargo, aparece allí reducida y sin la introducción y faltando parte de las recomendaciones. Es necesario consignar que en el "Official Report" del General Henry, que preparó en el Grand Hotel de Nueva York, no manifiesta - que solicitó al Lcdo. Díaz Navarro su Informe sobre la legislación. Debe tenerse en cuenta que el General Henry estaba enfermo de muerte y no tenía consigo el archivo de gobernanación militar.

- 157.- El Territorio, lunes 17 de abril de 1899, año I, Núm. 28 p. 2.
- 158.- El Lcdo. Alfredo Arnaldo Sevilla era Juez de Primera Instancia e Instrucción de Arecibo según el escalafón publicado en la Gaceta de Puerto Rico de 8 de enero de 1899, Núm. 7, p. 1. Es ascendido pues en abril de ese año ocupa la plaza de Juez de Primera Instancia de San Juan. En el escalafón publicado con motivo de la nueva organización de la judicatura en agosto no aparece su nombre. El Territorio de jueves 18 de mayo afirma que el Lcdo. Arnaldo Sevilla ha obtenido la calificación de sobresaliente en las recientes oposiciones a notarías.
- 159.- Manuscrito en NAUS-BIA, 613-2. Este interesante e inédito documento no fue publicado por la Suprema Corte de Justicia de Puerto Rico.
- 160.- El Territorio, viernes 21 de abril de 1899. año I, Núm. 32. p. 3
- 161.- Véase Report of the Insular Commission, op. cit, p. 58-59-61-62-64-65. Esta recomendación repetida por Carroll y otros es puesta en práctica y durante muchísimos años no se designa - un puertorriqueño para el cargo de Secretario de Justicia.
- 162.- Ibid. p. 65-66
- 163.- NAUS-BIA, 613-3; El Diario de Puerto Rico, miércoles 30 de mayo de 1900, año I, Núm. 124, p. 1.
- 164.- La copia original está firmada por D. Herminio Díaz Navarro Secretario de Justicia; Corte Suprema de Justicia, D. José - Severo Quiñones, Presidente, D. José Conrado Hernández, D. - José María Figueras, Rafael Nieto, Eduardo Acuña, Angel Acosta, Magistrados; D. Carlos Franco, Secretario; D. Enrique - González, Secretario, D. Rafael Romea Aguayo, Fiscal; D. Eugenio López, Ayudante Fiscal. Corte de Justicia de Mayagüez. D. José de Diego, Presidente, D. Ramón Quiñones, D. Luis Becerra; D. Isidoro Soto Nussa, Fiscal; D. Emilio del Toro, - Ayudante Fiscal y D. José Rosado, Secretario. Corte de Justi-

cia de Ponce. D. Ramón Becerra, D. Rafael Sanchez y D. Juan Vías, Magistrados; D. Julio Padilla, Fiscal; D. Félix Casaldua, Ayudante Fiscal y D. José R. Aponte, Secretario. Jueces de Primera Instancia e Instrucción, D. Alfredo Arnaldo Sevilla y D. Jesús M. Rossy, de San Juan; D. Miguel Porrata y D. José Tous Soto, de Ponce; D. Eugenio Lloreda, de Mayagüez; D. Ricardo Lacosta, de Arecibo; D. Salvador Fulladera, de Humacao; D. Tomás Bernaderi de Vega Baja; D. Salvador Piconell, de Hutuado; D. José M. Cuadra de Aguadilla; D. Horacio Nieto, de San Germán; D. Manuel Giraldez, de Guayama y D. Juan M. Kearney, de Caguas. Diez y ocho Notarios; treinta y un Procuradores; ocho Registradores de la Propiedad; veinte y cuatro Abogados. Solamente 5 abogados no firmaron la referida Exposición.

- 165.- NAUS-BIA, 613-5
- 166.- NAUS-BIA, 613-5. Téngase en cuenta que el Dr. Coll y Toste es hombre de confianza de los Gobernadores Militares.
- 167.- NAUS-BIA, 661-8. El Sr. Todd fue el Traductor oficial de la Insular Commission durante su estancia en Puerto Rico. Este personaje ejercerá una funesta influencia en los asuntos puertorriqueños durante casi 30 años.
- 168.- Lyman J. Gould, La Ley Foraker, raíces de la política colonial de los Estados Unidos, San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1969, p. 56. Allí manifiesta dicho autor: "La Comisión Insular hizo un informe preliminar y luego un informe final (que nunca se imprimió) con recomendaciones, incluyendo un código legal para la isla. Estas evidentemente permanecieron "enterradas" en el Departamento de Guerra".
- 169.- Todavía en junio de 1899 y en vísperas de publicación del Informe de la Insular Commission un miembro de ésta Mr. Charles W. Watkins escribe al Secretario de la Guerra Mr. Algiers - quien ya iba a ser relevado del cargo- una carta personal - haciéndole algunas nuevas sugerencias con respecto a Puerto Rico. Insiste en que se le debe de otorgar a la isla una serie de códigos preparados por la referida comisión e inspirados en el "american common law". Sobre los tribunales manifiesta: "Sus tribunales son antiguos, atrasados, tediosos e insatisfactorios". NAUS-BIA, 661-6.
- 170.- La ficha bibliográfica es la siguiente: "Report of the United States Insular Commission to the Secretary of War upon Investigations made into the Civil affairs of the Island of Porto Rico with recommendations, Division of Customs and Insular Affairs, June 9, 1899, Washington, Government Printing Office 1899.

- 171.- Monseñor James H. Blenk fue designado Obispo de Puerto Rico el 30 de abril de 1899, siendo consagrado el 2 de julio. La Santa Sede le ordenó que no viajara a su Diócesis hasta que todos los asuntos fueran resueltos.
- 172.- Carta del Arzobispo Chapelle y el Obispo Blenk al Secretario de la Guerra Root. Carece de fecha, pero fue recibida en el Departamento de la Guerra el 8 de septiembre de 1899. NAUS-BIA, 295-19
- 173.- Hearings, House Committee on Insular Affairs, January, 17, - 1900, p. 107-9; 145-50; 57-163. NAUS-BIA, 295-19
- 174.- Bolivar Pagán, Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños, 1898-1956, San Juan, Librería Campos, 1959, p. 37
- 175.- El Territorio, martes 2 de mayo de 1899, año I, Núm. 41. p. 1
- 176.- Véase Ibid, martes 9 de mayo de 1899, año I, Núm. 47, p. 1. El citado Informe del General Grant, que en ese momento era confidencial, se titula "Report of General Grant on conditions existing in Porto Rico". El mismo fue preparado el 19 de marzo de 1899 y tiene escasamente seis páginas. En la página cinco se refiere a la judicatura y al Derecho puertorriqueño: "a) Reorganizar la judicatura y designar personas, quienes por su expediente pasado sean conocidos como honorables y sin miedo, y que su nombramiento asegure al pueblo que harán justicia - sin miedo y sin favor" "c) Otorgar a la isla un código penal y deje de lado el presente procedimiento que es embarazoso y engorroso y que permite al culpable escapar y a muchos inocentes sufrir largos períodos de prisión" NAUS-BIA, 295-2
- 177.- Annual Report of the War Department for the fiscal year ended June 30, 1899, op. cit. p. 59. Traducción del autor
- 178.- Rowe, op. cit. p. 14. Traducción del autor.
- 179.- Contrareferencia, El Territorio, martes 23 de mayo de 1899, año I, Núm. 59, p. 1. Obsérvese lo deficiente de la expresión
- 180.- Ibid.
- 181.- Véase Annual Reports of the War Department for the fiscal year ended June 1899, op. cit., p. 212. NAUS-BIA, 455.
- 182.- Véase General Orders and Circulars, 1898-1900, Military Department of Puerto Rico, compilación de las Ordenes Generales s.p.

- 183.- Santos P. Amadeo. El Habeas Corpus en Puerto Rico, Revista - del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. IX, julio-septiembre, 1948, núm. 3, p. 311.
- 184.- El Porvenir Social, 31 de mayo de 1899. Epoca II, p. 1. El - autor es dirigente obrero de origen gallego. Obsérvese la ala banza al futuro tribunal de los Estados Unidos llamado Fede- ral. Este es uno de los ejemplos más claros de por qué a tra vés de los años el referido foro norteamericano fue poco a - poco ganando en "prestigio" a costa de los tribunales puertorriqueños. Por supuesto que su condición de ser una agencia del poder colonial de los Estados Unidos le permitió en parte ga- nar ese respeto, también hay que tener en cuenta para entender el mito que siempre todo el procedimiento en el Tribunal Fede- ral se ha conducido en idioma inglés que es el del poder do- minador. Asimismo, que hasta 1952 todos sus jueces fueron nor- teamericanos. Sus constantes intervenciones en los asuntos de los tribunales puertorriqueños, incluso el Tribunal Supremo de Puerto Rico abona a lo antes dicho.
- 185.- Véase el diario republicano El País de 19 de julio de 1899, - año V, Núm. 168, p. 2
- 186.- El Diario de Puerto Rico, jueves 12 de abril de 1900, año I, Núm. 84, p. 1.
- 187.- Véase Annual Report of the War Department for the year ended june 30, 1900, op. cit. p. 265-266. No se publican las firmas de los memorialistas, he buscado los originales en Wáshington y no se encuentran.
- 188.- El Territorio, viernes 30 de junio de 1899, año I, Núm. 93 p. 2; El País, 30 de junio de 1899, p. 1.
- 189.- El Territorio, viernes 30 de junio de 1899, año I, Núm. 93 p. 2
- 190.- Gaceta de Puerto Rico, sábado 1 de julio de 1899, Núm. 155, p. 1
- 191.- Ibid.
- 192.- Este proyecto original fue preparado por el Mayor A. C. Sharpe y está escrito a maquina. NAUS-BIA, 828-1
- 193.- Véase Rodrigo Díaz, Tratado de París... Interpretaciones Mili- tares, Diario de Puerto Rico, lunes 16 de abril de 1900, año I, Núm. 86, p. 1.
- 194.- Opiniones del Attorney General de Puerto Rico, San Juan, Tip. El País, 1903, p. 178

- 195.- El referido artículo XI del Tratado de Paz dispone lo siguiente: "Los españoles residentes en los territorios cuya soberanía cede o renuncia España por este Tratado, estarán sometidos en lo civil y en lo criminal a los tribunales del país en que residan, con arreglo a las leyes comunes que regulen su competencia, pudiendo comparecer ante aquellos en la misma forma y empleando los mismos procedimientos que deben observar los ciudadanos del país a que pertenezca el Tribunal".
- 196.- Según Rodrigo Díaz esta fue la única concesión que hizo el Gobierno Militar a los puertorriqueños que encabezados por el Secretario de Justicia protestaron de la instalación del Tribunal Provisional de Estados Unidos. Véase Diario de Puerto Rico, jueves 12 de abril de 1899. año I, Núm. 84, p. 1.
- 197.- Mr. Noah Brook Kent Pettingill, mejor conocido como Mr. N.B.K Pettingill nació en Augusta, Maine en 1862. Se recibió de abogado en la Universidad de Boston en 1880, estableciéndose en Tampa, Florida. Vino a Puerto Rico al finalizar la guerra de 1898. Tenía entonces 36 años de edad. Además de Juez federal -papel que desempeñó con mediocridad- fué designado Fiscal federal en 1900, de acuerdo a la reorganización del Tribunal por la Ley Foraker. Actuaba de Fiscal en casos criminales y de abogado en la práctica privada en los casos civiles, en el mismo Tribunal de los Estados Unidos. Tiene el número uno en el escalafón mencionado foro, personaje detestado por muchos puertorriqueños, según consta en la prensa de la época, por su parcialidad, arrogancia e imprudencia. Creía en una política americanizante. Llegó a ser el abogado de más práctica profesional en el Tribunal Federal. Luego se ausentó de la isla.
- 198.- Mr. Keedy llega a la isla en 1899. Se desempeña como Fiscal del Tribunal Federal Provisional y al cesar éste por la Ley Foraker hace intensa campaña política para que se le designe Fiscal del nuevo United States District Court for Porto Rico. Sin embargo, el Presidente designa al protector y amigo de Mr. Keedy, Pettingill para ese cargo. Al año siguiente Mr. Keedy será el sustituto de Mr. Joseph F. Daly en la segunda Comisión Codificadora. Continúa en San Juan unos años después practicando la abogacía.
199. El Comandante Eugene D. Dimmick era el presidente de una de las Comisiones Militares que funcionaban en la isla.
- 200.- Mr. Bothwell fue también Secretario de la Junta de Cárceles, en 1900 fué designado Alguacil del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En 1909 fue admitido a la abogacía por el Tribunal Fede

ral y luego por el Tribunal de los Estados Unidos.

- 201.- La Democracia, 2 de julio de 1899, p. 2
- 202.- El Territorio, martes 4 de julio de 1899, año I, Núm. 96 - p. 1.
- 203.- Diario de Puerto Rico, jueves 12 de abril de 1900, año I, - Núm. 84, p. 1.
- 204.- El Territorio, lunes 14 de agosto de 1899, año I, Núm. 130, p. 3.
- 205.- Ibid. lunes 3 de julio de 1899. año I, Núm. 95, p. 1.
- 206.- Ibid., martes 4 de julio de 1809, año I, Núm. 96, p. 2
- 207.- Véase editorial titulado: "Doble Juego", El País, miércoles 19 de julio de 1899, año V, Núm. 168, p. 2
- 208.- El Territorio, sábado 22 de julio de 1899, año I, Núm. 112, p. 1.
- 209.- Diario de Puerto Rico, martes 10 de abril de 1900, año I, Núm. 82, p. 1.
- 210.- El Territorio, miércoles 12 de julio de 1899. año I, Núm. 103, p. 2.
- 211.- Estas mismas palabras fueron repetidas por el Mayor C. C. Sharpe durante los actos de inauguración de la United States Provisional Court for the Department of Porto Rico, el 1 de julio y fueron publicadas por la prensa del país.
- 212.- Véase Annual Report of the War Department for the fiscal year ended june 1900, op. cit. p. 212.
- 213.- Ibid., p. 76
- 214.- El Territorio, miércoles 12 de julio de 1899, año I, Núm. 103 p. 2. El título del editorial es "La Corte Federal - Sentencias Pronunciadas".
- 215.- La Democracia, sábado 15 de julio de 1899, p. 2. También re producido en El Territorio, lunes 17 de julio de 1899, año I, Núm. 107, p. 2.
- 216.- El Brujo, viernes 14 de julio de 1899, p. 2.
- 217.- El Imparcial, lunes 24 de julio de 1899. p. 3.

- 218.- El Combate, sábado 5 de agosto de 1899, año I, Núm. 65, p. 2.
- 219.- La Democracia, jueves 12 de octubre de 1899, año X, Núm. 2342, p. 1. Sobre el encarcelamiento de D. Evaristo Izcoa Díaz véase Pedreira, El Periodismo en Puerto Rico, op. cit. p. 240-241
- 220.- La Democracia, sábado 16 de diciembre de 1899, año X, Núm. - 2388, p. 2.
- 221.- El País, sábado 20 de enero de 1900, año VI, Núm. 17, p. 2.
- 222.- La Democracia, 3 de febrero de 1900, año X, Núm. 2430, p. 2
- 223.- Diario de Puerto Rico, martes 6 de febrero de 1900, año I. Núm. 28, p. 2.
- 224.- La Democracia, lunes 12 de marzo de 1900, año X, Núm. 2461, p. 1.
- 225.- Ibid, jueves 5 de abril de 1899, año X, Núm. 2482, p. 2
- 226.- Véase Lyman J. Gould, La Ley Foraker, op. cit. p. 57-8.
- 227.- Véase Annual Report of the War Department for the year ended June 30, 1899, Part I, p. 24-28. Traducción del autor.
- 228.- John J. Hood, The History and development of the Louisiana Civil Code, en Tulane Law Review, Vol XXXIII, December, 1958 No. I, p. 7. Este número está dedicado a celebrar el Sesquicentenario del Código Civil de Louisiana, 1808-1958.
- 229.- Bibiano Torres Ramírez, Alejandro O'Reilly en las Indias, - Escuela de Estudios Hispano-americanos, Sevilla, 1969
- 230.- Véase Lloyd Mc Kim Garrison, The Penal Code of Cuba and Porto Rico, en Harward Law Review, Vol. XIII, 1900, p. 124. - Acts of the Legislative Council, Orleans Territory, First - Session, Chapter I, Section 33.
- 231.- Legislative Council of Florida Territory, First Session, Act of september, 2d. 1822, Florida, 1822.
- 232.- José Castán Tobeñas, Los Sistemas Jurídicos contemporáneos del mundo occidental, (conclusión), Revista General de Legislación y Jurisprudencia, año CIV, octubre de 1956, Núm. 4. p. 305

- 233.- Para el interesante caso de California que no siguió el patrón usual de sustituir el Derecho Civil o preservarlo, véase, Report on Civil and Common Law de 27 de febrero de 1850, publicado por el Comité del Senado de California donde se decide que el ordenamiento jurídico de ese Estado será el Common Law y no el Derecho Civil, como solicitaba una comisión de abogados. Véase, Report of Cases, Supreme Court of the State of California, San Francisco, Bancroft-Whitney Co. 1886, vol. I, p. 588
- 234.- T.B. Smith. The preservation of civilian tradition in mixed jurisdiction. Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, vol. 35. 1966, Núm. 2, p. 263
- 235.- La opinión del Gobernador Militar asesorado por el Mayor Sharpe sobre la independencia de los tribunales es la siguiente: "La judicatura en los Estados Unidos y en varios Estados de la Unión es absolutamente independiente de todo control o interferencia ejecutiva. Los jueces están sujetos solamente a ser residenciados por faltas graves en el cumplimiento del deber. Es muy importante que se hagan algunas modificaciones al sistema judicial existente, o se establezca un nuevo sistema, que lleve la judicatura al plano independiente y alto que ocupa en los Estados Unidos". Obsérvese que el único punto de referencia es los Estados Unidos. Report of Brigadier George W. Davis on Civil Affairs in Porto Rico, 1899. Government Printing Office, 1900, p. 213. Hay dos ediciones del mismo libro.
- 236.- El Ldc. Manuel F. Rossy era Presidente del Partido Republicano Puertorriqueño y uno de los portaestandarte de la política asimilista a los Estados Unidos. Durante su larga vida mantuvo inoclume su ideario americanizante. Se caracterizaba por su desprecio a la raíz hispana y costumbres puertorriqueñas.
- 237.- El Ldc. Juan Hernández López es el inconstante típico en el campo político. Durante la época de intervención española - siempre fue miembro destacado del Partido Autonomista puertorriqueño. Llegó a ser Secretario (Ministro) de Obras Públicas y Comunicaciones en el primer Consejo de Secretarios de 1898, luego detentó la cartera de Justicia. Es confirmado en la misma por el General Brook y el General Henry y cesa - en febrero de 1899. Cambia de Partido el 30 de octubre de 1898 e ingresa en el Republicano Puertorriqueño, ayudando en su fundación, suscribiendo junto a D. Manuel F. Rossy un manifiesto para que Puerto Rico se convirtiera en Territorio de los Estados Unidos. Luego cambia de partido político otra vez y en julio de 1899 le encontramos de Presidente del Partido Liberal, movimiento cuyo caudillo supremo era D. Luis

Muñoz Rivera. No figura entre los liberales que fundan el - nuevo Partido Federal, en octubre de este año. En las elecciones generales de 1902 es electo Delegado a la Cámara por el Partido Republicano y desde 1904 a 1907 es Presidente de esta organización política. Es importante la filiación política de Juan Hernández López por cuanto es el único puertorriqueño designado miembro de la Comisión de Códigos por el Presidente Theodoro Roosevelt en 1900. Para su filiación política véase: Bolívar Pagán, Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños, op. cit., Tomo I, p. 34-85; Nestor Rigual, Miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 1900-1965, San Juan, Cámara de Representantes, 1965 (Tercera edición).

- 238.- Traducción libre del autor. En su versión original en idioma inglés lee como sigue: "This board was one of the most important and helpful agencies in the hands of the department commander". He traducido "important and helpful agencies in the hands of the department commander" por "más importante y que más ayuda prestó a los planes del Comandante del Departamento" en aras del estilo literario, en esta situación una traducción directa no creo que sea de buen gusto.
- 239.- El Territorio publica el 18 de julio una nota sobre Mr. Sharpe. "El Mayor Sharpe. En carta que recibimos de los Estados Unidos se nos dice que será relevado muy pronto, quizás por telégrafo, del puesto que ocupa en el Gobierno de esta isla el Mayor Sharpe. Siento se confirma en verdad que no lo sentiremos. El Mayor Sharpe, a imitación de los Smith y los -- Dexter, en vez de mantenerse en una serena imparcialidad en nuestros asuntos políticos, hace tiempo viene inclinándose a la política de los puros. Hombres que ocupan la posición oficial de Mr. Sharpe, no deben de abanderizarse a uno ni a otro partido. Deben de permanecer serenos e imparciales". Véase El Territorio, martes 18 de julio de 1899, año I, Núm. 108, p. 2
- 240.- Véase Gaceta de Puerto Rico, domingo 23 de julio de 1899, -- Núm. 173, p. 1.
- 241.- El comentario del Gobernador Davis en su informe oficial de 1900 sobre este cambio en el sistema judicial puertorriqueño es el siguiente: "Este nuevo sistema, a pesar de que no era todo lo que se deseaba, y no del todo aceptable para los miembros norteamericanos de la Junta, fue el resultado de muchos compromisos y enmiendas, y fue finalmente adoptado como el - mejor que pudo lograrse en esa etapa de progreso en el trabajo de reforma". Véase Annual Report of the War Department for the fiscal year ended june 1900, op. cit. p. 83
- 242.- Gaceta de Puerto Rico, sábado 5 de agosto de 1899, Núm. 184, p. 1.

- 243.- Véase el artículo 12 de la Orden General Núm. 118 donde se manifiesta que: "Los negocios criminales que no fueren los pendientes de casación serán remitidos por la actual Corte Suprema al Tribunal de Distrito de San Juan".
- 244.- Gaceta de Puerto Rico, número extraordinario dedicado a esta Orden, 17 de agosto de 1899, también se publicó un folleto.
- 245.- Obsérvese que el General Davis confunde la "corte de siete - miembros" con la Audiencia Territorial de Puerto Rico. La - evolución de la Audiencia Territorial a "Corte Suprema" fué obra del Gobernador Brook.
- 246.- Annual Report of the War Department for the fiscal year ended june 1900, op. cit. p. 26.
- 247.- El Territorio, lunes 31 de julio de 1899, año I, Núm. 119, - p. 3. El fin de año a que se refiere es el año económico.
- 248.- El País, lunes 4 de septiembre de 1899, año V, Núm. 207, p. 1.
- 249.- NAUS-BIA, 1137-5
- 250.- El Fiscal en propiedad es Mr. John M. Keedy. Mr. Adlin será luego Procurador General de Puerto Rico, interino, el último bajo el Gobierno Militar. Años después, en 1921. Mr. Adlin se rá designado Juez Federal en Puerto Rico. Como tal, actuó - muy mediocre y se caracterizó por sus ridículas y pomposas polémicas en la prensa.
- 251.- Componían el pleno del referido Tribunal de Distrito de San Juan los Jueces, D. Juan Ramón Ramos, Presidente; D. Angel Acosta Quintero y D. Felipe Cuchi Arnau; D. Eduardo Acuña - Aybar, era el Fiscal. Téngase en cuenta que el Juez Ramos es miembro del Partido Republicano Puertorriqueño. Acosta Quintero era Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico, pero en la reorganización de 7 de agosto, al reducirse el número de los jueces, quedó fuera de la plantilla.
- 252.- NAUS-BIA, 1137-6
- 253.- El Mayor Sharpe ha sacado una conclusión o interpretación que no se contiene en ese párrafo. El mismo (IX) lee como sigue: "Los casos previstos en el Artículo XI del Tratado de Paz en tre los Estados Unidos y España, se resolverán de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo". De donde saca su interpretación Mr. Sharpe, no lo sabemos.
- 254.- NAUS-BIA, 1137-7. Obsérvese que Mr. Sharpe no ha prestado atención a la súplica de Mr. Pettingill al final de su alegato

- 255.- NAUS-BIA, 1137-8
- 256.- NAUS-BIA, 1137-3. Odlin manifiesta al General Davis lo siguiente: "you will understand that without a particle of - disrespect toward yourself (for on the contrary no person in Puerto Rico is more convinced than of your scrupulous - desire to do full justice to every human being in your Department)". Luego como abogado privado irá contra los intereses del General que ahora alaba. Véase la carta de Mr. - Greene, 14 de febrero de 1900, más adelante citada, NAUS-BIA 1137-22.
- 257.- NAUS-BIA, 1137-18
- 258.- NAUS-BIA, 1137-1. La carta de trámite del Secretario de Estado al Secretario de la Guerra está en NAUS-BIA, 1137.
- 259.- NAUS-BIA, 1137-2
- 260.- NAUS-BIA, 1137-15
- 261.- NAUS-BIA, 1137-16
- 262.- La Democracia, 28 de septiembre de 1899, año X, Núm. 2329, p. 2
- 263.- NAUS-BIA, 1137-17. La carta está escrita en Washington.
- 264.- Obsérvese la opinión desfavorable y racial que tiene el autor de esta carta sobre los tribunales puertorriqueños. Asimismo es necesario tener en cuenta que Mr. Odlin, quien ofrece la información a Mr. Greene, para quien trabaja, fue unos meses antes Fiscal Federal interino, sustituyendo a Mr. Keedy el Fiscal en propiedad. Entonces dirigió una carta al Gobernador Militar Davis donde vertió un obsequioso alago para éste. También debe tenerse en cuenta la relación estrecha, anímica y profesional que tiene el Secretario de la Guerra Mr. Roat con las grandes firmas de abogados o bufetes, pues él provenía de una de ellas antes de ser designado ministro.
- 265.- NAUS-BIA, 1137-17
- 266.- NAUS-BIA, 1137-22
- 267.- La oración que designa al nuevo tribunal lee como sigue: "a United States Provisional Court is hereby established for the Department of Porto Rico".
- 268.- La serie fue publicada en el Diario de Puerto Rico en abril de 1900, como antes consignamos.

- 269.- El comentario de Rodrigo Díaz sobre esto es el siguiente:
 "Asimismo lo expresa, envuelto siempre en sombras, 'Los súbditos españoles quedan por lo tanto sometidos a su jurisdicción (la de la Corte Provisional) en aquellos asuntos - que por su naturaleza caen dentro de la jurisdicción de dicha Corte'. Nada más: y entre aquellos no están los de los españoles, por razón única de su ciudadanía.
- 270.- Véase la serie "Tratado de París... interpretaciones.... militares", en Diario de Puerto Rico, jueves 12 de abril de 1900, año I, Núm. 85, p. 1; Ibid., lunes 16 de abril de 1900, año I, Núm. 86, p. 1.; Ibid., viernes 20 de abril de 1900, - año I, Núm. 90, p. 1.
- 271.- Véase Gaceta de Puerto Rico, 14 de febrero de 1891, Núm. 20 p. 14 ss. termina en Ibid., 28 de febrero de 1891, Núm. 26, p. 1 y ss. Los capítulos I y II del Título XVII reglamentan la profesión de Procurador en Ultramar. Delgado Cintrón, Libro de Matrícula, op. cit., p. 21.
- 272.- Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la Administración Española y Ultramarina, Madrid, 1887 (cuarta edición), Anuario de 1893, p. 27. Esta Real Orden fué comunicada el 18 de febrero siguiente.
- 273.- Véase Certificación impresa en hoja suelta fechada en 20 de julio de 1893 y firmada por D. Evaristo Vélez. Archivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Delegaron y apoderaron - la representación en el Decano Rossy los Procuradores, D. - Lino Rivera de Coamo; D. Rodolfo del Valle, D. Augusto Pasarell y D. Eugenio Teigel, de Ponce; D. Antonio Suliveres, de Cayey; D. Ramón Martínez, de Arecibo y D. Miguel Juan, de San Germán. Delegaron la representación en D. José Palacios, los Procuradores, D. Adolfo Balseiro y D. Cándido Ruffen, - de Arecibo; D. Guillermo Alvarez y D. Enrique Montes de Oca, de Guayama. Delegó la representación en D. José Boneta, el - Procurador, D. Lucas Borges de Humacao. Asimismo, delegó su representación en D. Evaristo Vélez el Procurador D. Ernesto Echevarría, de Aguadilla.
- 274.- El artículo 61 trata de la forma de hacer efectivo el producto de las aceptaciones de los poderes. Véase Exposición, Estatutos para el Régimen del Colegio de Procuradores de Puerto Rico, Puerto Rico, Tipografía de Arturo Córdova, 1894, p. 4
- 275.- Véase la Orden General Núm. 134 de 31 de agosto de 1899
- 276.- NAUS-BIA.
- 277.- NAUS-BIA.

- 278.- NAUS-BIA.
- 279.- NAUS-BIA.
- 280.- NAUS-BIA.
- 281.- NAUS-BIA.
- 282.- Carroll, op. cit. p. 63-65
- 283.- El proyecto de Mr. Foraker llevó el número Senate Bill No. S. 2264. La versión original no contiene disposición alguna sobre el Tribunal Federal. En enero de 1900, se presentó en el Congreso una Resolución extendiendo el Gobierno Militar de Estados Unidos en Puerto Rico por un término extra de cinco años porque "el pueblo no estaba preparado para gobernarse a sí mismo". Véase Bailey W. Diffie - Justine Whitfield, Porto Rico: A Broken Pledge, New York, 1931, p. 35.
- 284.- El Proyecto de Mr. Payne llevó el Número House Bill No. H. - 6883.
- 285.- Gould, La Ley Foraker, op. cit., está minuciosamente expuesto la destacada participación de estos grupos corporacionistas - norteamericanos en la aprobación de la ley orgánica para Puerto Rico.
- 286.- La Convención Demócrata Nacional se reunió en Kansas City el 4 de julio de 1900. Congressional Record, 63 Rd. Congress, - Second Session, Vol. 51, p. 6719, april 15, 1914
- 287.- San Juan, Tipografía La República Española, 1908, p. 35
- 288.- Véase Fraga, op. cit. p. 286; Documents on the Constitutional History of Puerto Rico, Washington, Office of the Commonwealth of Puerto Rico, 1964 (Second Edition). p. 64.
- 289.- The Puerto Rico Herald, 13 de junio de 1901, Año I, p. 1. - También reproducido en Bolívar Pagán, op. cit. p. 81
- 290.- Creo conveniente exponer todos los nombres oficiales que dicho tribunal ha tenido durante los setenta y cinco años que ha permanecido en Puerto Rico. Primero ofreceré su designación oficial en idioma inglés y luego la traducción que se ha hecho de la misma en las versiones oficiosas de esas leyes en idioma español. También incluiré la fecha que duró dicho nombre.
1. "United States Provisisonal Court", 1899. Corte Provisio-
nal de los Estados Unidos para el Departamento de Puerto Rico.
(Orden General Núm. 88 de 27 de junio de 1899)

2. "District Court of the United States for Puerto Rico" 1900
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. (U.S. Organic Act of Porto Rico, Foraker)
 3. "District Court of the United States for Puerto Rico".-
1917. Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico (U.S. Organic Act for Porto Rico, Jones)
 4. "United States District Court for the District of Puerto Rico" - 1948. Se ha traducido por Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. U. S. Act of June 25, 1948
- 291.- Pedro Muñoz Amato, Major Trends in the Constitutional History of Puerto Rico, 1493-1917, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. XII, julio-septiembre, 1949, Núm. 3, p. 242 especialmente las páginas 274, 277, 278.
- 292.- David M. Helfeld, El Preludio histórico a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Volumen XXI, enero-febrero, 1952, Núm. 3, p. 187-188. Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
- 293.- Ibid., 188
- 294.- López Díaz, op. cit. p. 42
- 295.- Robert J. Hunter, Historical Survey of the Puerto Rico Status Question, 1898-1965, en Status of Puerto Rico, Selected Background Studies prepared for the United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Washington, Government Printing Office, 1966, p. 63. Asimismo manifiesta el Lcdo. Muñoz Amato: "Todos los partidos locales se opusieron vigorosamente a la clase de Gobierno establecido por la Ley Foraker". Muñoz Amato, op. cit. p. 278.
- 296.- NAUS-BIA. Dichas recomendaciones habían sido solicitadas por el Secretario Root en cablegrama cifrado de 14 de abril de 1900. Le pide su opinión sobre si es conveniente designar a los actuales Jueces del Tribunal Supremo y Tribunal Provisional. NAUS-Bia, 168-32
- 297.- Mr. Charles Maximilian Boerman, natural de Nueva York cursó su carrera de abogado en la Universidad de esa ciudad recibiendo en 1891. Admitido a la matrícula del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico el 18 de diciembre de 1899. Desde la fundación del Tribunal Federal practica activamente, representando intereses norteamericanos de Ponce principalmente.
- 298.- NAUS-BIA, 455-27. Traducción del autor

- 299.- Obsérvese que la designación de ese tribunal es incorrecta.
- 300.- 31 Statutes, 953 (1901)
- 301.- La Democracia, viernes 5 de febrero de 1909, Año XIX, Núm. 1, p. 1.
- 302.- El Tiempo, miércoles 16 de febrero de 1910, Año IV, Núm. 45, p. 1. "Acuerdos del Comité Territorial"
- 303.- Ibid., noticia "Junta Central del Partido Unión".
- 304.- El Lodo. Alfonso García Martínez se ha dedicado desde hace - muchos años a examinar las relaciones y el impacto de la condición o status constitucional de Puerto Rico sobre el idioma español en la isla. Véase entre otros: "Idioma y Derecho en - Puerto Rico, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. XX, mayo 1960, Núm. 3, p. 183; del mismo autor The role played by the Spanish and English Languages in the legal and political relationship of Puerto Rico and the United States, Tulane Law School, 1972, (Estudio en copia mecanografiada, -- edición privada), del mismo autor El Idioma y la Profesión legal, conferencia pronunciada en el Ateneo Puertorriqueño, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. 34, agosto 1973, Núm. 3, p. 473. Actualmente el Lodo. García Martínez, ex Magistrado y Catedrático de Derecho prepara un nuevo estudio sobre estos temas, que todos esperamos con interés.

Capítulo III.-

- 1.- Para las críticas sobre los nombramientos interinos véase La - Democracia de sábado 3 de mayo de 1900, artículo titulado: "El primer paso ... y la primera torpeza". También se designó una Junta Judicial Consultiva por la Orden General 102, la misma -- estaba compuesta por los Lodos. Nieto Abeillé, Hernández López, Rossy y Díaz Navarro. Dicha Junta no ejerció función alguna, -- su propósito fue dar prestigio a ese gobierno fantasma. Cf. - Rowe, op. cit., p. 134.
- 2.- El Discurso del General Davis está reproducido en la Circular Número 21 de 2 de mayo de 1900. Palabras huecas estas de la -- permanencia de las Leyes.
- 3.- Véase Opiniones del Attorney General de Puerto Rico, op. cit. p. 217. No tengo que insistir que esta declaración significa y está basada en una ignorancia total de lo sucedido en Puerto Rico durante el período del Gobierno Militar. En descargo de -- Mr. Harlan es necesario mencionar el hecho de que había llegado recientemente a San Juan.

- 4.- Véase La Democracia, viernes 25 de mayo de 1900, Año X, Núm. 2614, p. 2. "Con motivo del nombramiento del que ha de ser Presidente de la Corte Suprema de Puerto Rico, el Partido Republicano, se ha dado a la formación de candidatos para ocupar dicho alto puesto". Obsérvese que la referida colectividad política no respalda candidatos norteamericanos.
- 5.- En este momento histórico y hasta 1904 el Lcdo. Rosendo Matienzo Cintrón es miembro conspicuo del Partido Republicano. Pronto comienza a darse cuenta del peligro que representa para la nacionalidad puertorriqueña los intentos de americanización y la influencia desmedida de los norteamericanos en la cultura e instituciones de Puerto Rico y cambia su pensamiento e ideología. Primero tiene principal actuación en la fundación del poderoso Partido Unión de Puerto Rico y luego en 1913 establece con otros el primer Partido de la Independencia de Puerto Rico. Jurista - de primer orden, de cultura excepcional y abierto a todas las corrientes universales. El distinguido historiador puertorriqueño Dr. Luis Manuel Díaz Soler, al hacer una excelente y muy documentada biografía de Matienzo le designó "orientador y guardián de una cultura". Véase: Luis M. Díaz Soler, Rosendo Matienzo Cintrón, Universidad de Puerto Rico, Instituto de Literatura Puertorriqueña, 1960, 2 vols. (Impreso en México).
- 6.- En este momento el Lcdo. Juan Hernández López simpatizaba con el Partido Republicano Puertorriqueño. En 1902 será electo miembro de la Cámara de Delegados por ese partido político. Es Presidente del mismo de 1904-1907. Cambia varias veces de Partido, unas veces Federal a Unionista (de Muñoz Rivera) otras del Partido Republicano (Barbosista). Lo que no se le puede discutir es su profundo conocimiento del Derecho puertorriqueño. Es el único puertorriqueño que es designado por el Presidente de Estados Unidos para ser miembro de la Comisión de Códigos establecida por la Ley Foraker.
- 7.- El Juez Morera Martínez fue luego designado por el Gobernador, Juez Presidente del Tribunal de Distrito de San Juan. Cuando The San Juan News dió la noticia publicó un Editorial donde aceptaba la designación del Juez Quiñones, pero añadía que cualquier norteamericano también podría ocuparlo. The San Juan News, june 6, 1900, Vol IV. No. 247, p. 2.
- 8.- Obsérvese que al Juez Sulzbacher se le designó un día antes que a los demás jueces, de forma tal que es el más antiguo de los Jueces Asociados, superándole en antigüedad únicamente el Juez Presidente Quiñones por razón de su título, no por la fecha de su nombramiento. Véase el artículo The Supreme Court of Porto Rico en The Green Bag, an entertaining magazine for Lawyers, - Volume XIV, 1900 (The Boston Book Company). La razón para citar y usar este artículo es para compulsar la opinión de los norteamericanos sobre dicho tribunal.

- 9.- The San Juan News, august 12, 1900, Vol. V, Núm. 30, p. 1. -
Recuérdese que dicho diario era el portavoz de los intereses
norteamericanos en la isla.
- 10.- El Juez Sulzbacher nació en Alemania en el año de 1840, conta-
ba pues sesenta años de edad y no 50 como informaba el The San
Juan News. Toda su educación la recibió en su patria y sabía
los idiomas alemán y francés. Por supuesto, tenía conocimiento
de los principios del Derecho Civil. Inmigró a Estados Unidos
ya adulto joven y se estableció en Nuevo México, donde se hizo
ciudadano de Estados Unidos. Se dedicó a la agricultura mien-
tras estudiaba el "common law" y el idioma inglés y rudimentos
de idioma español. Admitido al foro comenzó una práctica lucra-
tiva de su profesión en Las Vegas. En 1899 se trasladó a Kan-
sas City, Missouri, donde conoció al Senador Elkins.
- 11.- The San Juan News, august 12, 1900, vol. V, Núm. 30, p. 1.
- 12.- Leo. S. Rowe, op. cit. p. 15
- 13.- The San Juan News, tuesday, august 14, 1900. Vol. V, No. 37.
p. 1. El título de la noticia en idioma inglés es: "Jankee ask
a few questions" y el subtítulo, "Does not altogether agree
with Judge Sulzbacher about P. R. Laws. Is Puerto Rico spanish?"
- 14.- Ibid., saturday, march 16, 1901, vol. VI, No. 63, p. 1.
- 15.- Opiniones del Attorney General de Puerto Rico, op. cit. p. 5
Mr. Foote siempre aspirará a ser Juez del Tribunal Supremo.
- 16.- The San Juan News, saturday, october 5, 1901. Vol. VI, nº. 232
p. 1. El Juez James Harvey McLeary nació en Tennessee el 27 de
julio de 1845. Estudió Derecho en Washington and Lee Universi-
ty graduándose en 1869. Se radicó en San Antonio Texas donde
practicó su profesión y sirvió en la Asamblea Legislativa del
Estado. En 1880 fué electo Attorney General de Texas, sirvió
un término y declinó el segundo por insuficiencia de salario.
En 1886 fue designado Juez de la Supreme Court of Montana, —
donde sirvió dos años renunciando por razón del clima. Al de-
clararse la Guerra Hispano-americana recibió la comisión de —
Comandante e Inspector General en el ejército y sirvió en San-
tiago de Cuba. Al disolverse la organización militar norteamer-
icana en Cuba el Gobernador Wood le nombró Inspector de cari-
dad. Llegó a Puerto Rico en febrero de 1901 como Secretario A-
Auxiliar del Gobierno Civil, siendo designado por el Presidente
Teodoro Roosevelt Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto
Rico el 4 de octubre de 1901
- 17.- D. José Severo Quiñones y Caro nació en 1839, obtuvo su Licen-
ciatura en Derecho en la Universidad Central de Madrid en 1860.

Consejero de Administración, Intendente de Hacienda, interino; Ministro en el Gobierno autónomico. Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico desde 1900 a 1909 en que fallece. Le sucede en ese cargo, D. José Conrado Hernández y Santiago, que nació en 1849, obtuvo su Licenciatura en Derecho en la Universidad de Salamanca en 1873. Fué el único puertorriqueño miembro en propiedad de la Audiencia Territorial de Puerto Rico. Ocupó por oposición todos los cargos del escalafón judicial español ultramarino, en Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Le correspondía la presidencia del Tribunal Supremo pero la coyuntura política y antigüedad de Quiñones le privan de ella. Es Presidente de esa institución en 1909, cargo que desempeña hasta 1922. Muere en 1932. D. José María Figueras y Chiqués nació en 1852, obtuvo su título de Licenciado en la Universidad de Santiago. Murió en 1910. Para una extensa biografía de cada uno de estos magistrados, véase Carmelo Delgado Cintrón, Libro de Matrículas, op. cit. p. 113, 114, 117.

- 18.- Véase Las dos vacantes en el Tribunal Supremo, en Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. 5, noviembre-diciembre 1940, Núm. 4. p. 325, específicamente p. 332.
- 19.- D. Emilio del Toro Cuebas estudió la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana en 1896, por cursos libres. Siempre se dedicó al servicio público, en el Departamento de Justicia o en la Judicatura. Nombrado Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1909. Es designado Presidente de esa institución en 1921, sucediendo a D. José C. Hernández. Siempre fué miembro del Partido Republicano Puertorriqueño y propugnaba en sus escritos, actos y discursos por la total americanización de Puerto Rico. Véase Emilio del Toro Cuebas, Patria, San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1959, 4 vols. Tomo III, p. 11
- 20.- D. Félix Cordova Dávila, cursó la carrera en The NATIONAL UNIVERSITY LAW SCHOOL de Washington D. C. graduándose en 1903. Juez, Legislador y desde 1917, Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. Miembro de Unión de -- Puerto Rico, (del sector político que desea convertir a Puerto Rico en un Estado de los Estados Unidos). Durante muy poco tiempo es Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
- 21.- D. Carlos Franco Soto, obtiene su título de abogado en la Universidad de Barcelona en 1897. Se dedica a la Judicatura, siendo designado Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. También un decidido, dedicado y consecuente creyente en la americanización de Puerto Rico.
- 22.- D. Jacinto Texidor y Alcalá de Olmo, estudió Derecho en la Uni-

versidad Central de Madrid obteniendo su título en 1892. Luego de una larga vida profesional donde se dedicó a la práctica privada, a desempeñarse como Registrador de la Propiedad, - miembro de la Comisión Codificadora de 1906, Profesor de Derecho, Presidente del Colegio de Abogados, miembro de Unión de Puerto Rico. Designado Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1928, muere el 6 de octubre de 1931. Conocedor profundo del Derecho civil llevó al alto Tribunal su influencia en ese campo jurídico pero su estancia allí fué corta. Ciertamente - Texidor y Alcalá del Olmo no debe estar en la lista de Coll y Cuchí.

- 23.- D. Angel R. de Jesús, estudió Derecho en Cornell graduándose - en 1913.
- 24.- D. Martín Travieso se recibió de Bachiller en Derecho en Cornell en 1903. Practicó su profesión de abogado en Nueva York, regresando a Puerto Rico en 1905. Miembro de Unión de Puerto Rico y del Partido Republicano. Desde 1908 a 1914 fué miembro del Executive Council. Secretario de Puerto Rico de 1914-1917. Senador. Marcha a Nueva York otra vez y practica la abogacía de - 1923-1931. En 1936 se le designa Juez Asociado del Tribunal - Supremo de Puerto Rico. Es hombre de confianza de los Gobernadores norteamericanos y del Bureau of Insular Affairs. Se le tiene como un producto de la americanización de Puerto Rico.
- 25.- La visión ideal, amistosa y florida que nos ofrece el Lcdo. Cayetano Coll y Cuchí sobre las relaciones entre los jueces norteamericanos y puertorriqueños, "cuyas mentalidades eran europeas en sus costumbres, y en su cultura, y sobre todo, en sus conocimientos jurídicos" difiere totalmente del panorama que - proyecta Mr. Frank H. Richmond, "formerly Assistant and Acting Attorney General of Porto Rico" en carta dirigida al Bureau of Insular Affairs of the War Department. En esta carta confidencial, demasiado franca y desprovista de todo adorno, Mr. Richmond analiza una por una las relaciones y personalidades de los Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Señores Hernández, Aldrey, Wolf, del Toro, y Hutchison. La información que ofrece de los últimos tres magistrados -en lo humano y profesional- no les deja bien parados. No reproduzco dicha carta porque entiendo que no ofrece perspectivas ni abunda en la tesis de esta monografía. Para evitar su reproducción tampoco ofrezco la signatura NAUS-BIA, aunque la misma obra en mi archivo.
- 26.- No creo necesario ofrecer ejemplos específicos, pues la documentación es muy abundante en este sentido. Véase por vía de ilustración, NAUS-BIA, 46.
- 27.- Obsérvese que es suprimido otro de los rasgos característicos

del sistema puertorriqueño. Otro será la abolición de lo contencioso-administrativo en 1904.

- 28.- Tulane Law Review, Vol. XIII, 1-37; 345-367 october, 1948 - march, 1949. El autor, antiguo Decano de Derecho de la Universidad de Puerto Rico ofreció esta monografía como su tesis de maestría en la Tulane Law School. Para su bibliografía véase la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. 33, - noviembre, 1972, Núm. 4, dedicado a conmemorar sus cuarenta - años de docencia y ejercicio profesional.
- 29.- Comienzan los aforismos en 1903 con *inclusio unius est exclusio alterius*.
- 30.- Ulpiano Crespo, Uniformidad de Legislación, Revista de las Antillas, (Puerto Rico) octubre, 1914, Año II, Núm. 8, p. 114
- 31.- Rafael Martínez Alvarez, Influencia de la Ley Común en el Derecho Civil de Puerto Rico, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Vol. X, julio-septiembre, 1947, p. 148, 177; luego añade un largo catálogo de esas frases.
- 32.- Una definición es la siguiente: "Un Tribunal inferior está obligado a seguir la jurisprudencia de un Tribunal superior, el juez inferior no tiene ningún derecho de hacer su propia interpretación de una ley o de una regla establecida por la jurisprudencia. Cualquier Tribunal, aún el más alto, está obligado a seguir su jurisprudencia anterior para que no haya oscilaciones en el Derecho y para que se mantenga la certidumbre del mismo". Véase a Phanor J. Eder, Ciertos principios característicos del common law, Cursos monográficos, Volúmen I, Academia Interamericana de Derecho Comparado e Internacional, La Habana, p. 272. Véase también, Helen Silving, Stare decisis in the Civil and in the Common Law, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Rodríguez Ramos, op. cit., p. 360; Martínez Alvarez, op. cit. p. 173.
- 33.- Martínez Alvarez, op. cit. p. 174-175, en original en inglés Cf. José Puig Brutau, Importance of the Puerto Rico Supreme Court Reports in an appraisal of the Civil Law, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. XXVI, Noviembre-diciembre, 1956, Núm. 2, p. 153.
- 34.- El Juez Asociado D. Emilio del Toro Cuebas era el candidato del Partido Republicano Puertorriqueño para la vacante surgida en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como consecuencia de la renuncia voluntaria del Juez Presidente D. José C. Hernández en 1921. El Partido Republicano era entonces minoritario. El candidato del Partido Unión de Puerto Rico, mayoritario era el —

otro Juez Asociado puertorriqueño D. Pedro de Aldrey, aunque si no se designaba a éste, el Partido Unión aceptaba la designación del Juez del Toro, todo por salvar el principio de que un puertorriqueño fuera Presidente del Tribunal Supremo. En ese momento había dos norteamericanos en dicho alto foro, los Jueces Wolf, el más antiguo y Hutchison. Se rumoró que el Presidente de los Estados Unidos designaría al Juez Wolf e inmediatamente comenzaron las protestas. Sin lugar a dudas, el Bureau of Insular Affairs, quien era la oficina encargada de hacer la recomendación al Presidente estaba totalmente a favor y decidida por el Juez del Toro. Y efectivamente fue designado permaneciendo en dicho cargo hasta 1940. El Juez del Toro entendía que su presencia en el Tribunal Supremo aseguraría la americanización del Derecho puertorriqueño, la lectura de su obra — Patria lleva a esa conclusión. Véase NAUS-BIA, 4623-46 y Patria, San Juan, B.A.P. 1959, 4 vols.

- 35.- En reciente decisión del Juez Asociado, Honorable Carlos J. Irizarri Yunque manifestó el Tribunal Supremo de Puerto Rico que: "respetamos el criterio expresado en el citado caso 'Besinger', pero no nos obliga, como no nos obligan las decisiones de ninguna Corte Federal, con excepción hecha del Tribunal Supremo (de los Estados Unidos) en casos apropiados". La opinión es tan reciente que todavía no ha sido impresa. Véase diario El Mundo, lunes 25 de febrero de 1974, p. 5 A. El título dice: Con excepción de Supremo de E.U. - Opinión de Irizarri - Yunque dice Decisiones Cortes Federales no obligan a Supremo P. R.
- 36.- Véase Carmelo Delgado Cintrón, Las Escuelas de Derecho de Puerto Rico, 1790-1916, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
- 37.- Fifth Annual Report of the Governor of Porto Rico, covering the period from July 1, 1904, to June 30, 1905, Washington, - Government Printing Office, 1905, p. 63. Cf. Moción del Delegado a la Cámara Mr. Cornwell, único norteamericano para que ésta adquiriera obras legales de consulta de los Estados y Territorios norteamericanos. Véase Nestor Rigual, Incidencias Parlamentarias en Puerto Rico, San Juan, Instituto de Cultura - Puertorriqueña, 1972, p. 10.
- 38.- José Ramírez Santibañez, Sentencias Declaratorias, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. I, septiembre-octubre 1935, Núm. 2, p. 57. Cf. Roman López Tamés, El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Oviedo, Publicaciones del Instituto de Estudios Jurídicos, 1965, p. 82-89.
- 39.- El País, 3 de julio de 1900, Año VI, Núm. 155, p. 2.

- 40.- The San Juan News, friday, september 13, 1901, Vol VI, Núm. 211, p. 3.
- 41.- Santos P. Amadeo, Acción civil de daños y perjuicios por muerte ilegal en Puerto Rico, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. XIII, enero-febrero 1944, Núm. 3, p. 1291. El Dr. Amadeo, además de Catedrático de largos años de experiencia, ha sido uno de los escritores e investigadores jurídicos más serios y prolíficos de Puerto Rico.
- 42.- Por vía de ilustración algunos ejemplos son: la Conferencia del Gobernador Henry y los Secretarios de Gobierno puertorriqueños 4 de septiembre de 1899, NAUS-BIA, 211; Informe del Secretario de la Guerra Root de 30 junio de 1899; Informe Carroll de octubre de 1899; Mensaje del Presidente de 1899.
- 43.- Véase el informe oficial de esta comisión en idioma inglés e idioma español. Por supuesto la versión inglesa predomina como oficial por cuanto es la lengua oficial del Congreso de los Estados Unidos a quien se le sometió. Véase el Report of the Commission to revise and compile the laws of Porto Rico, Washington, Government Printing Office, 1901. El mismo tiene 1077 páginas.
- 44.- Leyes de Puerto Rico, 1901, p. 15. Obsérvese que el nombre de esta Comisión es en idioma español que es el oficial en la isla y en el que se aprueban las leyes y demás disposiciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en el momento en que se aprobó esta Ley. El 21 de febrero de 1902 se aprobó la llamada Ley de Idiomas Oficiales que establece dos idiomas para Puerto Rico, el español y el inglés. El Colegio de Abogados de Puerto Rico ha aprobado Resoluciones solicitando la derogación de tal medida. La última fue la Resolución o Moción de 5 de mayo de 1973 donde la institución se reafirma en que "el idioma de Puerto Rico debe ser único y esencialmente su lengua vernácula, como expresión consubstancial con su personalidad y afirmación indubitable de nuestra identidad cultural".
- 45.- Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico, Puerto Rico, Tipografía Boletín Mercantil, 1902, Cuatro tomos.
- 46.- Obsérvese que ninguno de los miembros norteamericanos tiene relación alguna con Louisiana, único Estado que entonces tenía una parte de su Ordenamiento jurídico estatal, The Civil Code, de origen civilista, aunque no hispano sino francés.
- 47.- Téngase en cuenta que los acuerdos de la referida reunión de 26 de junio son oficiosos y carecen de valor por cuanto uno de los miembros, Mr. Daly, no había juramentado su cargo de comisionado.

- 48.- Report of the Commission to revise and compile, op. cit., p. 11. Todas las citas serán de la versión oficial en español, a menos que se indique en contrario.
- 49.- Manifiesta el Informe oficial que: "En el lapso de tiempo transcurrido desde junio 25 a agosto 25, los dos miembros americanos de la comisión convinieron en la siguiente división de los trabajos para la investigación preliminar. Al Comisionado Daly se asignaron los códigos civil y criminal; las leyes de enjuiciamiento civil y criminal; las leyes notarial e hipotecaria; Al Comisionado Rowe: cuestiones relativas al Derecho público, incluso la forma de gobierno insular; gobierno municipal; tributación; organización del sistema de administración de la enseñanza; la ley relativa a ferrocarriles y obras públicas; administración de beneficencia y el sistema electoral. Esta división fué luego alterada distribuyéndose los trabajos entre los tres miembros de la comisión", Ibid, p. 11.
- 50.- El San Juan News, publica la siguiente noticia sobre la tardanza de la Comisión, ".... Primero se anunció, hace algún tiempo atrás, que la Comisión tendrá sus oficinas principales en Washington a cuya proposición el miembro puertorriqueño objetó basándose en varios fundamentos". The San Juan News, sunday, august 5, 1900, Vol. V, No. 30, p. 1.
- 51.- Ibid, p. 29
- 52.- El Lcdo. Hernández López acompaña a su padre, D. Juan Hernández Arbizu, donde éste era Diputado a Cortes y durante la monarquía de Alfonso XII se le designa Magistrado de Audiencia, sirviendo en Las Palmas, de Granada, Presidente de la Audiencia Criminal de Jerez de la Frontera y termina su vida como Magistrado de la Audiencia de Sevilla en 1889. Es por ello que Juan Hernández López, primero cursa la carrera de Derecho en la Universidad de Madrid y la termina en la Universidad de Sevilla. Regresa a Puerto Rico y comienza una larga y fecunda vida profesional y política. Ha sido uno de los Profesores de la Facultad de Derecho del Ateneo Puertorriqueño en 1889, donde enseña Derecho Romano e Historia General del Derecho Español. Me abstengo de continuar este esquema biográfico pues ya en el Libro de Matrículas del Colegio de Abogados de Puerto Rico lo hice, op. cit. p. 118
- 53.- Véase Annual Reports of the War Department for the fiscal year ended june 30, 1900, (Report of the Military Governor of Porto Rico), op. cit. p. 13. La revista publicada en New York, The Nation, nos ofrece otra opinión sobre el ambiente en Puerto Rico en ese momento, 2 de agosto de 1900. En su sección The Week leemos que: "Parece extraño que los puertorriqueños nos odieran en vista de todo lo que hemos hecho por ellos, pero si

las observaciones del corresponsal del Herald son correctas, ellos nos odian en verdad. Parece que los magistrados locales están ofreciéndoles a los norteamericanos una prueba de la Ley española, solamente para demostrarles como es cuando es estrictamente aplicada, y los norteamericanos naturalmente se sienten perseguidos. Mientras tanto, la Comisión que reorganizará los Tribunales y revisará las leyes todavía no ha embarcado". Véase The Nation (New York) Thursday, august 2, 1900, Vol. 71 Núm. 1831, p. 81-82

54.- Ibid.

55.- The San Juan News, sunday august 5, 1900, Vol. V, No. 30, p. 1. Comparece esta nota del órgano periodístico de los intereses norteamericanos en Puerto Rico con el anteriormente reproducido informe oficial del Gobernador Militar. El General Davis, - ciertamente no se ha caracterizado por su defensa de las instituciones puertorriqueñas. Algunas de sus Ordenes Generales al respecto son las de creación del Tribunal Provisional; la reorganización del sistema judicial puertorriqueño asimilándolo a los de Estados Unidos; la supresión de la profesión de Procurador y la obligatoriedad de estudiar Derecho en los Estados Unidos, entre otras.

56.- The San Juan News, wednesday, february 13, 1901. Vol. VI, No. 37, p. 5. A veces este diario publica las mismas noticias en inglés y en español. La versión en inglés de esta nota aparece en la primera página de ese día.

57.- La Comisión citó oficialmente al Presidente de la "Asociación de Abogados Americanos" o "Association of American Lawyers"; - al Decano del Colegio de Abogados de Puerto Rico; al Decano - del Colegio Notarial de Puerto Rico, Jueces, Magistrados, Fiscales, etc. La lista figura en la página 13 del Report of the Commission to revise and compile, op. cit.

58.- Véase Review of Review, Vol. 26, august, 1902, p. 205, cita - específica a la página 206. Traducción del autor.

59.- Report of the Commission to revise and compile, op. cit. p. 19 En este momento 1900-1904 la Cámara de Delegados de Puerto Rico está integrada por miembros del Partido Republicano Puertorriqueño únicamente. Pues el Partido Federal se había retraído en los comicios. La responsabilidad de toda la legislación será pues de los republicanos, quienes como sabemos desean la americanización y asimilación de Puerto Rico a los Estados Unidos.

60.- Ibid., p. 3. La Carta de Mr. Knox está dirigida al Speaker of the House of Representatives. Este funcionario ordenó su envío al Committe on Insular Affairs y ordenó que se imprimiera.

61.- Sobre las partes III y V la Comisión manifiesta: "La necesidad

de presentar el informe dentro del término fijado por la Ley Foraker, hizo imposible una amplia y detenida discusión de dichos proyectos. Ibid. p. 21.

- 62.- El Informe oficial tiene 1077 páginas, pero como la mitad es en idioma español y la otra mitad en idioma inglés, realmente contiene 538 páginas. ¡De estas solamente 4 páginas son dedicadas al problema de la revisión! Adelanto aquí mi opinión de que la conclusión que uno saca luego de leer detenidamente este informe es que el mismo es muy deficiente, que los miembros de la Comisión no se dedicaron a la tarea encomendada y que desde un principio actuaron sin interés.
- 63.- Report of the Commission to revise and compile, op. cit. p. 23 Obsérvese que destaca "especialmente en la sustantiva"
- 64.- Ibid., p. 25. Obsérvese la continua mención de las tradiciones en este y el anterior párrafo y a lo largo del informe. Es interesante consignar que en la página 145 del informe (lado en idioma español) se manifiesta lo siguiente: "La legislación de un pueblo no puede ser obra sólo de la filosofía o de la especulación científica. Partidarios entusiastas, sin exclusivismos, de la escuela que sustenta las ideas del ilustre Savigny, y sin desconocer tampoco, las legítimas influencias de la filosofía y la necesidad de inspirar las leyes en los verdaderos y positivos progresos de la ciencia jurídica, creemos, sin embargo, que la marcha progresiva de la legislación de toda colectividad debe ir precedida, o por lo menos acompañada de sus hábitos, de su educación, de sus costumbres y de sus condiciones morales y sociales". Ibid., p. 145. Esta cita, de adhesión a la Escuela histórica del Derecho, aparece al final de la nota titulada, - "Revisión de la Organización judicial de Puerto Rico", segunda nota de la parte 2, titulada, "Comentarios sobre Proyectos de Ley acordados por la Comisión". El ilustre jurista y ex Catedrático de Derecho, Dr. Manuel Rodríguez, sostiene que la cita es de la Comisión, especialmente de los miembros norteamericanos, pues específicamente excluye al Lodo. Hernández López. Mi opinión es que la referida cita solidarizándose con el pensamiento de Savigny es del Lodo. Hernández López. La misma se encuentra al final de una nota redactada por el Comisionado puertorriqueño. Aunque reconozco que la parte 2 donde se incluye se refiere a comentarios de proyectos de ley acordados por la Comisión; aún así ser este el ponente.
- 65.- He preferido la traducción al idioma español del Dr. Rodríguez Ramos en vez de la versión oficial en la misma lengua en aras de la claridad, pues ese párrafo está muy mal traducido. Véase Manuel Rodríguez Ramos, Breve Historia de los Códigos puertorriqueños, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. XIX, abril-mayo, 1950, Núm. 4, p. 233.

- 66.- Cf. artículo editorial en la Review of Review de 1902 antes citado en la anotación 59. Allí se sostiene igual conclusión.
- 67.- Opiniones del Attorney General de Puerto Rico, San Juan, Tipografía El País, 1903, p. 217
- 68.- Véase Report of the Commission to revise and compile, op. cit. p. 29
- 69.- Rodríguez Ramos, Breve Historia de los Códigos puertorriqueños op. cit., p. 266. Anteriormente este autor había expresado - igual opinión sobre el mismo organismo en su artículo, Interaction, op. cit., p. 16
- 70.- Leyes de Puerto Rico, 1901, p. 5
- 71.- Véase First Annual Report of Charles H. Allen, Governor of - Porto Rico, from may 1, 1900 to may 1, 1901, Washington Printing Office, 1901, p. 77
- 72.- Nestor Rigual, Miembros y funcionarios de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 1900-1965, San Juan, Cámara de Representantes de Puerto Rico, p. 19. (Relación de Miembros del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico)
- 73.- El Lcdo. Rosendo Matienzo Cintrón, licenciado en Derecho por - la Universidad de Barcelona en 1884. A raíz de la invasión - norteamericana ejerce como Magistrado de la Audiencia Criminal de Ponce, coyuntura que dura poco tiempo regresando a la práctica de la abogacía. Ingresa en el Partido Republicano, pero desilusionado por la prédica de ese partido a favor de la americanización de los puertorriqueños rompe con esa colectividad política en 1902. Comienza entonces una intensa campaña pública para llamar la atención y orientar a las masas del país sobre el peligro que para la nacionalidad puertorriqueña representan las instituciones y presencia de Estados Unidos. Asimismo lanza la idea de la Unión de Puerto Rico que culmina en 1904 - con la fundación de ese partido bajo el liderato de D. Luis Muñoz Rivera. Muere en 1913. Véase Díaz Soler, op. cit. Ibid., Coll y Toste, Boletín Histórico, op. cit., Vol XI, p. 155.
- 74.- El Dr. José C. Barbosa médico y político puertorriqueño. Aunque nunca presidió el Partido Republicano Puertorriqueño era el máximo dirigente del mismo y su orientador. Estudió medicina en Estados Unidos y después de 1898 es un convencido expositor de las ventajas que para los puertorriqueños representa la norteamericanización de su identidad nacional. Era el - inspirador del diario El País y luego de El Tiempo. Muere en - 1922. Véase Antonio S. Pedreira, José Celso Barbosa, un hombre del pueblo, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, - 1965.

- 75.- El Lcdo. José de Diego, abogado, político y poeta puertorriqueño. Estudia Derecho en la Universidad de Barcelona y se gradúa en la Universidad de La Habana en 1891. En 1898, Subsecretario de Justicia y de la Presidencia, siendo Presidente D. Luis Muñoz Rivera. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico en 1899, luego Presidente de la Corte de lo Criminal de Mayagüez. Electo a la cámara de Delegados en 1902, Presidente del Cuerpo de 1902-1917. Preside Unión de Puerto Rico en 1914, Presidente del Ateneo 1916-1918. Jefe del grupo en favor de la independencia nacional de Puerto en la Unión. Uno de los oradores más célebres del país. El pueblo le llama el Caballero de la raza y el idioma. Muere en 1918.
- 76.- El Lcdo. Andrés Crosas, puertorriqueño criado y educado en los Estados Unidos, donde permanece hasta su vida adulta. Miembro del Consejo Ejecutivo donde se le acusa de aparentar ser neutral e independiente pero que en realidad vota y actúa con los republicanos. Es autor de la Ley de distribución electoral por causa de la cual se retiran los federales de las elecciones. Un análisis de la forma como votaba en el Consejo Ejecutivo demuestra que siempre lo hizo respaldando a los republicanos o a los miembros norteamericanos. Fué Juez de Quiebras de la United States District Court for Puerto Rico. En 1915 aspira a que se le designe Juez del Tribunal Federal pero no es complacido. Al año siguiente es designado Juez del Tribunal de Distrito de Aguadilla donde sirve hasta 1920. Aspira a un nuevo nombramiento pero no es complacido. En ese año entra en sociedad con el abogado Mr. Savage.
- 77.- Pagán, op. cit. p. 71. Cf. artículo de Fernando de la Rosa en The Puerto Rico Herald de 28 de marzo de 1903, vol. 2, p. 85. donde reproduce una resolución de D. Juan Ramón Ramos, del mismo Partido Republicano, donde expone la ineffectividad de la Cámara de Delegados ante el Consejo Ejecutivo. Véase también Díaz Soler, op. cit., p. 206.
- 78.- Rigual, Miembros y funcionarios, op. cit., p. 3; Pagán, op. cit., p. 76. Delgado Cintrón, Libro de Matrículas, op. cit.
- 79.- Los abogados norteamericanos residentes en Puerto Rico no se conformaron con partidipar en el ámbito jurídico y comercial sino que se organizaron para presentar una candidatura independiente en estas elecciones de 1900. Figuraron como candidatos independientes los señores, Savage, Anderson, Chapman, Lippit, Brown, Maltman y Thompson. Todos son derrotados. La situación no se vuelve a repetir. The San Juan News, thursday 27, 1900, Vol. V, No. 74, p. 1.
- 80.- En septiembre de 1900 renunciaron a sus cargos en el Consejo

Ejecutivo los representantes del Partido Federal, Lcdo. de Diego y el Sr. Camuñas. Fueron sustituidos por los republicanos Lcdo. José Guzmán Benítez y Dr. José Gómez Brioso, el primero abogado y el segundo médico. Obsérvese que ahora el Partido Federal no ocupa ningún cargo en el Gobierno puertorriqueño y que los republicanos tienen toda la responsabilidad. Véase La Democracia, 3 y 4 de septiembre de 1900. Ibid, 5 de septiembre de 1900. Ibid, 6 de septiembre de 1900. Ibid, 31 de octubre de 1900. Ibid, 5 de febrero de 1900.

- 81.- Véase Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico, Comentarios sobre los Códigos, Puerto Rico, Tipografía Boletín Mercantil, 1902, p. 1.
- 82.- Es el Código Civil español de 1888 trasladado a Puerto Rico - el 29 de agosto de 1889, luego de los ajustes pertinentes hechos en el Ministerio de Ultramar. Véase Gaceta de Puerto Rico, 29 de agosto de 1889, Núm. 104, p. 1 y ss; termina su publicación en Ibid. 12 de diciembre de 1889, Núm. 149,
- 83.- Es el Código Penal de España de 1870 trasladado a Puerto Rico con los ajustes necesarios por el Real Decreto de 23 de mayo de 1879. Véase Gaceta de Puerto Rico, 17 de junio de 1879, p. 3 y ss.
- 84.- Es la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, trasladada a la isla por Real Decreto de 19 de octubre de 1888. Véase Gaceta de Puerto Rico, 27 de noviembre de 1888, Núm. 1888, p. 1 y ss.
- 85.- Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico, op. cit. p. 7-8
- 86.- Además de los anteriores antecedentes, el comentario del Secretario de Justicia Mr. Harlan es importante: "Muchos de los abogados americanos residentes aquí creen que hubiera sido más - sabio implantar un sistema de Leyes americanas en la isla", - 1 de abril 1901.
- 87.- Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico, op. cit. p. 19
- 88.- Luis Muñoz Morales, Compendio de Legislación Puertorriqueña y sus precedentes, Río Piedras, Junta Editoria de la Universidad de Puerto Rico, 1948. Para la larga y fecunda vida y obra de - este noble jurista puertorriqueño, véase el interesante estudio del Lcdo. José Nilo Dávila Lanausse, Las Aportaciones del Lcdo. Luis Muñoz Morales al Derecho Puertorriqueño, San Juan, Colegio de abogados de Puerto Rico, 1960.
- 89.- Muñoz Morales, Compendio, op. cit. p. 121.

- 90.- Véase La Correspondencia de Puerto Rico, 18 de enero de 1902, p. 1; La Democracia, 18 y 20 de enero de 1902. Asimismo Díaz Soler, op. cit. p. 219
- 91.- El Lcdo. Jesús M. Rossy y Calderón comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de La Habana y los terminó en la Universidad de Granada con calificaciones sobresalientes en 1896. En 1898 desempeñó los cargos de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Puerto Rico, Juez Municipal y en 1899 Secretario de Sala de la misma Audiencia, Juez de Primera Instancia de San Francisco (San Juan) y Fiscal del Tribunal de Distrito de Arecibo. En julio de 1901 es designado para el cargo de Fiscal de San Juan. En 1904 pasa a ser Fiscal del Tribunal Supremo de Puerto Rico, puesto que desempeña hasta 1911, cuando - el Gobernador le nombra Juez de Distrito de San Juan.
- 92.- Cf. Rigual, Incidencias parlamentarias, op. cit., p. 11. Asimismo Jesús María Rossy, Código Penal de Puerto Rico, anotado, - San Juan, Tipografía Real Hermanos, 1909, A. de J. Geigel, Fé de Erratas al Código Penal, Revista de Leyes y Tribunales, - Año I, 25 de abril de 1903, Núm. 16, p. 204.
- 93.- Véase el comentario que hace Nestor Rigual, en su libro Incidencias Parlamentarias en Puerto Rico ya citado; "Uno de los asuntos que produjo gran efervescencia, principalmente entre la clase togada, fue el informe de la Comisión designada para redactar el nuevo Código Penal de Puerto Rico". Rigual confunde el propósito de la Comisión Codificadora de Puerto Rico y entiende que únicamente ésta estaba encargada del Código Penal. Rigual, op. cit., p. 11
- 94.- Véase El Aguila de Puerto Rico, 4 de marzo de 1902 y La Democracia, 1 de marzo de 1902. La glosa antes transcrita es de Díaz Soler, op. cit. p. 230.
- 95.- Véase Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1901-1902, manuscritos encuadrados. Archivo General de Puerto Rico.
- 96.- Véase el Report of the Attorney General of Porto Rico, de fecha de 1 de agosto de 1902 en Second Annual Report of the Governor of Porto Rico, from may 1, 1901 to july 1, 1902, Washington, Government Printing Office, 1902, p. 95
- 97.- Véase la sentencia Ex Parte Bird, 4 Sentencias y Resoluciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, Bureau of Printing and Transportation, 1913, p. 458
- 98.- Véase Pueblo v. Castro, Tomo 3, Ibid.
- 99.- Véase Hernández v. Feliú, II D.P.R. 394

- 100.- Luis Muñoz Morales, Reseña histórica y anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, San Juan. Facultad de Derecho, Universidad de Puerto Rico, 1947, p. 24. Obsérvese que aparentemente Muñoz Morales da la impresión de creer que el Derecho Civil de Louisiana es de raíz española
- 101.- Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico, op. cit. p. 8.
- 102.- Es interesante consignar aquí, aún cuando sale del ámbito - de nuestro estudio que cuando se quiso reformar la Ley de Corporaciones de 1911 el que preparó el proyecto que se aprobó fue Mr. Adolph A. Berle, Jr. contratado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por supuesto se volvió otra vez a traer otra Ley de Estados Unidos, siendo la misma aprobada el 9 de enero de 1956 por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Véase Adolph A. Berle, Jr. Objetivo y significación de la Nueva Ley de Corporaciones, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. XVI, febrero, 1956, Núm. 2, p. 27
- 103.- Mr. Willis Sweet es el segundo Attorney General de Puerto Rico, siendo designado en abril de 1903 por recomendación del senador norteamericano Mr. Heyburn de Idaho. Mr. Sweet es - tenido por sus contemporáneos y en el Bureau of Insular Affairs como un mediocre. Sobre la participación de éste funcionario en el Código de Enjuiciamiento Civil, véase, James H. Mac Leary, The Administration of Justice in Porto Rico, Illinois Law Review, vol. VII, 1912-12, p. 77, cita específica a la página 91.
- 104.- Mestre v. Díaz Román, 50 D.P.R. 372 (1937). El Código de - Idaho a su vez es similar al Código de California.
- 105.- Véase, Fourth Annual Report of the Governor of Porto Rico, from July 1, 1903 to June 30, 1904, (to the President of the United States), Washington, Government Printing Office, 1904 p. 24,
- 106.- Ibid.
- 107.- Fifth Annual Report of the Governor of Porto Rico, from - July 1, 1904, to June 30, 1905 (to the President of United States) Washington, Government Printing Office, 1904, p. 62-63
- 108.- Ibid., p. 63
- 109.- Arturo Morales Carrión, Ante un Centenario - Rosendo Matienzo Cintrón, 1955

- 110.- Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Editorial Losada, 1950, Tomo I, p. 932. Del mismo autor, Las Vías de hecho en el Derecho Penal, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. XXIII, noviembre, 1953, Núm. 2, p. 127
- 111.- Luis Muñoz Morales, Compendio de Legislación, op. cit; p. 121, 131, 209; Santos P. Amadeo, Lecciones de Cátedra, agosto de 1949; Manuel Rodríguez Ramos, Interaction, op. cit.
- 112.- Santos P. Amadeo, Acción Civil de daños y perjuicios por muerte ilegal en Puerto Rico, op. cit. p. 129
- 113.- Guaroa Velázquez, La Consideración, la causa y el Derecho puertorriqueño, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. XVI, Núm. 2, p. 5.
- 114.- García Martínez, Idioma y Derecho, op. cit. p. 196

Capítulo Cuarto.-

- 1.- The San Juan News, Saturday, april 21, 1900, Vol. IV. Nº 74, p. 3. Ibid., wednesday, april 18, 1900, Vol. V, Nº 168, p. 4
- 2.- Mr. Thomas D. Mott está estrechamente relacionado con la District Court of the United States for Porto Rico. Se le designa compilador oficial de las sentencias de ese tribunal, cargo del cual es relevado por el Juez Bernard Rodey en 1909, - porque Mr. Mott testifica en contra del primero en la Cámara de Delegados. Asimismo es suspendido y separado del ejercicio profesional en dicho tribunal federal por el mismo juez y la misma causa.
- 3.- Mr. Arthur Odlin, pertenece a los diez abogados originales que componían el "Bar" del Tribunal Federal, o District Court of the United States for Puerto Rico. Será por un tiempo breve Fiscal interino de la U.S. Provisisonal Court en 1899; En mayo de 1900 es designado Attorney General of Porto Rico, en el gobierno civil que organiza el General Davis hasta que lleguen los miembros en propiedad. Continúa en Puerto Rico un - tiempo, hasta que se le designa Juez del Tribunal de Primera Instancia de Manila. En 1921 se le designa Juez del Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico, sucediendo a Mr. Peter Hamilton. Su mediocre actuación, sus declaraciones a la prensa y sus malas relaciones tanto con los dirigentes políticos y culturales de Puerto Rico y con los gobernantes norteamericanos llenan de embarazo a las autoridades de Washington. Al tér

mino de su gestión de cuatro años como Juez Federal no se le vuelve a designar a pesar del respaldo de la Federal Bar Association of Porto Rico expuesto en una resolución de esa organización. En 1925 le sucede Mr. Ira K. Wells y Mr. Odlin se retira a la Florida de donde es residente. Muere al año siguiente. Véase, Porto Rico Progress, april 21, 1921; El Imparcial, julio 2, 1923; The Times (Sección en inglés de El Tiempo de San Juan) december 17, 1924; El Tiempo, mayo 22, 1926; Washington Post, june 8, 1926 y New York Herald, june 8, 1926. Asimismo, su Personal File, Arthur Odlin, NAUS-BIA.

- 4.- Federico Degetau y González, abogado, educador y político puertorriqueño perteneció al Partido Republicano Puertorriqueño y fue electo primer Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington. A pesar de su relación con dicho Tribunal Federal no aparece inscrito entre los diez primeros abogados miembros del mismo.
- 5.- Mr. Francis H. Dexter será miembro y Presidente de la Federal Bar Association of Porto Rico durante muchos años, miembro destacado del foro federal. En 1909 testificó contra el Juez B. Rodey ante la Cámara de Delegados y éste le suspendió de la práctica por treinta días. Véase Ex Parte Francis H. Dexter, 4 Porto Rico Federal Reports, 476 (1909). Al año siguiente el Juez Charlton también le suspendió por un tiempo. Sus compañeros le eligen tiempo después Presidente del Federal Bar. Es uno de los más continuos practicantes del foro federal.
- 6.- El número exclusivo de diez surge de la Lista Cronológica de los Abogados inscritos en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico hasta el 13 de febrero de 1914. NAUS-BIA, 1510-16 A.
- 7.- Mr. Thomas D. Mott, Jr. quien según el Juez federal Mr. Bernard Rodey es uno de los "responsables" de que el Congreso estableciera el Tribunal de los Estados Unidos para Puerto Rico (Tribunal Federal) en la isla; es también desaforado en 1909 y se le impone una suspensión de seis meses y una multa de \$ 15000 Véase Ex Parte Mott en 4 Porto Rico Federal Report, 476. La práctica de este letrado en el Tribunal Federal continuará luego siendo muy activa. La cita en inglés sobre la participación de estos abogados en traer el Tribunal Federal a Puerto Rico es la siguiente: "These very men, as it is said, took a large part in inducing Congress to place this Court upon the island, as a sample of American tribunals.." Ibid., p. 486
- 8.- Mr. Andrés B. Crozas Graham, a pesar de haber nacido en Puerto Rico en 1876 se le considera para todos los efectos como notea-

mericano. Pasó su infancia, juventud y primera madurez en - Estados Unidos. Allí recibió toda su educación. Durante 23 años permaneció en Estados Unidos. Su instrucción jurídica la recibió en la New York Law School. Regresó a Puerto Rico - en 8 de octubre de 1900 y fue admitido en la District Court of the United States en 19 de noviembre de ese año. No fué - hasta dos años después admitido a la práctica de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A comienzos del régi- men civil norteamericano en Puerto Rico es designado por el - Presidente de Estados Unidos miembro del Consejo Ejecutivo, - como independiente, pero se le tenía como elemento dúctil a - los republicanos e instrumento del Gobierno. Véase Díaz So- ler, op. cit. p. 198. Durante unos años fué "Referee in - bankruptcy" en el Tribunal Federal. Relacionado estrechamente con el alto comercio e industrias norteamericanas de Puerto Rico, como la Casa Crozas y Finlay de su familia. Su padre de igual desempeñó el cargo de Vice Consul de Estados Unidos en la isla. En 1915, Mr. Crozas fue "candidato" para el cargo de Fiscal federal, al año siguiente el Gobernador de Puerto - Rico le designa Juez de Distrito de Aguadilla, puesto que ocu- pa cuatro años y no se le vuelve a designar a pesar de su in- tensa campaña para ello. Véase NAUS-BIA, Personal file. Al- bert E. Lee, An Island Grows, New York, Albert E. Lee and Sons, 1963

- 9.- Mr. Charles M. Boerman, Bachiller en Leyes por la Universidad de Nueva York. Título expedido por dicha institución el 5 de junio de 1891. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico le inscribe en 18 de diciembre de 1899. Establece su bufete en Ponce, al sur de Puerto Rico, emporio de comercio y casas norteamericanas. Durante los años del Gobierno Militar participa activamente en toda clase de asuntos. Es uno de los causantes de la supresión de la profesión de Procurador en -- Puerto Rico. Practica continuamente en el Tribunal Federal.
- 10.- Mr. Frederick L. Cornwell fue el único abogado norteamericano que logró ser electo a la Cámara de Delegados de Puerto Rico en 1900. Lo fue en la candidatura del Partido Republicano Puer torriqueño y por el Distrito de Mayaguez. Sus intervenciones en el seno de la Cámara causó problemas a los demás miembros republicanos. Insistía Mr. Cornwell que la isla de Puerto Rico tenía dos idiomas oficiales, el español y el inglés (Aún cuan- do la Ley de Idiomas Oficiales no se aprueba hasta el 21 de - febrero de 1902). Su participación es mediocre y sin importan- cia. Véase, The San Juan News, thursday, december 6, 1900, Vol. V, Nº 132, p. 3.; Rigual, Incidencias Parlamentarias, op. cit. p. 2.

- 11.- The San Juan News, wednesday may 2, 1900, Vol. IV, Nº 191 - pág. 1.
- 12.- Ibid., friday, june 5, 1900, Vol. IV, Nº 245, p. 1. Ya anteriormente el Presidente le había ofrecido el cargo a Mr. Charles T. Sacton, quien lo rechazó. Ibid., saturday, june 2, 1900, Vol. IV, Nº 241, p. 1.
- 13.- Mr. Pettingill aspiraba y había solicitado que se le designase Juez del nuevo Tribunal Federal. Asimismo, Mr. Keedy deseaba y había hecho campaña política en Washington para que se le nombrase Fiscal Federal. Pettingill obtiene el cargo de Fiscal. Y lo será por algunos años, dándose la irregularidad ética de que Mr. Pettingill era el Fiscal en los asuntos criminales y practicaba privadamente la abogacía en el mismo Tribunal, District Court of the United States for Puerto Rico, en asuntos civiles. La práctica duró hasta que por haberse quejado oficialmente un perjudicado el Juez federal le puso fin. Sobre el nombramiento de Pettingill y las aspiraciones de Keedy, véase The San Juan News, wednesday, june 6, 1900, - Vol. IV, Nº 247, p. 1. El anuncio de la sociedad profesional Pettingill y Keedy para asuntos civiles aparece en El País, 5 de julio de 1900, Año VI, Nº 157.
- 14.- Sección 34 de la Ley Orgánica de 1900 (Ley Foraker) 31 Statutes 77 (1900). Cf. Spencer M. Beresford, Commonwealth Status and the Federal District Court of Puerto Rico, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. XIX, noviembre, 1958, Nº 1, p. 19; Antonio J. Amadeo - Murga, Distribution of Power Between Federal and Local Courts and the rise of federalism in the Commonwealth of Puerto Rico, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. XX, noviembre 1959, Núm. 1, p. 29; Mary Z. Asseo Guerra y Jaime B. Fuster, The Development of federalism in the Commonwealth of Puerto Rico: A proposal to annul the special diversity jurisdiction of the U.S. District Court in Puerto Rico, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. XXXVII, 1968, nº 1. p. 7
- 15.- NAUS-BIA, 19979-22. La opinión de D. Juan Hernández López sobre el aumento de la jurisdicción federal es la siguiente: "Constituye una censura dirigida a la integridad y capacidad de los tribunales insulares, los cuales son del todo aptos y competentes para administrar justicia a las partes litigantes" Report of the Commission to revise and compile, op. cit. p. 75
- 16.- Recuérdese que la Ley Orgánica de 1900 no concede la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños.

- 17.- Nos dice el Lcdo. Bolívar Pagán en su obra Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños que "El número de electores para las elecciones de 1908, fue de 206.055. Votaron 158.134 electores. El Partido Unionista obtuvo 101.033 votos; y el -- Partido Republicano obtuvo 54.962 votos. La mayoría general de los Unionistas sobre los Republicanos fue pues, de 46.071 votos. Los Unionistas repitieron el copo en los siete distritos electorales. Reeligieron al Comisionado Residente Julio Larriaga y eligieron otra vez una Cámara de Delegados homogénea unionista". Pagán, op. cit. Tomo I, p. 126. De treinta y cinco Delegados diez y siete eran abogados, los Lcdos. Acuña Aybar, Arrillaga Urrutia, Benítez Castaño, Canales, Coll y Cuchí, - Aldrey, de Diego, Elzaburu, Delgado, Díaz Navarro, Domínguez Gómez, García Ducos, López Díaz, Llorens Torres, Matienzo Cintrón, Soler y de Jesús.
- 18.- Gaceta Oficial de Puerto Rico, domingo 31 de enero de 1909, Año I, Núm. 1, p. 75, 76, 80
- 19.- Boletín Mercantil de Puerto Rico, martes 19 de enero de 1909, Año 71, Núm. 15, p. 2; La Democracia, martes 19 de enero de 1909, Año XIX, Núm. 5210, p. 4. En su libro Pro Patria, el Lcdo. Cayetano Coll y Cuchí sostiene que se interesaba también "la destitución del Juez Rodey de su cargo de Juez del Tribunal Federal". Pro Patria, San Juan, 1909, p. 22.
- 20.- La Democracia, miércoles 20 de enero de 1909, Año XIX, Núm. 5211, primera plana. El anuncio se publica en varios números consecutivos.
- 21.- Boletín Mercantil de Puerto Rico, sábado 23 de enero de 1909, Año 71, Núm. 19, p. 1. La Democracia, sábado 23 de enero de 1909, Año XIX, Núm. 5214, p. 1.
- 22.- Ibid.
- 23.- La prensa no publicó el testimonio de Anderson. Ibid., lunes 25 de enero de 1909, Año 71, Núm. 20, p. 2. La Democracia, lunes 25 de enero de 1909, Año XIX, núm. 5114, p. 1.
- 24.- En el testimonio del Lcdo. Juan Vías Ochoteco aflora una de las causas de mayor irritación para los puertorriqueños con relación a la District Court of the United States for Puerto Rico: "Díaz Navarro.- ¿Tiene noticias usted prácticas que en esa Corte Federal no se ha guardado el respeto a las sentencias de los tribunales de Puerto Rico?. Juan Vías Ochoteco.- Este caso precisamente constituye una descortesía al Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuyas sentencias debe respetar mientras no estén en conflicto con las facultades de dicha -

Corte Federal". La Democracia, lunes 25 de enero de 1909, Año XIX, Núm. 5215, p. 1.

- 25.- El Juez Federal Mr. Rodey destituye a Mr. Hork de su cargo de "Reporter" el 1 de febrero de 1909
- 26.- Boletín Mercantil de Puerto Rico, martes 26 de enero de 1909, Año 71, Núm. 21, p. 2.
- 27.- La Democracia, miércoles 27 de enero de 1909, Año XIX, Núm. 5217, p. 4. El extenso testimonio del Sr. Balbás aparece en varios números del diario.
- 28.- Boletín Mercantil de Puerto Rico, miércoles 10 de febrero de 1909, Año 71, Núm. 34, p. 2.
- 29.- Obsérvese que firman la anterior carta once abogados de los -
cuales ocho son puertorriqueños y tres norteamericanos. Se-
gún el "Rolls of Councillors of the District Court of the
United States for Porto Rico" publicación oficial de dicho -
tribunal el número de abogados admitidos a practicar en el -
Tribunal Federal hasta octubre de 1909 era de 137 miembros
en los municipios de San Juan, Mayagüez, Ponce, Arecibo, -
Guayama, Carolina, Cayey. En el municipio de San Juan estaban
admitidos 109 abogados; en Mayagüez, siete; en Ponce 14; en
Arecibo 2; en Guayama, 2, en Carolina, 1 y en Cayey 1. Obsér-
vese que únicamente firmaron la carta de respaldo al Juez -
Rodey, once miembros del "Bar" del Tribunal Federal. Los mis-
mos se desglosan de la siguiente manera: cinco de San Juan
(Antonsanti, Amadeo, Fournier, Montserrat, Jr. Olmedo, Paine,
y Rodríguez) de Mayagüez (Horton), Ponce (Leake), Cayey (Be-
net. El Lcdo. José Ramón Freyre no aparece en la lista ofi-
cial de miembros o abogados admitidos al Tribunal Federal. -
Ciertamente once firmas no constituyen gran respaldo.
- 30.- Gaceta Oficial de Puerto Rico, lunes 15 de febrero de 1909,
Año I, Núm. 3. p. 57
- 31.- Boletín Mercantil de Puerto Rico, 25 de febrero de 1909, Año
71, Núm. 47, p. 2.; La Democracia, jueves 25 de enero de 1909,
Año XIX, Núm. 5242, p. 2. Para el Juez Rodey dicho Memorial
proveía la abolición del Tribunal Federal en la isla o la res-
tricción de su jurisdicción, véase IV Porto Rico Federal Re-
port 843 (1909). Dicho Juez hace claro que era también un ata-
que al Tribunal Federal como institución. Ibid, p. 479.
- 32.- Mr. Bernard Rodey fue designado Juez de la District Court of
the United States for the District of Porto Rico en 1906, su-
cediendo a Mr. Charles F. McKenna el segundo magistrado. --
Cuando se iba a seleccionar a Mr. Rodey el Bureau of Insular
Affairs solicitó informes al Gobierno de Manila donde éste ha-

bia ejercido de abogado: "Me refiero a un telegrama de su - oficina del 4 de mayo, creo a Rodey un hombre honesto y un abogado regular; quizás mejor con los jurados que con el Juez. Su conocimiento del idioma y Derecho español se dice que es - muy bueno; si no fuera tan impetuoso sería un buen juez; mi - relación; sin-embargo, no es suficiente para usted actuar" NAUS-BIA, 14470-1.

- 33.- Boletín Mercantil de Puerto Rico, viernes 26 de febrero de - 1909, Año 71, Núm. 48, p. 2.
- 34.- Véase Boletín Mercantil de Puerto Rico, viernes 19 de febrero de 1900, Año 71, Núm. 42, p. 2.
- 35.- La reseña es muy confusa en cuanto al número de abogados presentes. Por su apellido menciona los siguientes: Horton, Cornwell, Hayden, Robbins, Leakey, Degetau, Sanchez, Sweet, Todd, Hartzell, Antonsanti, Pettingill y Mott. Sin embargo no nos dice cuantos asistieron. The Porto Rico Review, saturday, february 13, 1909, Año IV, Núm. 7, p. 9
- 36.- Véase IV Porto Rico Federal Report 476 (1909)
- 37.- Ibid., p. 479, 483, 485. En esta última página el Juez Rodey manifiesta que "muchos miembros de la Cámara que votaron por esta tonta resolución lo hicieron para avanzar el plan general de la Cámara de salir del Tribunal como institución".
- 38.- Ibid, p. 486.
- 39.- La opinión jurídica de Rodey provoca en La Democracia un - fuerte editorial titulado "Cuestión de Principios". Véase - La Democracia, martes 30 de marzo de 1909, Año XIX, núm. - 2270, p. 1.
- 40.- "Acta Orgánica" es el nombre popular de la Ley Orgánica de - 1900 (Foraker), se deriva de "Act" palabra del idioma inglés que significa Ley. En Puerto Rico es frecuente, aún en personas cultas, oírles designar una Ley por este barbarismo.
- 41.- Véase "Alegato presentado por la Comisión de la Cámara de Delegados de Puerto Rico al Gobierno Federal, sobre las presentes dificultades en la isla" en La Democracia; sábado 1 de - abril de 1909, Año XIX. Núm. 5279, p. 1. Ibid, viernes 2 de abril de 1909, Año XIX, núm. 5280, p. 1. Boletín Mercantil de Puerto Rico, viernes 2 de abril de 1909, Año 71, Núm. 74, p. 1. Con excepción del sueldo del Juez, Fiscal y "Marshall" los demás salarios de la District Court of the United States for Porto Rico se pagaban del Tesoro de Puerto Rico y figuraban en el Presupuesto Anual, aprobado por Cámara y Consejo Ejecutivo. Véase también, Coll y Cuchí, Pro-Patria, op. cit., p.

77, 83. Sobre la relación fiscal entre el Pueblo de Puerto Rico y el Tribunal Federal véase, NAUS-BIA, 19979-4. Cf. The Puerto Rico Eagle, march 22, 1909 y el raro folleto de Pedro Castañer Casasnovas, La Crisis Política y económica de Puerto Rico, apuntes sobre la situación actual, Aguadilla, Tipografía El Criollo, 1909

42.- NAUS-BIA, 168-58

43.- La Democracia, viernes 1 de abril de 1910, Año XX, Núm. 5583, p. 1.

44.- Como sabemos los proyectos de Ley y las Leyes del Congreso de Estados Unidos son extraoficialmente designados por el apellido del legislador que los presenta.

45.- Firman dicha petición los abogados: Lcdos. Juan Hernández López, Manuel Rodríguez Serra, Francisco Ramírez de Arellano, - Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, Salvador Suau, Eduardo - Acuña Aybar, Alberto Marín Marich, José de Jesús Tizol, Eugenio Benítez Castaño, F.G. Pérez Almiroty, José Martínez Dávila, José L. Pesquera, José E. Figueras, Miguel Olmedo, Damián Montserrat, Domingo Massari, Manuel Ginorio, Miguel Guerra Mondragón, Rafael López Landrón, Pedro Gómez Lasserre, Benigno Fernández García. Véase NAUS-BIA, 19979-15

46.- La Democracia 14 de enero de 1910, Año XX, p. 1; El Tiempo de igual fecha. NAUS-BIA, 19979-17. Firman dicha Resolución además de los antes mencionados, los Lcdos. Juan de Guzmán Benítez (Presidente del Partido Republicano Puertorriqueño), D. Martín Travieso Jr. (Miembro del Consejo Ejecutivo) y D. Cayetano Coll y Cuchí (Delegado a la Cámara).

47.- El Tiempo, 16 de febrero de 1910, Año IV, Núm. 45, p. 1.

48.- Ibid., miércoles 16 de febrero de 1910, Año IV, Nº 45, p. 1.

49.- NAUS-BIA, 19979-21

50.- NAUS-BIA, 19979-21

51.- NAUS-BIA, 19979-22. Mr. Dexter al Secretario de la Guerra.

52.- NAUS-BIA, 19979-23. Es curioso que la carta de Mr. Dexter produce el siguiente comentario del Secretario de la Guerra Mr. Dickinson: "Saqué la impresión allá (se refiere a Puerto Rico) de que varios de los abogados norteamericanos estaban ansiosos de extender la jurisdicción de la United States Court, de manera, me pareció a mí, que los abogados inglés-

hablantes tuvieran el monopolio de los grandes negocios".
Carta del Secretario de la Guerra al Attorney General de Estados Unidos Mr. Wickersham, 14 de febrero de 1910.

- 53.- El Tiempo, miércoles 2 de febrero de 1910, Año IV, Núm. 28; p. 1; The Times, saturday, february 5, 1910, Yr. IV. Nº 31, p. 1. La Democracia, jueves 24 de febrero de 1910, Año XX, núm. 5553, p. 1.
- 54.- Para el Testimonio de ambas Comisiones véase Hearings (1910) Olmsted Bill, específicamente las declaraciones de Coll y Cuchí, Rodríguez Serra y Texidor en sábado 19 de febrero de 1910, p. 152
- 55.- La Democracia, viernes 18 de marzo de 1910, Año XX, Núm. 5572, p. 2. Hearings, sesión de 19 de febrero de 1910, p. 152
- 56.- Porto Rico Review, saturday, march 5, 1910, Año V, Nº 10, p. 5. En otra parte de la revista publica que: "La Corte Federal quedará prácticamente abolida. Se convertirá en una Corte de los Estados Unidos en el verdadero sentido de su título..."
- 57.- Véase Congressional Record, Vol. 45, p. 8210. Ibid., Vol. 46 págs. 236, 340, 1160, 2186, 2246 y 2644.
- 58.- Luis Muñoz Marín, Obras Completas de Luis Muñoz Rivera, San Juan, Editorial Puerto Rico, 3 vols. Tomo III, p. 152
- 59.- NAUS-BIA, 3377-133. Su nombre en español es Declaración de - Política puertorriqueña y su fecha es de 8 de diciembre de 1913. Esta en menbrete del War Department, Bureau of Insular Affairs. Cf. NAUS-BIA, 3377-148.
- 60.- El párrafo en inglés lee como sigue: "Judiciary. The Judiciary should, in so far as the organic act is concerned, consist of the courts now established by law, except the United States District Court of Porto Rico, wich should be abolished, as such a court has no function in anything wich approaches an autonomous government.
- 61.- NAUS-BIA, 3377-134
- 62.- Se refiere al cargo de Attorney General.
- 63.- NAUS-BIA, 3377-148
- 64.- NAUS-BIA, 3377-139. A esta solución se opone Mr. Peter J. Hamilton, Juez Federal en carta al Secretario de la Guerra de fecha 30 de enero de 1914. NAUS-BIA, 19979-86. Allí nos -

confirma la noticia de que entre los puertorriqueños hay un fuerte movimiento para solicitar la abolición de la District Court of the United States for Porto Rico.

- 65.- Cf. El Proyecto de Ley fue el H.R. 13818. Cf. Hearings before the Committee on Insular Affairs, on H.S. 13818, "A Bill to provide a civil Government for Porto Rico", Washington, Government Printing Office, 1914. El nombre del Proyecto es el "Bill Shafroth-Jones".
- 66.- NAUS-BIA, 19979-89
- 67.- NAUS-BIA, 3377-169
- 68.- NAUS-BIA, 3377-137
- 69.- NAUS-BIA, 3377-140
- 70.- Vol. I, enero de 1974, Nº 1, p. 66. El Lcdo. Dominguez es Vicepresidente de la Asociación de Abogados y Director de la - Revista.
- 71.- Ibid. P. 73
- 72.- Ibid., Vol. I, mayo 1914, Nº 5, p. 212. La resolución tiene fecha de "febrero de 1914"
- 73.- Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, sesión de - 28 de febrero de 1914
- 74.- D. Benigno Fernández García llega a ser electo Presidente del Colegio de Abogados y Secretario de Justicia.
- 75.- The Times, thursday, march 19, p. 194. NAUS-BIA, 19979-91
- 76.- The Review, november, 1914, p. 36. NAUS-BIA, "P" File, Francis H. Dexter.
- 77.- Ibid. La carta tiene la fecha de 18 de noviembre de 1914
- 78.- NAUS-BIA, 377-235 A. Cf. La Democracia, 8 de enero de 1916, Año XXV, Núm. 7406, p. 4. Votan dicha Resolución todos los miembros de la Cámara de Delegados pertenecientes a los - Partidos Republicano Puertorriqueño y Unión de Puerto Rico.
- 79.- Revista de Legislación y Jurisprudencia de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Vol. III, Enero-febrero, 1916, Nº I, p. 3
- 80.- Hearings before the Committee an Insular Affairs, House of

Representatives, on H.R. 8501, Washington, Government Printing Office, 1916, p. 76

- 81.- Ibid., p. 60. Cf. El Tiempo, viernes 28 de febrero de 1916, Año X, Núm. 30, p. 1. Ibid., The Times, Wednesday, february 23, 1916, Vol. X, Nº. 45, p. 12.
- 82.- La Democracia, viernes 26 de febrero de 1916, Año XXVII, Núm. 7444, p. 4.
- 83.- Ibid., miércoles 16 de febrero de 1916, Año XXVII, Núm. 7466, p. 4
- 84.- El Tiempo, sábado 22 de enero de 1916, Año X, Núm. 39, p. 1; Ibid., miércoles 16 de febrero de 1916, Año X, Núm. 18, p. 1.
- 85.- Tous Soto, Parra Capó y González Mena eran líderes republicanos y Piñero Rodríguez, Fernández García y de Diego de Unión de Puerto Rico. La medida se consideró bipartita y patriótica.
- 86.- Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, sesión de 13 de abril de 1913, Día 60, jueves. NAUS-BIA, 60-123; Revista de Legislación y Jurisprudencia de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Vol. IV, 1916, Núm. 2, p. 93. El 16 de febrero de 1917 vuelve la Cámara de Delegados a solicitar otra vez la abolición del Tribunal Federal, véase la larga Resolución de esa fecha en NAUS-BIA, 1137-33. Asimismo telegrama al Presidente de Estados Unidos demandando dicha supresión de fecha 17 de febrero. NAUS-BIA, 1137-31
- 87.- NAUS-BIA, 3377-284
- 88.- Véase 39 Statutes 965 (1917) Fraga op. cit., p. 407; Pedro Muñoz Amato, Constitutional Trends in the Constitutional History of Puerto Rico, op. cit., p. 284.
- 89.- Bolívar Pagán, Historia de los Partidos Políticos, op. cit. - Tomo I, p. 183
- 90.- NAUS-BIA, 19979-73 $\frac{1}{2}$. El párrafo en su versión original en idioma inglés: "it is indeed to be deplored that the whole body of native Porto Ricans appears to hold this Court not only in the greatest odium but in terror, regarding it as an engine of appresion. Nor is this feeling by seems to be shared by nearly every American with whom I have spoken"
- 91.- NAUS-BIA, 1137-39
- 92.- Ibid.

- 93.- NAUS-BIA, 19979-121. El título del artículo es "El Sonido de la Trompeta".
- 94.- NAUS-BIA, 3377, 379
- 95.- NAUS-BIA, 26429-228. A pesar de que esta fechado en abril - de 1928, el sello oficial tiene fecha de 5 de junio de ese año.
- 96.- Unión de Puerto Rico, Puerto Rico ante el Imperialismo norteamericano, Denuncia del Régimen de Gobierno que Estados Unidos de América impone al Pueblo de Puerto Rico, San Juan, 1931, NAUS-BIA, "P", file, Antonio R. Barceló.
- 97.- Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Vol. 31, noviembre de 1970, Núm. 4, p. 569 (Reproducción facsímil)
- 98.- El Imparcial, sábado 20 de octubre de 1951, p. 5.
- 99.- 206 Federal Second, p. 377. Cf. Salvador Casellas, The Admiralty Jurisdiction in the Commonwealth of Puerto Rico, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. XXII, 1962, Núm. 2, p. 165, 174
- 100.- El Imparcial, sábado 15 de octubre de 1955, p. 14; El Mundo, sábado 15 de octubre de 1955, p. 1. Juan M. García Passalacqua, Puerto Rican Constitutional Law, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. 35, febrero, 1974, Núm. 1, p. 5
- 101.- La sentencia es Futurama Import Corporation v. Kayson International, 304, Federal Supp. 999, Cf. El Mundo, sábado 5 de octubre de 1968, p. 2.

B I B L I O G R A F I A

Abreviaturas.

RCAPR.- Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

RJUPR.- Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.

I.- Informes oficiales y gubernamentales, actas y legislación

- 1.- Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1901-1917, -
(Actas no publicadas)
- 2.- First Annual Report of Charles H. Allen, Governor of Porto Rico, from may 1, 1900, to may 1, 1901, (to the President of the United States) Washington, Government Printing Office, 1901
- 3.- Second Annual Report of the Governor of Porto Rico, from may 1, 1901, to july 1, 1902 (to the President of the United States) Washington, Government Printing Office, 1902.
- 4.- Third Annual Report of the Governor of Porto Rico, from july 1, 1902 to june 30, 1903 (to the President of the United States) Washington, Government Printing Office, 1903
- 5.- Fourth Annual Report of the Governor of Porto Rico, from july 1, 1903 to june 30, 1904, (to the President of the United States) Washington, Government Printing Office, 1904
- 6.- Fifth Annual Report of the Governor of Porto Rico, from july 1, 1904, to june 30, 1905, (to the President of the United States) Washington, Government Printing Office, 1905
- 7.- Annual Report of Brigadier General George W. Davis, Department of Porto Rico to the Adjutant General of the Army, 1899, Adjutant General Office, San Juan, Porto Rico, 1899.
- 8.- Annual Report of the War Department for the fiscal year ended june 30, 1899, Washington, Government Printing Office, 1900 -
(Part 13, Report of the Military Governor of Porto Rico on Civil Affairs)
- 9.- Annual Report of the War Department for the year ended june 30 1900 (Part 13, Report of the Military Governor of Porto Rico on Civil Affairs) Washington, 1902
- 10.- Compilación de los Estatutos revisados y Códigos de Puerto Rico (3 de diciembre de 1900 hasta 9 de marzo de 1911) Secretaría de Puerto Rico, Bureau of Supplies and Printing, 1914-1916

- 11.- Compilation of the Acts of Congress, treaties and Proclamation relating to insular and military affairs, from march 4, 1897 to march 3, 1903, Government Printing Office, 1903
- 12.- Compilation of the Organic Provisions of the administration of Justice in force in the Spanish colonial Provinces and - appendices relating thereto, War Department Division of Customs and Insular Affairs, Government Printing Office, Washington, 1899
- 13.- Col. W. Winthrop, A digest of Opinions of the Judge Advocate of the Army, Government Printing Office, 1901 (Revised Edition)
- 14.- Documents on the Constitutional History of Puerto Rico, Washington, Office of the Commonwealth of Puerto Rico.
- 15.- Documentos presentados a las Cortes en la Legislatura de 1898 por el Ministro de Estado (Duque de Almodóvar del Río), Imprenta Rivadeneyra, 1899
- 16.- Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, (Leyes aprobadas en la primera y segunda sesión de la Asamblea Legislativa, en vigor desde el 1º de julio de 1902, incluyendo el Código Político, el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil) San Juan, Imprenta El Boletín - Mercantil. 1902.
- 17.- Fallos y Sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, Bureau of Printing and Supplies, 1906, Tomo I
- 18.- Journal of the Executive Council of Porto Rico, San Juan, - Bureau of Supplies, Printing and Transportation, (1901-1917)
- 19.- Puerto Rico Laws Relating to the Civil Administration and - Government of the Island of Porto Rico, Division of Custom and Insular Affairs, War Department, august, 1899, Government Printing Office, 1899.
- 20.- Mensaje de Su Excelencia Charles Allen a las dos Cámaras de - la Legislatura de Puerto Rico, San Juan, Tipografía El País, 1900.
- 21.- Mensaje del Hon. William H. Hunt. Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa, Segunda Sesión, 2 de enero de 1902, San Juan News, 1902
- 22.- Mensaje Anual del Gobernador a la Asamblea Legislativa (Hon. Regis H. Post) Bureau of Supplies, Printing, 1909

- 23.- Opinions of the Attorney General of Porto Rico, 1903-1928
13 vols.
- 24.- Report of Brigadier George W. Davis on Civil Affairs in Porto Rico, 1899. Government Printing Office, 1900.
- 25.- Report of Cases, Supreme Court of the State de California, -
San Francisco, Bancroft, Whitney Co. 1886, Vol. I.
- 26.- Joseph F. Daly, Leo S. Rowe y Juan Hernández López, Report -
of the Commission to Revise and Compile the Laws of Porto Rico
57th. Congress, 1 st. Session, House of Representatives, Do-
cument No. 52, Govt. Printing Office, Washington, D.C. 1901
- 27.- Report of the Chief of the Bureau of Insular Affairs, Washing-
ton, Government Printing Office, 1900
- 28.- Report of the Chief of the U.S. Bureau of Insular Affairs to
the Secretary of War, 1909, Washington, Government Printing
Office, 1909
- 29.- Henry K. Carroll, Report on the Island of Porto Rico, Washing-
ton, Government Printing Office, 1899
- 30.- Report of the Judge Advocate of Porto Rico, Annual Report of
Brigadier General George W. Davis to Adjutant General of the
Army, San Juan, 1899
- 31.- Porto Rico Federal Reports, United States District Court for
the District of Porto Rico (Decisiones de la Corte Federal de
Puerto Rico) The Lawyers Cooperative Publishing Co., Rochester
N.Y. 1906, 1924, 13 vols.
- 32.- Charles E. Magoon. Reports on the Law of Civil Government in
territory subject to military ocupation by the military forces
of the United States, Washington, Government Printing Office
1902
- 33.- Report of the United States Insular Commission to the Secreta-
ry of War upon Investigations made into the Civil Affairs of
the Island of Porto Rico with recommendations, Division y -
Customs and Insular Affairs, june 9, 1899, Washington, Govern-
ment Printing Office, 1899
- 34.- Puerto Rico, Revised Statutes and Codes of Puerto Rico, july 1,
1902, Publish by the Authority of the Legislative Assembly, -
San Juan, Boletín Mercantil, 1902
- 35.- United States. Congress. House of Representatives. Annual Ra-
ports of the War Department for the Fiscal Year Ended june 30

1900. 56th Congress, 2nd Session, H. Doc. 2. Washington, - Government Printing Office, 1901
- 36.- United States. Congress. House of Representatives. Committee on Insular Affairs. Administration of Civil Affairs in Porto Rico, etc. House Report 1105, to Accompany H. J. Res. 241. 56th Congress, 1st Session
 - 37.- United States. Congress. House of Representatives, Committee on Insular Affairs. Committee Reports and Hearings, and Acts Relating Thereto. 56th Congress, 1st and 2nd session, 1900-1901. Washington, Government Printing Office, 1902
 - 38.- United States. Congress. Senate. Committee on Pacific Islands and Porto Rico, Temporary Civil Government for Porto Rico, - Senate Report 249, to accompany S. 2264. 56th Congress 1st Session
 - 39.- United States. Congress. Senate. Compilation of the Acts of Congress treaties, and Proclamations Relating to Insular and Military Affairs from march 4, 1897 to march 3, 1903, 58th - Congress, 2nd Session, S. Doc. 105, Washington, Government Printing Office, 1904
 - 40.- United States. Congress. Senate. First Annual Report of Charles H. Allen, Governor of Porto Rico, Covering the Period from may 1, 1901, Washington, Government Printing Office, 1901
 - 41.- United States. Congress, Senate, Hearings Before the Committee on Pacific Islands and Puerto Rico of the United States Senate on Senate Bill 2264, to Provide a Government for the Island of Puerto Rico, and for other Purposes. 56th Congress, 1st Session, S. Doc. 147, Washington: Government Printing Office, 1900
 - 42.- United States, Military Orders Having the Force of Law Promulgated by the Commanding General Department of Porto Rico, from october 18, 1899 to april 30, 1900, San Juan, Puerto Rico.
 - 43.- United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Report of the Commission, Washington, Government Printing Office, august 1906, 4 vols.

II.- ESTUDIOS JURIDICOS

a) Libros.-

- 44.- Santos P. Amadeo, El Habeas Corpus en Puerto Rico, 1899-1948
Rio Piedras, Editorial Universitaria, 1948
- 45.- Robert Bacon and John Brown Scott, (ed) The Military and Colonial Policy of the United States, Cambridge, Mass. 1916
- 46.- Joseph Benson Foraker, Puerto Rico. s.s., s.p.i., 21 abril - 1900
- 47.- José Blanch (Compilador), Ordenes judiciales. Dictadas por el Comandante en Jefe del Depto. Sec. de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Junta Judicial y Procurador general, desde 18 de octubre de 1898, día de la ocupación americana, hasta 30 de abril de 1900, en que cesó el Gobierno militar. Imp. El Progreso, P.R., 1900
- 48.- Justo M. Bodon, Compilación de Citas del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ponce, P.R., Tip. América, 1942
- 49.- Everett Somerville Brown. The Constitutional History of the - Louisiana Purchase 1803-1812. Berkeley. University of California Press, 1920
- 50.- Richard Capalli, Federal Aid to Puerto Rico, Río Piedras, Institute of Urban Law, 1970
- 51.- Cayetano Coll y Cuchi, La Ley Foraker, San Juan, P.R. Tip. Boletín Mercantil, 1904
- 52.- Rafael María de Labra, El Tratado de París de 1898. Madrid, - España, 1899
- 53.- Carmelo Delgado Cintrón, Libro de Matrículas del Colegio de - Abogados de Puerto Rico, San Juan, Edición oficial del Colegio de Abogados, 1970
- 54.- José de Diego, La Codificación del Derecho Administrativo - Notas para un libro. Mayagüez, P.R. Imp. de la Razón, 1890
- 55.- José Antonio Escudero, Historia del Derecho: Historiografía y problemas, Madrid, Universidad de Madrid, 1973
- 56.- Manuel Fraga Iribarne, Las Constituciones de Puerto Rico, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1953

- 57.- Carl J. Friedrich, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1954
- 58.- Alfonso García Gallo, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 1967, (tercera edición revisada) 2 vols.
- 59.- Alfonso García Gallo, Metodología de la Historia del Derecho - Indiano, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1971
- 60.- Miguel Guerra Mondragón, How Congress has Treated Puerto Rico San Juan, Bureau of Supp. Printing and Transportation, 1943
- 61.- Hamilton, Madison, Jay, El Federalista. México, Fondo de Cultura Económica, 1957 (segunda edición)
- 62.- Peter Joseph Hamilton, The Federal Court. Address upon opening the new court room in the Federal Building, San Juan, P.R., Bur. Supp. Prtg., 1914
- 63.- Oliver W. Holmes, The Common Law, Cambridge, Harvard University Press, 1963
- 64.- Eugenio Maria de Hostos, El Habeas Corpus. Puerto Rico, 1889
- 65.- Enrique López Díaz, El Liberalismo o la Razón Cívica. San Juan P. R. Tip. La República Española, 1908
- 66.- Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la Administración - Española y Ultramarina, Madrid, 1887 (cuarta edición) Anuario de 1893
- 67.- Lewis Mayer, The American Legal System, New York, 1964
- 68.- Jose María Morenilla Rodríguez, La Organización de los Tribunales y la reforma judicial en los Estados Unidos de América, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 1968
- 69.- Luis Muñoz Morales, El Notariado puertorriqueño y el informe - de la Comisión americana. Refutación de errores, San Juan, Imprenta Sucesión Acosta, 1899
- 70.- Luis Muñoz Morales, El Status Político de Puerto Rico, San Juan, Imprenta El Compás, 1921
- 71.- Luis Muñoz Morales, Compendio de Legislación Puertorriqueña y sus Precedentes. Junta Editora de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Imp. Soltero, 1948
- 72.- Luis Muñoz Morales, Reseña Histórica y Anotaciones al Código - Civil. Libro Primero - De las Personas, Arts. 24 al 251, Código Civil. Ed. 1930. Santurce, Imprenta Soltero, 1948

- 73.- Luis Muñoz Morales, Guaroa Velázquez y Domingo Toledo Alonso, Dictámen sobre métodos de enseñanza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, apéndice de Luis Muñoz Morales, Mis programas, Cataño, Biblioteca de autores puertorriqueños, 1943
- 74.- Theodore F. T. Plucknett, A concise history of the Common Law, London, Butterworth and Co., Publishers Ltd. 1949 (4th. Ed.)
- 75.- Roscoe Pound, The formative era of American Law, Boston, 1938
- 76.- Proceedings of the Conference of Judges, Fiscals and Lawyers at the Government House, San Juan, November 17-18, 1910, Bureau of Supplies Printing and Transportation, 1910
- 77.- José Puig Brutau, La jurisprudencia como fuente de Derecho, - 1951
- 78.- Oscar Rabassa, El Derecho anglo-americano, México, Fondo de Cultura Económica, 1944
- 79.- Max Radin, Handbook of Anglo-American Legal History, St. Paul, West, Publishing Co, 1936
- 80.- Max Rafin, The Rivalry of Common Law and Civil Law ideas in the American colonies: A century of progress, New York, New York University Press, 1937
- 81.- Rolls of Counsellors of the District of the United States for Porto Rico, San Juan, Bureau of Printing and Supplies, 1909
- 82.- Elihu Root, The Military and Colonial Policy of the United States: Addresses and Reports. Collected and edited by Robert Bacon and James Brown Scott. Cambridge. Harvard University Press 1916
- 83.- José Rosario Gelpí, Digesto Civil de Puerto Rico, Tomo I, Ponce, P.R. Imp. El Día, 1923; Tomo II, Ponce, P.R. Imp. El Día, 1925; Tomo III, San Juan, P.R., Tip. Correo Dominical, 1929
- 84.- Jesús María Rossey, Código Penal de Puerto Rico, Anotado, San Juan, Tipografía Real Hermanos, 1909
- 85.- Raul Serrano Geyls, The Territorial status of Puerto Rico and its effect in the political future of the island, (Master Thesis in the School of Law of Columbia University), June, 1945
- 86.- Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, El Derecho Civil en Puerto Rico, Obligaciones y contratos, según el Código Civil en Puerto Neg. Mat. Imp. 1924

- 87.- José Tous Soto, La autonomía española y la Ley Foraker, S.f. y s.l.
- 88.- Manuel Tous Soto, Puerto Rico, posesión de los Estados Unidos de América. (Exposición de las Leyes Orgánicas Foraker y Jones) San Juan, Imprenta Puerto Rico, 1941
- 89.- André y Suzanne Tunc, El Derecho de los Estados Unidos de América, México, Fondo de Cultura Económica, 1957
- 90.- U.S. Department of State. Division of Historial Policy and - Research. Development of the United States Policy Toward Self Government in Puerto Rico, 1898-1947, Project of Investigation No. 43, 1947
- 91.- Clifford Stevens Walton, The Civil Law in Spain and Spanish - America, including Cuba, Puerto Rico and the Phillippine islands; and the Spanish Civil Code in force; annotated and with references to civil Codes of México, Central and South America. W. H. Lowdermelk Co., Wa., 1900
- 92.- Frederick B. Wiener, Civilians Under Military Justice, Chicago, The University of Chicago Press, 1967

ESTUDIOS JURIDICOS

b) Artículos de Revistas jurídicas.

- 93.- Angel Acosta Quintero, Veinte años de Poder judicial. RCAPR, Vol. V, julio-agosto, 1917, Núm. 4, p. 228
- 94.- Charles H. Allen, Reorganization of the Courts and the New Tax Law, Independent, N.Y. Vol. 54, january, 1902, p. 64
- 95.- Antonio J. Amadeo Murga, Distribution of Power between Federal and Local Courts and the Rise of Federalism in the Commonwealth of Puerto Rico, RCAPR, Vol. XX, Nov. 1959, Núm. 1, p. 5
- 96.- Santos P. Amadeo, Acción Civil de Daños y Perjuicio por Muerte ilegal en Puerto Rico, RJUPR, Vol. XIII, enero-Febrero, 1944 núm. 3, p. 129
- 97.- Santos P. Amadeo, The Americanization of the Judicial Process in Tort Cases in the Legal System of Puerto Rico. Illinois, - Northwestern University, School of Law, 1934-1935 (Tesis para obtener el grado de Doctor en Derecho)
- 98.- Mary Z. Asseo Guerra, Jaime B. Fuster, The Development of Federalism in the Commonwealth of Puerto Rico: A Proposal to An-

- muel the Special Diversity Jurisdiction of the U.S. District Court in Puerto Rico, RJUPR, Vol. XXXVII, año 1968, Núm. 1. p. 7
- 99.- Selden Bacon, Territory and the Constitution, Yale Law Journal. Vol. X, january, 1901, N° 3, p. 99
- 100.- Rodolfo Batiza, The Influence of Spanish Law in Louisiana, Tulane Law Review, Vol. XXXIII, December, 1958, N°. 1, p. 1.
- 101.- Pablo Berga y Ponce de León, El Tribunal Supremo -Reformas en su Constitución, RCAPR, Vol III, nov-dic. 1916, N° 6, p. 404
- 102.- Spencer Beresford, Commonwealth Status and Federal District Court of Puerto Rico, RCAPR, vol. XIX, nov., 1958, Núm. 1, - p. 19
- 103.- J. P. Buster, Congressional Government of Territories. American Law Review, Vol. XXXIV, p. 366, 1900
- 104.- Canada in 1839, Puerto Rico in 1916. Introductory note to the report of the Earl of Durham, her Majesty's high commissioner and Governor General of British North America. Reproduction by La Democracia, San Juan, P.R. 1916.
- 105.- Pedro Capo Rodríguez, Aspectos Jurídicos de las Relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico. American Journal of Inter. Law. Vol IX, p. 883, 1915; Vol. X, p. 65, 1916; Vol. XII, p. 483, 1919
- 106.- Pedro Capo Rodríguez, La Representación de las Colonias en el Imperio Americano - Con referéncia especial a Puerto Rico. Sobretiro de la Revista Americana de Derecho Internacional, Tomo XV, N°. 4, oct. 1921, 32 p.
- 107.- Henry K. Carroll, General Henry's Policy in Porto Rico, The Independent, Vol. XXI, march 2, 1899, p. 643-644
- 108.- Henry K. Carroll, What has been done for Porto Rico under Military Rule, Review of Reviews, Vol. XX, december, 1899, p. - 705-706
- 109.- José Castán Tobeñas, En torno al Derecho Civil de Puerto Rico, RJUPR, Vol XXVI, sept-oct. 1956, Núm. 1, p. 7
- 110.- José Castán Tobeñas, Divagaciones sobre el Derecho comparado, RCAPR, Vol. 16, mayo 1956, Núm. 3, p. 5
- 111.- José Castán Tobeñas, Los Sistemas Jurídicos Contemporáneos - del Mundo Occidental (conclusión), Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Año C IV, octubre de 1956, Núm. 4

- 112.- Charles E. Clark y William D. Rogers, The New Judiciary Act of Puerto Rico, a Definitive Court Reorganization, Yale Law Journal, Vol. 61, N° 7, p. 1147, nov. 1952
- 113.- Ulpiano Crespo, Uniformidad de legislación, Revista de las Antillas, Año II, octubre, 1914, núm. 8, p. 114
- 114.- Felipe Cuchí Arnau, Criterio que debe presidir a las leyes de Puerto Rico, ¿Debe inspirarse en el Derecho histórico o en el norteamericano?. Cuarto Centenario de la Colonización Cristiana de Puerto Rico. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P.R., 1908
- 115.- Felipe Cuchí Arnau, Desarrollo del Derecho escrito en Puerto Rico. Cuarto Centenario de la Colonización Cristiana de Puerto Rico, Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P.R. 1908
- 116.- H.G. Curtis, The Status of Puerto Rico, Forum, Vol. 28, december, 1899, p. 403
- 117.- Joseph Dainow, Notas Introductorias al Código Civil de Louisiana, RJUPR, Vol. XXIII, mar-abril, 1954, Núm. 4, p. 307
- 118.- Joseph Dainow, The Method of Legal Development through Judicial Interpretation in Louisiana and Puerto Rico, RJUPR, Vol. XXII, sept-abril 1953, Núm. 1-4, p. 108
- 119.- Federico Degetau y González, The Political Status of Puerto Rico. Washington, D.C., Globe Printing Co, 1902.
- 120.- Emilio del Toro, Uniformidad de Legislación, Revista de las Antillas, Año I, abril 1913, núm. 2, p. 127
- 121.- Emilio del Toro Cuevas, Corte Federal de Puerto Rico. Discurso de apertura por el Hon., y discurso por Peter J. Hamilton, con motivo de la primera sesión celebrada en el edificio federal de San Juan. 4 de noviembre de 1914, Bur. Supp. Prtg. 1914
- 122.- Carmelo Delgado Cintrón, La Escuela de Derecho del Ateneo Puertorriqueño, 1912, RCAPR, Vol. 33, agosto, 1972, Núm. 3, p. 309
- 123.- Carmelo Delgado Cintrón, La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, RCAPR, Vol. 33, nov. 1973, - Núm. 4, p. 583
- 124.- Carmelo Delgado Cintrón, El Colegio de Abogados de Puerto Rico: un resumen histórico, RCAPR, Vol. 34, agosto 1973, Núm. 3, p. 495
- 125.- Abraham Díaz González, Las Reglas de Enjuiciamiento Civil Pro-

- puestas para el Tribunal General de Justicia. RCAPR, Vol. XV, mayo 1955, núm. 3, p. 213
- 126.- George V. Domínguez, Americanizing an Old System of Law. Case and Comment, Vol. 17, 1910, p. 218
- 127.- Jorge V. Domínguez, La Abolición de la Corte de Distrito en los Estados Unidos para Puerto Rico. RCAPR. Vol. I, marzo, - 1914, Núm. 3, p. 66
- 128.- Jorge V. Domínguez, La Codificación de Nuestras Leyes, RCAPR Vol. I, enero 1914, Núm. 1, p. 2
- 129.- Pedro Entenza Escobar, Las Obligaciones "joint and several" y las "mancomunadas y solidarias" en Derecho puertorriqueño, - Revista de Derecho Puertorriqueño, septiembre 1961, Núm 1, p. 43
- 130.- José Antonio Escudero, La Historiografía General del Derecho inglés, Anuario de Historia del Derecho Español, Vol. 35, 1965, p. 217-356
- 131.- Benito Flores, Las Reformas de Nuestras Leyes, RCAPR, Vol. I junio 1914, Núm. 6, p. 219
- 132.- Joseph Benson Foraker, The United States and Porto Rico, North American Review, Vol. 170, p. 464, april, 1900
- 133.- Félix Frankfurter, Distribution of judicial power between - United States and States Courts, Cornell Law Quarterly. Vol. 13, 1928, p. 499
- 134.- Alfonso García Gallo, Historia, Derecho e Historia del Derecho, consideraciones en torno a la Escuela de Hinojosa, Anuario de Historia del Derecho Español, Vol. 23, 1953, p. 5-23
- 135.- Alfonso L. García Martínez, Apelaciones Civiles a Boston - Un caso de Inconstitucionalidad, RCAPR, Vol. XVI, agosto 1956
- 136.- Alfonso L. García Martínez, Idioma y Derecho en Puerto Rico, RCAPR, Vol. XX mayo, 1960, Núm. 3, p. 183
- 137.- Alfonso L. García Martínez, El idioma y la profesión legal, RCAPR Vol. 34, agosto, 1973, Núm. 3, p. 473
- 138.- Luis M. García Passalacqua, The judicial Process and the status of Puerto Rico, RJUPR, Vol. 30, 1961, p. 145
- 139.- Juan Manuel García Passalacqua, Puerto Rican Constitutional - Law, RCAPR, Vol. 35, febrero, 1974, Núm. 1, p. 5
- 140.- Lloyd McKim Garrison, The Penal Code of Cuba and Porto Rico,

Harvard Law Review, Mass., june 1899, Vol. 13, 124

- 141.- Vicente Géigel Polanco, La Ley de Relaciones Federales y el Estado Político de Puerto Rico, RCAPR, Vol. XXIII, noviembre 1962, Núm. 1, p. 67
- 142.- Ambrosio González del Valle, En torno al "Uniform Commercial Code" y a la reforma del Código de comercio de Puerto Rico, Revista de Derecho Puertorriqueño, julio-septiembre 1967, Año VII, vol. 25, p. 59
- 143.- Rafael Guillermet, El Juicio por Jurados, Revista de Leyes y Tribunales, Año I, enero, 1903, Núm. 3, 24 enero 1903
- 144.- Marion E. Harrison, Court - Martial Jurisdiction of Civilions A Glimpse at some Constitutional Issues, Military Law Review Washington, January 1960, Pamphlet No. 27-100-7
- 145.- Charles Hartzell, What is just to Porto Rico, Report of the 27th Annual Meeting of the Lake Mohonk Conference of Friends of the Indians and other Dependant People, 1904
- 146.- George R. Harvey, The Administration of Justice in the Philippine Islands, Philippine Law Journal, Vol. I, 1914-1915, p. 330.
- 147.- David M. Helfeld, El Preludio Histórico a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, RJUPR, Vol. XXI, enero-febrero, 1952, Núm. 3, p. 135
- 148.- David Helfeld, How much of the federal Constitution is likely to be held applicable to the Commonwealth of Puerto Rico, RJUPR, Vol. 39, 1970, Núm. 1, p. 169
- 149.- José L. Hernández Usera, Codificación de las Leyes de Puerto Rico, RCAPR, Vol. I, abril 1914, Núm. 4, p. 136
- 150.- Juan Hernández López, Abolengo Histórico de Nuestra Legislación Civil, RCAPR, Vol. I, sept-oct. 1935, Núm. 2, p. 9
- 151.- Juan Hernández López, Datos para la Historia del Derecho Puertorriqueño. Comentario al Código Civil Revisado presentado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 31 de diciembre 1901, RJUPR, Vol. XIV, mar-abril, 1945, Núm. 3, p. 276
- 152.- John J. Hood, The History and development of the Louisiana Civil Code, en Tulane Law Review, Vol. XXXIII, december, 1958 nº. I, p. 7
- 153.- William W. Howe, The Law of Our New Possessions, Yale Law Journal, vol. IX, p. 378, 1900

- 154.- William H. Hunt, The Supreme Court of Porto Rico. Yale Law Journal, Vol. XII, p. 213, 1903
- 155.- Robert J. Hunter, Historical survey of the Status question, 1898-1965, (Selected Background Studies prepared for the United States - Puerto Rico Commission on the status of Puerto Rico), Washington, U.S. Government Printing Office, 1966
- 156.- Luis Jiménez de Asúa, Las Vías de Hecho en Derecho Penal, - RJRPR Vol. XXIII, nov-dic. 1953, Núm. 2, p. 127
- 157.- Luis Jiménez de Asúa, Necesidad de un Nuevo Código Penal para Puerto Rico - Radioforo de la Voz, San Juan, P.R. s.p. 1, nov. 14, 1946, 14 h. Mimeografo
- 158.- David Cecil Johnson, Courts in the Philippines, Old New en Michigan Law Review, Vol. XIV, 1915-1916
- 159.- Arnold H. Leibowitz, The Drift of the Commonwealth, Revista de Derechos Humanos, Vol. III, febrero, 1973, Núm. 3, p. 102
- 160.- Arnold J. Leibowitz, The Applicability of Federal Law to the Commonwealth of Puerto Rico, RJUPR, Vol. 37, 1968, Nº 4, p. 615
- 161.- William D. Lewis, United States Territorial Courts and Terms of Judicial Office, American Law Register, Vol. 32, p. 262
- 162.- Ernst Levy, The Reception of Highly Developed Legal Systems by Peoples of Different Cultures, Washington Law Review and State Bar Journal, vol. 25, august 1950, Nº 3, p. 233
- 163.- José López Boralt, Some Aspects of the Constitutional Relations between Porto Rico and the United States, Clark University Thesis Abstracts, Worcester, Mass, 1930
- 164.- Luis Lloréns Torres, La doctrina jurídica del Estoppel en Puerto Rico, Revista de las Antillas, julio de 1914, Año II, Nº 5
- 165.- J. H. Macleary, Administration of Justice in Porto Rico, Illinois Law Review, Vol. VII, p. 77, 1912
- 166.- E. L. Macray, Jury System in Puerto Rico, Green Bag, Boston, Vol. XIV, p. 420, 1902
- 167.- Augusto Malaret, Desarrollo del Derecho escrito en Puerto Rico. Cuarto Centenario de la Colonización Cristiana de Puerto Rico, San Juan, Imprenta del Boletín, 1908

- 168.- Rafael Martínez Alvarez, Influencia de la Ley Común en el Derecho Civil de Puerto Rico, RCAPR, Vol. X, jul-sept 1947 Núm. 3, p. 148
- 169.- Jorge Morales Yordán, The Constitutional and International Status of the Commonwealth of Puerto Rico, RCAPR, Vol. XVIII nov. 1957, Núm. 1, p. 5
- 170.- Pedro Muñoz Amato, Mayor Trends in the Constitutional History of Puerto Rico, 1493-1917, RCAPR, Vol. XII, julio-septiembre 1944, Núm. 3, p. 242, 1944
- 171.- Luis Muñoz Morales, El Código Civil de Puerto Rico: Breve - reseña histórica, RJUPR, Vol. I, abril, 1932, Núm. 2, p. 75; Vol. II, sept. 1932, Núm. 1, p. 9
- 172.- Luis Muñoz Morales, El Bill Jones. RJUPR, Vol. V, feb-marzo 1936, Núm. 3. p. 266
- 173.- Luis Muñoz Morales, Reseña de la Legislación Procesal en Puerto Rico, Revista de Derecho Procesal, Año III, Nº 3, Buenos Aires, 1945, p. 5
- 174.- Nota de la Redacción, The Federal Courts and Local Law in Porto Rico. Michigan Law Review, Vol. IV, june 1906, p. 631
- 175.- J.H.D. Note and Comment, Michigan Law Review, Vol. IV, 1905-1906
- 176.- Whitney T. Perkins, American Policy in the Government of its Dependent Areas, A Study of the Policy of the United States Toward the Inhabitants of its Territories and Insular Possessions, Ph. D. dissertation. Fletcher School of Law and Diplomacy, 1948
- 177.- Alberto Picó Santiago, Jurisdicción federal en Puerto Rico, Luce and Co. et al RCAPR, Vol. VIII, oct-dic, 1945, Núm. IV, p. 305
- 178.- Francisco Ponsa Feliú, Territorio bajo jurisdicción federal, comentarios a una opinión del Juez Presidente Sr. del Toro. RCAPR, Vol. VII, abril-junio, 1944, Núm. 2, p. 165
- 179.- Earl S. Pomeroy, The Territories and the United States 1861-1890, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, The - American Historical Association, 1947
- 180.- José Puig Brutau, Importance of the Puerto Rico Supreme Court Reports in an appraisal of the Civilian Law, RJUPr, Vol. XXVI nov-dic., 1956, Núm. 2, p. 153

- 181.- Max Rheinstein, Common Law and Civil Law an elementary comparison, RJUPR, Vol. XXII, sept-abril, 1953, Núm. 4, p. 90
- 182.- Max Rehinstein, El Derecho Común y el Derecho Civil, RJUPR, Vol. 35, 1956, p. 61
- 183.- Luis M. Ribó, Observaciones sobre la Jurisprudencia en la enseñanza del Derecho, Revista de Derecho Puertorriqueño, Vol. 20, abril-junio 1966, Año V, p. 335
- 184.- Luis M. Ribó, La romanización del "Civil Law" como fenómeno cultural, Revista de Derecho Puertorriqueño, Año VII, julio-sept. 1967, Núm. 25, p. 7
- 185.- William Renwick Riddell, The First British Courts in Canada, Yale Law Journal, Vol. XXXIII, april 1924, Nº 6.
- 186.- Manuel Rodríguez Ramos, Por la Reformulación del Derecho Puertorriqueño, RJUPR, Vol. XVIII, septiembre-octubre, 1948, Núm. 1, p. 22
- 187.- Manuel Rodríguez Ramos, Interaction of Civil Law and Anglo-american Law in the legal method of Puerto Rico, Tulane Law Review, Vol. XXIII, 3: 345, march 1949
- 188.- Manuel Rodríguez Ramos, Breve historia de los Códigos puertorriqueños, RJUPR, Vol. XIX, abril-mayo, 1950, núm. 4, p. 233
- 189.- Manuel Rodríguez Ramos, La Equidad en el Derecho Civil, RCAPR Vol. 33, febrero 1972, Nº 1, p. 5
- 190.- Raúl Serrano Geyls, El caso del idioma: un comentario, RJUPR, Vol. XVII, Marzo-abril, 1948, Núm. 4, p. 301
- 191.- T.B. Smith, The Preservation of Civilian tradition in mixed jurisdiction, RJUPR, Vol. 35, 1966, Núm. 2, p. 65
- 192.- E. Soldevilla, El Porvenir Jurídico de Puerto Rico, Anuario de la Universidad de Puerto Rico, 1925, s.p. s.e.
- 193.- Ferdinand Stone, The Civil Code of 1808 for the territory of Orleans, Tulane Law Review, Vol. XXXIII, december, 1958, Nº 1, p. 1.
- 194.- Supreme Court of Porto Rico. Green Bag, Boston, 1903, Vol. 14 p. 186
- 195.- The new Puerto Rican Law Codes, Review of Reviews, aug. 16, 1902, Vol. 2, Núm. 58, p. 68

- 196.- Richard Van Deusen, La Judicatura en Puerto Rico según el - Bill Jones, RCAPR, Vol. 3, nov.-dic. 1916, p. 379
- 197.- Guaroa Velázquez, El Derecho Puertorriqueño de las Obligaciones Durante la Primera Mitad del Siglo XX, RJUPR, Vol. XXIII Núm. 4, marzo-abril, 1954, p. 285
- 198.- Guaroa Velázquez, La consideración, la Causa y el Derecho - Puertorriqueño, RCAPR, Vol. XVI, feb. 1956, Núm. 2, p. 5
- 199.- Peter Woodbury, Puerto Rico, Southernmost District of the First Circuit, Maine State Bar Association, Vol. 49, august, 1960 p. 32
- 200.- Work of the Porto Rican Code Commission, Annals of the American Academy of Political Science, Vol. 19, march 1902, p. 326

III.- ESTUDIOS HISTORICOS Y CULTURALES.-

a) Libros.-

- 201.- Federico Acosta Velarde, El Primer Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, Baldrich, 1940
- 202.- Vicente Balbas Capó, Puerto Rico a los Diez Años de Americanización, San Juan, P.R. Tip. Herald Español, 1910
- 203.- José Celso Barbosa, Orientando al Pueblo, 1900-1921. San Juan P.R., Imp. Venezuela, 1939
- 204.- Edward S.J. Barbusse, The United States in Puerto Rico, 1898-1900. Chapel Hill; The University of Carolina Press, 1966
- 205.- Antonio R. Barceló, Forms of Government of Puerto Rico, 1898 to 1923, San Juan, La Democracia, 1923
- 206.- Jeronimo Becker, Historia de las Relaciones exteriores de España durante el siglo XIX, Madrid, 1924.
- 207.- Samuel Flagg Bemis, A Diplomatic History of the United States New York, Holt, 1955
- 208.- Pablo Berga y Ponce de León, Vida Histórica del Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, Tipografía Real Hnos. 1939
- 209.- Barton J. Bernstein, Towards a New Past: Dissenting Essays in American History. Nueva York: Pontheon Books, 1968.
- 210.- José Blanch, Almanaque Judicial para el año 1898, Mayagüez, s.p.
- 211.- Tomas Blanco. Prontuario Histórico de Puerto Rico. San Juan

Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1943.

- 212.- Salvador Brau, Historia de Puerto Rico. Nueva York, D. Mip-pleton y Compañía, 1904
- 213.- Francisco Manrique Cabrera, Historia de la Literatura Puertorriqueña, Río Piedras, Editorial Cultural, 1965
- 214.- Maria Cadilla de Martínez, Rememorando el pasado heroico, - San Juan, Imprenta Venezuela, 1946
- 215.- Pedro Castañer Casanovas, La Crisis política y económica de Puerto Rico. Apuntes sobre la actual situación. Tip. El Criollo, Aguadilla, P.R., 1909
- 216.- Cayetano Coll y Cuchí, Historia del gran partido político - puertorriqueño Unión de Puerto Rico. Imp. La Democracia, San Juan, P.R. 1930
- 217.- Cayetano Coll y Cuchí, Pro Patria. San Juan, Puerto Rico, - Tip. Burillo y Co. 1909
- 218.- Cayetano Coll y Toste, Boletín Histórico de Puerto Rico, San Juan, Tipografía Cantero, Fernández y Co; 13 volúmenes y dos números del Vol. 12
- 219.- Cayetano Coll y Toste, Reseña del Estado Social, económico e industrial de la isla de Puerto Rico al tomar posesión de ella los Estados Unidos, San Juan, 1899
- 220.- Thomas Campbell Copelan, American Colonial Handbook, Facts - and Figures about Porto Rico, Cuba, Hawaii, etc. Franck and Wagnalls Co., N.Y., 1899
- 221.- Enrique V. Corominas, Puerto Rico Libre. Buenos Aires, Argentina, Librería El Ateneo, Ed. Florida, 1950
- 222.- Lidio Cruz Monclova y Antonio J. Colorado, Noticia y pulso - del movimiento político puertorriqueño (1808-1898-1952), - Editorial Arión, 1955
- 223.- Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico, Siglo XIX, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1957-62, 3 vols.
- 224.- Sebastián Dalmau Canet, Luis Muñoz Rivera, su vida, su obra, su carácter, San Juan, Tipografía Boletín Mercantil, 1917
- 225.- Rubén del Rosario, Consideraciones sobre la lengua en Puerto Rico, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueño, 1958
- 226.- Emilio del Toro Cuebas, Patria, San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1950, 4 vols.

- 227.- Luis M. Díaz Soler, Rosendo Matienzo Cintrón: Orientador y guardián de una Cultura, Universidad de Puerto Rico, Ediciones del Instituto de Literatura puertorriqueña, 1960, (2 vols)
- 228.- José De Diego, Obras Completas, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1967, (2 vols)
- 229.- Bailey W. Diffie and Justine Whitfield Diffie, Porto Rico: A Broken Pledge, New York, The Vanguard Press, 1931
- 230.- William Dinwiddie, Puerto Rico, Its Conditions and Possibilities. New York, Harper and Brothers Publishers, 1899
- 231.- José Enamorado Cuesta, Porto Rico, past and present: the island after thirty years of american rule, New York, 1929
- 232.- Eugenio Fernández García, Francis W. Hoodley y Eugenio Astol, El Libro Azul de Puerto Rico, San Juan, El Libro Azul Publishing Co., 1923
- 233.- Joseph B. Foraker. Notes of a Busy Life. Cincinnati Stewartand Kidd and Co., 1916
- 234.- Joseph B. Foraker, The speeches of Joseph B. Foraker, Library of Congress, Washington (undated)
- 235.- James Ford Rhodes. The McKinley and Roosevelt Administrations 1897-1909, New York: The MacMillan Company, 1922
- 236.- Vicente Géigel Polanco. El Despertar de un Pueblo, San Juan, Imprenta Venezuela, 1942
- 237.- Vicente Geigel Polanco, La Independencia de Puerto Rico, sus bases históricas, económicas y culturales, Río Piedras, Imprenta Falcón, 1943
- 238.- Samuel Gili Gaya, Nuestra lengua materna, observaciones gramaticales y léxicos, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1966. (estudio sobre el español en Puerto Rico)
- 239.- Antonio J. González, La Economía política de Puerto Rico, San Juan, Editorial Cordillera, 1967
- 240.- Lyman J. Gould, La Ley Foraker, raíces de la política colonial de los Estados Unidos. San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1969
- 241.- Germán Granda Gutiérrez, Transculturación e interferencia lingüística en el Puerto Rico contemporáneo, Bogotá, Instituto Caro y Chervo, 1968

- 242.- Ramiro Guerra y Sánchez, La expansión territorial de Estados Unidos a expensas de España y los países hispanoamericanos, La Habana, 1964
- 243.- Ramiro Guerra Sánchez y otros, Historia de la Nación Cubana, Tomo VI, (Autonomismo, Guerra de Independencia, desde 1868 - hasta 1902) La Habana, Editorial de la Historia de la Nación Cubana, 1952
- 244.- Julio J. Henna, and Manuel Zero Gandía, The case of Puerto Rico, Washington, 1899
- 245.- Richard Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, Boston, Beacon Press, 1944
- 246.- Phillip C. Jessup, Elihu Root, New York, Dodd, Mead and Co. 1938, 2 vols.
- 247.- H. H. Kohlsaat, From McKinley to Harding, Personal Recollections of Our Presidents, New York, Charles Scribner's Sons 1923.
- 248.- Walter La Feber, The New Empire: an interpretation of American Expansion, 1860-1898, Ithaca, Cornell University Press, 1963
- 249.- Margaret Leech, In the Days of McKinley, New York, Harper - and Brothers, 1959
- 250.- Gordon K. Lewis, Puerto Rico: Freedom and Power in the Caribbean, Nueva York, Monthly Review Press, 1964 (Editorial Edil publicó la traducción con el título de Puerto Rico: Poder y libertad en el Caribe)
- 251.- Lista Cronológica de los Abogados inscritos en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico hasta el 13 de febrero de 1914, San Juan, 1914
- 252.- Rafael López Landrón, Cartas abiertas al Pueblo de Puerto Rico, San Juan, Imprenta Venezuela, 1928
- 253.- Manuel Maldonado Denis, Puerto Rico: una interpretación histórico-social, México, Siglo XXI editores, 1971 (4ª ed.)
- 254.- Angel M. Mergal, Federico Degetau, New York, Hispanic Institute in the United States, 1944.
- 255.- Nelson A. Miles. Serving the Republic. Memoirs of the Civil and Military Life of Nelson A. Miles Lieutenant-General, United States Army. New York, Harper and Brother, 1911

- 256.- Walter Millis, The Martial Spirit: A Study of Our War With Spain, Boston, Houghton and Mifflin, Co. 1931
- 257.- Arturo Morales Carrión, Ante un Centenario - Rosendo Matienzo Cintrón, 1955
- 258.- Arturo Morales Carrión, Ojeada al proceso histórico de Puerto Rico, San Juan, Editorial Cordillera, 1972, (segunda edic.)
- 259.- Knowlton Mixer, Porto Rico: History and Conditons, Social, - Economic and Political, New York, The MacMillan Company, 1926
- 260.- Charles Morris, Our Island Empire. A hand book of Cuba, Porto Rico, Hawaii and the Philippines Islands. Lippincott, - Phila, 1899
- 261.- Elting E. Morison, (ed). The years of Preparation 1898-1900. Vol. II of The Letters of Theodore Roosevelt. Cambridge, Harvard University Press, 1951-1954 (8 vols.)
- 262.- Luis Muñiz Souffront, El Problema del Español en Puerto Rico, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1950
- 263.- Luis Muñoz Marín, Porto Rico, The American Colony, 1924. E. Gruening, (ed) These United States, New York, Boni and Liveright.
- 264.- Luis Muñoz Marín, (ed) Luis Muñoz Rivera, Obras completas, - Madrid, Editorial Puerto Rico, 1925
- 265.- Tomás Navarro Tomás, El Español en Puerto Rico, Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1948
- 266.- Aida Negrón de Montilla, Americanization in Puerto Rico and the public school system, 1900-1930, Río Piedras, Editorial - Edil, 1971
- 267.- Charles S. Olcott, William McKinley. Boston. Houghton Mifflin Company, 1916 (2 vols.)
- 268.- Bolívar Pagán, Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños, 1898-1956, San Juan, Librería Campos, 1959
- 269.- Antonio S. Pedreira, El Periodismo en Puerto Rico, Bosquejo histórico desde su iniciación hasta el 1930, La Habana, Imprenta de Ucar y Cia, 1941, (Monografías de la Universidad - de Puerto Rico)
- 270.- Antonio S. Pedreira, Insularismo, San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1942, Segunda Edición.

- 271.- Antonio S. Pedreira, Un Hombre de Pueblo, José Celso Barbosa, San Juan, Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1965.
- 272.- Herminio Portel Vilá, Historia de Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos, Habana, 1938
- 273.- Julius W. Pratt, America's Colonial Experiment How the United States Gained, Governed, and in Part Gave Away a Colonial Empire. New York, Prentice Hall Inc., 1950.
- 274.- Julius W. Pratt, Expansionists of 1898: The Acquisition of Hawaii and the Spanish Islands, Baltimore: John Hopkins Press, 1936
- 275.- Henry F. Pringle, Theodore Roosevelt, New York, Harcourt, - Broce and Company, 1931
- 276.- Carmen Ramos de Santiago, El Gobierno de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1965
- 277.- James D. Richardson, A Compilation of the Messages and Papers of the President, 1789-1905, Bureau of Literature and Art, 1906
- 278.- Nestor Rignal, Incidencias Parlamentarias en Puerto Rico, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1972
- 279.- Angel Rivero Méndez, Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico, Madrid, Imprenta Sucesores de Rivadeneyra, 1922
- 280.- Antonio Rivera, El laborantismo o la liquidación del régimen español en Puerto Rico, México D.F. 1943.
- 281.- Mariana Robles de Cardona, Búsqueda y plasmación de nuestra personalidad, San Juan, 1953
- 282.- Leo S. Rowe, The United States and Porto Rico, Longmans, Green and Co. 1904
- 283.- Eduardo Seda Bonilla, Requiem por una cultura, ensayos sobre la socialización del puertorriqueño en su cultura y en el ámbito del poder neocolonial, Río Piedras, Editorial Edil, 1970
- 284.- Juan Angel Silén, Hacia una visión positiva del puertorriqueño, Río Piedras, Editorial Edil, 1970

- 285.- Ada Suárez Díaz, El Doctor Ramón Emeterio Betances: Su Vida y su Obra, San Juan, Imprenta Venezuela, 1946
- 286.- Roberto H. Todd, Desfile de gobernadores de Puerto Rico, Madrid, 1955 (2ª edición)
- 287.- Bibiano Torres Ramírez, Alejandro O'Reilly en las Indias, - Escuela de Estudios Hispano-americanos, Sevilla, 1969
- 288.- José G. del Valle, A través de diez años, (1897-1907) Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Peliú y Sussana, 1907
- 289.- Richard W. Van Alstyne, The Rising American Empire, Chicago Quadrangle Books, 1965
- 290.- Richard J. Van Deusen and E.K. Van Deusen, Puerto Rico. A - Caribbean Isle, New York, Henry Holt and Company, 1931
- 291.- R. A. Van Middeldyk, The History of Puerto Rico from the Spanish Discovery to the American Occupation, New York, D. Appleton and Company, 1903
- 292.- Thomas P. Vivian, Ruel P. Smith, Everything about our new possessions. Being a Handy book on Cuba, Porto Rico, Hawaii and the Philippines, R. F. Fenno and Co., N.Y., 1899
- 293.- Everett Walters. Joseph Benson Foraker, An Uncompromising Republican. Columbus: The Ohio History Press, 1948
- 294.- Albert K. Weinberg. Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History, Baltimore, The John Hopkins Press, 1935
- 295.- Edward S. Wilson, Political Development of Porto Rico, Columbus: Fred J. Heer, Publisher, 1905
- 296.- Henry Wells, La modernización de Puerto Rico, un análisis político de valores e instituciones en proceso de cambio, Río-Piedras, Editorial Universitaria, 1972
- 297.- William A. Williams, The Contours of American History, Chicago, Quadrangle Books, 1966
- 298.- William Franklin Willoughby, Territories and Dependencies of the United States, New York. The Century Company, 1905
- 299.- Trumble White, Our New Possessions, Mass, Hampden Publishing Co. 1898

ESTUDIOS HISTORICOS Y CULTURALES

b) Artículos de revistas.-

- 300.- T.S. Adams, The First Legislature of Puerto Rico, Nation, - (N.Y.) Vol. 72, march, 1901, p. 191
- 301.- Maria Teresa Babin y Milita Vientós Gastón, La situación de Puerto Rico (Revista) Sur, 1965, núm. 293, p. 113-122.
- 302.- Antonio R. Barceló, American rule in Puerto Rico, 1899-1924, Current History, Vol. XII, january, 1925
- 303.- Pedro Capó Rodríguez, Some Historical and Political Aspects of the Government of Porto Rico. Hispanic American Historical Review, Vol. II, 4: 543, Nov. 1919
- 304.- Tomas Carrión Maduro, Americanización, Cumba, Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P.R. 1903
- 305.- Cayetano Coll y Cuchí, A defense of Porto Rico, Report of the 27th Annual Meeting of the Lake Mohonk Conference of Friends of the Indians and other dependent people, 1909.
- 306.- George W. Davis, Our Policy Towards Porto Rico. The Independent, N.Y., Jan. 18. 1900, Vol. 52: 161.
- 307.- José De Diego, The Problem of Porto Rico. Report of the 31st Annual Meeting of the Lake Mohonk Conference of Friends of the Indians and other Dependent Peoples, 1913.
- 308.- Editorial: Las Dos Vacantes en el Tribunal Supremo, RCAFPR, Vol. 5, nov.-dic., 1940, Núm. 4, p. 235
- 309.- Fernando De La Rosa, Los Estados Unidos en Puerto Rico, The Puerto Rico Herald, N.Y. Vol. 2, 4 de julio de 1903, Núm. 161, p. 763
- 310.- Fat offices going to incompetent Americans, Nation, Vol. 70, march 15, 1900, p. 195
- 311.- Frank Otto Gatell, The Art of the posible: Luis Muñoz Rivera and the Puerto Rican Jones Bill, The Americas, Vol. 17, - 1960-61, p. 1.
- 312.- H.E.W., The Porto Rican Question, Outlook, may 5, 1900, Vol. 65, p. 91
- 313.- Ill felling toward americans, Nation, Vol. 71, august 2, - 1900, Nº. 1831, p. 81-82

- 314.- Manuel Maldonado Denis, Apuntes sobre la cuestión cultural, La Torre, Núm. 49, p. 11-18
- 315.- George Marvin, Puerto Rico, 1900-1903, The Puerto Rico Herald Vol. III, julio 18, 1903, núm. 163. p. 789
- 316.- Arturo Morales Carrión, The Ioneliness of Luis Muñoz Rivera, San Juan Review, Vol. 3, july 6, 1966, Nº 3, p. 9
- 317.- Arturo Morales Carrión, Orígenes de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico, Historia, Vol. II, abril, 1952 nº 1
- 318.- J. B. Osborne, Americanization of Porto Rico, World's Work N.Y. may 1904, Vol 8: 4759
- 319.- Lillian D. Powers, Porto Rico, Report of the 29th Annual Lake Mohonk Conference of Friends of the Indian and Other Dependent Peoples, oct, 18th, 19th and 20th, 1911, Fith sess. Puer-
- 320.- Puerto Rico para los puertorriqueños, The Puerto Rico Herald N.Y. 11 de abril de 1903, Vol. 2, Nº 89, 567
- 321.- Rafael L. Ramírez, Un nuevo enfoque para el análisis del cambio cultural en Puerto Rico, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Vol. VIII, 1964, Núm. 4, p. - 339-355.
- 322.- Carlos Ripoll, Cuba y la Independencia de Puerto Rico, El Tiempo (Nueva York) domingo 28 de junio de 1970
- 323.- Miñi Seijo Bruno, Qué culpa tendré yo de todo ésto, Claridad, 12 de agosto de 1973, p. 12
- 324.- Virginia Seplowin, Un estudio de integración: el norteamericano en Puerto Rico, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Vol. VII, 1963, Núm. 1-2, p. 113-121
- 325.- Un escándalo de los "politicians" americanos. The Puerto Rico Herald, N.Y. 25 de octubre de 1902, Vol. 2, Nº 68:231
- 326.- J.H. Van Buren, Movement in Porto Rico towards Home Rule, - Outlook, N.Y. april 5, 1905, Vol. 80, p. 861
- 327.- A. D. Welton, Assimilation of Porto Rico, Harper's Weekly, - N.Y. feb. 16, 1901, Vol. 45, p. 188
- 328.- William F. Willoughby, The Executive Council of Puerto Rico, American Political Science Review, Vol. I, august 1907, p. - 561-582.

IV.- INDICES BIBLIOGRAFICOS, GUIAS DOCUMENTALES Y OBRAS DE REFERENCIA.-

a) Indices Bibliográficos.-

- 329.- Enid M. Baa, Thesis and Caribbean Topics, 1778-1968, San Juan, Institute of Caribbean Studies, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1970
- 330.- Biblioteca Regional del Caribe, Bibliografía actual del Caribe, Hato Rey, Corporación de Desarrollo Económico, Puerto Rico, 1970
- 331.- Augusto Bird, Editor, Bibliografía Puertorriqueña, 1930-1945, Río Piedras, P.R., Centro de Investigaciones Sociales, U.P.R. Editorial Universitaria, 1947, 2 vols.
- 332.- Steven M. Charno, Latin American News papers in the United States Libraries, A Union list, Austin, Conference on Latin American History, University of Texas, (Puerto Rico, p. 551-575)
- 333.- José Nilo Dávila Lanausse, Bibliotheca Legum Portorricensis, Bibliografía legal selecta de Puerto Rico, siglos XIX-XX, - San Juan, Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1962.
- 334.- Ann Duncan Browen, Puerto Rico, a Selected List of Reference, The Library of Congress, Washington, 1943.
- 335.- Phanor James Eder, A Comparative Survey of Anglo-American Law and Latin-American Law. New York, New York Univ. Press, 1950
- 336.- José Geigel y Zenón y Abelardo Morales Ferrer, Bibliografía Puertorriqueña, Editorial Araluce, 1934
- 337.- A.P.C. Griffin, A List of Books With References to Periodicals on Porto Rico. Washington, D.C., Govt. Printing Office, 1901
- 338.- Robert. P. Haro, Latin American research in the United States and Canada, Chicago, American Library Association, 1971
- 339.- Cecil K. Jones, Hispanic American Bibliographies, The Hispanic American Historical Review, Baltimore, 1922, (Puerto Rico, p. 147)
- 340.- Thomas Mathews, General Survey of the Material related to Puerto Rico held by The Library of Congress, 1956

- 341.- Antonio S. Pedreira, Bibliografía Puertorriqueña, 1493-1930, Madrid, Imprenta y Casa Editorial Hernando (S.A.), 1932 - (Monografías de la Universidad de Puerto Rico)
- 342.- Arturo Ríos Márquez, Índice General de la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, R.C.A.P.R., Vol. 32, noviembre, 1971, Núm. 4, p. 1.
- 343.- Guillermo Rivera, A tentative Bibliography of Belles Lettres of Puerto Rico, Cambridge, Harvard University Press, 1931
- 344.- Vilma Rivera de Bayron, Índice General de la Revista de Legislación y Jurisprudencia de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol. 34, agosto, 1973, Núm. 3, p. 315.
- 345.- Gonzalo Velázquez, Anuario Bibliográfico Puertorriqueño: 1946 Río Piedras, Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, 1950
- 346.- Gonzalo Velázquez, Anuario Bibliográfico Puertorriqueño: 1949 Río Piedras, Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, 1951
- 347.- Gonzalo Velázquez, Anuario Bibliográfico Puertorriqueño: 1951 Río Piedras, Editorial Universitaria, 1953
- 348.- Luis C. Vigo-Cepeda (ed). Current Caribbean Bibliography, Caribbean Economic Development Corporation, Institute of Caribbean Studies, Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1969

b) Guías documentales.-

- 349.- Guía al Archivo General de Puerto Rico, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1964
- 350.- The National Archives of the United States, Records of the Bureau of Insular Affairs relating to Puerto Rico, A List of selected files, Washington, 1943
- 351.- The National Archives of the United States, Preliminary inventory of the record of the Bureau of Insular Affairs, Washington, 1960

o) Obras de referencia.-

- 352.- National Cyclopaedia of American Biography, New York, 1906
- 353.- Louis A. Robb, Tomas I. Nido, Rafael Ramírez de Arellano, Jr., Thomas A. Pace y Anthony Gervasi, Diccionario de Términos Legales Español-Inglés e Inglés-Español, New York, N.Y., John Willey and Sons, Inc., Londres, Chapman and Holl, Ltd., 1955
- 354.- Martin Alonso, Enciclopedia del Idioma, Diccionario histórico y moderno de la lengua española (siglos XII al XX), etimológico, tecnológico, regional, hispanoamericano, Madrid, Editorial Aguilar, 1958, 3 vols.
- 355.- Irma García de Serrano y Mercedes Negrón de Portillo, Manual of federal agencies with office in Puerto Rico, Río Piedras, University of Puerto Rico, 1954
- 356.- Nestor Rigual, Miembros de La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 1900-1965, San Juan, Cámara de Representantes, 1965, (Tercera edición)
- 357.- Official Directory of the Civil Government of Porto Rico. - Compiled under the direction of the Governor by Arthur Parke, Deputy Secretary, San Juan, Puerto Rico, 1901
- 358.- Register of Porto Rico, Information of the Federal and Insular Govts, and historical data. Prepared under Hon. Charles, Hartzell: Tuzo and Co., San Juan, P.R. 1903.
- 359.- Roster of Troops, serving in the Department of Porto Rico, - commanded by Brigadier General George W. Davis, U.S. Volunteers, Adjutant General's Office, 1900
- 360.- Adolfo de Hostos, Tesauro de datos históricos, San Juan, Departamento de Hacienda, 1951, 3 vols. (A-Ch)
- 361.- United States. Congress. Senate. Official Congressional Directory, 55th Congress, 3rd Session, S. Doc. 4, Part. 2. Washington. Government Printing Office, 1899

V.- PERIODICOS Y REVISTAS CONSULTADOS.-

a) Periódicos.-

- 1.- El Boletín Mercantil (San Juan) Años 1898- 1899, 1900-1917
- 2.- La Bomba (Ponce) Año 1899
- 3.- El Brujo (Mayagüez) Año 1899
- 4.- Claridad (San Juan) 12 de agosto de 1973
- 5.- El Combate (Ponce) Años 1899-1900
- 6.- La Correspondencia de Puerto Rico (San Juan) Años 1898, 1899, 1900, 1909-17
- 7.- La Democracia (Ponce-Caguas-San Juan) Años 1898, 1899, 1900-1902, 1909, 1910, 1917
- 8.- El Diario de Puerto Rico (San Juan) Año 1900
- 9.- Heraldo Español (San Juan) Año 1900-1905, 1909
- 10.- Heraldo de Puerto Rico (San Juan) Año 1898
- 11.- El Imparcial (Mayagüez) Año 1899
- 12.- Gaceta de Puerto Rico (San Juan) Años, 1897, 1898, 1899-1902
- 13.- El País, (San Juan) Años 1898, 1899, 1900, 1901, 1902
- 14.- Porto Rico Progress, Año, 1910 y 1917
- 15.- El Porvenir Social (San Juan) Año 1899 (incompleto)
- 16.- El Pregonero. Año 1899 (salida irregular)
- 17.- La Propaganda (Ponce) octubre 1899
- 18.- The Puerto Rico Herald (New York) Años 1901, 1902, 1903
- 19.- The San Juan News (San Juan) Años 1899 (esporádicamente), 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905
- 20.- El Territorio (San Juan) Año 1899
- 21.- El Tiempo (San Juan) Años 1909-1910, 1916, 1917

b) Revistas Jurídicas Puertorriqueñas.-

- 1.- Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico
- 2.- Revista de Derecho Puertorriqueño (Universidad Católica de -
Puerto Rico)
- 3.- Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
- 4.- Revista de Legislación y Jurisprudencia de la Asociación de -
Abogados de Puerto Rico (1914-1919)
- 5.- Revista de Leyes y Tribunales (1903)
- 6.- Revista de Derechos Humanos (Comisión de Derechos Civiles de
Puerto Rico)
- 7.- La Toga (Periódico forense del Colegio de Abogados de Puerto -
Rico)

c) Revistas Jurídicas extranjeras.-

- 1.- American Journal of Interamerican Law.
- 2.- American Law Register.
- 3.- American Law Review
- 4.- Anuario de Historia del Derecho Español.
- 5.- Cornell Law Quarterly
- 6.- Green Bag.
- 7.- Harvard Law Review
- 8.- Illinois Law Review
- 9.- Maine State Bar Association
- 10.- Michigan Law Review
- 11.- Military Law Review
- 12.- Philippine Law Journal
- 13.- Revista de Derecho Procesal (Buenos Aires)

- 14.- Revista General de Legislación y Jurisprudencia
- 15.- Tulane Law Review
- 16.- Washington Law Review
- 17.- Yale Law Journal

d) Revistas generales.-

- 1.- The Americas
- 2.- American Political Science Review
- 3.- Annals of the American Academy of Political Science
- 4.- Anuario de la Universidad de Puerto Rico
- 5.- Case and Comment
- 6.- Current History
- 7.- Forum.
- 8.- Harper's Weekly
- 9.- Hispanic American Historical Review
- 10.- Historia (Universidad de Puerto Rico)
- 11.- The Independent
- 12.- La Torre (Revista General de la Universidad de Puerto Rico)
- 13.- Nation
- 14.- North American Review
- 15.- Outlook
- 16.- Revista de las Antillas (Puerto Rico)
- 17.- Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico.
- 18.- Review of Review
- 19.- San Juan Review

20.- Sur, (Argentina)

21.- El Tiempo (New York)